

Cuba

OSCAR ZANETTI

EL COLEGIO DE MÉXICO

HISTORIA MÍNIMA DE

CUBA

HISTORIA MÍNIMA DE CUBA

Oscar Zanetti Lecuona



EL COLEGIO DE MÉXICO

972.91
Z28h

Zanetti Lecuona, Oscar, 1946-
Historia mínima de Cuba / Oscar Zanetti Lecuona —
1a. ed. — México, D.F. : El Colegio de México, 2013.
340 p. : mapa ; 21 cm

ISBN 978-607-462-442-7
Incluye bibliografía

1. Cuba — Historia. 2. Cuba — Política y gobierno. I. t.

Primera edición, 2013

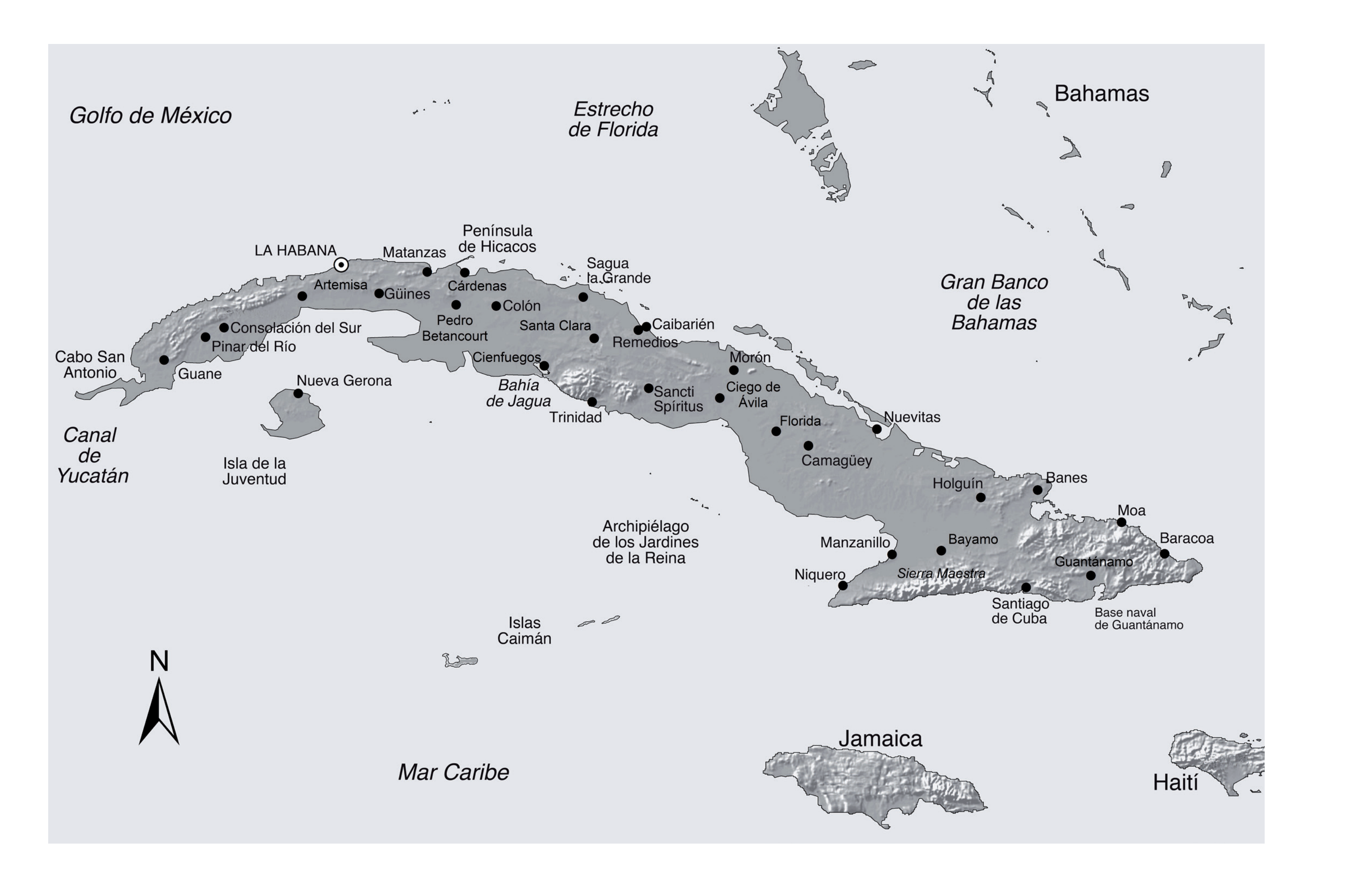


ISBN 978-607-462-442-7

Impreso en México

A Camila, Desirée,
Alejandra y Cecilia, mis nietas,
esta historia que también es suya

ÍNDICE


Golfo de México
Estrecho de Florida
Bahamas
Gran Banco de las Bahamas
LA HABANA
Matanzas
Península de Hicacos
Sagua la Grande
Artemisa
Güines
Cárdenas
Colón
Pedro Betancourt
Santa Clara
Caibarién
Remedios
Consolación del Sur
Pinar del Río
Cabo San Antonio
Guane
Nueva Gerona
Cienfuegos
Bahía de Jagua
Trinidad
Sancti Spíritus
Morón
Ciego de Ávila
Florida
Nuevitas
Camagüey
Holguín
Banes
Moa
Baracoa
Bayamo
Manzanillo
Guantánamo
Niquero
Sierra Maestra
Santiago de Cuba
Base naval de Guantánamo
Canal de Yucatán
Isla de la Juventud
Archipiélago de los Jardines de la Reina
Islas Caimán
N
Jamaica
Haití
Mar Caribe

PRESENTACIÓN

Concebida para la colección de "historias mínimas" que promueve El Colegio de México, la presente *Historia mínima de Cuba* se ajusta a los propósitos y características generales de esa serie: proporcionar un conocimiento básico de la historia cubana mediante una síntesis breve, que conjugue el análisis de los problemas fundamentales en el desenvolvimiento histórico de ese país con la información indispensable para la cabal comprensión de dicho proceso. El texto, que se ha querido tan actualizado como sea posible, tiene una factura didáctica y pretende ser ameno para un lector con intereses generales, así como proporcionar algunos asideros eficaces a quienes deseen adquirir conocimientos más profundos.

Debe advertirse que la historia de Cuba presenta dificultades para la consecución de tales objetivos. Por una parte, la historiografía insular no ha sido particularmente afecta a la síntesis, sobre todo en las últimas décadas, de manera que una visión actualizada de sus resultados recientes exige rastrear en una nutrida bibliografía, con el consiguiente riesgo de dejar escapar algún asunto relevante. Sí son frecuentes, en cambio, las interpretaciones y juicios controvertidos, situación sin duda común a toda historiografía, sólo que en el caso cubano, al calor de los enfrentamientos políticos del último medio siglo, tales diferencias suelen adquirir una especial connotación.

Con el afán de sortear esos y otros escollos, en la redacción de este libro se han seguido prácticas y encontrado soluciones, por lo general perceptibles en el propio texto pero que no está de más hacer explícitas. Sin dejar de ejercer su criterio —algo

evidente desde la selección de los asuntos y los espacios concedidos hasta los conceptos empleados—, el autor se ha propuesto evitar las apreciaciones unilaterales, de manera que el lector pueda percibir las diversas facetas de los problemas y los distintos agentes en ellos involucrados. Es así que en estas páginas la síntesis se realiza en su sentido esencial; como una suerte de balance o suma crítica de los conocimientos acumulados hasta el presente, bien lejano de la tentación de presentarse —sería vano en tan pocas páginas— como un discurso innovador.

El proceso histórico cubano es aprehendido aquí en sus aspectos más sobresalientes, plasmándolo en una narración de secuencia cronológica, que no se aparta demasiado de la periodización convencional, por más que se reconozcan —y se intenten atenuar— sus inconsistencias. Con una visión que es por fuerza de "larga duración", se examinan con especial interés la formación y transformación de las estructuras económicas y sociales, sin perder de vista a los protagonistas de esos cambios, en sus diferentes escenarios y particularmente en el político. Por tratarse de una historia nacional, se ha prestado atención primordial a la construcción y desenvolvimiento de la nación, esforzándose por abarcar sus principales expresiones políticas, ideológicas y culturales. Se engarzan de tal suerte asuntos de naturaleza tan diversa como compleja en una trama que el autor espera resulte coherente, la cual constituye —no está de más insistir— solo una entre las versiones posibles del pasado de la mayor de las Antillas.

Por último, el autor debe confesar que ha escrito teniendo en mente a un lector no cubano, con la secreta ambición de que su interés se acreciente y desee conocer mejor —e incluso meditar— sobre el acontecer de una isla que algunos han considerado fascinante. Animados por esa esperanza hemos incluido la pequeña nota bibliográfica que cierra esta obra, la cual nos permite además reconocer, siquiera parcialmente, nuestra deuda intelectual con una pluralidad de fuentes a las que no resulta posible hacer referencia directa.

1
NATURALEZA Y POBLACIÓN ORIGINARIA

Las condiciones naturales y la ubicación geográfica de Cuba han influido en su desenvolvimiento de manera muy notable, hasta el punto de haber dado pie a interpretaciones imbuidas de un cierto fatalismo geopolítico. Sin llegar a tales extremos, debe admitirse que para la comprensión de algunos pasajes de la historia cubana, aun en el más sucinto examen, resulta útil conocer las peculiaridades del medio natural. Algo similar ocurre con la población aborigen, cuya trascendencia social y cultural sería errado pasar por alto, ya que a pesar de su corto número y temprana desaparición con ella se inicia toda la historia.

PREÁMBULO GEOGRÁFICO

Como las restantes Antillas, Cuba es resultado de remotos movimientos tectónicos; sólo tras experimentar sucesivas inmersiones y emersiones llegaría este país a presentar su configuración actual. El espacio cubano, más que una isla, constituye en realidad un archipiélago, pues en su plataforma insular se asientan, además de la isla mayor, unos 1 600 cayos, islotes e islas, incluyendo entre estas últimas algunas de extensión superior a varias de las Antillas Menores.

Situado en el extremo occidental del arco antillano, entre los 74º y 85º de longitud oeste y los 19º y 23º de latitud norte, el territorio de Cuba se encuentra a la entrada del Golfo de México, separado por unos 150 km de los islotes meridionales de la Flo-

rida, que se hallan al norte, y por otros 210 km —al suroeste— de la península de Yucatán, privilegiada posición por la cual la mayor de las Antillas fue considerada "la llave del Nuevo Mundo". Distante también por 85 y 146 km, respectivamente, de La Española y Jamaica, las más cercanas islas del Caribe, Cuba ostenta una insularidad que en ocasiones resultó suficiente para mantenerla aislada de ciertos procesos continentales, pero su estratégica ubicación también la ha hecho objeto de poderosas ambiciones imperiales.

La superficie total del archipiélago cubano es de 110 920 km^2, concentrada principalmente en la isla de Cuba cuya longitud está cercana a los 1 200 km, medidos desde la punta Maisí, al este, hasta el cabo San Antonio en el extremo occidental. Como su anchura máxima no rebasa los 190 km y en algunas partes es incluso inferior a los 50 km, prácticamente ningún punto de ese territorio dista más de 100 km de las costas. Semejante configuración dota al país de un extenso perímetro costero, en el cual son frecuentes además las bahías, ensenadas y otros accidentes favorables al acceso marítimo —solo interrumpido en algunas secciones por los bajos y el cayerío—, lo cual ofrece evidentes facilidades para el comercio internacional.

En la topografía cubana predominan las áreas llanas, que constituyen casi dos tercios del territorio, mientras que los tres sistemas montañosos fundamentales —la Sierra Maestra en la región oriental, la de los Órganos en el extremo occidental y la de Guamuhaya al centro—, con una elevación relativamente moderada, se despliegan de manera tal que no ofrecen obstáculos apreciables a la movilidad interior, salvo para el acceso a ciertas zonas costeras en el sudeste. La red fluvial, por otra parte, está conformada por numerosos ríos de curso corto y escaso caudal que suelen correr desde el centro hacia las costas norte y sur sin representar estorbos mayores a la circulación terrestre, aunque tampoco, salvo en muy cortos tramos, ofrecen posibilidades a la navegación. Las cuencas subterráneas y los terrenos

cársticos predominantes en varias regiones son propicios a la existencia de sistemas cavernarios y corrientes en el subsuelo que acrecientan los recursos hídricos del país. Tal conjunto de características, unido a la riqueza del suelo, especialmente de los terrenos arcillosos tan frecuentes en las llanuras, proporcionan vastas extensiones de tierras fértiles, aptas para diversos cultivos.

Extendida en sentido longitudinal, casi inmediatamente al sur del Trópico de Cáncer, y con un relieve suave, carente de diferencias sustantivas de altitud, Cuba se caracteriza por una notable homogeneidad climática. La cercanía del mar modera la temperatura, cuya media anual es de 25º Celsius; apenas cuatro o cinco grados más en verano y otros tantos menos en invierno, estación que resultaría imperceptible de no ser por las periódicas masas de aire frío que procedentes de Norteamérica afectan principalmente el occidente y el centro de la isla entre diciembre y marzo. Como la mayor parte de las tierras cultivables se hallan a pocos metros por encima del nivel del mar, apenas hay diferencias climáticas que propicien la variedad de los cultivos, de manera que la agricultura se circunscribe a los frutos tropicales y, salvo excepciones, se hace necesario importar los productos agrícolas propios de las zonas templadas. El componente más variable del clima son las precipitaciones, cuya frecuencia e intensidad determinan la existencia de dos estaciones: la de las lluvias, de mayo a octubre, y la de la seca, de noviembre a abril. Las grandes masas de agua de los mares circundantes son una fuente de evaporación que mantiene usualmente muy elevado el índice de humedad y propician la intensidad de las precipitaciones, que promedian más de 1 200 mm anuales, aunque con marcadas disparidades, no solo de acuerdo con las estaciones, sino también según las zonas del país.

Asociadas al clima también se producen las mayores catástrofes naturales que afectan a la isla, los huracanes, ya que la otra fuente de desastres, la actividad sísmica, solo es significativa a lo largo de la costa sur de la región oriental. Los ciclones tropicales se presentan por lo general durante la temporada de

lluvias; tanto la intensidad de las precipitaciones como la fuerza de sus vientos suelen ser muy variables, pero en las tormentas más destructivas los vientos sostenidos superan los 200 km por hora e incluso llegan a registrarse rachas mayores. Si bien pueden transcurrir algunos años sin que Cuba se vea afectada por estos fenómenos, también se han sucedido varios en una misma temporada con muy devastadoras consecuencias, aunque por la alargada conformación de la isla los daños provocados por estos huracanes tienden a concentrarse en una u otra parte del territorio.

Cuba posee una flora de elevado endemismo, en la cual figuran desde los cactus típicos de las zonas áridas hasta helechos y otras plantas propias de áreas muy húmedas. La vegetación original dominante era la del bosque tropical, y formaba al parecer una floresta tan tupida que haría afirmar a algún cronista —con su habitual exageración— que la isla podía recorrerse de un extremo al otro caminando bajo la sombra de los arboles. Los distintos grupos humanos arribados al país a lo largo del tiempo, trajeron consigo otras plantas, especialmente para la agricultura, que han enriquecido —y en algún caso agredido— el panorama botánico, ubérrimo, pero siempre dentro de los límites trazados por la uniformidad climática. En lo relativo a la fauna la situación presenta otro cariz; la fauna original era muy rica en insectos, aves, moluscos, peces y reptiles, pero no así en mamíferos, pues los de mayor porte —no muy abundantes— en su mayoría ya se habían extinguido a la llegada de los europeos, de manera que —a excepción de los manatíes— esa clase se hallaba representada principalmente por pequeños roedores e insectívoros. En épocas posteriores se introducirían ganado mayor y menor, aves de corral y otros animales domésticos, aunque también especies dañinas como las ratas.

No obstante la homogeneidad característica del espacio cubano los geógrafos suelen distinguir en este cuatro regiones na-

turales: Occidente, Las Villas, Camagüey y Oriente, pero las diferencias entre ellas —sin duda perceptibles— han sido más el resultado del poblamiento y la explotación de esos territorios que de las peculiaridades de sus paisajes.

LOS PRIMEROS POBLADORES

Cuba carece de población autóctona. Su poblamiento original, que parece haberse iniciado hace unos 10 000 años, se llevó a cabo mediante sucesivas —y prolongadas— migraciones de comunidades amerindias, movimiento que se hallaba aún en curso a la llegada de los europeos. La comprensión de ese proceso, así como de las características de las poblaciones aborígenes, parte de una premisa fundamental: la de que su marco geográfico tiene muy escasa relación con la actual división política de la región, pues en la práctica tuvo como escenario a todas las tierras que circundan el Caribe, un espacio que, además, fue cambiando de manera muy notable a lo largo del tiempo. Esta última circunstancia resulta vital para sustentar la hipótesis ya generalmente aceptada acerca de los inicios del poblamiento insular. Según esta, los más tempranos pobladores procedían del norte del continente y habrían arribado a Cuba siguiendo un curso costero lo largo del Golfo de México y la Florida.

Hace unos 13 000 años, durante la última glaciación, entre esa península vecina y Cuba, en lo que hoy constituye el Gran Banco de las Bahamas, se hallaba emergida una gran isla, separada apenas por unos 70 kilómetros de la Florida y a una distancia mucho menor —unos 20 kilómetros— del entonces más extenso territorio cubano. Ese territorio emergido —según algunas hipótesis— pudiera haber servido de trampolín a los primeros inmigrantes, llegados hasta costas cubanas navegando en balsas rudimentarias. Si la procedencia de aquellos pobladores iniciales es todavía objeto de debate, en cambio ha que-

dado bien establecido que constituían pequeños grupos de cazadores, con un instrumental paleolítico, atraídos a Cuba por la caza de grandes mamíferos como la foca tropical (*Monachus tropicalis*), que todavía abundaban en estas latitudes, así como por las más benignas condiciones climáticas. Esos primitivos habitantes aparentemente habían desaparecido al iniciarse la conquista española, de modo que su existencia solo la atestiguan las evidencias arqueológicas, principalmente abundantes lascas de sílex y otros utensilios de piedra tallada encontradas en farallones y cuevas de las serranías nororientales, así como en puntos costeros del centro de la isla, un material también presente en algunos residuarios de La Española e incluso en varias de las Antillas Menores.

Las comunidades aborígenes cubanas con un registro histórico son las referidas por los cronistas de Indias, en particular fray Bartolomé de Las Casas. Esos autores adoptaron para identificarlas denominaciones que han perdurado hasta el presente, nombres unas veces empleados y otras rechazados por los arqueólogos, cuyas investigaciones —la más importante fuente de conocimientos respecto a la cultura material de aquellos hombres— han introducido nuevas tipologías y afinado conceptos para su caracterización. Empleando la denominación tradicional, la más antigua de esas culturas indígenas habría sido la de los *guanajatabeyes*, pequeñas comunidades asentadas en remotas zonas costeras como la península de Guanacabibes —en el confín occidental de la isla—, con las cuales los conquistadores españoles apenas tuvieron contacto. Se trataba de grupos recolectores, dedicados sobre todo a la pesca, que empleaban instrumentos mesolíticos. A partir de los fechados de radiocarbono disponibles, se les supone llegados a Cuba hace unos 3 500 años, probablemente también desde la Florida. Más nutridas y con una mayor dispersión en el territorio cubano se presentan las comunidades de la cultura llamada *siboney*. Para estas se apunta una posible ruta de acceso que siguiendo la costa sud-

occidental del Caribe llegaría hasta las actuales Honduras y Belice, desde donde podrían haberse trasladado a Cuba navegando a través de la cadena de islas que entonces se extendía entre el punto más oriental de Centroamérica y Jamaica. Se trataba también de comunidades recolectoras o apropiadoras, con un nivel técnico correspondiente al mesolítico, pero que quizá como resultado de la lenta evolución característica de esas sociedades primitivas —o debido a una nueva ola migratoria—, no solo dispusieron de un instrumental lítico más adelantado, sino que parecen haber llegado a confeccionar algunos objetos de cerámica. La tercera y más numerosa de las poblaciones aborígenes fue la de los *taínos* —denominación de controvertida pertinencia—, cuya existencia y características están mucho mejor documentadas. En este caso se trataba de una rama de la familia etnolingüística aruaca —o arawaka—, oriunda de la cuenca amazónica, la cual habría llegado al Caribe siguiendo el curso del Orinoco; una vez alcanzada la desembocadura de ese gran río, dichas comunidades fueron saltando de una isla a otra a lo largo de las Antillas hasta llegar a Cuba en torno al año 800 d.C. Dentro de este grupo poblacional los arqueólogos hacen una distinción entre los que denominan subtaínos, que iniciaron aquel movimiento migratorio y constituían el grueso de los indígenas cubanos, y los taínos propiamente dichos, oleada migratoria posterior que comienza a llegar desde la vecina Haití durante el siglo que precede a la conquista española. Es así que el concepto de cultura taína, a veces asumido como un todo homogéneo, engloba en realidad un conjunto de expresiones, tanto coincidentes como diversas, que resultan apreciables en la mayoría de las islas del Caribe y alcanzaron en La Española su más alto grado de desarrollo.

Las estimaciones acerca de la cuantía de los pobladores aborígenes han fluctuado bastante a lo largo del tiempo. En la actualidad, correlacionando testimonios de los cronistas, experiencias etnológicas y, sobre todo, el número, dispersión y magnitud

de los sitios hallados por los arqueólogos, se ha llegado a un consenso que fijaría su monto entre los 100 000 y 200 000 habitantes al producirse la llegada de los europeos. La distribución de estos primitivos pobladores era muy desigual, tanto en lo espacial como en su número. Los guanajatabeyes, que no pasarían de unos pocos miles, se hallaban dispersos por las áreas costeras y el cayerío en la zona más occidental del país, constituyendo pequeñas comunidades integradas por unos 30 o 40 individuos en los sitios principales y apenas 5 o 10 en lo que probablemente fueron sus estaciones de caza y pesca. Las evidencias de la población siboney, no solo son más numerosas sino que se hallan más ampliamente distribuidas desde la costa norte occidental hasta la cuenca del río Cauto al este, incluyendo diversos puntos en el centro de la isla, tanto en terrenos montañosos como en las costas cenagosas al sur de la actual provincia de Camagüey.

La gran mayoría de la población indígena estaba constituida por los taínos. Asentamientos que los arqueólogos catalogan como subtaínos se han encontrado desde la región oriental hasta el occidente de la isla, en torno a la bahía de Matanzas y aún más al oeste. Su mayor concentración parece haber estado en la zona nororiental de Maniabón, pero también se han descubierto sitios de grandes proporciones hacia el centro del país, en particular el gran residuario de Los Buchillones, en las cercanías de Morón, donde recientemente se hallaron, bien conservados en el cieno, numerosos restos de viviendas, instrumentos y otros artefactos de madera hasta ahora únicos en el ámbito antillano. Los mayores núcleos poblacionales, sin embargo, parecen haber sido resultado de la última oleada de inmigración taína, que al iniciarse la conquista ya se hallaba extendida por Baracoa, el valle de Guantánamo y otras áreas de la parte más oriental de la isla, donde Las Casas asegura haber encontrado poblados con más de un centenar de edificaciones, lo que parecen corroborar ciertas evidencias arqueológicas.

LAS SOCIEDADES ABORÍGENES

Tan desigual como su monto demográfico era el desarrollo material y social de estas poblaciones. Los utensilios de concha y otras evidencias halladas en los residuarios mesolíticos más tempranos —guanajatabeyes— atestiguan la existencia de un instrumental bastante diversificado —gubias, raspadores, anzuelos, puntas de flecha, etc.—, elaborado mediante fractura, abrasión y fricción, al cual deben añadirse con toda probabilidad otros enseres de madera, incluyendo canoas, que no se han conservado hasta nuestros días. Con estos recursos pueden haberse dedicado a la pesca en el litoral, así como a la recogida de moluscos, la caza de animales pequeños y la recolección de frutas y raíces comestibles —que cocían al fuego—, en circunstancias que solo permitirían sostener pequeñas comunidades con muy bajo crecimiento poblacional y corta esperanza de vida. En tales condiciones, también debe suponérseles cierto nomadismo y una elemental distribución de tareas por sexos y edades. Sus asentamientos se hallaban por lo general en cuevas y abrigos rocosos —donde también se han encontrado enterramientos—, aunque algunos hallazgos también permiten suponer la existencia de otros habitáculos a cielo abierto, probablemente al resguardo de rudimentarios cobertizos.

En la medida en que los sitios de características mesolíticas se adentran en la isla y se dispersan hacia las regiones centrales y orientales, se va encontrando un instrumental más complejo, con la presencia de puntas de sílex y otros utensilios —majadores, percutores, etc.— elaborados con material rocoso de gran tenacidad que eran empleados para el procesamiento de semillas y frutos, así como hachas, incluyendo las de piedra pulida y forma petaloide, posiblemente usadas en la tala de árboles. Este utillaje, que se considera característico de la cultura siboney, en algunos sitios ha aparecido acompañado de fragmentos de cerámica, evidencias de una alfarería simple, tanto desde el punto

de vista de su técnica de confección como de sus formas, presumiblemente destinada a cocinar alimentos, depositar líquidos y guardar vegetales, indicativa de lo que pudiera ser una etapa tardía en la evolución de aquellos grupos humanos, en esencia apropiadores. La tradicionalmente admitida correlación entre la confección de alfarería y las prácticas agrícolas, ha hecho que algunos autores consideren probable el desarrollo de algún tipo de agricultura por estas últimas comunidades —de hecho las califican como "protoagrícolas"—, lo cual implicaría una mayor estabilidad en sus asentamientos. Aunque estos hubiesen sido todavía movibles y sus viviendas efímeras, estas ya se construían de madera y se techaban con hojas de palma en agrupaciones que podían albergar varias decenas de habitantes. Una mayor especialización laboral, igualmente plausible, habría permitido según algunos autores la constitución de grupos "forrajeros" y partidas de caza y pesca, cuya existencia parecen atestiguar pequeños residuarios que quizá cumplían la función de estaciones o paraderos eventuales. El hecho de que estos grupos se desprendiesen de la comunidad principal durante varios meses, debe haber profundizado la división del trabajo y promovido la domesticación de plantas y animales por parte del núcleo más estable, posiblemente constituido por una mayoría de mujeres.

Los vestigios de la cultura material, la organización social y el mundo espiritual de los taínos son mucho más abundantes y esta cultura ha sido, por tanto, mejor estudiada por antropólogos, arqueólogos e historiadores. Así, los numerosos entierros descubiertos han permitido establecer con bastante precisión el aspecto físico de estos aborígenes: individuos de baja estatura —1.58 m como promedio los hombres y 1.48 m las mujeres— con rasgos mongoloides, que tenían por costumbre deformarse el cráneo mediante una técnica —tabular oblicua— que fue bien descrita por los cronistas.

Clasificadas como agroalfareras o productoras, las comunidades taínas disponían de un amplio utillaje de perfil neolítico con

artefactos de piedra, perfeccionados mediante lascado, desmenuzamiento y pulimentación, lo cual les dotaba de toda una gama de utensilios especializados de mayor productividad, además de permitirles la fabricación de objetos de adorno o carácter ritual. También notable era el desarrollo de la alfarería, generalmente por el método de acordelado, con el cual se confeccionaban vasijas de distintos tamaños y formas, para la cocina y el almacenaje, que en algunos casos eran decoradas con artístico refinamiento. En la confección de utensilios podían combinarse diversos materiales como concha, piedra y madera para realizar tareas más complejas, de lo cual son una buena muestra los guayos o raspadores empleados para el rallado de vegetales. El mejor trabajo de la madera, arte que según el testimonio de los cronistas ponían de manifiesto las grandes canoas con que estos indígenas navegaban de una isla a otra, se materializó también en la mayor complejidad de las casas que componían sus poblados, tanto las grandes edificaciones circulares armadas con varas y techadas de palma —los caneyes—, destinadas al parecer a viviendas colectivas, como los más pequeños bohíos y las barbacoas de uso auxiliar. En las aldeas, que podían albergar entre 1 000 y 2 000 habitantes, las edificaciones solían disponerse de manera más o menos organizada en torno a plazas —llamadas bateyes— destinadas a la celebración de ceremonias religiosas y otras actividades sociales.

Los asentamientos, además de estar orientados al mejor aprovechamiento de la flora y la fauna del territorio, buscaban los suelos más apropiados para el cultivo, en especial de la yuca amarga —mandioca—, principal elemento en la dieta de esta colectividad aborigen. Los taínos practicaban una agricultura de roza, tumba y quema, desmontando segmentos del bosque mediante la tala y quema de los árboles, procedimiento que contribuía al agotamiento del suelo y fue el probable origen de algunos de los paisajes de sabana hallados por los conquistadores españoles en su marcha a lo largo de la isla. El terreno desmontado se removía con las coas o varas cavadoras y la tierra suelta se

acumulaba en montículos en los cuales se sembraban los esquejes de yuca, práctica agrícola de apreciable productividad. Además de la yuca, se cultivaban el boniato, también llamado batata, la malanga, el ají, el maíz, la piña —ananás— y el maní o cacahuate, además de algodón y algunas otras fibras, materia prima para una incipiente artesanía textil que proveía el mínimo vestuario de algunas mujeres, las hamacas en que se dormía, las redes de pesca y otros pocos enseres. La producción agrícola también incluía el tabaco —cuyo uso tanto sorprendiera a los acompañantes de Colón—, del cual se fumaban sus hojas secas y torcidas que también se trituraban hasta convertirlas en un polvo aspirado durante ciertas ceremonias religiosas.

La yuca amarga constituía la base de la alimentación aborigen, hasta el punto de sustentar una suerte de complejo cultural que según algunos autores habría sido característico de casi todas las Antillas y otras áreas ribereñas del Caribe. La raíz se rallaba y, una vez extraído su tóxico jugo, se le secaba hasta constituir una especie de harina con la cual se amasaba una torta finalmente cocida en un gran recipiente plano de arcilla —"burén"— para obtener así un delgado pan: el casabe. Como ya apuntáramos, la dieta taína se enriquecía con otros frutos, así como con los aportes de una actividad apropiadora diversa y perfeccionada que, además de la caza y la pesca, parece haber incluido la crianza de algunos animales, especialmente peces, si damos por fiable el testimonio aportado por Las Casas sobre un productivo criadero de lisas en el litoral de la bahía de Jagua. La variedad de fuentes de alimentación así como su más efectiva explotación, posibilitaba la obtención de un excedente, a lo cual contribuía la elaboración de algunos comestibles que, como el casabe, podían conservarse durante cierto tiempo. Ello probablemente dio margen a la especialización de funciones en la artesanía y alguna otra actividad no implicada de manera directa e inmediata en la subsistencia, así como a las operaciones de trueque que atestiguan los cronistas, indicios todos del funcionamiento de una sociedad más compleja.

El desarrollo alcanzado en la esfera productiva, que hacía posible una más intensa explotación del territorio, contribuyó a una mayor estabilidad de las comunidades dando pie a un evidente proceso de sedentarización. Los propios hallazgos arqueológicos han permitido determinar la existencia de redes poblacionales, en las cuales una aldea parece haber fungido como centro de otros asentamientos menores dedicados a labores más específicas, situación que de un modo u otro debe haber tenido conexión con las estructuras familiares de carácter gentilicio y las relaciones de parentesco. Algunas crónicas de Indias permiten deducir que en la sociedad taína predominaban las relaciones matrilineales, aunque también ofrecen indicios de una posible transición hacia formas centradas en la figura masculina. En cualquier caso, la estructura clánica anudaba las relaciones de cooperación predominantes entre parientes y otros miembros de la comunidad, indispensables para la sobrevivencia ante cualquier circunstancia imprevista que pudiese quebrar el todavía frágil fundamento productivo de aquellas sociedades.

Es realmente poco lo que se conoce acerca de la vida espiritual de las comunidades taínas, por más que los arqueólogos hayan acumulado múltiples objetos de indudable función mágica o religiosa; evidencias que, por cierto, también se han encontrado en las culturas de tipo mesolítico, como bien lo ilustran las pictografías de la caverna de Punta del Este, en la isla de Pinos o de la Juventud. En los enterramientos, la abundancia de restos de cerámica, alimentos, instrumentos y abalorios permite presumir creencias animistas sobre una existencia más allá de la muerte, mientras algunos autores también apuntan la posibilidad de un cierto culto a los antepasados. Los cronistas han dejado testimonio de la frecuente celebración de una ceremonia —llamada "cohoba"—, desarrollada bajo la conducción de una suerte de hechicero —el "behique"—, personaje que también parece haber realizado prácticas adivinatorias y actuado como curandero. A cargo del behique quizá estuvo también la confección y el

cuidado de ídolos, los llamados "cemíes", algunos muy pequeños, probablemente para uso personal, pero otros de dimensiones considerables como el hallado en Gran Tierra, Baracoa, y que por su forma a veces se ha asociado con un hipotético culto al tabaco. Los bateyes con frecuencia eran escenario de bailes o "areítos", acompañados de cantos en los que según Gonzalo Fernández de Oviedo se narraban mitos y se hacía el recuento de "los buenos y malos temporales que han pasado" y que de esa forma se conservaban en la memoria colectiva.

La organización tribal a todas luces tenía su asiento en relaciones familiares y suponía el reconocimiento de prestigios, en una sociedad que también prescribía obligaciones y responsabilidades entre sus miembros. Por más que los cronistas puedan haber interpretado las funciones y atribuciones observadas entre los taínos a partir de las rígidas jerarquías propias de la sociedad española, no cabe duda de la existencia entre aquellos aborígenes de jefaturas, rangos, funciones claramente definidas y hasta ciertos privilegios. Junto a los behiques, cuya función mágico-religiosa ya ha sido apuntada, se apreciaba la superioridad del "cacique" que ostentaba la jefatura de la tribu y podía extender su mando sobre varias aldeas. Al referirse a este personaje, las crónicas de Indias dejan entrever que dicho cargo se ejercía de manera vitalicia y su sucesión era resuelta mediante un complejo sistema que involucraba tanto lazos consanguíneos como alianzas. En el siglo XIX, debido a una errónea transferencia de las formas de organización estatal, se llegó a suponer la existencia de una especie de distribución territorial de la isla entre cacicazgos con fronteras relativamente delimitadas, algo que a la luz de los actuales conocimientos resulta insostenible. Ello no excluye, sin embargo, la posibilidad de que las tribus y aldeas contasen con espacios más o menos definidos, sobre los cuales reivindicasen cierta preeminencia para la caza o la agricultura. Quedaba así abierto un margen para el conflicto y los enfrentamientos bélicos que con toda probabilidad tuvieron lugar entre estas co-

munidades, las cuales contaban con un armamento del cual han llegado hasta nosotros múltiples vestigios —macanas, hachas, azagayas, etc.— e incluso con una categoría social, la de "baquía", para distinguir a los guerreros. No obstante, todos los testimonios históricos coinciden en destacar el talante pacífico de los taínos, disposición que se hizo manifiesta en la acogida que brindaron a los españoles y que obviamente contribuyó a su más fácil sojuzgamiento, lo cual no excluye posteriores manifestaciones de rebeldía.

Primera línea en el tremendo choque de civilizaciones que entrañó la conquista, los aborígenes de las Antillas Mayores —y entre estos los de Cuba— poseían un desarrollo técnico y productivo, así como una organización social bastante más elemental que la de sus congéneres del continente, en particular los de Mesoamérica y los de la región andina. De ahí su menor resistencia, no sólo en el plano bélico sino en el cultural, así como la desaparición relativamente rápida de esa población por obra de factores que examinaremos después. A pesar de todo ello, la trascendencia histórica de estas culturas en la sociedad cubana es superior a lo que se supone, particularmente en lo lingüístico. El legado aborigen puede apreciarse sobre todo en la toponimia, aunque también otros vocablos de origen aruaco se emplean para designar espacios, objetos o actividades, como bien lo ejemplifica el caso de los poblados anexos a los ingenios azucareros, que en Cuba siempre se han llamado bateyes. Las edificaciones indígenas, todas de madera, difícilmente podrían perdurar, pero por la disponibilidad de los materiales constructivos y su adaptación al clima, el bohío ha sido durante siglos la vivienda del campesino cubano y todavía puede encontrársele en algunas zonas de país. Otros utensilios han llegado hasta el presente y en algún caso —la hamaca— su empleo se difundió en todo el mundo. Por no hablar ya del tabaco, fundamento del generalizado hábito de fumar que con tanta insistencia se combate en nuestros días.

2
CONQUISTA Y COLONIZACIÓN

Cuba fue la segunda de las tierras americanas a las que arribó Cristóbal Colón en 1492, pero su ocupación efectiva por los españoles se iniciaría casi dos décadas después. La invasión del territorio insular y la reducción de los débiles focos de resistencia indígena se llevaron a cabo con relativa rapidez, de manera casi simultánea con las acciones destinadas a cimentar un régimen colonial que habría de perdurar por cuatro siglos.

LA MÁS HERMOSA… ISLA

Colón avistó tierra cubana el 27 de octubre y desembarcó en ella al día siguiente, el cual se corresponde con el 7 de noviembre del actual calendario gregoriano. Después de dos meses de viaje interoceánico y de vagar otro par de semanas entre los islotes de las Bahamas, el paisaje exuberante de la mayor de las Antillas impresionó de tal manera al almirante que hizo anotar en su diario de navegación: "nunca tan hermosa cosa vido". Durante todo un mes el marino genovés recorrería la costa nororiental de Cuba, para proseguir luego viaje hacia la vecina Haití —bautizada como La Española— que también exploró; allí daría término a su travesía poniendo proa a España.

A finales del año 1493, Colón regresaba con una flota de 16 buques y más de 1 000 hombres para iniciar lo que ya se perfilaba como una empresa conquistadora. El destino de la expedición era La Española, isla en la que al término de su primer viaje

el almirante había dejado una pequeña guarnición en un rústico fuerte erigido con los restos de una de sus naves naufragadas. El fuerte y sus ocupantes habían desaparecido, pero Colón, convencido de que La Española era la más poblada y rica de las islas visitadas, hizo de esta su base de operaciones.

Envuelta en un temprano proceso de centralización monárquica, con la experiencia de una prolongada "reconquista" y atesorando el legado científico y tecnológico árabe, España era el mejor preparado de los países europeos para enfrentar el reto de la expansión americana. El Nuevo Mundo resultaría ser, sin embargo, lo bastante novedoso como para que muchas de las fórmulas aplicadas para sojuzgarlo tuviesen que idearse sobre la marcha. Siguiendo el esquema veneciano y portugués, el proyecto colombino en sus inicios se orientó al establecimiento de una factoría en las nuevas tierras, a partir de la cual habría de tejerse la red de comercio con el Asia que se presumía cercana. Bajo estrecho control por parte de la monarquía castellana —marinos, funcionarios y otros participantes estaban virtualmente a sueldo de la Corona—, la empresa debería arrojar a corto plazo beneficios suficientes para resarcir a los reyes, a Colón y a sus acreedores de los gastos que había implicado su financiamiento. Con tal propósito el almirante —ahora también virrey— desplegó su esfuerzo en dos direcciones: consolidar una base logística en La Española, mediante la explotación de los recursos de aquella isla, y explorar el entorno caribeño hasta llegar a la ansiada Catay (China) o encontrar la ruta más apropiada para alcanzarla. Los frutos de ambos empeños distaron de lo esperado; ni se había llegado al Asia ni La Española rendía los beneficios y tributos requeridos. Para colmo, una parte de los españoles asentados en esa isla se sublevó; ninguno de aquellos hidalgos había venido al Nuevo Mundo a trabajar y Colón tuvo que optar por entregar tierras e indios a los sublevados para que asegurasen su subsistencia y buscasen el oro. El concepto de la factoría continuaría resquebrajándose con las

decisiones de Francisco de Bobadilla, enviado para investigar los desórdenes y gobernar la isla, quien continuó los repartimientos a la vez que afianzaba las prerrogativas de la Corona. El nombramiento de fray Nicolás de Ovando como gobernador de La Española en 1502 representó el inicio de un nuevo esquema colonial. El comendador Ovando llegó a la isla al frente de un nutrido contingente de —definitivos— colonizadores, entre quienes figuraban por primera vez más de 70 familias. Sus decisiones no se hicieron esperar: el poblamiento se intensificó creándose a partir de los cuatro poblados entonces existentes una red de 14 villas, al mismo tiempo que se generalizaba el reparto de indígenas para trabajar en minas y estancias, quienes deberían ser además instruidos por sus "señores" en la fe católica, procedimiento oficializado en 1503 mediante el permiso que originó la institución de la "encomienda". El "asiento" otorgado en 1505 a Vicente Yáñez Pinzón para conquistar a la vecina isla de Borinquén —operación que tres años después llevaría a cabo Juan Ponce de León— constituyó una expresiva evidencia de que la voluntad colonizadora comenzaba a expandirse.

Hasta entonces Cuba solo había figurado en ese proceso como uno de los territorios objeto de exploración. El propio Colón en su segundo viaje recorrió casi todo el sur de la isla, pero cuando se acercaba a su confín occidental decidió retornar a La Española, no sin antes hacer jurar a sus acompañantes que el territorio explorado formaba parte de "tierra firme". Ello no fue óbice para que uno de sus compañeros, el cartógrafo Juan de la Cosa, presentase poco después a Cuba como una isla en su famoso mapa del Nuevo Mundo. La insularidad de Cuba era también conocida por otros navegantes de la época —Vicente Yáñez Pinzón probablemente la circunnavegó—, aunque quedó definitivamente establecida en 1509 por Sebastián de Ocampo, a quien Ovando encomendó bojearla en una expedición que resultaría el preludio de la conquista.

IMPLANTACIÓN COLONIAL

En el propio año de 1509, Diego Colón asumía el virreinato y gobierno general de las Indias, tras hacer valer el derecho sucesorio de su fallecido padre. Entre las instrucciones recibidas de manos del monarca Fernando el Católico figuraba en lugar prominente la de "saber el secreto de Cuba", lo que no significaba más que determinar la existencia de oro en la isla y ponerlo en explotación. Solventadas ciertas diferencias entre la Corona y el nuevo almirante, la empresa conquistadora fue confiada a Diego Velázquez, acaudalado vecino de La Española con una larga hoja de servicios militares. A finales de 1510 Velázquez desembarcaba a la cabeza de 300 hombres en las cercanías de la bahía de Guantánamo, al oriente de Cuba. Su avance se vio entorpecido inicialmente por la oposición de los indígenas, que habían sido alertados por Hatuey —un cacique originario de Guajabá, en La Española— sobre los desmanes de los conquistadores. Aplastada la resistencia por la superioridad del armamento europeo, Hatuey fue capturado y más tarde quemado vivo como escarmiento, circunstancia que pasado el tiempo haría de él un símbolo nacional.

Tras fundar una primera villa, Nuestra Señora de la Asunción, en Baracoa, punto que aseguraba la conexión con La Española, Velázquez decidió ocupar el resto del territorio cubano. Una vez sometida la parte oriental, y particularmente la muy poblada zona de Maniabón, el adelantado organizó tres contingentes para avanzar hacia el occidente de la isla: uno que a bordo de un bergantín recorrería la costa norte, otro que marcharía por tierra a lo largo del país y un tercero, bajo su propio mando, que navegaría en canoas a lo largo de la costa sur. La marcha de la fuerza terrestre, encabezada por Pánfilo de Narváez, dejó una estela de tropelías y pillaje cuyo punto culminante fue la masacre cometida en el poblado indígena de Caonao, que estamparía una huella indeleble en la conciencia del padre Las Casas, testigo

de aquella atrocidad. Al cabo de tres años el territorio cubano se hallaba virtualmente ocupado; como saldo de la operación, a la primada Baracoa se añadían otras seis villas: Bayamo, fundada en 1513; Trinidad, Sancti Spíritus, Puerto Príncipe (hoy Camagüey) y La Habana, establecidas todas en 1514, y finalmente Santiago de Cuba, en 1515, que poco después sustituiría a Baracoa como asiento de las principales autoridades de la colonia.

Semejante ímpetu poblacional en momentos en que la hueste conquistadora no pasaba de unos pocos centenares de hombres parece a primera vista absurdo, pero sucede que de acuerdo con el derecho y las prácticas establecidas, para que un conquistador recibiese tierras e indios —un beneficio que Velázquez comenzó a otorgar desde 1513— debía ostentar la condición de "vecino", es decir, tener casa abierta y residencia fija en alguna villa. La villa, por otra parte, estaba regida por un cabildo, entidad que en la tradición municipal castellana disfrutaba de notables atribuciones de gobierno y justicia, el cual solo se subordinaba al gobernador de la isla. Integrado por alcaldes y regidores, unos elegidos y otros designados, el cabildo podía nombrar además un procurador que lo representase ante las más altas autoridades del reino. Tales prerrogativas en el futuro serían fuente de roces y conflictos, mas en lo inmediato hacían de la villa el instrumento de dominación más apropiado de que podía disponerse para afianzar el control e iniciar la explotación de los territorios conquistados.

En el gobierno de Cuba, asumido por Velázquez en su calidad de adelantado y teniente del virrey Colón, intervenían también varios funcionarios reales —factor, contador, tesorero, etc.— cuya competencia se enfocaba hacia la esfera tributaria. Complemento indispensable de esta estructura de dominio era la autoridad religiosa, pues si la conquista se había encargado de someter a la población aborigen, la evangelización, al imponer una nueva creencia, extrañaba al indígena de sus bases culturales y garantizaba su control espiritual. Ya para la integración de

la hueste conquistadora, Velázquez se había encargado de reclutar cuatro frailes y, apenas fundadas las primeras poblaciones, gestionó la creación de un obispado con sede en Baracoa —posteriormente trasladado a Santiago de Cuba—, cuya titularidad sería ejercida durante años por clérigos no residentes hasta que en 1529 se radicó en la isla el obispo fray Miguel Ramírez.

Pilares de la colonización, las villas iniciales debían facilitar también la mejor explotación de los recursos del territorio circundante, lo cual determinó su ubicación en zonas con cierta población aborigen, probados recursos minerales —especialmente oro— y fácil comunicación, complicada correlación de factores que en más de un caso provocó la mudanza de los asientos originales. Así ocurriría con La Habana, fundada en la costa sur, en un punto que parecía propicio para la exploración continental, y trasladada más tarde al norte, hacia la bahía donde Ocampo había carenado sus naves durante el periplo del bojeo. El interés principal de los conquistadores —y de la Corona— era la extracción de oro, el cual se hallaba principalmente en las arenas de algunos ríos. La explotación de estos placeres auríferos parece haber alcanzado su mayor rendimiento a finales de la primera década de colonización, cuando se reportan años con ingresos cercanos a los 100 000 pesos, pero según todos los indicios la minería del oro decayó con bastante rapidez. La otra actividad económica era la agricultura, por demás perentoria pues los conquistadores debían asegurar su subsistencia sobre el terreno. La escasez de cultivos europeos adaptables al clima tropical hizo que el aprovisionamiento descansase en su mayor parte en los productos agrícolas aborígenes, a cuyo consumo los españoles se acostumbraron con facilidad. El hecho de que las "vecindades" concedidas por Velázquez no se expresasen en medidas de superficie sino en las unidades propias de la agricultura india —montones de yuca, por ejemplo—, constituye un claro indicio del sentido expoliador de la más temprana organización agrícola colonial. El aporte europeo al abasto de los colonos fue

sobre todo la ganadería, que parece haber tenido un explosivo crecimiento —ya en 1515 se estimaba la existencia de más de 30 000 cerdos—, aunque no como resultado de la crianza en estancias, sino debido a la fabulosa reproducción de estos animales, así como de los bovinos, en los pródigos bosques cubanos.

La economía colonial tuvo un temprano sentido mercantil, evidente en el propósito y el destino de las fundiciones de oro. Por otra parte, la producción de las estancias no solo se orientaba a satisfacer las necesidades de la población insular —aborigen y colonizadora—, sino que una parte de sus frutos comenzó a destinarse desde muy pronto al intercambio comercial. El producto extraído de aquellas primeras explotaciones agropecuarias desempeñó así una función vital en el avituallamiento de las nuevas empresas de conquista. En la estrategia colonizadora de España, Cuba era, más que una meta, escalón para el ulterior avance sobre "tierra firme". Apenas asentados en la isla, los españoles comenzaron a despachar expediciones para explorar las cercanas costas mexicanas, destino hacia donde finalmente partió la nutrida hueste conquistadora comandada por Hernán Cortés, cuyas naves llevaban en sus bodegas más de 300 000 libras de casabe cubano, amén de tocino, carnes saladas y otra vituallas. Cuba actuó así como retaguardia no solo para la crucial conquista de la "Nueva España", sino también de otras empresas continentales, hasta culminar con la expedición de Hernando de Soto a la Florida en 1539, que dejó casi exhausto al incipiente aparato productivo insular.

La explotación de los recursos humanos constituyó un aspecto decisivo en la organización económica inicial de la colonia. Los conquistadores hispanos habían venido al Nuevo Mundo a enriquecerse, pero en modo alguno con el fruto de su labor personal. El éxito de la empresa colonizadora descansaba en su capacidad para organizar el trabajo de la población nativa, lo cual planteaba el serio problema de hacer trabajar para otros a comunidades que no estaban habituadas a ello. El recurso más expe-

dito era, desde luego, el de la fuerza, pero el empleo de esta tenía ciertos límites, pues al considerarse a los indios súbditos de la Corona solo en excepcionales circunstancias podía esclavizárseles. Aunque en algún momento se apeló a la ficción del pago de un salario, la única alternativa eficaz resultó ser la encomienda; los indígenas fueron repartidos entre los conquistadores, quienes podían emplear su fuerza de trabajo mediante el recurso de la coerción con el solo compromiso de cristianizarles. Formalmente más benigna que la esclavitud, la encomienda constituía una forma no menos severa de servidumbre, en especial porque los encomendados eran desarraigados de sus comunidades para utilizarlos en los lavaderos de oro, sometiéndoles a un régimen de trabajo enteramente ajeno a su cultura.

POBLAMIENTO Y DESPOBLACIÓN

Las consecuencias de tal sistema para la población aborigen fueron desastrosas. A los miles de indígenas que habían muerto durante la conquista, se sumaría la cantidad mucho más elevada de los que sucumbirían bajo las condiciones de la colonización. Sobreexplotados en jornadas extenuantes y mal alimentados —dada la escasez de bienes de subsistencia que provocaba el desvío de fuerza de trabajo hacia tareas ajenas a la agricultura—, con sus comunidades desvertebradas y desarraigados de su cultura, los indios fueron víctimas fáciles de las más devastadoras epidemias. Los conquistadores venían de un continente con grandes concentraciones de población, asolado por frecuentes plagas que habían fortalecido su resistencia a las enfermedades. En contraste, las relativamente aisladas comunidades aborígenes presentaban un débil cuadro inmunológico. En ellas se ensañarían la viruela, el sarampión, la tifoidea y otras enfermedades infecciosas que causaron estragos entre sus integrantes. Como la colonización había desarticulado las relaciones

familiares, separando a menudo hombres y mujeres, las posibilidades de reemplazar tan numerosas bajas resultaban mínimas y la población comenzó a decrecer vertiginosamente.

Los cronistas y otras fuentes atestiguan un despoblamiento de tanta intensidad que por mucho tiempo los historiadores consideraron que la población aborigen ya había desaparecido en Cuba a mediados del siglo XVI. Ciertamente, cuando en 1553 se aplicaron en la isla las Leyes Nuevas que abolían la encomienda, quedaban solo unos pocos miles de indios, algunos de ellos huidos a los montes en franca rebeldía. La mayor parte de esa población fue recogida en reducciones, aldeas creadas en las cercanías de las villas —Guanabacoa próxima a La Habana, El Caney cerca de Santiago, Jiguaní en las inmediaciones de Bayamo—, que dieron origen a poblados y arrabales que subsisten hoy día. Pero ocurre que los indígenas allí asentados —así como los pocos que siguieron dispersos— fueron diluyéndose dentro de la población de las distintas localidades y asimilándose a la cultura hispana, de manera que solo muy raros núcleos, enclavados en lugares remotos, pudieron conservar por mayor tiempo sus características originales. Añádase a esto el mestizaje, comenzado con la propia conquista dado el frecuente abuso de las mujeres indias por los españoles, el cual continuaría extendiéndose hasta que de la fisonomía del indígena solo quedase algún rasgo perceptible en las facciones del criollo.

Ante el descenso de la población nativa, el conquistador hispano recurrió al esclavo negro. En realidad lo más probable es que el negro le haya acompañado desde el inicio mismo de la conquista, aunque la primera referencia explícita a su presencia en Cuba es de 1515. A finales del Medievo los esclavos africanos eran comunes en Andalucía, donde incluso constituían una proporción significativa entre los pobladores de ciudades como Sevilla; su empleo, además, se había intensificado en varias islas del Atlántico conquistadas por los portugueses, que fomentaron en esas posesiones la producción de azúcar con trabajo esclavo

que sería característica de las plantaciones. No ha de extrañar, por tanto, que —sin necesidad de la tan mentada sugerencia de Las Casas— los colonos españoles comenzasen a sustituir a los indios con africanos. Introducidos primero en los placeres auríferos, los esclavos también se utilizaron muy pronto en la agricultura, así como en las construcciones de las villas, además de su habitual empleo como servidumbre doméstica. Hacia 1535 algunas estimaciones cifraban en torno al millar la cuantía de negros residentes en la isla, número que probablemente podía equipararse con el de los habitantes de origen europeo.

El monto de la población española es asunto complicado. Los tres o cuatro centenares de hombres que acompañaron a Velázquez se vieron reforzados en medida muy considerable por varios cientos de colonos llegados a Cuba en los años inmediatos a la conquista, principalmente desde La Española. El flujo migratorio habría de continuar hasta alcanzar quizá un tope de unos 5 000 colonos, pero esa población experimentó marcados altibajos debido a las salidas que representaban las expediciones de conquista continental. Solamente hacia México partieron con Cortés unos 500 hombres, y más de un millar acompañaría a Narváez en el contingente enviado algo después para sofocar la insubordinación del impetuoso extremeño. El drenaje continuaría indetenible, ya fuese por obra de nuevas expediciones o por la iniciativa propia de muchos vecinos que, agotado el oro de la isla, optaron por incorporarse a las huestes conquistadoras en América Central, Perú y otras partes de Sudamérica. Casi ninguno de ellos regresaba, bien porque decidieran avecindarse en los más prometedores territorios recién conquistados o por haber dejado la vida en el empeño, como sucedió con más de dos tercios de los 600 compañeros de Hernando de Soto en su aventura floridana. Las medidas para detener el éxodo fueron tan tajantes como ineficaces, como lo demuestran las escasas consecuencias del muy radical decreto promulgado por el Consejo de Indias en 1526, que condenaba a muerte y con-

fiscaba sus propiedades a todo aquel que abandonase la isla sin autorización.

Según lo reportado por el obispo Diego de Sarmiento, que recorrió toda Cuba en visita pastoral un tiempo después de la desastrosa expedición de De Soto, los españoles residentes en 1544 no pasaban del millar, calculando cinco de estos por cada uno de los vecinos reconocidos. Alguna villa, cual era el caso de Trinidad, parecía hallarse prácticamente abandonada, mientras que en otras la población resultaba tan exigua que vivían en permanente zozobra ante el riesgo de un asalto por partidas de indios rebeldes, expresión de la continuidad de una resistencia —injustamente menospreciada— que tuvo su más famoso exponente en el cacique Guamá. Aunque la despoblación afectaba a toda la isla, su impacto se dejaba sentir con intensidad diversa. Baracoa, quemada por indios rebeldes en 1538, casi había desaparecido; Santiago, no obstante su condición capitalina, presentaba más bien el aspecto de una aldea; el empobrecimiento material y humano también afectaba a Puerto Príncipe y Sancti Spíritus en la parte central de la isla, donde sobrevivía otro poblado, La Sabana —luego llamado San Juan de los Remedios o Remedios—, que había surgido de manera un tanto espontánea después de la fundación de las siete villas iniciales. Solo Bayamo y sobre todo La Habana escapaban de momento a esa generalizada decadencia, que amenazaba condenar a la mayor de las Antillas a la condición de "isla inútil" que ya ostentaban algunas de sus más pequeñas vecinas.

UN LUGAR EN EL IMPERIO

A mediados del siglo XVI los conquistadores habían conseguido desplegarse por todo el Nuevo Mundo. En marcha hacia el sur, Pedro de Valdivia plantaba el pendón de Castilla en el valle central de Chile, mientras que las huestes de Vázquez Coronado y

De Soto penetraban desde direcciones distintas en la Gran Pradera norteamericana. A partir de la desembocadura del Río de la Plata, remontando el Paraná, los españoles habían llegado hasta el corazón de Paraguay y fundado la villa de Asunción, casi al mismo tiempo que Francisco de Orellana y Diego de Ordaz recorrían otros grandes ríos de Sudamérica. Si a ese inmenso territorio se suma el rosario de islas del Caribe, no puede menos que maravillar el potencial expansivo de aquellos pocos miles de hombres. Pero abrirse paso por las tierras más inhóspitas y distantes, imponerse incluso a los pueblos que las habitaban, no implicaba el ejercicio de un poder efectivo sobre los vastos espacios de un continente.

En un inicio los asuntos de las Indias habían sido despachados por los Reyes Católicos con el auxilio del Consejo de Castilla, pero el ascenso al trono español de su nieto Carlos I en 1517 complicó sobremanera las funciones de gobierno. Primogénito de la casa de Habsburgo, Carlos sería proclamado poco después emperador de Alemania, con lo cual las proyecciones imperiales de España, inauguradas con la conquista de América, vinieron a concretarse en un inmenso ámbito de dominio que tenía a Europa como escenario principal. Los problemas coloniales, sin embargo, también acrecentaban su magnitud, por lo cual el monarca decidió crear, en 1524, un Consejo de Indias con plena jurisdicción sobre los asuntos del Nuevo Mundo. Además de promulgar las leyes que debían regular la vida en "ultramar", el Consejo actuaría como suprema instancia judicial y fiscalizaría a los funcionarios encargados del gobierno en las colonias. Las Leyes de Indias, aunque generalmente acatadas, no siempre eran cumplidas en aquellos lejanos territorios. En tales circunstancias el centralizado proyecto colonial de la Corona, concebido para encauzar el flujo de tributos que demandaba el financiamiento de las incesantes guerras europeas, enfrentaba muy serias dificultades. Estas provenían, en primer término, de los propios conquistadores, quienes con manifiesta voluntad de señorío reivindica-

ban una mayor autonomía colonial; en particular, se empeñaban en preservar la encomienda y el privilegio de explotar a su antojo la mano de obra indígena. Tales contradicciones, que llegaron a desatar agudos enfrentamientos en Tierra Firme —armados incluso, en Perú—, en Cuba resultaron mucho más leves, aunque tampoco hasta el punto de pasar inadvertidas, como lo demuestra el conflicto en torno al llamado "plan de la experiencia". Originado en 1526 por las denuncias del padre Las Casas y otros religiosos, dicho proyecto autorizaba a los frailes franciscanos para recoger en colonias agrícolas a los indios cuyas encomiendas quedasen vacantes. Desconocido por el gobernador Gonzalo de Guzmán, el plan sería liquidado finalmente por su sucesor, el poderoso encomendero Manuel de Rojas, quien decidió repartir nuevamente a los indígenas. No obstante esos desafíos, el afán centralizador de la monarquía consiguió abrirse paso implantando estructuras de gobierno más eficaces, como los virreinatos creados en Nueva España y Perú, los cuales vinieron a sustituir al virreinato original, privilegio concedido a la familia de Cristóbal Colón que se dio por extinguido tras la muerte de su hijo Diego. A partir de 1537 los gobernadores de Cuba serían nombrados directamente por el monarca y la isla quedó subordinada a una Audiencia, instancia de gobierno con sede en Santo Domingo, capital de La Española. El papel dominante de la Corona en los asuntos de Indias resultó así casi absoluto, pues gracias al patronato de la Iglesia, potestad concedida por el papa a los Reyes Católicos —y mantenida por sus sucesores—, los monarcas españoles quedaron autorizados a proponer los dignatarios eclesiásticos, recaudar diezmos y determinar los aspectos de la legislación canónica que estarían en vigor en América, a cambio de lo cual se hicieron cargo del sostenimiento de la Iglesia en las colonias.

En la esfera económica, desde 1503 la reina Isabel la Católica había creado en Sevilla la Casa de Contratación, institución encargada de monopolizar el comercio colonial y garantizar el

cumplimiento de las obligaciones tributarias. Además de organizar la red de funcionarios encargados de fundir y marcar el oro, recaudar los tributos y negociar los intercambios comerciales, la Casa se constituyó como tribunal de comercio y fue ampliando sus actividades para incluir la formación de navegantes, el trazado de rutas y la confección de mapas. Sin embargo, de todas esas funciones la de mayor trascendencia era el ejercicio del monopolio, que centralizaba en Sevilla —después en Cádiz— todo el flujo de bienes y personas destinados al —o procedentes del— Nuevo Mundo.

El valor creciente del tesoro americano que llenaba las arcas de la Corona española no tardó en despertar las apetencias de otros poderes europeos. Decididos a quebrar el exclusivismo mercantilista de la Casa de Contratación, marinos franceses, británicos y de otras procedencias, comenzaron a surcar las aguas del Caribe entregados a una confusa práctica del comercio de contrabando y la piratería, a menudo bajo el resguardo de las patentes de corso extendidas por sus respectivos monarcas. En 1521, un corsario francés, Jean Florin, consiguió apoderarse de dos de las naves en que Cortés enviaba a la Península el tesoro de Moctezuma. Estimulados por las frecuentes guerras que libraba el emperador Carlos V en Europa, los ataques se hicieron constantes, no solo con el abordaje a buques comerciales, sino también por el asalto a los poblados coloniales. En respuesta, los españoles empezaron a establecer vigías y fortificaron algunos puertos, a la vez que se ordenaba a las naves en viaje de ida o regreso al Nuevo Mundo agruparse para así oponer mejor resistencia a las acometidas de los corsarios. La ruta de retorno a España, que ya comenzaba a conocerse como la "carrera de Indias", aprovechaba la corriente del Golfo, cuyas ventajas habían sido descubiertas desde años antes por los pilotos hispanos. La Habana, definitivamente asentada en el litoral de su abrigada bahía, ocupaba una posición privilegiada en ese derrotero óptimo para el tráfico marítimo, por lo cual su puerto devino frecuente escala

de los buques, que incluso permanecían un tiempo fondeados allí en espera de agruparse para emprender el viaje trasatlántico. Desde luego, dicha circunstancia también fue conocida por los corsarios que ya en 1537 atacaron algunas naves ancladas en la rada habanera, preámbulo de posteriores asaltos a la villa que habrían de repetirse en Santiago de Cuba, Baracoa y otras poblaciones costeras de la isla. Como medida de protección, en Santiago se ordenó construir un pequeño bastión, mientras que en La Habana se levantaba una torre de vigía sobre la altura que domina la entrada de la bahía —el Morro— y a la vera de la villa se edificó una fortificación cuyo nombre, La Fuerza, resultaba una hipérbole de sus reales posibilidades defensivas. Así quedaría demostrado en 1555, cuando el corsario francés Jacques de Sores hizo a La Habana objeto del más sonado asalto de la época; tras vencer la denodada defensa de la guarnición de La Fuerza, de Sores incendió el fuerte sometiendo la villa a un riguroso saqueo.

Las reiteradas agresiones y el pillaje actuaron de inicio como un factor más de la despoblación de Cuba, pero a la larga contribuyeron a que la Corona española cobrase conciencia del valor estratégico de la isla, que gracias a ello se salvó del triste destino de abandono al que parecía condenada. Como en otros problemas planteados por la colonización del Nuevo Mundo, España fue articulando su protección al imperio sobre la base del tanteo, conjugando aciertos y errores. Aunque se trataba de la mayor potencia de la época, sus posibilidades militares resultaban obviamente limitadas, por lo cual la defensa se organizó atendiendo a prioridades económicas y estratégicas. En primer término interesaba salvaguardar la comunicación con las fuentes de riqueza de Nueva España y Perú, aunque ello entrañase dejar a su suerte ciertas posesiones, como algunas de las pequeñas Antillas que más tarde serían ocupadas por otros estados europeos. El sistema defensivo se construyó así paso a paso, extendiéndose paulatinamente a las posiciones que la práctica —es decir, los ataques—

revelaban indispensables para preservar las áreas de mayor interés. En el caso de Cuba fue sobre todo La Habana, ya calificada como "llave del Nuevo Mundo", aunque también se protegerían en mayor o menor medida otras poblaciones necesarias para asegurar la integridad de la colonia insular.

A partir de 1561 quedó definida la organización del sistema de la Flota, que con un ciclo anual mantendría la conexión entre la metrópoli y sus colonias. En su viaje hacia América las naves formaban dos agrupaciones: la de Nueva España y la de Tierra Firme (Perú), pero a su regreso a la Península ambas debían de reunirse en la bahía habanera, convertida de tal suerte en puerto de escala obligado de todo el movimiento naval. En lo sucesivo La Habana sería sede de los gobernadores de Cuba, ahora designados por su condición militar. El primero de estos, Diego de Mazariegos, reanudó la fortificación de la villa reedificando La Fuerza como un sólido castillo —empresa que tomó varios años—, a la vez que se establecía una guarnición estable y se adiestraba a los vecinos en el servicio de las armas, gastos todos que debían sufragarse con fondos "situados" por el tesoro de la Nueva España. El papel clave de La Habana en la estrategia defensiva de las Indias se acrecentó gracias a las disposiciones del adelantado Pedro Menéndez de Avilés, designado gobernador de Cuba en 1568, quien mejoró sus fortificaciones y la hizo fungir como retaguardia de sus expediciones a la Florida, y se consolidaría más adelante al convertirse el puerto habanero en base de la Armada de Barlovento, escuadrón volante creado para proporcionar una dinámica protección a las posesiones españolas en el Caribe.

BASES ECONÓMICAS DE LA COLONIA

La definición de su papel estratégico abre para Cuba una etapa de crecimiento, tan desigual en sus ritmos temporales como en sus realizaciones espaciales. La Habana fue sin duda el epicen-

tro de todo ese proceso. Entre 1570 y 1622 el número de vecinos de la villa se multiplica por 20 y llega a convertirse en la segunda ciudad más populosa del Caribe, quizá la primera si a su monto demográfico se le suma una población flotante de varios millares de marinos, comerciantes, militares, aventureros y buscavidas que durante semanas —y a veces meses— permanecían en la localidad a la espera de que la flota partiese de regreso a España. La necesidad de acomodar a residentes y transeúntes originó una verdadera fiebre constructiva, al punto de que en solo cinco años —1573-1578— se erigieron 125 nuevas viviendas en la villa, con lo cual casi se duplicó su "fondo habitacional". El alojamiento era solo uno de los muchos requerimientos de los viajeros, quienes también demandaban alimentos, bebidas y diversión. En 1574 se contaban en La Habana casi tantas tabernas como vecinos; para el esparcimiento de sus huéspedes los habaneros no escatimaban ni los bailes ni el juego, y hasta echaban "a ganar" a sus esclavas en el ejercicio de una prostitución estacional. La tremenda presión ejercida por la demanda cíclica de viajeros y tripulantes sobre el mercado local, haría de La Habana la plaza más cara de toda América.

La economía de servicios surgida para satisfacer las necesidades de la Flota, tenía otro fundamento, más estable, en la logística del sistema defensivo de la ciudad, cuya guarnición iría creciendo con el tiempo, en particular tras la expedición del corsario británico Francis Drake, quien, entre 1585 y 1586, asaltó Santo Domingo, saqueó Cartagena de Indias y amenazó La Habana. La devastadora correría hizo ver a Felipe II la urgencia de fortalecer las defensas del Caribe, misión que encomendó al más destacado de sus arquitectos militares, Juan Bautista Antonelli. En el caso de La Habana, Antonelli dispuso la erección de dos fortalezas, una a cada lado del canal de entrada de la bahía, fortificaciones que además de las tropas necesarias para guarnecerlas, emplearon en su construcción —la del castillo del Morro tomó tres décadas— a decenas de albañiles, carpinteros y otros

trabajadores, amén de una nutrida dotación de esclavos. Algunos de esos artesanos ya venían siendo requeridos para la reparación de los galeones de la Flota, actividad que llegaría a fomentar un pequeño astillero aprovechando la riqueza de los bosques circundantes. Tras constituirse el puerto habanero en base de la Armada de Barlovento, el rey ordenó en 1589 la construcción de 18 fragatas artilladas para fortalecer ese destacamento naval, pedido con el cual se iniciaría una incesante fabricación de galeones, bergantines y otras naves que hizo del Arsenal o astillero de La Habana uno de los más importantes del Atlántico.

Tanto las construcciones como el sostenimiento de la guarnición entrañaron para la Corona gastos constantes y elevados, para cuya satisfacción fue asignando situados anuales procedentes del tesoro novohispano, los cuales solamente entre 1572 y 1610 totalizaron más de 20 millones de reales; ello sin incluir las partidas destinadas a cubrir los contratos de construcción naval. Tales pagos suponían la transferencia de sumas nada desdeñables a manos de los que participaban en la fabricación de fortalezas y navíos, a quienes suministraban piedras y madera, avituallaban guarniciones y trabajadores, alquilaban esclavos, etc., es decir, a los más poderosos vecinos de la villa, quienes invertían a su vez en el fomento de distintos renglones productivos y terminarían por convertirse en una selecta oligarquía.

Desde la etapa inicial de la colonización, los conquistadores avecindados se habían apresurado a controlar los cabildos y usaron las prerrogativas de estos para distribuirse mediante mercedes el territorio que consideraban bajo su jurisdicción. En el caso de La Habana, cuyo espacio abarcaba todo el occidente cubano, las posibilidades económicas abiertas por los servicios brindados a la Flota aceleraron el proceso de apropiación, el cual alcanzó su punto culminante hacia 1570. Los terrenos mercedados eran en realidad propiedad de la Corona, por lo cual sus usufructuarios solo estaban autorizados a explotarlos, por más que con el transcurso del tiempo esas tierras llegarían a gravarse, parcelarse

e incluso venderse. La merced se otorgaba en dos tipos de fundos: los hatos, más grandes, destinados a ganado mayor, y los corrales que se empleaban para la crianza de cerdos; en la región occidental ambas explotaciones tuvieron un trazado circular —de una o dos leguas de radio según el caso—, debido al procedimiento seguido para su medición, la cual —según se afirma— usualmente se encargaba a pilotos de la Flota.

La ganadería vino a suceder así a la explotación aurífera como actividad económica fundamental de Cuba, dando inicio a lo que algunos autores califican como "ciclo del cuero". Dada su escasa demanda de mano de obra, la explotación ganadera resultaba especialmente apropiada para una circunstancia caracterizada por el declive demográfico, pues en la práctica el ganado más que criarse en los hatos vagaba por estos y solo era marcado por sus dueños para después capturarlo. Aunque el consumo de la población habanera —y en otras villas— implicaba para los hateros ciertos compromisos de entrega de ganado para la matanza y, por otra parte, el aprovisionamiento de la Flota para su largo viaje constituía un atractivo mercado para las salazones, el grueso del ganado —sobre todo el vacuno— era virtualmente cazado en las llamadas monterías con la única finalidad de aprovechar su cuero, un producto de alta demanda en Europa para calzado, mobiliario y otros usos, cuya exportación, al menos en el caso de La Habana, se facilitaba por la presencia de la Flota. Si el reporte de la salida de unas 44 000 pieles por el puerto habanero en 1564 es exacto, la cifra anual de cabezas de ganado sacrificadas en la isla debe haber sido muy alta.

Ante el auge de la ganadería, la explotación agrícola relativamente diversificada que en su origen había constituido la estancia tiende a perder importancia. Sin embargo, en la medida en que algunas de estas fincas más pequeñas fueron orientando su producción hacia el mercado y especializándose, dio comienzo una dinámica destinada a transformar profundamente el paisaje agrario cubano. Dicha evolución se hace palpable con la funda-

ción de los primeros ingenios azucareros. En la isla el cultivo de la caña de azúcar se había introducido desde los albores de la colonización, pero a diferencia de lo ocurrido en La Española, donde desde 1520 se crearon plantaciones, en Cuba la caña solo se utilizaba para la producción artesanal de raspadura con destino al consumo local. No es sino a finales del siglo XVI, cuando el rey Felipe II concede a un grupo de vecinos de La Habana 40 000 ducados para el fomento de ingenios, que en una veintena de estancias cercanas a la villa comienza a producirse azúcar con un destino comercial, incluso con el propósito de exportarla a la Península. Aunque el crecimiento del nuevo renglón productivo se veía limitado por la escasez de mano de obra esclava, tanto el número de trapiches como la producción parecen haber aumentado de manera bastante sostenida al menos hasta el último tercio del siglo XVII. El interés por el fomento de ingenios comenzó así a generar ciertos cambios en la estructura agraria, pues algunas haciendas ganaderas tendrían que ser fraccionadas al otorgarse las nuevas mercedes que amparaban el cultivo de cañaverales en sus tierras.

La transformación en ciernes se vio impulsada, y quizá con mayor intensidad, por la difusión del cultivo del tabaco. Descrito por Colón en su diario como una costumbre indígena, el hábito de fumar parece haber arraigado entre los españoles con tanta celeridad que el propio Las Casas ya lo calificaba como un vicio. Seguramente el uso de sahumerios y la inhalación del humo de algunas plantas, prácticas comunes en la Europa medieval, favorecieron la propagación del empleo del tabaco, que antes de finalizar el siglo XVI ya se fumaba torcido —en forma de cigarro— o en pipa, se mascaba o se aspiraba como rapé, no solo por las clases pudientes, sino por marinos y otros grupos populares, sin excluir a los propios esclavos. Las objeciones que en un principio manifestaron la Iglesia y el gobierno a la expansión de ese hábito, fueron cediendo en la misma medida en que el consumo del tabaco creó un mercado apetecible y los europeos asimilaron

y perfeccionaron las técnicas de cultivo aborigen. Cuba fue, sin duda, uno de los primeros escenarios del laboreo tabacalero, aunque no hay testimonios fehacientes de esa producción hasta inicios del siglo XVII, probablemente por haber estado prohibidas las siembras durante algún tiempo. En un principio el tabaco aparece como un renglón más entre las diversas producciones de la estancia, pero las primeras referencias explícitas a su cultivo indican una creciente especialización, sobre todo por parte de inmigrantes canarios que se asentaban en terrenos aluviales —las llamadas vegas naturales— especialmente apropiados para la solanácea. La irrupción de estos campesinos —denominados "vegueros"— en los hatos y corrales mercedados se convirtió en una fuente de conflictos reiteradamente testimoniados en las actas de los cabildos. Sin embargo, el interés de la Corona en un renglón capaz de reportarle sustanciosos ingresos —sobre todo después de la implantación del estanco en la Península en 1636—, terminaría por inclinar la balanza a favor de los "vegueros", cuyos asentamientos y labranzas empezaron a ser protegidos por las autoridades, a la vez que sus producciones eran adquiridas por la Real Hacienda. En la segunda mitad del siglo XVII la producción tabacalera, diseminada por diversas regiones de la isla, aportaba por lo regular una quinta parte de las exportaciones cubanas.

La manifiesta decadencia del poderío español a lo largo del siglo XVII tuvo para Cuba sensibles consecuencias: la interrupción, en ocasiones prolongada, del servicio de la Flota —así como de los situados para sostener la defensa— y la mayor vulnerabilidad de la isla a las incursiones de corsarios y piratas. Como ambas circunstancias afectaron indiscutiblemente el desenvolvimiento socioeconómico, la imagen histórica tradicional ha caracterizado esta época como de crisis y estancamiento. Aunque a dicho criterio no le falta cierta razón, pierde de vista otras realidades destacadas por investigaciones más recientes, como lo es la sustitución del tráfico de la Flota por un creciente

comercio intercolonial —en algunos años este llega a representar casi dos tercios del movimiento marítimo en el puerto habanero— y la expansión de un lucrativo negocio de contrabando del cual se beneficiaron distintas localidades del país. A pesar de su lóbrega apariencia, el XVII es un siglo de crecimiento, lento e irregular sin duda, pero suficiente para la afirmación de ciertos rasgos básicos de la economía y la sociedad cubanas. Uno de ellos es la diferenciación regional, promovida principalmente por el impresionante progreso de la región habanera gracias a la Flota, desarrollo que irá acentuando desigualdades de perdurables efectos en la historia del país.

Aun antes de que La Habana fuese designada como escala obligada del comercio imperial, las diferencias entre las primeras villas se dejaban ver, en buena medida como resultado de las mayores o menores ventajas de cada una de estas para reemplazar los agotados placeres auríferos con la explotación ganadera. Arrinconada entre montañas al extremo oriental de la isla, Baracoa fue también la primera en languidecer, no obstante habérsele concedido, de manera harto prematura, el título de ciudad. Trinidad corrió parecida suerte, pues su puerto de Casilda probó ser poco seguro como peldaño para la conquista continental y su valle resultaba además relativamente pequeño, circunstancias que la hicieron perder pobladores en favor de la vecina Sancti Spíritus. Asentada igualmente en la región central, a la espontánea La Sabana, le cupo mejor suerte, ya que la llanura costera del norte, aunque estrecha, ofrecía mejores posibilidades para la ganadería. A Santiago, la serranía que la cerca apenas dejaba margen para el fomento ganadero, pero la condición capitalina que ostentó hasta mediados del siglo XVI, así como su más perdurable sede episcopal, le reportaron cierta prestancia administrativa, a la cual debe añadirse la ventaja de su puerto que ofrecía una conexión inmejorable con Santo Domingo. Sin embargo, desde el punto de vista productivo el mayor recurso de Santiago era un rico y cercano yacimiento de cobre, mineral

que comenzó a ser extraído y exportado en volúmenes apreciables, así como aprovechado por una fundición de cañones que durante cierto tiempo funcionó en La Habana. A pesar de todo esto, Santiago perdió preeminencia —y algunos vecinos— ante la cercana Bayamo, cuya ubicación en el centro del extenso valle del Cauto resultaba insuperable para la expansión ganadera. Villa mediterránea, Bayamo disfrutaba de cierto resguardo —en modo alguno invulnerabilidad— de las incursiones de los piratas, pero gracias al transporte fluvial podía sostener al mismo tiempo un fluido intercambio con el exterior. Ese recurso no se hallaba al alcance de Puerto Príncipe, que decidió abandonar su inicial asentamiento costero a cambio de las seguridades de "tierra adentro" y por los pastos naturales de una planicie excepcionalmente ventajosa para la crianza de ganado vacuno. De parecidos beneficios, pero con mejor comunicación, disfrutaba Sancti Spíritus, cuyo cabildo fue protagonista de un proceso de apropiación territorial solo comparable con los de La Habana y Bayamo; en poco menos de un siglo los espirituanos mercedaron en su provecho casi todo el centro de la isla, en detrimento de los derechos de las adyacentes pero más débiles villas de La Sabana y Trinidad.

En cuanto a actividad mercantil ninguna de estas localidades podía rivalizar con La Habana, bendecida por una Flota que no solo representaba una conexión directa y relativamente regular con el naciente mercado mundial, sino que proporcionaba a productores y comerciantes de la ciudad los más bajos fletes de toda América. Aunque la floreciente economía habanera ofrecía oportunidades a otras villas —sobre todo las del centro de la isla— tanto para las ventas en su mercado local como para las exportaciones por la Flota, ese tráfico suponía transitar los infranqueables caminos de la isla o correr los riesgos mucho mayores de la navegación de cabotaje. De ahí que esas poblaciones apelasen sin excepción al comercio de rescate, denominación eufemística con que en la época se aludía al contrabando,

actividad ilícita a la cual tampoco fueron del todo ajenos los habaneros.

Mal abastecidos y escasamente vigilados los vecinos del oriente y el centro de la isla devinieron activos y más o menos fiables socios comerciales de cuanto mercader extranjero se dejaba ver por la costa, generalmente corsarios o piratas convertidos en contrabandistas. El floreciente comercio contaba con la participación de muchos, tanto hateros como agricultores o comerciantes, así como con la benevolencia de autoridades civiles y eclesiásticas. El cuero constituía la "moneda de rescate" por excelencia, pero a esa mercadería se fueron sumando otras como las carnes saladas, el cacao y, sobre todo, el tabaco, producto este último cuyo bajo peso y crecido valor lo hacían especialmente apropiado para el tráfico subrepticio. A inicios del siglo XVII el rescate con herejes y enemigos estaba tan difundido y disfrutaba de tal tolerancia que devino un problema político. Aunque el contrabando era practicado en todas las villas, en Bayamo parece haber alcanzado proporciones escandalosas, lo que determinó que en 1603 el gobernador Pedro de Valdés enviase a uno de sus tenientes a la villa para poner coto a la situación y encausar a los implicados. Estos resultaron ser casi todos los miembros del cabildo, una buena parte de los eclesiásticos y la mayoría de los hacendados, en número tal que no existiendo prisión para alojarlos se decidió llevarlos a La Habana. Prácticamente sublevados en los campos, los bayameses se las ingeniaron para dilatar la marcha del teniente de gobernador el tiempo necesario para obtener el sobreseimiento de la causa por la Audiencia dominicana. La situación se mantuvo de tal suerte fuera de control, hasta un par de años después, cuando en confuso incidente, un corsario francés decidió secuestrar al obispo de la isla, Juan de las Cabezas Altamirano, quien se hallaba de visita en la zona. Todo hace presumir que la situación estuvo motivada por alguna discrepancia o engaño en los negocios —sin que quepa suponer al obispo total inocencia en el asunto—, ante lo cual los bayame-

ses echaron por la tremenda, atacando y dando muerte al corsario y a buena parte de su tripulación, hecho de armas que exaltaría el poema *Espejo de paciencia*, de Silvestre de Balboa, pieza fundacional de la literatura cubana. Aunque temporalmente exonerada, la "gente de la tierra" —como llamaba el gobernador Valdés a los naturales de la isla— en modo alguno resultaba de fiar y las altas autoridades del reino decidieron tomar medidas que asegurasen un control más efectivo de su colonia, tarea que se iría tornando más compleja a medida que otros poderes europeos sentaban sus reales en el Caribe, adueñándose de varias de las pequeña Antillas e incluso de la vecina isla de Jamaica.

Afortunadamente, esas disposiciones no siguieron el curso absurdo que en La Española condujera al abandono de una parte del territorio insular, sino que con mayor sensatez se optó por dividir a Cuba en dos gobiernos a partir de 1607. La región oriental, hasta Puerto Príncipe, quedaría bajo la jurisdicción del gobernador de Santiago de Cuba, mientras que el resto de la isla continuaría regenteado desde La Habana, cuyo gobernador conservaría la autoridad suprema. La decisión otorgaba cierta autonomía para el manejo de los territorios orientales, que en lo sucesivo estuvieron mejor defendidos y atendidos, además de ser objeto de un control más eficaz, pero también fue origen de frecuentes fricciones entre ambas autoridades cuyas atribuciones no quedaron claramente deslindadas.

LA SOCIEDAD: COMPOSICIÓN Y DESENVOLVIMIENTO

Después de haber tocado fondo a mediados del siglo XVI, la población de la isla fue creciendo de manera lenta pero constante, para situarse en torno a los 20 000 habitantes a principios del siglo XVII y llegar hasta unos 50 000 al finalizar dicha centuria. Buena parte de esos pobladores, en algunos momentos probablemente la mitad, radicaba en La Habana, pero el crecimiento

se hacía patente en todas las villas, sobre todo en Santiago que después de la separación de gobiernos de 1607 aceleró su dinámica demográfica. Bayamo, que continuaba siendo el segundo núcleo de la isla en población, creció en parecida magnitud, al igual que las restantes localidades, algunas a ritmo más moderado, pero todas con un vecindario en curso ascendente. El crecimiento también dejó como saldo nuevos poblados; además de los originados por las ya apuntadas reducciones de indios, a finales del siglo XVII fue fundada la villa de San Carlos de Matanzas, en el litoral de la bahía del mismo nombre, así como el pueblo de Santa Clara al centro de la isla, un desprendimiento de la pequeña Remedios.

Tal incremento de población difícilmente podría haberse alcanzado sobre bases naturales, aún menos si se tiene en cuenta que su punto de partida había sido una severa contracción demográfica; un papel decisivo en dicho proceso correspondió, por tanto, al aporte migratorio. Los inmigrantes blancos procedían casi en su totalidad de la Península ibérica, pero debe hacerse notar que estos no eran solo españoles, pues los portugueses representaron una proporción significativa —probablemente en torno a 10%— durante las décadas en que el reino luso estuvo unido a España. Entre los hispanos, los andaluces aportaron el mayor contingente, favorecidos por el monopolio sevillano-gaditano en las salidas hacia América, pero en la segunda mitad del XVII comenzaron a ser superados por los canarios. Según puede deducirse de los registros parroquiales habaneros, los "isleños" ya representaban 20% de la población de la ciudad a mediados de esa centuria, proporción que se acrecentaría posteriormente, y todavía más en los campos, donde la inmigración canaria, a menudo constituida por familias, sería la gran fuente nutricia del campesinado veguero. Debe tenerse en cuenta, además, que los inmigrantes europeos no procedían únicamente del Viejo Continente, pues algunos se mudaban desde otras colonias americanas aprovechando el circuito de la Flota, corriente esta

que al menos en un caso alcanzó cierta masividad, pues tras la conquista de Jamaica por los ingleses en 1655, unos 3 000 colonos de esa isla se trasladaron a Cuba radicándose casi todos en la región oriental.

El otro aporte demográfico de importancia fue la inmigración forzada de africanos. Como ya se advirtiera, la introducción de esclavos negros en la isla comienza con la conquista, aunque según todos los indicios en las primeras décadas coloniales la entrada de africanos parece haber sido bastante limitada. Es a partir del asiento concedido por el rey Felipe II al portugués Pedro Gómez Reynel en 1595, cuando la trata de esclavos se intensifica y regulariza, pero ni entonces ni en los otorgamientos posteriores Cuba parece haber sido un destino relevante para los "negreros", a juzgar por las continuas quejas de los vecinos acerca de la escasez de mano de obra. Resulta muy difícil estimar en su totalidad el número de africanos que habitaban la isla durante estos años, pero en el caso de La Habana —sin duda el principal centro de población esclava— el monto de estos creció sostenidamente, desde unos 200 hacia 1540 hasta cerca de 9 000 un siglo después, cifra a la cual debe sumarse una cantidad ya respetable de negros y mulatos libres. En correspondencia con la zona de operaciones de los tratantes portugueses, la mayoría de esos esclavos procedían de la costa centro-occidental de África y deben haber sido principalmente bantúes.

Desde mediados del siglo XVII el crecimiento de la población se vio afectado por reiteradas epidemias, propiciadas en buena medida por el extraordinario movimiento humano que suponía la periódica recalada de los convoyes. Entre 1651 y 1654 tres brotes sucesivos de fiebre amarilla golpearon a la población habanera, al extremo de que esta puede haber perdido hasta la mitad de sus integrantes europeos. Antes y después de ese momento se registran apariciones de viruelas, también con devastadores efectos. Frente a tal incidencia de la mortalidad, que por momentos parece haber llegado a situaciones críticas, la natali-

dad no conseguía sostener tasas lo bastante elevadas como para compensarla, habida cuenta la desproporcionada composición por sexos de la población de la isla. En las primeras décadas de la colonización las mujeres blancas eran muy pocas en Cuba —aunque alguna llegase a tener la importancia de Isabel de Bobadilla, gobernadora de la isla en sustitución de su marido, Hernando de Soto—, lo cual también ocurría con las negras pues la trata de esclavos por lo regular privilegiaba al componente masculino. Durante un buen tiempo la Corona prohibió que viajasen desde España mujeres solas, de manera que en la colonia temprana la mayoría de las mujeres llegaron como familia de militares y otros funcionarios gubernamentales, por lo cual probablemente no alcanzaban a constituir ni 10% de la población blanca. La situación mejora en el siglo XVII, cuando se torna creciente la inmigración de familias, tendencia estimulada por el Consejo de Indias para lograr un mejor balance poblacional. Sin embargo, la desproporción persistió avivada por las crecientes guarniciones de la isla, sobre todo en La Habana, cuya población flotante era esencialmente masculina. Como cabe imaginar, esas carencias no dejaron de ser compensadas, primero por las mujeres indígenas y, más adelante, por las esclavas africanas, con lo cual se inició un temprano mestizaje. En muchos casos esas uniones no daban lugar a familias estables, pero de las parejas sexuales indias de los conquistadores provendría más de una figura prominente en la primera oligarquía insular.

Los colonos que permanecieron en la isla tras el éxodo suscitado por la conquista del continente constituyeron el fundamento de la sociedad colonial. Dentro de aquel conglomerado humano el indio conservó una posición subordinada; su importancia como mano de obra tendió a desvanecerse y fue sustituido por el negro esclavo, factor decisivo en la naciente economía insular. El panorama humano de la colonia se presenta así claramente estratificado desde su propio origen, no solo por razones clasistas o estamentales, sino también atendiendo a cri-

terios de género, raza o religión. Incluso dentro del preeminente grupo de los vecinos, solía diferenciarse a los "principales" de los que vivían de su trabajo y estos, a su vez, en razón de sus oficios u ocupaciones. En los primeros padrones, los negros esclavos por lo general no eran considerados parte de la población, y los libres u "horros" al parecer tampoco, aunque quizá se les incluía de manera indiferenciada entre la "gente pobre de la vecindad".

La decadencia demográfica favoreció al pequeño núcleo de vecinos principales, que se hicieron con el control de los cabildos y aprovecharon en beneficio propio las prerrogativas de esas entidades. En particular las mercedes de tierras fueron un factor decisivo para la constitución de la élite colonial —en La Habana casi dos tercios de tales mercedes se distribuyeron entre cuatro familias—, cuya continuidad se preservaría mediante cuidadosas estrategias matrimoniales encaminadas a mantener la unidad y el poder de las familias, así como a concertar las más ventajosas alianzas. Aunque la endogamia prevalecía, el agrupamiento oligárquico no se opuso a la incorporación de inmigrantes de especial relieve, en particular militares y funcionarios reales e incluso algún mercader exitoso. El ascenso social de ciertos comerciantes que esas cooptaciones reflejan, se hace notar sobre todo en La Habana, a medida que madura allí la economía de servicios/producción, pues si bien la tierra y los esclavos representaban atributos indispensables de la hidalguía, el comercio proporcionaba una solvencia monetaria de la que a menudo carecían los señores de hato.

Los miembros de la élite se abstenían de realizar cualquier trabajo manual, actividad que se estimaba deshonrosa. Tal característica marcaba una nítida diferencia respecto al resto de la población blanca, entre la cual artesanos, labradores, mercaderes, amanuenses y sirvientes debían sostenerse mediante su propio trabajo. La edificación y el aprestamiento de las viviendas y fortalezas, así como la construcción naval y la elaboración del

ajuar indispensable para la vida cotidiana dieron vida a un vigoroso artesanado. Ese grupo social intermedio, decididamente urbano, se hallaba a su vez bien estratificado a partir de los maestros artesanos, que ocupaban su cúspide, seguidos por los oficiales y aprendices, segmentos estos últimos a los cuales accederían cada vez con mayor frecuencia los negros libres e incluso algunos esclavos. El nacimiento de la agricultura comercial y en especial el cultivo del tabaco dieron pie a la formación de un grupo de pequeños propietarios y arrendatarios rurales, ubicado primeramente en el entorno de las villas, pero que poco a poco se iría adentrando en el territorio en busca de los terrenos y condiciones climáticas más apropiados. Ese incipiente campesinado, cuyo perfil social ya se aprecia con bastante nitidez en la segunda mitad del siglo XVII, estaba compuesto por una mayoría de gente pobre, pero con el transcurso del tiempo aparecerían en sus filas algunas personas capaces de acumular cierta fortuna.

En la base de aquella abigarrada estructura social se hallaban los esclavos. Estos constituían la mayor parte de la fuerza de trabajo empleada en las construcciones civiles y militares, así como en el astillero, además de integrar una extensa servidumbre. En los campos, su ubicación preferente eran los ingenios de azúcar, donde integraban dotaciones todavía pequeñas de una o dos docenas de esclavos, pero desde un inicio se habían desempeñado en las más diversas labores, incluso como monteros en la ganadería; también comenzó a vérseles trabajando en vegas cuyos propietarios algo más prósperos podían adquirir un sirviente, por más que en el tabaco prevalecería el laboreo de hombres libres. La crónica escasez de mano de obra dio lugar a formas poco usuales de explotar el trabajo servil, como el alquiler o la puesta a jornal del negro en alguna obra o empleo, sin excluir aquellos que entregados de niños o muy jóvenes para un aprendizaje artesanal lograban dominar algún oficio. Con tan amplio rango de tareas y una dispersión física a veces considerable —lo mismo en el medio rural que en el urbano—, el

régimen laboral del africano podía mostrar a veces un grado de autonomía sorprendente para quienes asocian la esclavitud de manera exclusiva con los rigores de la plantación, aunque sería desacertado deducir de esto la ausencia de castigos físicos u otras atrocidades. En cualquier caso las circunstancias apuntadas favorecieron las manumisiones, más por comprar los esclavos su libertad que por la benevolencia de sus amos. Se fue formando así un sector de negros y mulatos libres —"horros"— que llegaría a representar una proporción significativa de la población de las villas, particularmente en La Habana, donde además de formar un importante núcleo del artesanado, algunos recibirían incluso mercedes de tierra y hasta adquirirían esclavos.

La asociación de la esclavitud con el fenotipo del africano negro es un proceso que corre paralelo al establecimiento de la institución esclavista en las islas del Atlántico y en el Nuevo Mundo. Para garantizar el control y la sumisión del individuo no se requería solo la fuerza coercitiva, sino también una presión psicológica que humillase a la persona subyugada y una justificación moral de su opresión. Es así como la noción de "raza" adquiere su lamentable sentido, reforzado por las ordenanzas y disposiciones que formalizarían la condición subordinada del africano, incorporando una diferenciación adicional a la de por sí compleja estructura de las sociedades coloniales.

Las diferencias sociales se acentuarían también como resultado del crecimiento económico. En particular entre las familias oligárquicas comenzó a hacerse ostensible cierta opulencia, palpable en el modo de vida. Las viviendas ya se construían de cantería, algunas incluso con dos pisos y patio central siguiendo el patrón andaluz, y puede apreciarse igualmente en dotes y testamentos la disponibilidad de un ajuar hogareño más sofisticado, en el cual no faltaban vajillas o cubertería de plata, ni tapices o muebles tallados. Por no hablar ya de la servidumbre doméstica, con mayordomo, palafrenero y numerosos esclavos, en la que podían encontrarse hasta músicos, como los cuatro negros ad-

quiridos —“junto con sus chirimías”— a finales del siglo XVI por Juan Recio, uno de los más acaudalados vecinos de La Habana. Paso indispensable en el ascenso social era alcanzar la condición de “hidalgo”, la cual podía obtenerse mediante servicios prestados a la Corona —no solo militares o civiles, sino también financieros—, aunque se requería también un pasado familiar intachable, acreditado por un limpio linaje, sin gota de sangre judía, mora o negra.

En mayor o menor escala, según la prosperidad de las villas, las oligarquías municipales comenzaron a hacer uso de un bien provisto arsenal simbólico para hacer ostentación de su preeminencia. Las salidas ahora se hacían a caballo o en silla de mano —antes de concluir el siglo XVII ya se dejará ver algún carruaje—, oportunidad que también se aprovechaba para exhibir escogidas prendas de vestir, armas y condecoraciones. Cada vez más se exigía el tratamiento debido, con todo un complicado ritual de ceremonias, honores y pleitesías, hasta que el uso del “don” precediendo el nombre terminó por imponerse y no faltaba quien reclamase la dignidad de “señoría”. Ese definido interés por colocar a cada cual en su sitio implicó el paulatino establecimiento de una compartimentación social; en La Habana, donde la oligarquía consiguió excluir a las cofradías de negros y mulatos de la iglesia Parroquial Mayor, la sectorialización de la ciudad se fue tornando más definida a medida que los pobladores se desplazaban según sus respectivas jerarquías hacia las parroquias auxiliares. Las distinciones se hicieron tajantes en el caso de los negros, como lo demuestran las primeras ordenanzas municipales —debidas al oidor Alonso de Cáceres en 1573—, en las cuales más de una docena de sus artículos se dedicaban a establecer las prohibiciones y determinar los permisos que habrían de regular la conducta de negros esclavos y libres; ni los primeros, por más autonomía de que disfrutasen, podrían en caso alguno parecer libres, ni bajo cualquier circunstancia se admitiría que los libres viviesen como blancos.

Ascenso económico y diferenciación social despertaron entre las capas más pudientes ciertas necesidades educacionales y culturales, que hacían patente los cabildos de La Habana y Bayamo al abogar por la contratación de preceptores de gramática para los hijos de los vecinos, llegando el primero de estos a destinar 200 ducados para dicha finalidad. No obstante, las expresiones culturales perceptibles en los siglos XVI y XVII solían ser simples —aunque no necesariamente pobres—, debido al pragmatismo impuesto por las carencias de la vida cotidiana. La mencionada aparición de un poema como el *Espejo de paciencia*, no es óbice para reconocer un muy escaso cultivo de las letras o de unas artes plásticas cuyo desarrollo no parece haber ido más allá del ornamento requerido por ciertos navíos, las filigranas de un talentoso pero poco conocido gremio de orfebres o la demanda, más bien reducida, de decoración para las iglesias. Estas últimas se caracterizaban por su sencillez, al extremo de que algunas de las más relevantes difícilmente rivalizarían con templos tenidos por menores en poblados de México o Perú, lo cual sería erróneo tomar, sin embargo, como una muestra de pobreza institucional.

Por encima de las apariencias materiales, el clero insular llegó a conformar un estamento de indiscutible relevancia social, como lo demuestra el hecho de que a mediados del siglo XVII se contasen, solamente en La Habana, más de 100 monjas y 200 frailes y sacerdotes. Pero a diferencia de lo que ocurría en el continente, en Cuba no había indios que convertir ni comunidades que tutelar, mientras que la cristianización de los negros se solucionaba por el fácil expediente de la pila bautismal. Desde luego que la Iglesia era también en la isla el brazo espiritual del imperio, solo que dicha función la cumplía en un tono más bien defensivo, volcada dentro de sus muros, como lo estaba la propia colonia tras sus fortalezas. Más que en los templos, la expresión material del poder eclesiástico podía apreciarse en los conventos; algunos de los habaneros —San Francisco, Santa Clara,

por ejemplo— llegaron a alcanzar proporciones majestuosas, como correspondía a edificaciones destinadas a albergar a los hijos e hijas segundones de las familias principales, para quienes no podía conseguirse mejor destino o un buen matrimonio. Las órdenes religiosas, cuyo crecimiento fue sin duda notable, desempeñaron también un cierto papel educativo, pues en los conventos no solo se cumplían los deberes de la vida monástica, sino que funcionaban algunas aulas de gramática, teología, retórica y filosofía. En torno a las campanadas de las parroquias se desarrollaba buena parte de la vida social y las festividades religiosas propiciaban las más significativas manifestaciones culturales, mientras las devociones comenzaban a adquirir matices locales. El clero secular rivalizaba en opulencia con algunas órdenes, pues tenía a su cargo la administración de numerosas propiedades legadas por figuras de la élite para sufragar misas y obras pías. El influjo social alcanzado por la Iglesia, con sus distintas —y a veces reacias— autoridades seculares y regulares, determinaría que ella fuese también objeto de los esfuerzos centralizadores desplegados por la monarquía hispana en diversos momentos del siglo XVII. Combinando avances y retrocesos, esos intentos organizativos cuajarían finalmente en la realización de un sínodo diocesano en 1680 que reglamentó la vida y costumbres del clero —calificadas por algunos como disolutas— y la posterior formación de una red parroquial capaz de asistir de manera más efectiva —y "administrar" mejor— a las almas de la isla.

En correspondencia con su creciente poderío económico, las oligarquías locales afianzaron el control que venían ejerciendo sobre los cabildos. A ello contribuyó la política real de subastar numerosas posiciones, no solo las de funcionarios reales sino también en los municipios. Poco a poco los puestos de regidores se hicieron perpetuos y ellos a su vez elegían a los alcaldes, con lo cual fue perdiendo vigencia la participación de los vecinos en el gobierno municipal. El ascenso paralelo de los vástagos de las

familias principales en el servicio religioso vendría a completar lo que se configuraba como una clara tendencia a la monopolización del poder en el ámbito local. Aunque esas élites mantenían inconmovible su lealtad a la Corona, no vacilaban en enfrentar a gobernadores y otros funcionarios cuando las decisiones de estos atentaban contra lo que consideraban sus prerrogativas. "Hay muchas cabezas y todos quieren mandar y ninguno obedecer", denunciaba al rey el gobernador Gabriel de Luján en una de las frecuentes quejas de las autoridades centrales contra los prohombres de las villas. Tratando de poner coto a esa situación, en 1621 Felipe III intentó sin éxito sustraer a los cabildos la facultad de mercedar tierras, quizá la principal expresión del poder de dichas entidades, pero el manifiesto declive del potencial español, que obligaba a recurrir a los colonos para satisfacer los requerimientos de la defensa y otras necesidades del gobierno insular, terminaría por debilitar los afanes centralizadores del monarca, como lo prueban disposiciones posteriores que facilitaron el reparto de los terrenos que por no hallarse ocupados —los llamados realengos— habían quedado a disposición de la Corona. Tampoco favorecía la centralización el creciente aislamiento de Cuba, sobre todo después de que en 1628 los holandeses consiguieron capturar la Flota en la bahía de Matanzas, a partir de lo cual se hicieron frecuentes las interrupciones del vital circuito comercial, de forma tal que la isla llegó a permanecer durante meses sin que arribase un solo navío de la metrópoli, abandonada a sus propias fuerzas frente a las incursiones cada vez más audaces de corsarios y piratas.

Impotente para garantizar a Cuba abastecimiento y mercados, limitada incluso para asegurar su defensa, al finalizar el siglo XVII España gobernaba su principal posesión antillana conjugando el descuido con la tolerancia. Tales circunstancias favorecieron la formación de una sociedad en la que asomaban inconfundibles rasgos de identidad. Las frecuentes quejas e invectivas de los gobernadores y otras autoridades contra "la gen-

te de la tierra" —"opuesta a todo lo que se les manda", "tan hechos a su libertad", "no conocen señor en la obediencia"— así lo atestiguan. Semejante conducta por parte de quienes eran dueños de tierras y almas, en los que descansaba además la protección de la colonia, constituía una clara evidencia del decisivo papel social que ya desempeñaban los naturales de la isla, a quienes se comenzaba a llamar criollos.

3
LA SOCIEDAD CRIOLLA

El siglo XVIII se inicia con un cambio dinástico en España. Tras la muerte sin descendencia del rey Carlos II, fue exaltado al trono madrileño Felipe V, nieto del monarca francés Luis XIV, en medio de una pugna sucesoria entre la casa de Borbón, reinante en Francia, y la rama austriaca de los Habsburgo. La disputa, de muy serias consecuencias para el equilibrio europeo, desató una dilatada contienda bélica que, como ya era habitual, también extendió sus acciones hasta el Caribe. Dicha conflagración sería solo la primera de toda una secuencia de guerras que asolaría la región a lo largo del siglo, enfrentamientos en los que más que nunca antes se harían evidentes las motivaciones económicas. En el marco de tales circunstancias, así como de la aplicación de una política mucho más activa por parte de la metrópoli española, la sociedad criolla alcanza en Cuba su plena madurez.

EL MERCANTILISMO BORBÓNICO

Con la entronización de la nueva dinastía, España experimenta un proceso modernizador cuyo fundamento era la aplicación de una política mercantilista renovada, que se proponía reanimar la economía del imperio y aprovechar mejor sus potencialidades fiscales. Siguiendo la experiencia de Colbert en Francia, el Estado español asumiría un papel protagónico en la promoción y protección de aquellas manufacturas y renglones económicos que le reportasen un balance comercial favorable, toda

vez que el comercio exterior era considerado como la principal fuente de riqueza. Ello implicó una completa revaluación del papel de las colonias, cuyas economías debían insuflar dinamismo a la metrópoli y asegurar mercados para sus producciones.

La desastrosa experiencia de la pérdida de la Flota a manos anglo-holandesas en 1702 dio el impulso final para la reforma del vetusto sistema comercial: la Casa de Contratación fue definitivamente trasladada a Cádiz, se revisaron las rutas marítimas y se trató de regularizar el funcionamiento de los convoyes, fortaleciéndose además la Armada para la más eficaz protección del movimiento mercantil. El fin último de esas medidas era preservar el sentido exclusivista del régimen de comercio imperial, cada vez más vulnerable a las presiones de otras potencias europeas. La alianza con Francia a raíz del conflicto dinástico ya había forzado la apertura de puertos americanos a la Compañía Francesa de Guinea, que fue autorizada a introducir en ellos esclavos y algunas otras mercaderías, un privilegio que Gran Bretaña obligaría a transferir a su Compañía del Mar del Sur mediante una de las cláusulas del tratado que puso fin a la guerra de Sucesión. Formalmente, dicha concesión equivalía a un "asiento" para la trata negrera, pero los británicos se las ingeniaron para extender su actividad comercial y dar cobertura a un nuevo y más intenso tráfico de contrabando, ahora organizado desde sus prósperas colonias del Caribe. Como en la concepción mercantilista la ganancia descansaba en la proscripción de toda competencia, España trataría de sellar las fugas en su permeable barrera comercial adoptando la fórmula de las compañías privilegiadas, como un recurso algo más ágil para el ejercicio del monopolio.

La política borbónica tuvo en Cuba aplicaciones de muy vasto alcance. A principios del siglo XVIII la isla ya había dejado de ser un mero enclave estratégico y mostraba una actividad económica, discreta pero creciente, que invitaba a la más amplia consideración de sus posibilidades dentro del vasto imperio español. En cuanto las condiciones lo permitieron, la Corona em-

prendió un reordenamiento de la administración colonial con evidente tendencia centralizadora. En 1715 una real cédula designaba como sustituto del capitán general a un teniente de rey, con lo cual quedó excluida la posibilidad de que en caso de quedar vacante el gobierno insular pudiese ser ejercido por autoridades locales, a la vez que ratificaba la condición militar de los gobernantes; algo después la medida se extendería a las principales villas, al nombrarse en estas tenientes gobernadores con prerrogativas superiores a los cabildos. El poder de las entidades municipales se debilitaría todavía más en 1729, cuando les fue suprimida la facultad de mercedar tierras, a la vez que se acrecentaban las funciones administrativas del gobierno central con la creación de un servicio de correos.

No menos trascendentes fueron las acciones centralizadoras en la esfera económica. La floreciente producción tabacalera de Cuba fue la primera en atraer las codiciosas miradas del fisco real. Siguiendo el criterio de colocar algunas producciones especialmente provechosas bajo el arbitrio de la Corona, la manufactura tabacalera en España había sido estancada y confiada a compañías privilegiadas. La reconocida calidad de la hoja cubana y el auge productivo propiciado por las mayores posibilidades de exportación en los primeros años del siglo —las regiones de La Habana y Matanzas ya contaban con unos 20 molinos de rapé—, convencieron a las autoridades de la conveniencia de extender a Cuba en 1717 las regulaciones del estanco y conceder a la Real Factoría de Tabacos el monopolio de tan sustanciosa actividad. En lo sucesivo la Factoría determinaría precios y volúmenes de producción, adquiriría el tabaco con cargo a la Real Hacienda —es decir, el situado novohispano— y lo exportaría a España para ser elaborado en la manufactura real de Sevilla. El monopolio estatal, que contaba con oficinas en Trinidad, Sancti Spíritus, Bayamo y Santiago de Cuba, estaba obligado a comprar la cosecha a los vegueros, pero solo en la cantidad y a los precios previamente fijados; a los cosecheros se

les prohibió la venta de cualquier excedente. Con la Factoría, la Corona perseguía diversos propósitos: mantener relativamente bajos los precios de la materia prima para sus fábricas en la Península, fijar un tope a la producción evitando fugas que por una u otra vía fuesen a alimentar la competencia y, por último, eliminar cualquier posibilidad de desarrollo de la manufactura tabacalera en Cuba, que de tal suerte quedaría reducida a la condición de proveedora de materia prima.

Las inclinaciones monopolistas no tardaron en manifestarse también en la esfera comercial. Siguiendo los pasos de la Real Compañía Guipuzcoana de Caracas, fundada en 1728, en 1740 se creó la Real Compañía de Comercio de La Habana con la participación de inversionistas privados —habaneros y gaditanos— y de la familia real. La nueva entidad disfrutaría del privilegio comercial respecto a la exportación de tabaco, así como de la exclusividad en las ventas de azúcar y cueros, ostentando igualmente el monopolio sobre las importaciones. A cambio de esos derechos, se haría cargo del traslado de tropas a América, contribuiría a la construcción de buques y al abastecimiento de la Armada Real y asumiría la responsabilidad de perseguir el contrabando en las costas de la isla. Surgida como una alternativa al cada vez más inoperante sistema de flotas, los resultados de la Real Compañía como empresa comercial fueron diversos y contradictorios: la exportación de azúcar parece haberse beneficiado de sus actividades, pues se consiguió liberarla de derechos e incrementar su volumen, pero no así las ventas de tabaco, que nunca llegaron a satisfacer la demanda de las fábricas reales, ni tampoco el mercado insular, mal abastecido con mercaderías importadas de baja calidad. Operando de acuerdo con el más retrógrado criterio mercantilista, la empresa habanera apostaba por inflar los precios restringiendo la oferta, como lo demuestra el hecho de que llegase a vender en La Habana el barril de harina a un precio siete veces mayor al costo de su adquisición en España. Dicha práctica reportaba ganancias extraordinarias, al

extremo de que la Compañía pudo duplicar en muy breve plazo su capital inicial y repartir a la vez dividendos anuales de hasta 33%, pero la convertía en un factor restrictivo de la dinámica económica, salvo en el plano de la acumulación de capitales, mecanismo del cual se beneficiaron los inversionistas habaneros y que a la larga habría de revertir sobre el crecimiento económico local.

Tales fueron las circunstancias en las que hubo de desenvolverse la economía cubana durante la primera mitad del siglo XVIII. No obstante las restricciones monopolistas, la regularización del comercio exterior estimuló el desarrollo de la agricultura comercial con el consiguiente efecto sobre la estructura agraria. La difusión de las relaciones monetarias constituía una expresión bastante ilustrativa de las nuevas realidades, pues paulatinamente el dinero fue sustituyendo los pagos en especie de "censos" y arriendos. Abolida la facultad de los cabildos para mercedar tierras, quedó definido un procedimiento para la "composición" de estas por parte de una dependencia subordinada al Tribunal Mayor de Cuentas de La Habana, al tiempo que se exigía la legalización de las posesiones y los lindes de los fundos comenzaban a definirse con mayor claridad. Obviamente en el ramo agrícola eran el tabaco y la caña de azúcar los cultivos cuya expansión presionaba de manera más directa sobre las antiguas formas de tenencia, pero la propia ganadería presentaba nuevas y más intensas modalidades de explotación con la venta de carnes y animales de tiro, generalmente por vía del contrabando, a las plantaciones fomentadas en Jamaica, Barbados y otras colonias europeas del Caribe.

Durante las primeras décadas del siglo era el tabaco el renglón de mayor dinamismo productivo, pues su cultivo se había difundido de manera organizada a Matanzas, Remedios, Trinidad, Bayamo e incluso a los nororientales terrenos aluviales de Mayarí. En algunos casos los vegueros habían conseguido hacerse con la posesión de sus fincas, aunque en occidente lo más usual era

que explotasen tierras arrendadas —o entregadas a censo— por los hacendados y la Iglesia. El auge tabacalero afianzó la posición de los vegueros en la economía colonial, pero todavía más la de comerciantes y terratenientes —funciones que a veces confluían en la misma persona—, quienes actuaban como intermediarios y explotaban los molinos donde se procesaba una parte considerable de la hoja cosechada.

La producción de azúcar, que durante el siglo XVII se había estado realizando en pequeños trapiches en condiciones prácticamente artesanales, comienza a salir de su letargo gracias a la moderada reanimación de la actividad comercial, que no solo abrió posibilidades para la exportación del dulce, sino también facilitó un poco más la adquisición de esclavos, primero a los "factores" locales de la Compañía de Guinea y, más tarde, a los de la Compañía Inglesa del Mar del Sur. Estudios recientes muestran un discreto incremento de los esclavos empleados por ingenio en La Habana, con un promedio de 18 a mediados del "Siglo de las Luces", pero sobre todo revelan la existencia de algunas fábricas —en particular las regenteadas por los jesuitas— con dotaciones de hasta 100 esclavos. Paralelamente el número de trapiches activos en el *hinterland* capitalino aumenta desde unos 70 en 1690, hasta cerca de 300 hacia 1758, año en el cual la capacidad de carga de los navíos de la Real Compañía de Comercio de La Habana resultó del todo insuficiente para transportar las casi 6 000 toneladas de azúcar enviadas desde los ingenios al puerto habanero. Aunque la producción cubana era todavía muy pequeña comparada con los rendimientos de otras islas antillanas, tanto la envergadura de los negocios como la tecnología empleada indicaban la existencia de un potencial productivo susceptible de mejor aprovechamiento.

Si el reordenamiento administrativo y la regularización del movimiento comercial promovidos por los primeros monarcas borbones revitalizaron el crecimiento económico, la centralización del gobierno y el oneroso monopolio comercial frenaban

el dinamismo de la economía. Aunque el gobierno de la isla continuaba recibiendo de la Real Hacienda bastante más de lo que recaudaba, sobre los particulares se dejaban sentir los efectos de una acrecentada presión fiscal, quizá no tanto por la magnitud de los gravámenes, como debido a la mayor eficacia en la recaudación. La monopolización del comercio y la especulación que florecía a su amparo, se hacían tanto más gravosos en el interior del país, cuyas poblaciones no solo experimentaban mayores limitaciones para la exportación de sus frutos, sino que sufrían un crónico desabastecimiento. Si damos por buenas las protestas de los vecinos de Santiago de Cuba, los mercados locales apenas funcionaban como tales, pues se hallaban a merced de los agentes de la Real Compañía que no llevaban esclavos a la región y solo ofrecían "trapos mojados y podridos" en la tienda de la villa. La alternativa a esa inicua situación era de sobra conocida: el contrabando. El comercio ilegal reverdece en estos años sobre bases más estables y mejor articuladas; toda una red clandestina enlazaba las regiones centrales y orientales de la isla con Jamaica, la colonia francesa de Saint-Domingue y hasta con las Trece Colonias británicas de Norteamérica. Bajo el manto de legalidad que amparaba las actividades de la Compañía del Mar del Sur, se traficaban esclavos que colocados en cualquier remoto punto de la costa podían costar la mitad o un tercio de su precio en La Habana. Y los circuitos del contrabando no solo comunicaban a los productores y consumidores criollos con las colonias extranjeras, sino también con las principales posesiones españolas del Caribe, encauzando un flujo mercantil que escapaba a las exacciones del monarca borbón. De ser acertados los estimados de la época, a mediados del siglo XVIII casi la mitad de los productos cubanos salían de la isla por la vía del contrabando, incluyendo casi un tercio de las corambres y más de 60% del tabaco.

Empeñada en ejercer un control más efectivo sobre los recursos coloniales, la Corona no escatimó los medios al alcance del gobierno ni los "guardacostas" de la Real Compañía para per-

seguir el contrabando, pero dicho hostigamiento no alcanzaba a suprimir el tráfico, sino que más bien tendía a encarecerlo. En este como en otros planos la acción del Estado en modo alguno era novedosa, solo que su relativa eficacia la tornaba irritante, especialmente por contraste con las décadas de incuria que la precedieran. El ejercicio de un gobierno más ordenado, aunque igualmente rapaz, en la práctica beneficiaba a los comerciantes a expensas del sector productivo y reforzaba los privilegios de La Habana en detrimento de las restantes villas del país, fomentando o acentuando las contradicciones en el seno de una sociedad cuyo desenvolvimiento la iba tornando cada vez más compleja.

LA VIDA SOCIAL: ADELANTOS Y CONFLICTOS

Por más que el crecimiento económico fuese relativo y la prosperidad muy desigualmente repartida, el desarrollo de la economía cubana contribuyó a definir intereses a menudo divergentes. Para muchos en la isla la política borbónica resultaba francamente expoliadora y, sin ceder un ápice en su lealtad al monarca, no vacilaban en mostrar su inconformidad. La manifestación más evidente de rebeldía se produjo entre los vegueros, poco después de establecerse la Factoría. Las evidencias de que el nuevo sistema afectaría sus ingresos, originaron protestas entre los vegueros del Arimao —en la región central—, Santiago de Cuba y otras zonas del país, pero fue en La Habana donde el movimiento alcanzó mayores proporciones, pues unos 500 vegueros armados penetraron en la ciudad en agosto de 1717 al grito de "¡Viva Felipe V y abajo el mal gobierno!", la ocuparon por tres días y obligaron a reembarcarse hacia España al capitán general Vicente Raja y a los funcionarios reales comisionados para la implantación del estanco. La respuesta de Madrid fue reemplazar al gobernador por otro militar de más carácter, Gregorio Guazo, quien llegó a La Habana acompañado de un cuantioso refuerzo

para la guarnición local. El nuevo gobernante dio muestras de cierta flexibilidad en la aplicación de las medidas monopolizadoras y, sobre todo, abrió la posibilidad de vender excedentes de tabaco a otras colonias españolas del continente; la medida era apenas un paliativo, pues el monopolio estatal minimizaba las posibilidades del tabaco como fuente de enriquecimiento para la oligarquía, pero resultó suficiente para aplacar a los comerciantes intermediarios y hacendados dueños de molinos que habían estimulado la sublevación. De tal suerte, cuando en 1723 los vegueros se levantaron nuevamente irritados por la demora en los pagos y la intención de hacer las compras a crédito, no encontraron el apoyo esperado y cayó sobre ellos una brutal represión; después de vencer la resistencia de los amotinados en las afueras de La Habana, Guazo ejecutó a 11 rebeldes prisioneros cuyas cabezas fueron exhibidas en los accesos a la ciudad. Aunque el movimiento de los vegueros estuvo muy lejos de albergar intenciones separatistas, el incidente quedaría impreso en el imaginario popular como un testimonio primigenio de los intereses discordantes entre Cuba y su metrópoli.

Diversas en sus motivaciones y naturaleza, las manifestaciones de descontento habrían de multiplicarse. En una circunstancia en que las identidades y afecciones eran, ante todo, locales, las medidas centralizadoras que afianzaban los privilegios habaneros acentuaron forzosamente las expresiones de regionalismo. Mientras en Santiago de Cuba el ayuntamiento hacía sentir sus protestas ante los desmanes de la Real Compañía, en Puerto Príncipe los pobladores prendieron al teniente gobernador y lo remitieron a La Habana, acción que trajo como represalia la deportación de algunos de los vecinos insubordinados. La resistencia de los esclavos, que desde muy temprano se había manifestado en las fugas y el cimarronaje, registra también en esta etapa significativos estallidos. El levantamiento de mayor trascendencia fue sin duda el escenificado por los esclavos de las minas de cobre cercanas a Santiago de Cuba en 1731. La

mayor parte de esos trabajadores, dada su condición de "esclavos del rey", disfrutaban de ciertas prerrogativas que el gobernador de Santiago intentó arrebatarles, lo cual provocó que se amotinasen y con el apoyo de cimarrones refugiados en los montes cercanos tomasen el pueblo minero y expulsaran a las autoridades locales. Ante el empuje de las tropas enviadas para sofocar la rebelión, los "cobreros" se replegaron a la serranía circundante donde iniciaron una tenaz lucha de guerrillas, a la que solo puso fin la mediación del obispo Pedro Morell de Santa Cruz, quien consiguió que se restituyesen a los esclavos sus antiguas condiciones de trabajo. En el entorno azucarero de La Habana, el creciente rigor laboral que traía aparejada la progresión productiva también suscitaría indisciplinas y hasta sublevaciones en algunos ingenios, como las que ocurrieron en 1726 al sudeste de la ciudad, en momentos en que esta se hallaba amenazada por una escuadra inglesa.

La oligarquía criolla, y en particular la habanera, no obstante sus variadas muestras de desacuerdo con la orientación centralista de la Corona, habitualmente optaba por buscar una avenencia que satisficiera sus intereses, algo que se hizo evidente durante el conflicto de los vegueros. Con capacidad negociadora nada desdeñable, los oligarcas locales se las ingeniaron para amortiguar la creciente presión fiscal, aceptando nuevos tributos a cambio de la abolición de otros —así consiguieron aliviar los derechos de exportación del azúcar— o desvirtuándolos en sus condiciones de aplicación, como lo ilustra el impuesto de capitación sobre los esclavos que nunca llegaría a ponerse en práctica de la forma en que había sido concebido. Muestra de la singular habilidad de los más ilustres "próceres" habaneros fue la manera en que sacaron provecho de la propia política monopolizadora asociándose con la familia real en la creación de la Real Compañía de Comercio. Los vínculos con la Corona, estrechados por los frecuentes servicios militares y financieros que demandaban las incesantes guerras de estos años, comenzarían

a traducirse en títulos nobiliarios otorgados a —o comprados por— los miembros más prominentes del cabildo de La Habana, así como a funcionarios de probada fidelidad y alguno que otro comerciante exitoso. Marquesados y condados vinieron a adornar así a una singular nobleza criolla, cuyas presunciones aristocráticas, además de imprimir cierto boato al modo de vida, tendrían perdurable expresión arquitectónica en los palacetes que, junto a conventos y fortalezas, fueron completando el perfil de la capital colonial.

Las élites municipales no solo mostraron una clara conciencia de sus intereses —y cierta capacidad para defenderlos—, sino que paralelamente lograban autorreconocerse y afirmar su preeminencia social. Primero en La Habana, donde casi todas las familias de la oligarquía estaban emparentadas y tenían orígenes semejantes, se gestó una identidad común y un cierto sentido de determinación que alcanzaría su expresión más acabada en la obra del regidor José Martín Félix de Arrate, *Llave del Nuevo Mundo, antemural de las Indias Occidentales. La Habana descripta: noticias de su fundación, aumentos y estado*, concluida en 1761. El libro recoge la historia de la ciudad, pero no como una colección de acontecimientos y descripciones paisajísticas, sino como una memoria cívica de la villa —así la califica Manuel Moreno Fraginals—, en la cual la historia es ante todo un recuento de las virtudes y grandezas de sus habitantes, cuyas diferencias respecto a los españoles peninsulares el regidor no descuidaba subrayar. Se trata, en síntesis, de una historia "patria" —término que Arrate reitera—, solo que la patria de aquellos criollos —en La Habana y en las demás villas— era ante todo la "patria chica", cuyo horizonte no se extendía mucho más allá de los límites de la jurisdicción. La villa era el centro del poder de los propietarios de tierras y a ella correspondía en primer lugar el sentido de pertenencia. La oligarquía criolla ejercía su autoridad política y jurídica desde el cabildo y regenteaba las almas desde la Iglesia; en su apego al suelo, en su compromiso con el

terruño, con la necesidad de protegerlo y exaltarlo, maduró la conciencia criolla durante la primera mitad del siglo XVIII. Resultado de la apropiación de los espacios insulares a lo largo de dos siglos de experiencia colonial, el criollo —blanco, negro o mestizo— era un producto nuevo, distinto al español o al africano. El patriotismo local —en La Habana, Bayamo o Santiago— emerge así como una manifestación del sentimiento criollo, que la oligarquía alienta en los otros miembros de las comunidades regionales para sustentar su autoridad sobre la base de un interés común.

Como la tierra era expresión primordial de prestigio y riqueza, quienes la poseían ejercían su ascendiente sobre los miembros de la comunidad jurisdiccional, que como arrendatarios, jornaleros o sitieros mantenían vínculos de dependencia con los grandes terratenientes. Dicho influjo se extendía a quienes en las villas practicaban los oficios —ahora en su mayoría negros y mulatos libres— o desarrollaban el comercio, pues la "gente bien" de la localidad constituía su principal clientela. En las poblaciones del interior de la isla, donde subsistían con mayor firmeza las formas tradicionales de vida, esas relaciones de dependencia personal eran todavía más sólidas. Los "hombres del común", a menudo calificados como agregados o dependientes, formaban un abigarrado conjunto al que pertenecían blancos pobres —en su mayoría inmigrantes canarios, así como soldados y marinos licenciados o desertores—, negros y mulatos libres, además de los ya muy escasos vástagos de la población aborigen. Según su condición social y color de la piel, ese conglomerado se subdividía en estamentos bien jerarquizados, condición que se hace constar en los registros eclesiásticos y padrones administrativos.

La madurez de la sociedad criolla alcanzó también una expresión institucional, favorecida en ocasiones por la propia centralización administrativa. Para satisfacer necesidades sociales y educacionales se creó el Tribunal del Protomedicato de La Haba-

na (1709), encargado de examinar y autorizar el ejercicio profesional de médicos y boticarios; se establecieron los primeros colegios de la Compañía de Jesús en La Habana (1724) y Puerto Príncipe (1756); se introdujo la imprenta (1720), y se fundaron el seminario de San Basilio el Magno —en Santiago de Cuba (1722)— y, muy poco después, la Universidad de La Habana (1728), confiada a la orden de los padres dominicos en su convento de San Juan de Letrán. Como es fácil apreciar, la Iglesia ejercía un papel determinante en la educación, tanto elemental como superior, y contaba ya con figuras intelectuales destacadas, como Francisco Javier Conde, considerado en la época el mayor orador sagrado de América, el jesuita novohispano Francisco Javier Alegre, que enseñó filosofía en el plantel habanero de la orden o el propio obispo Morell de Santa Cruz, autor de una importante *Historia de la Isla y Catedral de Cuba*. Con un clero compuesto básicamente por naturales de la isla reclutados entre las familias notables del país, la Iglesia desempeñó un papel relevante en la formación de la conciencia criolla a la cual aportó significativos valores simbólicos, entre estos el fomento de devociones locales, como la que ya cobraba fuerza en torno a una imagen hallada a principios del siglo anterior en las aguas de la bahía de Nipe y reverenciada como la Virgen de la Caridad en el santiaguero poblado de El Cobre, donde se le construyó una capilla.

Para salvaguardar sus intereses la oligarquía criolla solía burlar las disposiciones de la Corona y llegó incluso a desafiar a algunos funcionarios reales, pero en modo alguno ello implicaba un quebranto de sus lealtades, que estaban bien definidas, y habría de demostrarlo con su conducta cuantas veces fue necesario defender el suelo frente a las amenazas extranjeras. Para todos los estamentos y grupos sociales la defensa de la soberanía española sobre Cuba constituía un deber indeclinable, al igual que la monarquía hispana se hallaba comprometida a defender su más preciada posesión antillana.

ATAQUE Y OCUPACIÓN INGLESA DE LA HABANA

Por su condición de centro estratégico para la defensa y las comunicaciones del imperio español, Cuba fue objeto permanente de las ambiciones británicas, que consideraban la conquista de la isla —y particularmente de las ciudades de La Habana y Santiago— indispensable para consolidar su dominio naval en el Caribe. La región había dejado de ser para Inglaterra un mero escenario de correrías y saqueos; ahora la Corona londinense mantenía en las Indias Occidentales muy ricas colonias y un activo comercio, que podían ser objeto —como frecuentemente lo eran— de los ataques de corsarios radicados en Cuba. En el curso de las llamadas "guerras mercantiles", continuamente libradas por las potencias europeas en el Caribe durante la primera mitad del siglo XVIII, distintas villas cubanas habían sido objeto de ataques y amenazas, destacándose por su alcance la tentativa de apoderarse de Santiago de Cuba escenificada por el almirante inglés Edward Vernon en 1741. Después de haber fracasado en su empeño de conquistar Cartagena a principios de ese año, Vernon regresó a Jamaica donde reorganizó sus fuerzas y, con el apoyo de una fuerte escuadra, se dirigió al sudeste de Cuba desembarcando en la bahía de Guantánamo. Su proyecto era avanzar desde allí sobre la vecina villa santiaguera, mas el contingente enviado con tal propósito fue rechazado y tuvo que retirarse. Vernon trató entonces de sostenerse en Guantánamo, donde sus tropas comenzaron a ser diezmadas por los ataques de las guerrillas criollas y las epidemias, circunstancias que lo obligarían a regresar a Jamaica.

La Habana era, sin embargo, el objetivo por antonomasia de las ambiciones británicas. Cuando en 1761 el monarca español Carlos III decidió aliarse con Francia durante la Guerra de los Siete Años, en Inglaterra se preparó el mayor contingente militar que hasta entonces hubiese cruzado el Atlántico con el objetivo de arremeter contra la capital cubana. Al frente del gobierno en

la isla se hallaba el mariscal Juan de Prado Portocarrero, recién designado en ese cargo con la encomienda de alistar la defensa y reordenar la administración, tarea esta última que incluyó el restablecimiento de la Factoría de Tabacos, una decisión que —junto a otras medidas tomadas— entrañaba la práctica liquidación de la Real Compañía de Comercio.

Rodeada de fortalezas y murallas, La Habana era considerada inexpugnable, creencia que probablemente hizo que el mando español se confiase en demasía y no preparase de manera acertada su defensa. Las fuerzas británicas, que totalizaban casi 20 000 hombres y contaban con el apoyo de 30 buques de guerra, desembarcaron en las cercanías de la ciudad y no obstante los esfuerzos para impedir su avance, así como la heroica defensa de la fortaleza del Morro —en la que perdió la vida su jefe, Luis de Velasco—, los "casacas rojas" consiguieron apoderarse de los puntos estratégicos, de manera tal que la resistencia se tornó insostenible. Los desaciertos y la flaqueza del gobernador Portocarrero y de los principales jefes hispanos que condujeron a la capitulación de la plaza, contrastaban con la combatividad demostrada por las milicias criollas y, en particular, las fuerzas locales al mando del regidor José Antonio Gómez, quien murió poco después de haber sido destituido por el mando español. Detrás de la cruenta conquista de la capital de la isla y de la ineptitud manifiesta de las autoridades españolas encargadas de su defensa, se advierten las profundas discrepancias existentes entre el poder metropolitano y las élites criollas, que la historiografía cubana se encargaría de magnificar.

La oligarquía habanera, en particular su más eminente vocero, Francisco de Arango y Parreño, hizo de la "toma de La Habana por los ingleses" una suerte de parteaguas en la historia insular, no tanto por el acontecimiento bélico en sí mismo, como por la significación atribuida a la ocupación británica. Esta fue realmente breve, de apenas 11 meses, y solo se extendió desde el confín occidental de la isla hasta poco más allá de Matanzas,

sin alterar el sistema de gobierno —el gobernador inglés, conde de Albemarle, conservó el título de capitán general— ni suplantar en sus funciones al cabildo local. La dinámica económica, sin embargo, no pudo ser más diferente. Liberada del monopolio gaditano, de las especulaciones de la Real Compañía y de las restricciones de la Factoría de Tabaco, la economía habanera vivió momentos de esplendor. Tras la apertura del puerto para el comercio con Gran Bretaña y sus colonias americanas, negociantes y mercaderes ingleses concurrieron al mercado habanero con sus bienes de consumo, materiales y manufacturas —tanto textiles como equipos y herramientas—, mientras que comerciantes de las Trece Colonias norteñas ofrecían cereales y otros comestibles. Y, sobre todo, en la plaza conquistada se vendieron multitud de esclavos. No es fácil establecer cuántos de esos infelices introdujeron los tratantes británicos, pero el "renglón" comercial era tan importante que se da por cierta la presencia de un buque negrero esperando para entrar al puerto aun antes de que hubiese caído la ciudad. La cifra más aceptada es la de 4 000 esclavos, quizá haya sido algo menor; de cualquier manera esa cantidad era varias veces superior a la que se había vendido en cualquiera de los años precedentes y, lo que resulta más importante, a precios mucho más baratos y con mayores facilidades de pago. Claro está, si semejante inyección de fuerza de trabajo pudo ser absorbida en tan breve plazo, ello era expresivo indicio de la existencia de una capacidad productiva subutilizada.

Los productores y comerciantes habaneros, por su parte, supieron sacar partido de la ruptura de absurdos monopolios y del levantamiento de trabas administrativas, a la vez que se beneficiaban del ensanchamiento de sus mercados. Durante casi un año, tabaco, cueros, azúcar y mieles salieron en volúmenes nunca vistos por el puerto de La Habana, en cuyos muelles se asegura que atracaron casi 1 000 barcos —el promedio anual precedente resultaba muy inferior al centenar—, generándose una bonanza también aprovechada por algunos territorios insu-

lares no comprendidos bajo la dominación inglesa. Una mayor demanda y mejores precios, así como el contacto directo con el mercado, dejaron en los productores capitalinos más clara noción de las prácticas y exigencias del comercio mundial, además de cierto conocimiento sobre algunas tecnologías recientes, todo lo cual obraría a favor del futuro despegue azucarero, ya dentro de las pautas de la plantación. Como "verdadera época de la resurrección de La Habana" calificaría Arango y Parreño estos meses, pensando quizá no tanto en la momentánea prosperidad que la ocupación inglesa pudo reportar, como en las consecuencias que de ese hecho habrían de derivarse para el futuro de la colonia.

REFORMAS ILUSTRADAS

La breve dominación británica terminó en julio de 1763 cuando, en virtud del Tratado de París, La Habana fue devuelta a España, que cedió a cambio a Inglaterra la península de la Florida. El trauma que había representado para la monarquía española la pérdida de una plaza clave en el funcionamiento del imperio, determinó que se aprestase con la mayor prioridad a subsanar las debilidades de su sistema defensivo; de ahí que las primeras y más visibles medidas tomadas tras restaurarse la plena soberanía española sobre Cuba tuviesen un carácter militar. El nuevo gobernador, Ambrosio Funes, conde de Ricla, llegó a La Habana acompañado por un contingente de 2 000 soldados, apenas una avanzada de los refuerzos que irían arribando a la isla en cantidades sin precedentes. El fortalecimiento de la capacidad defensiva comprendería también una revisión a profundidad de la red de fortificaciones, la cual condujo a la construcción de tres nuevos castillos en el perímetro de la capital, entre ellos la enorme fortaleza de San Carlos erigida sobre la elevación de La Cabaña, punto desde el cual la artillería británica había castigado con fiereza a la villa. Entre los nuevos mandos españoles en Cuba

ocupaba una posición relevante el general Alejandro O'Reilly, quien tendría a su cargo la reorganización militar de la colonia. La experiencia de la Guerra de los Siete Años hacía evidente que la Península no podía encargarse por sí sola de la defensa imperial, de modo que se hacía imprescindible incorporar a los criollos al ejército regular como una suerte de milicia territorial. El nuevo sistema, implantado con el respaldo de las élites locales, contemplaba la creación de regimientos de blancos —tanto de infantería como de caballería— y batallones de "Pardos y Morenos" en la jurisdicción habanera, así como cuatro batallones adicionales en otros puntos de la isla hasta totalizar algo más de 7 000 hombres. La magnitud del reclutamiento realizado y el periódico entrenamiento de estas tropas implicaron una acentuada militarización de la sociedad criolla, pues muchos hijos de la oligarquía ocuparían en lo sucesivo cargos militares y algunos de ellos ascenderían hasta la alta oficialidad.

La modernización y reforzamiento de la defensa imperial en los términos planteados exigía de la monarquía enormes recursos; sin una hacienda bien nutrida resultaba imposible sostener el ejército y la marina, de ahí que engrosar el tesoro fuese premisa indispensable para cualquier adelanto defensivo. La nueva estrategia imperial debía contemplar necesariamente cambios importantes en materia fiscal y comercial, así como el fomento de las actividades productivas para promover el desarrollo material y aumentar la riqueza de la monarquía. Las reformas que desde la instauración de la dinastía borbónica se habían estado introduciendo de manera paulatina, adquirieron así con Carlos III especial relevancia. Estas se correspondían, por otra parte, con las concepciones del despotismo ilustrado prevalecientes en Europa a mediados del siglo XVIII, las cuales propugnaban una monarquía centralizada cuyo gobierno, inspirado en los principios del racionalismo, se encargaría de impulsar el desarrollo material y cultural apoyándose en los conocimientos científicos y el avance de la tecnología. Con el auxilio de una nueva gene-

ración de políticos ilustrados como los condes de Aranda, Floridablanca y Campomanes, a quienes elevó a la condición de ministros, el monarca hispano diseñó una política de vasto alcance, para cuya aplicación en "las Indias" seleccionó a funcionarios jóvenes y capaces, mucho de ellos con formación militar, encargados de sustituir a la venal burocracia que solía ocuparse de los asuntos coloniales.

Una de las direcciones cardinales de la política reformista era el ensanchamiento de la base fiscal en la que el reino basaba su poderío, propósito cuya consecución demandaba aprovechar de la manera más eficaz el potencial contributivo de las colonias. Por más que se diese por sentado que Cuba era incapaz de sustentar con sus propios recursos el colosal dispositivo militar que albergaba —la construcción de la fortaleza de San Carlos de la Cabaña por sí sola absorbió 3.5 millones de pesos fuertes—, la isla no quedaría exceptuada de presiones tributarias. El financiamiento del aparato militar continuaría descansando básicamente en el situado novohispano, que entre 1764 y 1790 totalizó algo más de 100 millones de pesos fuertes, pero a la oligarquía criolla también debía corresponder su parte en el equipamiento y manutención de las guarniciones y la milicia local. Poco después de hacerse cargo del gobierno, el conde de Ricla decretó un aumento de la alcabala que llegaría hasta 6%, lo cual triplicaba la tasa habitual en los años precedentes. Casi al mismo tiempo se incrementó el almojarifazgo, arancel que pesaba sobre los artículos importados, y se instauraron otros gravámenes como el impuesto sobre el aguardiente de caña. En algún caso esos tributos suscitaron tenaz resistencia; por ejemplo, el impuesto directo de 3% sobre casas, censos y otras propiedades fue objeto de tal repulsa que tuvo que ser suspendido en octubre de 1765. Pero la oligarquía ante todo negoció, con lo cual logró concesiones nada desdeñables como la abolición de los derechos de importación de esclavos o la suspensión por 10 años del cobro de alcabalas a ingenios recién fundados. También supo hacer explí-

citas sus aspiraciones para promover el desarrollo: exención de impuestos a los productos de la isla que se importaban en la Península, cese del monopolio comercial gaditano, facilidades para la importación de esclavos, demandas que de un modo u otro el monarca habría de atender.

Si la toma de La Habana había constituido el golpe de gracia para el ya casi extinguido sistema de flotas, las medidas que sucedieron a la recuperación de la ciudad fueron desmantelando paso a paso el monopolio comercial. En 1764 se inauguró un servicio mensual de buques-correo entre La Habana y La Coruña que representaba una seria brecha para la exclusividad gaditana. Al año siguiente el boquete se ensancharía al autorizarse el comercio directo entre La Habana y varios puertos de la Península, posibilidad que se extendería poco después al comercio con otras islas hispanas del Caribe, como Puerto Rico y Margarita. El colofón de ese proceso vendría en 1778 con el reglamento para el comercio libre entre España y las Indias, que abrió al tráfico con América a los principales puertos españoles —incluidos los de Canarias y Baleares— y permitió el intercambio de las colonias entre sí, además de simplificar en notable medida los procedimientos para la habilitación de buques y eliminar varios impuestos que encarecían los fletes navales. Al mismo tiempo fue liquidado el monopolio marítimo habanero, pues Santiago de Cuba, Trinidad y Batabanó quedaron autorizadas al comercio directo con la Península y otras colonias americanas, lista a la cual se sumarían posteriormente nuevos puertos del país. A estas medidas de estímulo se fueron añadiendo otras, tanto de corte administrativo como de intención liberalizadora; entre estas últimas cabe destacar la decisiva autorización para la libre introducción de esclavos decretada por Carlos IV en 1789, un año después de haber ascendido al trono madrileño tras la muerte de su padre. Dentro de este conjunto de acciones, no deben menospreciarse los beneficios que reportó a la oligarquía habanera la venta de las propiedades de la Compañía de Jesús, des-

pués de que se ordenara la expulsión de los jesuitas de todas las posesiones españolas en 1767.

Nuevas situaciones coyunturales vinculadas con decisiones de la Corona española actuaron igualmente a favor del desenvolvimiento económico de Cuba. Tal fue el caso de la participación de España en la Guerra de Independencia de las Trece Colonias británicas de Norteamérica. Desde un principio —1776— Madrid decidió autorizar el comercio de la isla con los colonos rebeldes, como una forma de apoyarles, autorización que tres años después extendería a Francia y Holanda, cuando en alianza con esos países decidió declarar la guerra a Gran Bretaña. Se abrió entonces una etapa de intensa actividad comercial, especialmente importante en el caso de las Trece Colonias, pues impedidas estas de sostener su tradicional intercambio con las posesiones inglesas del Caribe, encontraron en Cuba una importante fuente alternativa de azúcar y mieles, a la vez que un atractivo mercado para la venta de sus harinas. A esto debe añadirse que el papel desempeñado por La Habana durante esa guerra, como base fundamental para las operaciones militares y navales, determinó que entrasen en circulación más de 30 millones de pesos en la economía insular, gastados para sostener el ejército, pagar la construcción de grandes navíos de guerra en el Arsenal y avituallar las expediciones enviadas contra las posesiones británicas en el área, así como a las escuadras que recalaban en la bahía habanera.

Un ángulo de particular trascendencia en la política reformista fue el de la administración pública. Entre los capitanes generales designados durante las tres décadas posteriores a la restauración del dominio español en La Habana, hay personalidades que como Antonio María de Bucareli o Felipe Fondesviela, marqués de la Torre, figuran entre los gobernantes más eficientes de toda la época colonial. En el mismo sentido, algunas importantes reformas administrativas proyectadas por José de Gálvez desde su flamante ministerio de Indias tomaron a

Cuba por campo de experimentación. Tal fue el caso de las intendencias, cuya primera oficina se creó en La Habana en 1765, con dos ramas, la del ejército y la de hacienda, disponiendo de secciones especializadas en la contabilidad, la recaudación de impuestos y la fiscalización, además de contar con una intervención para la fijación de precios, así como con una suerte de tribunal para castigar las contravenciones. Se trataba de un organismo complicado, que reunía funciones hacendarias y económicas, destinado a ejercer durante ciertas etapas un eficaz balance en la gestión gubernamental.

Muy controvertidas en su significación para el continente, las reformas borbónicas parecen haber reportado a Cuba un apreciable beneficio. Quizá porque muchas de ellas se introdujeron primero en la isla y tuvieron, por tanto, un mayor tiempo de aplicación, quizá porque la economía cubana era más pequeña y concentrada, posiblemente porque ciertas coyunturas reportaron a la colonia antillana más evidentes beneficios, lo cierto es que durante las últimas décadas del siglo XVIII, al calor de esas reformas, en Cuba cristalizan factores que imprimirán un notable impulso al crecimiento de su economía y al dinamismo de su sociedad.

MUESTRAS DE PROGRESO

Tres décadas después de restaurada la plena soberanía española en 1763, Cuba ofrecía un panorama bien diferente. Las medidas de liberalización comercial habían actuado como un eficaz acicate productivo, especialmente las crecientes facilidades para la introducción de esclavos cuyo efecto directo y bastante inmediato sobre la producción azucarera se hacía bien visible. Si en dos siglos y medio a partir de la conquista se habían traído a la isla, según los estimados, unos 60 000 esclavos, durante los 30 años posteriores a 1762 se calcula que fueron importa-

dos algo más de 50 000, para un promedio de casi 2 000 de esos trabajadores por año. En el mismo lapso la producción azucarera se triplica y supera las 15 000 toneladas anuales, cantidad todavía pequeña pero que ya colocaba a Cuba en una tercera posición entre las islas azucareras del Caribe. Aunque el número de ingenios crece en Santiago de Cuba y Trinidad, estos continuaban siendo pequeños trapiches, de modo que tan notable crecimiento resultaba ser un fenómeno principalmente habanero. Este tuvo su expresión física en la vasta expansión de las tierras dedicadas al cultivo cañero, que desde una cifra de apenas 5 000 hectáreas en 1762, aumentan hasta comprender unas 60 000 en 1792. El movimiento dio impulso decisivo al proceso de disolución de la estructura agraria tradicional, cuyos moldes legales se tornaron francamente obsoletos. La expansión azucarera constituyó también una fuente de conflictos, pues los hacendados deseosos de demoler hatos y corrales para fomentar cañaverales, empezaron a chocar con los vegueros asentados en esos terrenos. Aunque la Factoría protegía a los cultivadores de la hoja, sus controles productivos mantenían estancada la producción tabacalera, ya que después de alcanzar esta una cosecha récord de 273 000 arrobas en 1773, las siembras fueron restringidas por haberse acumulado enormes existencias de tabaco en la fábrica de Sevilla, a lo cual vendría a sumarse una severa escasez de numerario para pagar a los vegueros durante la penúltima década del siglo.

De tal suerte, si el tabaco aún se sostenía como el principal "fruto" de la economía insular, el azúcar se había convertido sin discusión alguna en el más dinámico de sus renglones. Los nuevos ingenios, particularmente los fomentados al este de La Habana, empleaban el llamado tren francés —o jamaiquino— que disponía las pailas de manera que estas empleasen un solo fuego ahorrando buena cantidad de combustible, además de utilizar en los trapiches mazas revestidas de metal, de mayor duración y más efectiva capacidad de molida. El ingenio habanero medio,

que en 1762 cultivaba unas 100 hectáreas de cañaverales empleando dos docenas de esclavos, 30 años después se acercaba a las 300 hectáreas y explotaba casi un centenar de trabajadores. Su mayor dinamismo técnico y productivo hacía del azúcar la auténtica fuerza motriz de la economía insular: concentraba capitales, acaparaba tierras, mantenía una insaciable demanda de mano de obra esclava, desenvolviendo así un proceso que terminaría por transformar el perfil de la colonia.

La dinámica productiva tuvo una directa expresión comercial. En 1790 el valor de las exportaciones por el puerto de La Habana superaba los 10 millones de pesos, cifra 10 veces mayor que la registrada 20 años antes, mientras que en el mismo lapso el valor de las importaciones se había quintuplicado. El productor criollo se beneficiaba de la desaparición del monopolio mercantil, pero aún tenía que soportar los abusos del comerciante peninsular, que eran particularmente sensibles en el ramo del azúcar, pues los préstamos hipotecarios, así como los esclavos y equipos comprados a crédito, se financiaban en lo fundamental por los más poderosos comerciantes de la isla, casi todos ellos peninsulares y vinculados con las mayores casas mercantiles gaditanas. Los préstamos se otorgaban en condiciones usualmente onerosas, no solo por sus cortos plazos y elevados intereses, sino porque el azúcar comprometido como garantía solía valuarse a precios muy inferiores a los del mercado. Aun al margen del esquema monopolista, los comerciantes ejercían un cerrado control sobre la actividad mercantil y crediticia, tratando de mantener a los hacendados y productores de la isla en una posición subordinada. Se establecía de tal suerte una relación plagada de conflictos que tendía a profundizar las diferencias en el seno de la sociedad colonial.

En correspondencia con el desenvolvimiento de la economía, la población de Cuba también había experimentado un notable crecimiento. Como parte del reordenamiento administrativo promovido por Carlos III y sus ministros ilustrados, en

1774 se llevó a cabo el primer censo en la historia insular, el cual arrojó una población total de 171 620 habitantes; al repetirse la operación casi 20 años después, en 1792, el monto demográfico ascendía ya a 273 729 personas, evidencia de que dicha variable crecía a un ritmo relativamente acelerado. También resultan interesantes los cambios en la composición social de la población, pues si en el primer censo los blancos habían representado 56% de los habitantes del país, en 1792 dicha proporción se reducía a 49%, diferencia que se correspondía de manera bastante directa con el incremento de la población esclava. Esta casi había duplicado su número hasta llegar muy cerca de 85 000 individuos, gracias a lo cual su participación porcentual se había elevado hasta 31% en 1792 —desde el 26% que representaba 18 años antes—, demostración ilustrativa del impulso alcanzado por la trata negrera. Aunque con un crecimiento proporcional mucho menor —pasó de 18 a 20%—, el peso demográfico de la población libre "de color" resulta muy elevado, ya que era un porcentaje punto menos que inconcebible en el contexto de las sociedades antillanas de plantación. Dato sin duda revelador, que indica cuán lejos se hallaba Cuba todavía de ostentar dicha estructura, a pesar de su creciente producción de azúcar y del aumento en el número de esclavos.

A tono con la evolución económica, las oligarquías municipales acrecientan su poder y, al menos en el caso habanero, modifican un tanto su perfil, pues sin que la condición de terrateniente deje de ser el sustrato de su preeminencia social, el azúcar se va convirtiendo en la principal fuente de riqueza. Desde su base en el cabildo y su influencia en la Iglesia, con el mayor rango social que suponía el "ennoblecimiento" de muchos de sus integrantes y contando ahora además con mandos militares, la oligarquía criolla reunía los recursos necesarios para impulsar al aparato productivo hacia una creciente especialización en el azúcar —y también en el café, cultivo introducido en 1768—, para escenificar así, junto a sus congéneres de Puerto Rico, los

casos únicos en las Antillas de un sistema de plantaciones fomentado a partir de la iniciativa local. Y será la generación de oligarcas que sale a la palestra en estas décadas finales del siglo XVIII la encargada de culminar esa tarea.

Un progreso basado en el azúcar no solo exigía capitales, tierras y esclavos, sino también conocimientos técnicos. Lo que se requería era un saber pragmático, ya disponible en las colonias del Caribe inglés y francés, cuya asimilación en Cuba habría de producirse en el contexto de la Ilustración. Tendencia favorecida por la cada vez más intensa influencia del mercado, así como por el remozamiento de los usos gubernamentales, el "iluminismo" tendrá para la élite criolla un sentido más práctico que ideológico. Pero el afán de modernidad era solo una dimensión en la complicada conducta de aquel poderoso grupo social, que —al menos en La Habana— ya pretendía ser cosmopolita y a menudo gastaba por encima de sus posibilidades. La vida en la capital continuaba siendo cara, y todavía más cuando el paseo por la recién construida Alameda de Paula requería exhibir las mejores galas y, de ser posible, andar en calesa, como correspondía a una mentalidad señorial ansiosa por ostentar títulos nobiliarios y que demandaba tantos esclavos para la servidumbre como para el ingenio. Aunque en más modesta escala, la vida en otras villas del país intentaba reproducir esas costumbres, con ferias y cabalgatas donde la "gente bien" mostraba su valía. Para las capas populares quedaban las peleas de gallos, el juego de naipes, las retretas, los bailes y los entretenimientos asociados a las fiestas religiosas, vía de escape fundamental para la alegría de los negros libres y escenario también, en señaladas ocasiones, de las danzas y la rítmica música de los esclavos.

Como se aspiraba a una sociedad ordenada, se persiguió el vagabundeo, la ociosidad y trató de brindarse cierta seguridad en los espacios públicos. En La Habana, que según el censo de 1774 ya superaba los 75 000 habitantes, fueron prohibidas las casas techadas de guano dentro del recinto amurallado y comen-

zó a darse nombre a las calles, aunque la mayor parte de estas continuasen siendo auténticos lodazales. Antes de terminar el siglo la ciudad dispuso de un verdadero palacio de gobierno, construcción iniciada por el marqués de la Torre, que además de ser la residencia del capitán general albergaría varias oficinas de la administración pública y la cárcel de la villa. Esta, además, contaba ahora con teatros —el Coliseo, 1775— donde escenificar dramas y, sobre todo, comedias, entre estas últimas *El príncipe jardinero y fingido cloridano*, pieza inaugural de la dramaturgia cubana escrita por el capitán habanero Santiago Pita. Aparece asimismo una pintura propia, debida al mulato José Nicolás de la Escalera, quien pinta alguno que otro retrato pero sobre todo escenas religiosas, como las que adornaban la iglesia donada por el criollo conde de Casa Bayona a los pobladores de su señorío de Santa María del Rosario. De tema religioso eran igualmente las composiciones de Esteban Salas, quizá la figura cumbre de la música americana en el siglo XVIII, quien trabajó la mayor parte de su vida como maestro de la capilla de música de la catedral de Santiago de Cuba. La Habana, por cierto, tendría al fin su catedral (1777), aunque el templo no hubiese sido concebido con tal propósito, sino como iglesia asociada al colegio jesuita —lo cual ilustra la magnificencia de los proyectos ignacianos— y terminara de edificarse para esa nueva función tras la expulsión de la Compañía.

Los avances culturales dejan también una notable estela institucional. La expulsión de los jesuitas, con todo su negativo impacto sobre la educación, tuvo sin embargo un feliz corolario al crearse el seminario de San Carlos y San Ambrosio en el antiguo colegio habanero de la orden. Dicha institución, fundada por el obispo Santiago José de Hechevarría —primer eclesiástico natural de Cuba en ostentar la mitra insular—, admitiría en su claustro profesores laicos y, lo que es más importante, en sus aulas se enseñarían, además de las disciplinas clásicas, álgebra, cálculo diferencial y física experimental, entre otras materias de

posible aplicación práctica. En momentos en que la Universidad se hallaba aún entrampada en vericuetos escolásticos, el seminario resultaría el principal receptáculo de las ideas y nociones de la Ilustración en la isla. Pareja trascendencia habría de tener la fundación en Santiago de Cuba —1787— de la Real Sociedad Económica de Amigos del País —o Sociedad Patriótica—, institución originada en el País Vasco y que por su capacidad e iniciativa en la promoción de ideas y proyectos constituye una expresión emblemática de la Ilustración española. El hecho de que un grupo de hacendados santiagueros, con el apoyo del gobernador departamental, pudiera fundar una entidad de tal naturaleza es un claro indicio de que los adelantos económicos y culturales no se circunscribían a La Habana. Poco después la capital haría propia la iniciativa y fundaría también su Sociedad Patriótica congregando a lo más granado de la oligarquía local. Calificada como la "hija cubana del iluminismo", esta institución estaba llamada a convertirse en una genuina promotora de progreso y, en tanto expresión primera de lo que podría considerarse una sociedad civil, resultaba a la vez evidencia palmaria de que Cuba comenzaba a abrirse paso hacia la modernidad.

El auge de la sociedad criolla tenía, como cabe suponer, otras manifestaciones en el plano de la creación y el pensamiento. Si el gracejo criollo ya se hace ver en algunos de los ingeniosos versos del Padre Capacho —fray José Rodríguez Ucares— o en las salidas de Lamparón, quizá el más logrado personaje en la comedia de Santiago Pita, es en la prosa donde mejor se expresan los sentimientos y criterios de una sociedad que ya va teniendo conciencia de sí. Tanto en las obras históricas ya mencionadas de Arrate y el obispo Morell —a las que debe sumarse el *Teatro histórico, jurídico y político-militar de la isla Fernandina de Cuba*, de Ignacio de Urrutia—, como en el llamado proyectismo, entre cuyos más destacados exponentes figuran Nicolás Joseph de Ribera y Bernardo de Urrutia, se encuentran seguras valora-

ciones de las riquezas y adelantos del país, así como una certera exposición de sus requerimientos. Los criollos habían adquirido un sentido de identidad, una comprensión de lo específico de sus intereses e incluso cierta capacidad organizativa para promoverlos. Tal maduración intelectual entrañaba una noción cada vez más clara de que sus necesidades no siempre coincidían con las de la metrópoli y de que, por tanto, tendrían que hacer valer sus razones para satisfacerlas. En el lapso de un siglo la élite criolla había cuajado en un bloque coherente y activo, capaz de impulsar su propio proyecto de desarrollo.

4
LA PLANTACIÓN: ECONOMÍA Y SOCIEDAD

A lo largo del siglo XVIII Cuba había experimentado un crecimiento constante, pero su saldo en modo alguno resultaba excepcional. Por más que se hiciese patente el acercamiento de la economía cubana a la pauta exportadora de productos tropicales seguida en la mayor parte de las Antillas, la isla mayor aún marchaba bastante a la zaga de sus hermanas pequeñas. En 1791, en un territorio cuya extensión era apenas la décima parte del cubano, Jamaica producía cuatro veces más azúcar, por no hablar ya de la otra vecina, la colonia francesa de Saint-Domingue, que producía casi 80 000 toneladas del dulce, 30 000 de café y considerables volúmenes de índigo, algodón y otros renglones, en un espacio equivalente a la cuarta parte de Cuba. Claro está, en sus plantaciones se explotaban casi medio millón de esclavos, seis veces más que los existentes en la Antilla mayor. Gracias a sus riquísimas colonias del Caribe, Inglaterra y Francia dominaban el comercio azucarero mundial.

Desconectada de los grandes circuitos comerciales y con costos de producción relativamente altos, las posibilidades de una mayor expansión de la oferta cubana se estimaban limitadas. Sin embargo, los acontecimientos siguieron un curso bien distante de esas previsiones. Al iniciarse el siglo XIX, Cuba había conseguido acrecentar su producción azucarera y superaba las 30 000 toneladas métricas; en 1830, con una zafra cuyo monto superaba las 100 000 toneladas, la isla era sin discusión alguna el primer productor mundial, fuente de la mitad del dulce que se traficaba en el ámbito internacional. Si se tiene en cuen-

ta que por entonces también exportaba más de 20 000 toneladas de café, así como importantes volúmenes de tabaco y otros renglones, se hace evidente que Cuba era escenario de un avance económico de incalculable trascendencia histórica. Tan gigantesco salto productivo, conseguido mediante el empleo masivo de mano de obra esclava y dentro del molde empresarial de la plantación, imprimió un sello distintivo a la evolución socioeconómica del país, dando origen a situaciones y fenómenos cuyas consecuencias todavía hoy se dejan sentir.

FACTORES DE UN AUGE EXCEPCIONAL

Las circunstancias que propiciaron el despegue de la plantación cubana sobrevinieron de manera casi fortuita. Arrastrada por el torbellino de la Revolución francesa, la vecina colonia de Saint-Domingue experimentó en 1791 la violenta sublevación de sus esclavos, inicio de una devastadora sucesión de guerras y conflictos de la cual emergería, al cabo de una década, la república de Haití. Para la naciente economía mundial ello representó la repentina desaparición de la más rica de las colonias europeas, acontecimiento que ocasionó una severa escasez de azúcar, café y otros productos tropicales. Los efectos de la demanda insatisfecha se apreciaron de inmediato: en 1795 la arroba de azúcar se cotizaba en La Habana a 36 reales, un precio tres veces mayor que el vigente al estallar la rebelión haitiana.

Cuba se halló de improviso ante una coyuntura realmente excepcional. Los precios desbocados eran solo una de las dimensiones de aquel fenómeno; no solo se había eclipsado el más formidable de los competidores, sino que con el estallido de la revolución en Saint-Domingue comenzaron a llegar a la isla miles de emigrados, algunos trayendo parte de su capital y sus esclavos, otros con conocimientos inapreciables para el desarrollo de una agricultura de plantación. Afectado por las continuas

guerras y las cambiantes alianzas de la metrópoli española, el movimiento comercial experimentaba marcados altibajos, provocando desajustes en la economía colonial que se vio enfrentada a problemas inéditos, para los cuales no había soluciones a la mano. Las antiguas prácticas se tornaron repentinamente obsoletas, de manera que la sociedad se abocó a profundos cambios en esferas tan disímiles como la trata de esclavos y el comercio exportador, las tecnologías, los programas de enseñanza o las relaciones entre las diversas instancias de gobierno. En más de una ocasión las dificultades crearon situaciones críticas, que exigieron de los gobernantes de la isla audaces decisiones.

En 1790 había sido designado capitán general de Cuba Luis de Las Casas, quien por razones familiares tenía ciertas conexiones con la élite habanera, vínculos que algunos prominentes miembros de ese grupo se apresuraron en afianzar. Poco tiempo habría de transcurrir para que el gobernador se convertiese en dueño de ingenio y propietario de esclavos, y menos aún para que compartiera preocupaciones e intereses con los prohombres de la oligarquía local. Para todos se hacía evidente que la colonia requería instituciones capaces de impulsar la economía y solucionar variados problemas, como los conflictos que el financiamiento de los ingenios suscitaba entre comerciantes y hacendados o el impostergable arreglo de los caminos para dar salida a una producción cada vez más voluminosa y distante. El gobernador encontró un solícito colaborador en el intendente de Hacienda, José Pablo Valiente, así como toda una cohorte de consejeros criollos, excepcionalmente avisados y capaces, dentro de la cual descollaba Francisco de Arango y Parreño, cuyo *Discurso sobre la agricultura de La Habana y medios de fomentarla* (1792) sintetizó en un auténtico programa las aspiraciones y propuestas del influyente grupo de los hacendados. La actividad desplegada por esos "notables" fue intensa y multifacética: en 1791, con el apoyo expreso de Las Casas, fundaban el *Papel Periódico de La Habana*, un semanario que además de noticias publicaba artícu-

los de opinión de autores locales sobre asuntos de interés general. Casi simultáneamente, un nutrido grupo de propietarios fundaba la Sociedad Patriótica en la capital, la cual se dio a la tarea de difundir conocimientos sobre agricultura, comercio e industria, además de promover la educación y la cultura mediante la creación de escuelas y bibliotecas públicas. Sin embargo, la institución más relevante para el impulso de la actividad económica fue el Real Consulado de Agricultura y Comercio, creado en 1795 como una fórmula de transacción entre las aspiraciones de hacendados y comerciantes. Aunque ambos "cuerpos" se hallaban representados en paridad de condiciones, Arango —nombrado síndico perpetuo— se las ingenió para que prevaleciesen los productores, éxito trascendente pues la institución, además de sus funciones consultivas y de fomento, debía actuar como un tribunal de arbitraje. Genuino promotor de los intereses locales, el Consulado impulsó la construcción de muelles, faros, caminos y otras obras públicas, al tiempo que ensanchaba las oportunidades de educación; en patente toma de partido por los hacendados, propugnó la rebaja de las tradicionalmente usurarias tasas de interés, demandó el abaratamiento del precio de los esclavos y reclamó la eliminación de las festividades religiosas que con harta frecuencia paralizaban las labores en los ingenios.

Los requerimientos y gestiones de la élite criolla, ya fuese desde las instituciones o por otros medios, se encaminaban a movilizar factores productivos que en muchos casos se hallaban, si no disponibles, al menos bien determinados. En el capítulo anterior pudo apreciarse que desde mediados del siglo XVIII la economía cubana, sobre todo en el occidente de la isla, había comenzado a seguir ciertas pautas características del sistema de plantaciones; solo se necesitaba entonces levantar trabas y allegar recursos para desencadenar una formidable aceleración de ese proceso. La cuestión de la fuerza de trabajo esclava constituye un excelente ejemplo. En las condiciones de la plantación el volumen de la producción dependía en gran medida de la cantidad

de trabajo aplicado. Cuando la coyuntura puso de manifiesto que el mercado asimilaría cuanto azúcar y café pudiera embarcarse, la demanda de miles de esclavos tornó obsoleto el antiguo procedimiento de los asientos. Por eso la libertad de la trata, declarada con carácter temporal en 1789, fue prorrogada por otros 10 años al caducar ese permiso en 1791, hasta que el infame tráfico quedó finalmente despojado de todo control, con lo cual la introducción de africanos, que ya alcanzaba la increíble cifra de 15 000 individuos al año en 1802, pasados tres lustros llegaría a duplicar esa cantidad. Por obra de las mismas circunstancias el régimen de trabajo de los esclavos registró sensibles cambios. En los ingenios de "nueva planta", con abundantes cañaverales, trapiches mejorados o duplicados y acrecentadas capacidades de cocción y purgado, las condiciones de trabajo del esclavo perdieron su antiguo —y relativo— carácter patriarcal para dar lugar a sesiones casi continuas de 16 o 18 horas, en una sucesión de jornadas apenas interrumpidas por las lluvias ocasionales o alguna rotura.

Un factor decisivo para la dinámica productiva, la tierra, experimentó también profundas modificaciones en su régimen de tenencia. El crecimiento de la agricultura comercial había venido modificando la estructura agraria desde principios del siglo XVIII, tendencia que puede apreciarse con claridad en el número de fincas en explotación, cuya cuantía se incrementa 48% entre 1778 y 1792. El rápido crecimiento de la producción azucarera a partir de ese año, así como la fundación de numerosos cafetales hicieron sentir sus efectos sobre la organización agrícola tradicional, pues no solo se necesitaba tierra para fomentar nuevas explotaciones, sino que también los viejos ingenios ampliaban sus cañaverales o se trasladaban hacia otras zonas para sustituir los terrenos agotados por una agricultura depredadora. La creciente producción mercantil ejercía incuestionable presión sobre las haciendas ganaderas, pero este era quizá el ángulo menos conflictivo de dicho proceso, pues la mayoría de los descendientes de los antiguos "señores de hatos", deseosos de convertirse

en propietarios de ingenios o de recibir rentas de plantadores más audaces, cuando no decidían por sí mismos la demolición —fragmentación— de sus grandes propiedades, facilitaban en lo posible dicha operación. Los principales choques tenían lugar con los vegueros, a quienes la Factoría no siempre conseguía brindar apoyo efectivo, o con la Marina que resguardaba celosamente las áreas boscosas reservadas como materia prima para el Arsenal. La resistencia opuesta por la Marina se vino abajo con la promulgación de dos reales decretos sucesivos, uno en 1812 y otro en 1815, que declaraban la libertad de los montes, abriendo paso a la deforestación que solía acompañar el fomento de ingenios y cafetales. Pero sin duda la mayor concesión de la Corona a sus leales súbditos de la oligarquía habanera fue el reconocimiento, en 1819, de la plena propiedad de la tierra mercedada, con lo cual desaparecieron los últimos obstáculos existentes para la entera movilidad de ese importante recurso. Dos años antes se había decretado la abolición del estanco del tabaco, liberalización que imprimiría un mayor dinamismo a dicho renglón productivo pero que debilitó la protección a los vegueros; en 1827, cuando en la jurisdicción habanera ya molía casi un millar de ingenios, el cultivo del tabaco se había replegado hacia la más occidental región de Pinar del Río.

El otro factor a movilizar eran los capitales. Desde el aprovisionamiento de la Flota hasta las especulaciones de la Real Compañía, los procesos económicos precedentes habían producido una apreciable acumulación de riquezas, particularmente en la región habanera. Sin embargo, los nuevos ingenios, con sus nutridas dotaciones de esclavos y un utillaje más moderno y costoso, exigían cuantiosas inversiones, con frecuencia muy por encima de las posibilidades de los hacendados locales. Aun cuando el capital disponible se concentrase en los renglones de exportación y la inversión pudiera recuperarse con rapidez debido a los altos precios, la notoria escasez de capitales los atrajo desde Nueva España, Cádiz y Sevilla, movilizó las riquezas que algu-

nos emigrados de Saint-Domingue habían logrado poner a salvo e incluso abrió espacio de manera más o menos encubierta a ciertos créditos norteamericanos. La expansión de los negocios en torno al azúcar y el café, así como el consecuente afianzamiento de la estructura exportadora-importadora otorgaron una importancia desmesurada a los comerciantes, quienes proporcionaron el grueso del crédito para el "despegue" de la plantación. Comerciantes refaccionistas de La Habana como Pedro de Erice o Bonifacio González Larrinaga, en tres o cuatro años fueron capaces de dedicar más de dos millones de pesos al financiamiento de las zafras de un buen número de ingenios. Junto a estos préstamos debía incluirse la venta de esclavos a plazos que oscilaban entre seis y 15 meses. Según pudo apreciar Alejandro de Humboldt durante su estancia en Cuba a principios del siglo XIX, los intereses en estas operaciones al igual que en los préstamos hipotecarios se movían entre 12 y 16%, que junto a los pagos pactados en productos subvalorados podían representar para los hacendados pérdidas de hasta 30%. Ante tales circunstancias no han de sorprender las constantes protestas por el carácter usurario de los préstamos, ni que dicha situación diese pie a diversos proyectos encaminados a la creación de "cajas" o bancos destinados a financiar la producción azucarera.

El desenvolvimiento de la economía cubana durante el cuarto de siglo que siguió a la rebelión esclava en Haití, se benefició notablemente de las posibilidades comerciales abiertas por los conflictos europeos en que se vio envuelta España. Entre 1793 y 1795 la metrópoli estuvo en guerra con Francia, con la cual se alió de 1796 a 1800 para mantenerse entonces en lucha contra Inglaterra; de 1804 a 1808 de nuevo combate a Inglaterra, con la cual finalmente se alía hasta la derrota de Napoleón en 1814, pues el emperador había secuestrado a la familia real española y ocupado parte de la Península. Tan constantes hostilidades quebrantaron reiteradamente el tráfico comercial obligando a tomar medidas para impedir la asfixia económica de la colonia;

en unas ocasiones por autorización de Madrid y en otras por decisión de los gobernadores de la isla —a quienes la interrupción de las comunicaciones otorgó inusitada autonomía—, los puertos cubanos fueron abiertos durante periodos más o menos extensos al comercio con los aliados del momento y, sobre todo, a buques de bandera neutral. Estos últimos eran principalmente de Estados Unidos, convertidos de tal suerte en imprescindibles socios mercantiles de Cuba, al extremo de superar en 1798 —aunque por breve tiempo— el volumen del comercio de la isla con su metrópoli. A la vez mercado e intermediario, Estados Unidos adquiría buena parte del azúcar, las mieles y el café exportado por Cuba, a la vez que la abastecía de manufacturas, equipos, esclavos, alimentos y otros bienes de consumo. Cuando tras la derrota napoleónica Fernando VII regresó al trono madrileño, ya resultaba del todo imposible reimplantar las prácticas mercantiles exclusivistas de antaño, ante lo cual el monarca optó por conceder a sus súbditos antillanos la libertad de comercio. Liberal a medias, la nueva política comercial española sustituyó las antiguas restricciones por un régimen de muy elevados aranceles, eje de un voraz sistema tributario que permitiría a la metrópoli sacar buena tajada de la prosperidad de su colonia.

La expansión productiva que se inicia en la última década del siglo XVIII —y que con altas y bajas habrá de prolongarse hasta mediados de la centuria siguiente— fue también una empresa intelectual. Además de movilizar los factores productivos y desuncir el tráfico mercantil, la gestación del novedoso complejo productor exigía estudios y cierta audacia creadora. El proceso no deja de ser paradójico, pues se asocia a la barbarie esclavista que entrañaba la plantación, pero esta no fue óbice para que los adelantos de la ciencia se aplicasen a la obtención de una mayor producción, sin excluir de dichas aplicaciones a los propios esclavos, con los cuales no se escatimaron medios —la vacunación antivariólica, por ejemplo— para obtener de ellos el

más elevado rendimiento. El auge de la economía de plantaciones se corresponde con un paulatino proceso de mecanización en los ingenios, iniciado con la introducción casi coincidente del trapiche triangular de hierro con tres mazas horizontales —1794— y el uso del vapor para mover el molino, innovación esta última probada en el ingenio Seybabo, en las cercanías de La Habana, en 1796. Tras aquel primer ensayo el molino a vapor sufrió diversas adaptaciones y su empleo se difundió en las principales regiones productoras de azúcar, de modo que al mediar el siglo XIX dos terceras partes de los ingenios cubanos movían sus trapiches con máquinas de vapor. A estas novedades seguirían otras, como los tachos al vacío y las centrífugas, sin olvidar el ferrocarril —introducido en 1837— que además de abaratar el costo del transporte facilitaría la expansión de las plantaciones hacia territorios alejados de los puertos.

PLANTACIONES Y ECONOMÍA

Durante la primera mitad del siglo XIX la economía cubana experimentó una expansión sin paralelo, particularmente en el azúcar, renglón del cual la isla aportaría en 1850 la cuarta parte de la producción mundial. De igual manera creció el número de ingenios, desde el millar existente en 1830 a 1368 unos 30 años después, aumento que no se correspondía exactamente con el de la producción del dulce, pues esta se incrementó también de manera muy notable a escala de cada fabrica, hasta alcanzar un promedio algo superior a las 300 toneladas en 1860. Durante cierto tiempo la producción cafetalera participó de la vertiginosa tendencia expansiva, pero después de haber alcanzado un récord de 25 000 toneladas en 1833, sufrió una terrible caída provocada por la elevación de aranceles en Estados Unidos —su principal mercado—, perjudicial medida agravada por un descenso de precios y los devastadores efectos de un par de

huracanes. El cultivo del tabaco, luego de enfrentar la embestida azucarera, se había reubicado y comenzaba a prosperar, de manera que a mediados de la década de 1820, ya suprimida la Factoría, su producción se acercaba a las 4 000 toneladas superando los mejores índices históricos. Otro renglón que se reanimó fue la minería de cobre, pues una firma inglesa adquirió en 1830 la concesión de las minas cercanas a Santiago de Cuba y las puso en explotación sobre bases mucho más productivas.

El crecimiento de la agricultura comercial contrasta con la situación de la ganadería que en estos años manifiesta un franco retroceso, particularmente respecto al ganado vacuno cuyo número de cabezas disminuye 40% entre 1827 y 1846. Las necesidades de animales de tiro para el transporte continuaron siendo satisfechas a partir de la cabaña insular, pero el abastecimiento de carne a la población —que además crecía con rapidez— dependió cada vez más de la importación, sobre todo de carnes saladas, producto del cual se adquirieron en Uruguay y Argentina más de 15 000 toneladas solamente en el cuatrienio 1856-1859. La ganadería sin duda se resentía por los terrenos de pastos arrebatados por la caña, los elevados costos que imponía su rutinaria explotación y la ausencia de todo estímulo para el mejoramiento del sector. Peor suerte aún corrieron los recursos forestales una vez que fue decretada la completa libertad para talar los bosques. El ingenio de azúcar era un temible devorador de madera: primero debido al desmonte de los terrenos para fomentar cañaverales, lo cual en general se hacía siguiendo el bárbaro procedimiento de roza, tumba y quema, y después por la demanda de los hornos, alimentados casi exclusivamente con la leña de los contornos hasta que se hizo posible aprovechar el bagazo de caña. De acuerdo con la información censal, sólo en los tres lustros que median entre 1846 y 1862 la isla perdió unos dos millones de hectáreas de superficie boscosa.

No obstante sus alternativas, el auge de la economía cubana era consistente y tuvo un efecto bien visible en todo el territorio.

Ya hemos comentado cómo el tabaco, expulsado por el azúcar del *hinterland* habanero, se replegó hacia la más occidental zona de Pinar del Río donde encontró condiciones excepcionales en materia de tierras y clima. Sin embargo, todavía en fase de fomento, no era esa región de Vuelta Abajo la que ostentaba la primacía tabacalera a mediados del siglo, sino el Departamento Oriental donde hacia 1850 se producían casi dos tercios de todo el tabaco cubano, aunque se trataba de una hoja de menor calidad. Durante su dinámica fase expansiva, el cultivo cafetalero se difundió con rapidez, al punto de que en poco más de tres décadas —1792-1827— en la isla se fundaron 2 000 cafetales, que en conjunto explotaban unas 75 000 hectáreas de cafetos. El aromático grano se cosechaba en distintas regiones: al oeste de La Habana, en las estribaciones de la sierra del Rosario y también en tierras llanas; en el macizo central, cerca de las villas de Sancti Spíritus y Trinidad, y, sobre todo, en las serranías orientales, en torno a Santiago y Guantánamo, asiento por excelencia de los emigrados de Sainte-Domingue que fueron los genuinos artífices de la caficultura cubana. La posterior caída del café fue, por las circunstancias apuntadas, tan rápida como su ascenso; entre 1829 y 1849 el valor de las exportaciones se redujo a la mitad y para 1862 solo subsistía poco más de un tercio de los cafetales del país. Por obra de dicha tendencia desaparecieron casi todas las fincas cafetaleras en las tierras llanas y onduladas del occidente —donde enfrentaban la competencia de la caña de azúcar—, aunque el cultivo se mantuvo firme en las tierras altas orientales representando un factor decisivo para la vida de esa región.

Claro está que nada de lo examinado es comparable con el despliegue de la producción azucarera. Si el número de ingenios registró un incremento extraordinario y en cada uno de ellos aumentó también —en promedio— el volumen de producción, es fácil deducir que la tierra demandada por los cañaverales solo pudo conseguirse mediante una formidable expansión territorial. En un inicio fue el ubérrimo valle de Güines al sur de La

Habana, de donde la caña expulsó a los vegueros; pero ese era apenas el primer paso en la marcha hacia el este de los cañaverales, que se esparcieron por las fértiles tierras rojas matanceras hasta apoderarse de la anchurosa llanura de Colón, convertida en el auténtico corazón de la economía de plantación cubana a mediados del XIX. Aunque ninguna región pudiese rivalizar con la expansión habanera, los restantes escenarios del azúcar en modo alguno carecían de importancia. En Trinidad se registra un crecimiento autónomo de las plantaciones que aprovecha hasta el último resquicio del valle contiguo a la ciudad, lo cual permitiría a esa zona aportar el 10% del azúcar cubano en 1825. Cuando las tierras del valle quedaron cubiertas de caña, los hacendados trinitarios pusieron sus ojos en la cercana villa de Cienfuegos —fundada en 1819 junto a la bahía de Jagua— y combinaron sus capitales con inversionistas habaneros y algunos comerciantes locales para hacer de la llanura al norte de esa bahía una de las mayores productoras de dulce del país. Algo similar ocurrió con la villa de Remedios, cuya progresión no iguala a la de Trinidad, pero que también irradia hacia zonas cercanas. Santiago de Cuba era el otro foco azucarero de importancia, aunque los hacendados de esa ciudad, que respondían además a los atractivos del café, tuvieron que establecer sus ingenios al otro lado de las montañas o en el cercano valle de Guantánamo. Las plantaciones se propagaron también por otras zonas, pero se trataba generalmente de pequeños ingenios, a veces simples trapiches como los instalados en la jurisdicción Bayamo o un poco más al norte, en torno al poblado de Holguín, sin olvidar a Puerto Príncipe —que como Sancti Spíritus continuaba siendo una zona esencialmente ganadera—, donde se fomentan varios ingenios en partidos cercanos a la ciudad.

La propagación de las plantaciones por tan extensos territorios, a menudo alejados de puertos y centros comerciales, hubiese sido imposible sin el ferrocarril. El pésimo estado de las vías terrestres en la isla era permanente fuente de agobio para gober-

nantes y hacendados, por lo cual no ha de sorprender que un grupo de influyentes propietarios habaneros consiguiese convencer a la Junta de Fomento, organismo sucesor del Real Consulado, para construir un ferrocarril entre La Habana y Güines tan pronto el novedoso medio de transporte demostró su utilidad en Inglaterra. A la inauguración de la primera línea en 1837 sucederían otras, casi todas en las ricas regiones azucareras del occidente insular. En ellas se repetía un esquema casi invariable: enlazar el territorio de plantaciones con el puerto más cercano, fuese Matanzas, Cárdenas, Cienfuegos, Santiago de Cuba o Caibarién. De tal suerte, a pesar de que los kilómetros de vía férrea se multiplicaban, la construcción de una red ferroviaria que enlazase las principales ciudades del país fue un proceso dilatado, consecuencia punto menos que fortuita de la conexión entre líneas de distintas empresas deseosas de conquistar la carga de algún aislado emporio del dulce. Patrón revelador este, pues indica que el interés prevaleciente era asegurar los nexos con el mercado exterior, más que entre las distintas regiones del país. A medida que la economía se centraba en el azúcar, el impulso por fortalecer los vínculos interregionales —palpable a mediados del siglo XVIII— se fue debilitando ante un flujo mercantil que privilegiaba las exportaciones y, como complemento, abría los mercados locales a mercancías importadas que con frecuencia gozaban de amplia ventaja competitiva.

Las modificaciones que se registran en el comercio exterior cubano no ceden en importancia a las que pueden apreciarse en la esfera productiva. A partir de 1791 los intercambios crecen con rapidez a pesar de los trastornos ocasionados por las guerras, y tras decretarse la libertad comercial en 1818 el ascenso del movimiento mercantil se regulariza definitivamente. En materia de exportaciones el azúcar no tiene rival: el volumen de sus embarques aumenta a razón de unas 15 000 toneladas por década, ritmo que se acelera todavía más a partir de 1830. Durante cierto tiempo las ventas de café la acompañan y hasta llegan por mo-

mentos a superarla, pero como se ha visto ese renglón decae, de manera que a mediados de la centuria la primacía del dulce era ya absoluta, con una participación que representaba casi 70% de los valores exportados. La distribución geográfica del intercambio se observa más equilibrada, pues las importaciones se repartían casi a partes iguales entre Estados Unidos, España y Europa —principalmente Inglaterra—, aunque en materia de exportaciones la metrópoli apenas absorbía 15%, Estados Unidos cerca de 30% y el resto correspondía a Europa y otras regiones. Tal distribución suponía un sensible déficit en el balance comercial con España, problema perenne que constituía, junto al drenaje fiscal, una de las principales expresiones de la explotación colonial.

Entre los socios comerciales, los norteamericanos tenían un incuestionable dinamismo, que sería más visible aún si las estadísticas hubiesen incluido la importación de esclavos, "rubro" del cual los armadores norteños eran los mayores suministradores. Por su cercanía, su creciente población y sus patrones de consumo, Estados Unidos era un ventajoso cliente y además un excelente proveedor, rol que se veía obstaculizado por la política arancelaria española, que mantenía a Cuba como un mercado reservado para varios de los productos —y la marina mercante— metropolitanos.

Con un renglón tan rentable como el azúcar y necesitada de afianzarse en los mercados de productos tropicales, la economía cubana fue tendiendo cada vez más a satisfacer su demanda, particularmente de alimentos y textiles, por vía de la importación. En consecuencia, durante los años de bonanza económica aumentaban las compras y el dinero acumulado gracias a las exportaciones tendía a fluir al exterior, mientras la posición competitiva de los productores orientados hacia el mercado local se deterioraba ante la avalancha de mercaderías importadas. Entre 1827 y 1846 solo dos productos de consumo interno, el arroz y el casabe, aumentan decididamente su producción, y aun estos,

comparados con el acelerado avance de los renglones exportables, se tornan irrelevantes. En el sector de las manufacturas y las artesanías el comportamiento no era mejor; solamente el tabaco crea una red de talleres para el torcido, pero la elaboración de quesos, dulces en conserva, vestuario o muebles no pasaba del mínimo nivel artesanal. Los comerciantes, volcados hacia la importación, carecían de interés por invertir en esos renglones que tampoco gozaban del favor de las autoridades coloniales. Con el crédito y los demás recursos —tierra, mano de obra, etc.— atraídos por los productos exportables de mayor rentabilidad, y sobre todo por el azúcar, la economía cubana se inclinaba inexorablemente a la especialización. Esa tendencia, sin embargo, no se desarrolló como un proceso continuo y homogéneo, pues ciertos rubros —los materiales de construcción, el papel y la imprenta, algunos trabajos de fundición necesarios a los ingenios y la jabonería, entre otros— se vieron beneficiados por el efecto multiplicador de la producción exportable. Incluso algún cultivo, como el banano, consiguió prosperar en terrenos que no eran aptos para la caña. Pero la lógica implacable del mercado colocaría a la economía insular en una posición de creciente dependencia externa.

La plantación esclavista era en sí misma una creación del mercado mundial, su producción tenía ese exclusivo destino y para realizarla importaba casi todo su equipamiento, incluyendo la fuerza de trabajo. De este último recurso el sistema hacía un uso devastador, pues el esclavo era sometido a una intensa explotación para recuperar en el más breve plazo la inversión que su compra había representado, bárbaro sistema que acortaba la esperanza de vida del infeliz siervo y obligaba a su rápida reposición. Solo que esta no podía realizarse por vía natural, ya que hasta bien entrado el siglo XIX fue absoluto el predominio masculino, tanto en el tráfico de esclavos como en las plantaciones, donde la desproporcionada composición por sexos imposibilitaba la reproducción de las dotaciones. Como ese peculiar régi-

men demográfico no permitía autoabastecerse de fuerza de trabajo, para mantener la mano de obra requerida se descansaba esencialmente en la reposición por vía de la trata. Esa dependencia entrañaba un peligro mortal, toda vez que el desarrollo del capitalismo en el mundo exigía la generalización del trabajo asalariado y ello habría de conducir inexorablemente al fin de la esclavitud. Gran Bretaña, por mucho tiempo principal propulsora del tráfico negrero y de la esclavitud en plantaciones —pero también escenario decisivo de la Revolución industrial—, en 1807 proscribió la trata y menos de tres décadas después declaraba abolida la esclavitud en sus colonias, metamorfoseándose en adalid universal del abolicionismo. Bajo presión británica, España se vio obligada a firmar un tratado en 1820 para la supresión de la trata de esclavos en sus colonias, compromiso que no cumpliría pero que encareció el precio de los africanos al tornar su tráfico clandestino.

Desde el punto de vista del trabajo la plantación comportaba un problema adicional, pues la esclavitud terminaba por envilecerlo. En la sociedad cubana de la primera mitad del siglo XIX el trabajo físico fue cada vez más un "asunto de negros", de manera que el empleo de esclavos se generalizó a las más diversas tareas, las cuales eran rechazadas por la población blanca. Si por el lado social esta tendencia originaba fenómenos tan nocivos como la vagancia, desde el punto de vista económico imponía una demanda desmesurada de fuerza de trabajo esclava, buena parte de la cual no se aplicaba en labores productivas. De hecho, varios de los censos realizados en la época registran un mayor número de esclavos en áreas urbanas que en las rurales, y aunque parte de esos trabajadores eran empleados como estibadores en los puertos, en los talleres tabacaleros, el transporte o las labores de la construcción, el grueso se dedicaba al servicio doméstico. La trata se beneficiaba de esa suerte de demanda superflua, la cual engrosaba los caudales de los grandes comerciantes "negreros", quienes más adelante presta-

ban su dinero bajo condiciones usurarias en desmedro del sector productivo de la economía.

DINÁMICA Y COMPOSICIÓN DE LA POBLACIÓN

La asombrosa progresión productiva que hemos examinado, no hubiera podido desarrollarse sin un igualmente acelerado aumento de la población. En las siete décadas que median entre el censo de 1792 y el de 1862, los pobladores de la isla se incrementan en más de un millón, totalizando Cuba 1 359 238 habitantes en el último de los años mencionados. Tal crecimiento demográfico, que en ciertas etapas se expresa en tasas cercanas a 3% anual, se hizo posible gracias a un considerable aporte migratorio y, en primer término, a esa inmigración forzosa que constituyó la trata de esclavos. El infame comercio, desarrollado libremente entre 1789 y 1820, devino clandestino a partir de ese año en virtud del ya mencionado tratado hispano-británico, pero ello modificó muy poco su significación demográfica. Si bien la firma de ese acuerdo provocó una inmediata contracción en la trata, según todos los indicios en 1825 el tráfico ya había retornado a los niveles acostumbrados —entre 20 000 y 30 000 esclavos anuales— y se mantuvo en torno a esa cifra hasta 1842, cuando una fiscalización más efectiva por parte de Inglaterra determinó el franco descenso, a pesar de lo cual ese comercio clandestino se sostendría en medio de altibajos hasta finales de la década de 1860. Aunque el monto total de la inmigración forzada es muy difícil de establecer, las distintas estimaciones apuntan a cifras superiores a los 600 000 africanos introducidos entre 1792 y 1862.

La inmigración blanca, también numerosa, se verifica con cierto paralelismo e incluso con mayor cuantía que la africana, sobre todo a partir de 1845. En el arribo de inmigrantes blancos pueden establecerse ciertas oleadas, como la ocasionada por la

revolución haitiana, las que sucedieron a las ventas de Luisiana —1803— y la Florida —1819— a Estados Unidos, ante las cuales un buen número de españoles y franceses residentes en esas colonias optaron por trasladarse a Cuba, y finalmente el flujo de militares, funcionarios y colonos españoles, así como de criollos realistas, que a raíz de las guerras de independencia hispanoamericanas abandonaron el continente y en muchos casos se radicaron en la isla. Junto a esos momentos de entradas masivas, la población blanca se nutría de una corriente continua de inmigrantes europeos procedentes en su mayoría de la metrópoli, movimiento al cual contribuyeron en cierta medida diversas campañas de colonización. El rápido incremento de la población negra originó serias preocupaciones, tanto entre las autoridades coloniales como en la oligarquía local que contemplaban con aprensión el creciente desbalance de la población, que se hizo patente en 1841 cuando por primera vez el censo arrojó un número mayor de esclavos que de pobladores blancos en la isla. Los peligros que a la luz de la experiencia haitiana podía entrañar esa situación, impulsaron al Real Consulado, a la Sociedad Económica y a otras instituciones a formular proyectos de colonización; para materializarlos funcionó durante años una Comisión —también Junta— de Población Blanca sostenida con un impuesto cobrado sobre cada africano introducido en la isla. Entrelazados a veces con los intereses estratégicos de la Corona madrileña, esos proyectos alentaron la fundación de ciudades como Cienfuegos y el poblamiento de zonas casi deshabitadas, como la isla de Pinos, mientras que con propósitos más específicos se atrajeron contingentes de inmigrantes canarios o gallegos para construcciones ferroviarias o el fomento de zonas tabacaleras. Sin embargo, el grueso de la inmigración blanca se produjo de manera espontánea, como fue el caso de los inmigrantes catalanes que nutrieron buena parte del pequeño comercio. A todo esto habrían de añadirse los braceros —"culíes"— chinos, contratados en número creciente a partir de 1848 para suplir la

merma en la trata negrera, los cuales ya totalizaban cerca de 100 000 individuos, casi todos hombres, a finales de la década de 1860. Un número bastante menor —pero significativo— de indígenas mayas fue traído en parecidas condiciones semiserviles durante la Guerra de Castas en la vecina península de Yucatán; los integrantes de ambos contingentes migratorios serían registrados en los censos de la época como blancos. Como resultado de esa afluencia —y de la sobremortalidad ocasionada por la esclavitud—, en 1861, con casi 800 000 individuos, los blancos ostentaban nuevamente la primacía en la población total de la isla.

El crecimiento demográfico propició una ocupación más efectiva del espacio insular, así como el surgimiento de un buen número de poblados y ciudades. Con la expulsión de los vegueros del entorno capitalino se favoreció la región más occidental de Nueva Filipinas (Pinar del Río), no solo en la villa original fundada en 1773, sino también en otros poblados de vegueros como Consolación del Sur o San Luis. En el vasto territorio occidental de la plantación surgen Güines, Quivicán, Madruga y otros pueblos en la jurisdicción habanera, así como Bemba (Jovellanos), Bolondrón y Macurijes en la llanura de Matanzas, en la cual florecen además ciudades como Colón y el puerto de Cárdenas, protagonista este último del más explosivo crecimiento demográfico de la época. También en territorio de plantación, aunque más al este, se fundan Sagua la Grande y poblados menores como Cruces o Camajuaní, hijos de la expansión ferroviaria. La plantación tenía además sus vástagos en el oriente, como lo ilustra el caso de Guantánamo y las más pequeñas poblaciones de Enramadas (San Luis) y Palma Soriano; a este cuadro deben sumarse varias ciudades portuarias —Caibarién, Nuevitas, Gibara y Manzanillo, por ejemplo— que debieron su origen el acrecentado movimiento mercantil. Esta creciente red urbana tenía, no obstante, sus peculiaridades. En las zonas de plantación, donde buena parte de la población —por su condición

esclava— carecía de movilidad, los poblados no se constituyeron como centros de la vida regional, sino más bien como escalas en el movimiento hacia los puertos y las grandes ciudades, especialmente a la capital, circunstancia a la cual contribuía la centralización del gobierno colonial que limitaba las posibilidades de esos asentamientos urbanos como plazas de comercio y centros administrativos.

El movimiento mercantil, así como la demanda de bienes y servicios por parte de una población creciente definieron la fisonomía económica de los espacios insulares y perfilaron regiones cuya identidad venía asomando desde siglos anteriores. Era ese un proceso de intensidad diversa según los espacios, dependiente de las actividades económicas, la riqueza acumulada y la densidad del poblamiento. A mediados del siglo XIX podían apreciarse cuatro conjuntos territoriales con características bastante claras. Estos eran: el occidente, que teniendo como centro La Habana se extendía desde las zonas tabacaleras de Pinar del Río hasta el borde oriental de la gran plantación en las jurisdicciones de Sagua y Cienfuegos; la zona central (hasta el actual Ciego de Ávila), en la cual los ingenios coexistían con las vegas y la ganadería; la vasta llanura ganadera de Camagüey, señoreada por Puerto Príncipe como grande y único núcleo urbano, ahora enlazado por ferrocarril con su puerto de Nuevitas, y, finalmente, el oriente, también diverso, donde zonas ganaderas como las de Bayamo y Tunas colindaban con áreas de plantación —ingenios y cafetales— en Santiago y Guantánamo, así como con las "sitierías" de Holguín. Ninguno de estos territorios, por otra parte, era homogéneo por sus rasgos económicos y sociales, de manera que en su interior podían distinguirse algunas zonas o subregiones con características propias.

Las diferencias más notables, sin embargo, eran las que se apreciaban entre la más rica mitad occidental, donde se hacía evidente el pujante predominio de la plantación —en la cual podían incluirse ciertas zonas centrales como Remedios, Villa-

clara y Trinidad—, y la mitad oriental de la isla, donde las plantaciones desempeñaban un papel secundario, enclavadas como estaban dentro de un territorio más pobre y con amplias zonas todavía vírgenes. Los ingenios de esa parte del país eran por lo general pequeños y su régimen laboral mantenía vivas formas patriarcales características del siglo anterior, operaban con una tecnología atrasada —menos de la mitad disponía de máquinas de vapor— y su acceso al crédito y a los circuitos comerciales era más limitado. En lo social las jurisdicciones orientales se distinguían por la mayor presencia campesina y una proporción de esclavos relativamente baja, así como una nutrida población "libre de color", circunstancia que ponía de manifiesto su menor dependencia de la esclavitud.

Las condiciones en que se produjo el crecimiento de la población cubana determinaron significativos cambios en su composición. El auge de la trata negrera hizo que el número de esclavos se quintuplicase entre 1792 y 1841 y, lo que es más importante, que estos llegasen a representar algo más de 40% de la población de la isla, aunque dicha proporción posteriormente declinase hasta 28% en 1862. Como el aumento en el número de negros y mulatos libres mantuvo a ese sector en su habitual porcentaje —entre 15 y 20%— dentro de la población insular, al sumar su monto al de los esclavos la proporción de "gente de color" fue casi siempre superior a la blanca durante la primera mitad del siglo XIX.

El peso del factor migratorio —y especialmente de la trata— en la dinámica demográfica provocó una fuerte distorsión en la distribución por sexos, que desde una relación bastante equilibrada de 53 hombres por 47 mujeres en cada 100 habitantes en 1792, llegó hasta casi 60% de hombres en 1827. En esos años la proporción entre los esclavos era casi de dos hombres por cada mujer, pero en algunos ingenios occidentales podía llegar a ser de cuatro a una. Con la persecución más efectiva de la trata a partir de 1840, la relación de sexos entre los esclavos tendió a

normalizarse, entre otras razones porque los amos cobraron conciencia de las ventajas que podría reportar una mayor presencia femenina para la reproducción natural de sus dotaciones, con lo cual se incrementó el número de mujeres transportadas por los negreros. Coincidentemente, entre los blancos la creciente entrada de asiáticos contratados —casi todos hombres— acentuó la desproporción, llegándose a contar 59 hombres por cada 100 habitantes en 1867. En contraste, el sector "libre de color", que apenas estaba afectado por el fenómeno migratorio, se presentaba como el más equilibrado en materia de sexos, pues las mujeres constituían 51% de la población, lo cual repercutía en su más alta fertilidad, así como en la igualmente elevada proporción de individuos menores de 15 años dentro de este grupo, que en 1862 era de 40%, frente al 37% alcanzado por los blancos y el 29% registrado entre los esclavos.

La composición de la población mostraba también interesantes particularidades según las regiones. Ante todo se hacía evidente la desigual distribución espacial, pues en 1846 casi 60% de los pobladores de la isla habitaban en el occidente, mientras poco más de 25% lo hacía en la extensa mitad oriental, de modo que el poblamiento de la primera resultaba cuatro veces más denso —16.6 habitantes por km^2— que en la segunda. A pesar de su menor cantidad de esclavos, la población oriental acusaba una leve mayoría de negros —52%—, situación que se explica por un elevado número de personas de color libres. La menor incidencia de la esclavitud y de la inmigración en general, hacía más equilibrada la relación cuantitativa entre sexos en aquella parte de la isla, incluso dentro de la masa esclava, señal de que la demografía de la plantación no se había impuesto allí. Por la misma causa, mientras la población de color se distribuía casi en partes iguales entre las áreas urbanas y rurales del oriente, al mediar el siglo XIX en el occidente las dos terceras partes de los negros y mulatos vivían en zonas rurales.

ESTRUCTURAS Y CONFLICTOS SOCIALES

La expansión de la plantación violentó y en buena medida deformó el proceso de integración de la sociedad cubana. En primer término se hizo más pronunciada la división de carácter estamental entre los tres grandes grupos —blancos, negros libres y esclavos—, los cuales no solo se distinguían por su condición jurídica, sino también por sus rasgos raciales, ya que la esclavitud se sustentaba tanto en la coerción y la violencia como en presupuestos ideológicos que permitían a los blancos reivindicar una "natural" superioridad respecto a los negros. La prosperidad, por otra parte, vino a acentuar las diferencias dentro de algunas de esas agrupaciones, definiendo con claridad para los blancos toda una escala jerárquica que iba de la opulencia a la pobreza, distancias económicas menos visibles pero en modo alguno inexistentes entre los libres de color. En ese cuadro de por sí abigarrado, la intensa inmigración dejaba también profundas huellas, sobre todo entre los blancos, divididos en criollos y peninsulares, aunque también dentro de la masa esclava, pues resultaba bien distinto el trato y el precio recibido por el "bozal" —africano recién llegado— respecto a las condiciones del esclavo criollo —nacido en la isla— o todavía más del "rellollo", como se denominaba a los hijos de siervos criollos ya completamente aculturados.

Los esclavos constituían el fundamento de aquella pirámide social. La mayoría de estos trabajaba en las plantaciones durante jornadas agotadoras y en condiciones de existencia a cuya crueldad solo ponía coto el interés económico del amo por preservar sus activos. En los ingenios, que albergaban algo más de la mitad de los esclavos rurales, las condiciones solían ser más duras que en los cafetales o en las vegas y sitios, especialmente durante la zafra. El castigo físico era frecuente para imponer la disciplina de trabajo y, con la masificación de la esclavitud, en los grandes ingenios azucareros se optó por alojar a los esclavos en barraco-

nes, construcciones de características carcelarias donde la atmósfera de opresión era mucho más sensible que en las chozas o bohíos hasta entonces utilizados como viviendas. Las condiciones de vida en el barracón resultaban poco favorables a la constitución de familias en las grandes plantaciones, circunstancia que solo comenzó a ceder a mediados de siglo, cuando la más efectiva persecución de la trata hizo aconsejable propiciar la reproducción de los esclavos. Aún entonces la familia nuclear continuó siendo una institución frágil, permanentemente amenazada por la decisión del amo de vender a alguno de sus integrantes ante cualquier giro adverso de su economía. A todo ello debía añadirse la violencia cultural, orientada a crear una conducta de sumisión, que imponía alimentación, vestimenta, morada y hasta creencias, sin dejar apenas margen a las manifestaciones de individualidad.

Algo mejor era la situación de los esclavos urbanos, que cuando la "odiosa institución" alcanza su apogeo (1841), representaban el 45% de todos los individuos reducidos a la servidumbre. Con labores menos apremiantes, una proporción más equilibrada entre sexos y la posibilidad de otros contactos sociales, los esclavos en pueblos y ciudades no estaban sujetos a la barbarie de la plantación, a donde solían ser enviados como castigo. La mayor parte de esos trabajadores se dedicaba al servicio doméstico —algunas familias disponían de hasta 30 individuos para esas faenas—, pero otros muchos desempeñaban tareas artesanales o se empleaban en servicios públicos, a menudo colocados "a jornal" o mediante otros arreglos tradicionales. Esto dejaba abierta la posibilidad de que ahorrasen algún dinero y, valiéndose del andamiaje legal que regulaba la esclavitud colonial —cuyos intersticios no tardaban en conocer—, rescatarse mediante coartación y hasta comprar la completa libertad.

Para los esclavos existían, por supuesto, otras vías de escape, comprendidas entre las múltiples formas de resistencia a la opresiva situación a que se hallaban sometidos. Huir era el recurso

más frecuente del esclavo rural que convertido en cimarrón se escondía en zonas intrincadas y, si lograba burlar la persecución de los "rancheadores", podía refugiarse en un palenque donde convivía —y se defendía— junto a sus congéneres también fugados. Aunque continuamente hostigados, algunos de esos palenques consiguieron sobrevivir por décadas y hasta intercambiar con regularidad bienes o favores con campesinos y mercaderes. La opresión originaba además reacciones colectivas, las temidas rebeliones o sublevaciones que de cuando en cuando conmovían las zonas de plantación. Lo más común es que estas afectasen algún ingenio o cafetal, cuyos esclavos saqueaban y destruían la propiedad, mataban empleados blancos o hasta al propio amo y finalmente terminaban siendo reprimidos y ejecutados. En algunos momentos esas acciones llegaron a coordinarse en movimientos que afectaban una o varias regiones, como fue el caso de la sublevación que en Matanzas ocasionó la destrucción de una veintena de plantaciones y la muerte de decenas de esclavos y varios blancos en 1825, o la potencialmente más peligrosa conspiración organizada por el negro libre José Antonio Aponte, que desde La Habana extendió sus tentáculos hasta Puerto Príncipe y el Departamento Oriental, y que tempranamente descubierta en 1812 terminó con la ejecución de sus dirigentes. Junto a estas manifestaciones violentas, los esclavos apelaban a formas de resistencia mucho más sutiles, como la rotura de instrumentos, el incendio de cañaverales, la simulación de enfermedades o incluso la automutilación, recursos que minaban desde dentro la institución de la esclavitud, cada vez más amenazada desde fuera por el abolicionismo.

Nutrida por esclavos coartados, pero sobre todo por una alta fecundidad, la población libre de color duplicó sus efectivos durante la primera mitad del siglo XIX, llegando a totalizar más de 230 000 individuos en 1862. Muchos de ellos lograban adquirir habilidades y cierta educación, de manera que la mayor parte de los oficios y empleos calificados eran desempeñados

por personas de esa condición, incluyendo las mujeres, que se empleaban como lavanderas, costureras o en el pequeño comercio. Sujetos a obligaciones militares, algunos negros y mulatos libres llegaron a ostentar grados en la milicia, mientras otros se destacaron como poetas, músicos y artistas. Los había propietarios de talleres e inmuebles urbanos e incluso algunos poseían esclavos. La distribución ocupacional de este sector mostraba interesantes diferencias regionales, pues mientras en la jurisdicción habanera fueron censados en 1862 más de 20 000 trabajadores urbanos libres de color, apenas unos 2 000 de estos se desempeñaban en labores agrícolas, tendencia que se invertía en Santiago de Cuba donde unos 23 000 campesinos negros y mulatos casi duplicaban el total de los empleados en la ciudad. Desde los orígenes de la colonia, la gente de color libre había dispuesto de sus sociedades, que bajo la forma de "cabildos de nación" —integrados según sus procedencias étnicas— o como cofradías religiosas, creaban un marco para la ayuda mutua y permitieron que se preservasen manifestaciones culturales de origen africano.

Los negros y mulatos libres exitosos en lo económico y con claras pretensiones de promoción social, despertaban la envidia y la suspicacia de sus vecinos blancos que defendían celosamente las barreras legales —prohibición de acceso a la universidad o a las filas del clero y la administración pública— que bloqueaban el ascenso de los libres de color. El espectro de la revolución haitiana y las aprensiones que suscitaba el crecimiento de la esclavitud, determinaron que ese sector de la población comenzase a ser considerado como una fuente potencial de desorden político. La evidente repulsa a la esclavitud, así como las frecuentes expresiones de solidaridad con los esclavos urbanos por parte de los negros libres despertaban una y otra vez la sospecha de que estos pudiesen estar instigando las rebeliones escenificadas por sus hermanos reducidos a la servidumbre. El "miedo al negro" conduciría a la virtual disolución de los batallones de "par-

dos y morenos", y sería también utilizado para minar la presencia económica de aquellos que habían llegado a constituirse en una suerte de clase media de color. Las presiones de Inglaterra en pro de una efectiva proscripción de la trata, así como las relaciones establecidas con ciertas personalidades negras en La Habana y Matanzas por David Turnbull, un díscolo cónsul británico y ferviente abolicionista, tendieron los hilos para que temores y sospechas desembocasen en la más violenta represión. Dos grandes rebeliones consecutivas de los esclavos de plantaciones matanceras en 1843 dieron pie al descubrimiento por las autoridades coloniales de una pretendida conspiración, en la cual aparecían involucrados, además de esclavos, numerosos negros y mulatos libres en Matanzas y en la capital e incluso algunos intelectuales blancos de inclinaciones abolicionistas. La represión de la que sería conocida como "la conspiración de la Escalera" —por uno de los medios empleados para la tortura de los prisioneros— produjo unos 4 000 detenidos y cerca de un millar de muertos, entre estos algunas figuras prominentes entre la gente de color libre, como el poeta mulato Gabriel de la Concepción Valdés (Plácido), ejecutado tras un amañado proceso judicial. Nunca ha podido establecerse cuánto hubo de cierto en esta conspiración, pero resulta evidente que fue utilizada no solo para doblegar a los esclavos levantiscos, sino sobre todo para descabezar al sector de los negros y mulatos libres, haciéndole sentir la imposibilidad de un genuino adelanto dentro de una sociedad donde la esclavitud era la institución dominante.

La servidumbre del negro permeaba igualmente a la población blanca. En las zonas rurales los campesinos blancos en modo alguno eran ajenos a las relaciones esclavistas, ya fuera porque empleasen algunos esclavos en sus vegas y sitios o porque ellos mismos participaban como carreteros, mayorales o trabajadores eventuales en alguna plantación. En el seno del campesinado eran perceptibles las diferencias derivadas de las formas de posesión de la tierra —propietarios, censatarios, aparceros, etc.—,

así como por la naturaleza de sus producciones o por sus nexos con la plantación. En las ciudades la base de la sociedad blanca estaba constituida por trabajadores, sobre todo a partir de 1830 cuando las manufacturas —especialmente la tabacalera— iniciaron una expansión que las llevaría a emplear más de 13 000 operarios en 1862. En ese sector el influjo de la esclavitud se hacía perceptible de manera indirecta, en el régimen laboral extremadamente coercitivo aplicado a los asalariados, que no obstante ser jurídicamente libres se veían sometidos a largos periodos de aprendizaje, podían ser objeto de castigo físico por parte de los maestros e incluso en algunos empleos estaban obligados a portar un documento, impuesto con el pretexto de combatir la extendida lacra de la vagancia. Todavía más evidente era el peso de la esclavitud en las condiciones de trabajo de los inmigrantes bajo contrata, especialmente de los culíes chinos, muchos de los cuales se empleaban en las propias plantaciones en condiciones semiserviles, así como en algunos contingentes de braceros gallegos y canarios sometidos a repugnantes fórmulas de coerción.

En las ciudades, sobre todo en las mayores, fue acrecentándose un sector medio integrado por la oficialidad y la burocracia coloniales, pequeños y medianos comerciantes, profesionales —médicos, farmacéuticos, abogados, etc.—, maestros de escuela, músicos, barberos, veterinarios y otra gente de oficios; empleados de almacenes y firmas comerciales, así como impresores, herreros, plateros y otros artesanos. El factor estamental y racial, la condición colonial, la calificación, determinaban múltiples diferencias internas dentro de ese heterogéneo conglomerado social, creando capas con intereses a menudo contradictorios, como resultado de privilegios que podían favorecer a los españoles frente a los criollos y a ambos grupos respecto a negros y mulatos.

La heterogeneidad era también un atributo distintivo de la élite colonial. La antigua oligarquía criolla, dominadora de tierras y ayuntamientos, promotora de la vida cultural, dotada incluso

de sentido patrio —aunque no necesariamente nacional—, vio sus posiciones fortalecidas durante las primeras décadas del siglo XIX gracias a las dádivas con que la Corona premió su lealtad ante los movimientos independentistas continentales. La expansión de las plantaciones, por otra parte, acrecentó su poder económico y nutrió sus filas con nuevas hornadas de hacendados, ya sin vínculos con las formas tradicionales de propiedad territorial. Sin embargo, el desarrollo subsidiario de la trata negrera, que terminó por convertirse en un negocio tan importante como el del azúcar o el café, contribuyó al paralelo ascenso de un grupo de comerciantes, en su mayoría peninsulares, que se constituyeron en prominente sector de la clase dominante, al cual se irían sumando empresarios de otros rubros, principalmente el tabacalero. La cúspide de ambos sectores conformaba la alta sociedad, en la cual también participaban los más encumbrados funcionarios coloniales, que de su inicial conexión con la oligarquía criolla fueron derivando hacia una creciente connivencia con los comerciantes negreros, sobre todo en la medida en que el ejercicio de la trata clandestina anudaba una complicidad cada vez más estrecha. Si bien la esclavitud y la producción exportable suponían una evidente comunidad de intereses en el seno de la élite colonial, las relaciones internas no estaban exentas de antagonismos, en particular por la preponderancia que otorgaba al capital comercial el ejercicio de las funciones crediticias, sobre bases casi siempre usurarias. La circunstancia de que el sector comercial estuviese integrado principalmente por peninsulares, mientras que entre los productores predominaban los criollos, remarcaba esas diferencias que la historiografía en ocasiones ha caracterizado de manera harto esquemática. No obstante, la interrelación de los negocios y la propia movilidad social acercaban a ambos grupos —con frecuencia enlazados por vínculos matrimoniales— hasta el punto que se hizo común que los mayores comerciantes deviniesen "señores de ingenio", en ocasiones por obra de las deudas impagadas de algunos ha-

cendados. Una parte nada desdeñable de la influencia de esta clase dominante radicaba en el cultivo de relaciones con empresarios de menor envergadura, hasta constituir auténticas redes clientelares que conectaban al gran comerciante mayorista con sus colegas que operaban más o menos al detalle, así como a los más ricos hacendados con los dueños de pequeños ingenios y otros propietarios rurales.

Las contradicciones inherentes a una sociedad signada por el colonialismo y la esclavitud tenderían a acentuarse. La oligarquía insular, después de haber visto acrecentado su poder en las primeras décadas del siglo, experimentó una marginación creciente de las instancias de gobierno a partir de la década de 1830, cuando menguaron los privilegios otorgados por la Corona madrileña, ahora en manifiesta dependencia del apoyo brindado por los círculos liberales de la burguesía de la Península, portadora de una concepción más dinámica —y rapaz— de la relación colonial. En la isla, los capitanes generales comenzaron a rodearse a su vez de una camarilla compuesta principalmente por grandes comerciantes peninsulares, con quienes compartían intereses en el negocio de la trata. La élite criolla no tardó en manifestar su rechazo por esos “nuevos ricos” que venían a disputarle su primacía. Los más emprendedores inmigrantes peninsulares, que al menos durante su fase de ascenso trabajaban sin tregua en pos del enriquecimiento, manifestaban por su parte un franco desprecio hacia los criollos, cuyo actitud ante el trabajo —envilecido por la esclavitud— consideraban propia de gente vaga e inútil. Esa creciente animadversión mutua, que minaba las relaciones entre los grupos más influyentes de la sociedad colonial, iría *in crescendo*, como bien lo testimonian la literatura y particularmente los personajes y tramas del teatro bufo de la época. Excluidos sistemáticamente de la administración pública y con sus posibilidades de influencia política —como se verá— progresivamente limitadas, los criollos contemplaban cómo los altos funcionarios coloniales y el empresariado de ori-

gen peninsular solían apoyarse unos a otros en detrimento de sus prerrogativas. Tan notorio enfrentamiento de intereses de manera inevitable repercutiría sobre las restantes capas de la sociedad exacerbando las tensiones políticas.

El tardío auge de la plantación en Cuba tuvo lugar en momentos en que la esclavitud estaba siendo condenada en los medios intelectuales y económicos de los más importantes países del mundo atlántico. Ya se ha visto cómo Gran Bretaña proscribió la trata negrera en 1807, decisión seguida poco después por Estados Unidos y respaldada por el Congreso de Viena, circunstancias que obligaron a España a comprometerse con la liquidación de ese tráfico. Es cierto que el acuerdo no se cumplía, pero encareció el precio del esclavo y obligó a los esclavistas de la isla y a sus aliados en el gobierno español a defender la "odiosa institución", no solo pretextando ventajas económicas que aseguraban ser vitales para la participación de Cuba en el mercado internacional, sino aduciendo falaces argumentos sobre el carácter benigno y la misión civilizatoria de la explotación esclavista. Pero la abolición decretada por Inglaterra en sus colonias en 1834 —a la cual Francia y Holanda imitarían tres lustros más tarde— constituía una clara evidencia de que la esclavitud estaba condenada a desaparecer y restaba toda fuerza moral a quienes la defendían.

Incluso en la propia Cuba los perjuicios de la institución esclavista se hicieron patentes al tornarse la trata clandestina, pues esta fortaleció las posiciones económicas y la influencia política de los comerciantes peninsulares que la controlaban, permitiéndoles acumular caudales con los cuales expoliaban a los hacendados por medio de la usura. No en balde Arango y Parreño, que había sido el paladín de la libertad del tráfico de esclavos, terminaría por calificarlo como "asqueroso comercio" en 1832; criterio secundado poco después por prominentes intelectuales criollos, que se pronunciarían abiertamente contra la trata y, de manera algo más velada, insinuarían críticas a la pro-

pia esclavitud. La conjunción de las presiones inglesas y el avance de las ideas abolicionistas impulsaron al capitán general Jerónimo Valdés a promulgar un bando en 1842 que regulaba el tratamiento a los esclavos, cuyo articulado dejaba entrever algunas de las barbaridades a las que hasta entonces se habían visto sometidos aquellos infelices.

Cuando en medio de la Guerra Civil en Estados Unidos el presidente Abraham Lincoln proclamó la abolición de la esclavitud, la suerte de dicha institución en Cuba quedó definitivamente echada. Solo que en torno a las relaciones esclavistas se anudaban todavía intereses lo bastante poderosos para hacer de su desaparición un proceso doloroso y prolongado.

5
AVATARES DE LA GESTACIÓN NACIONAL

Desde la última década del siglo XVIII hasta mediados del XIX, Cuba experimenta el crecimiento más acelerado de su historia, tanto en lo económico como en lo demográfico. El resultado fue una sociedad de visible madurez pero minada por hondas contradicciones. Su prosperidad material se asentaba en la esclavitud, una relación social de manifiesta obsolescencia en otras latitudes, que al desconocer la condición humana de una parte de los habitantes de la isla erigía formidables barreras en el seno de su población. Por otra parte la sujeción colonial, estrechamente vinculada con la institución esclavista, condenaba a los nacidos en Cuba a una posición subordinada frente a quienes procedían de la metrópoli, privándoles de los más elementales derechos a regir la vida y diseñar el futuro de su comunidad.

Vistas las circunstancias, no ha de sorprender que en el desenvolvimiento de la sociedad cubana se expresasen tendencias divergentes. Por un lado el progreso material e intelectual y la convivencia de personas de distinto origen propiciaban el contacto de culturas y un creciente sincretismo de ideas, costumbres y creencias, propendiendo a constituir ese diverso conglomerado humano en una comunidad de identidad cada vez mejor definida. Sin embargo, los antagonismos apuntados actuaban al mismo tiempo como factores de disgregación y enrarecían el funcionamiento social, dando lugar a disímiles corrientes ideológicas y un complicado curso político. A esto último contribuía el espíritu de una época en la cual coexistían en el ámbito internacional las más variadas influencias, desde las ambiguas ex-

presiones del liberalismo español o la multifacética democracia estadounidense, hasta las doctrinas políticas fraguadas en la Revolución francesa y las corrientes de pensamiento que animaron la independencia en Hispanoamérica.

LA INDEPENDENCIA RELEGADA

La gesta independentista que se escenifica en el continente durante el primer cuarto del siglo XIX no tuvo un escenario cubano. Situación un tanto paradójica, si se tiene en cuenta que el barón de Humboldt había considerado poco antes que la élite insular se encontraba entre las mejor informadas y más politizadas de la América española. La marginación de Cuba requiere por tanto un análisis detenido, más que todo porque sus factores serían determinantes en la vida política de la isla durante varias décadas.

Lo primero es advertir que la excepción cubana debe entenderse en términos relativos. De hecho es posible observar cierta sintonía entre lo que ocurre en la mayor de las Antillas y en el continente. Así, en 1811 se descubre en La Habana una conspiración independentista encabezada por un abogado de cierto renombre, Román de la Luz, en la cual participaban un capitán de milicias y varios elementos del batallón de Pardos y Morenos, así como otro abogado, el bayamés Joaquín Infante, quien había redactado una constitución para el "Estado de la isla de Cuba". Aunque los individuos involucrados en la conspiración eran escasos y poco representativos, no deja de sorprender la explícita opción independentista que la mencionada constitución suponía, en momentos en que todavía algunas de las colonias continentales donde la rebelión se había hecho fuerte no habían roto abiertamente sus vínculos con España. La siguiente conspiración fue la que encabezara José Antonio Aponte, brutalmente aplastada en 1812. En este caso los conspiradores —una mayo-

ría de negros y mulatos libres y algunos esclavos— se pronunciaban de manera rotunda contra la esclavitud aunque no tanto respecto a la independencia, lo cual ubica su complot más como secuela de la Revolución haitiana que de los movimientos emancipadores del continente. En esas conjuras, al igual que en una confusa trama descubierta en Bayamo en 1795, lo característico era la completa ausencia de personajes de la oligarquía criolla, lo cual marcaba una diferencia significativa con lo ocurrido en varias de las colonias sublevadas. En realidad solo el proyecto de crear una junta provincial en 1808, así como el plan presentado poco después por Arango desde el Consulado para establecer un gobierno autonómico en la isla parecen haber guardado cierto parentesco con los movimientos "juntistas" de las colonias hispanoamericanas; sin embargo, desechado el primero casi de inmediato y desconocida la propuesta de autonomía por las Cortes de Cádiz, esa vía quedó muy pronto cancelada.

La élite cubana en modo alguno cedió a la tentación que arrastrase a algunas de sus hermanas del continente a arriesgar suerte y fortuna en la búsqueda de la independencia. Lejos de ello, los grandes propietarios esclavistas de la isla manifestaron su horror ante las guerras y devastaciones que sacudían a otras partes de la América española, considerando que para Cuba no habría peor decisión que participar en un movimiento que la conduciría irremediablemente hacia el abismo. Con su prosperidad confiada a un sistema de plantaciones en plena expansión, los hacendados eran conscientes de que la esclavitud difícilmente sobreviviría a una guerra independentista; el antagonismo entre blancos y negros prevalecía en sus conciencias sobre las diferencias con la metrópoli, tanto más si la Corona se mostraba dispuesta a comprar su lealtad con un cúmulo de concesiones. "El fantasma del Guarico" —como se refería Arango a la Revolución haitiana— estaba demasiado fresco en sus memorias para arriesgarse a que un devaneo político prendiese la chispa de una rebelión incontrolable. Con todas sus manquedades, el

régimen colonial de España resultaba la mejor garantía posible para su bienestar.

La renuencia de la oligarquía a involucrarse en la lucha por la independencia, hizo de esta un movimiento de capas medias, cuyos líderes y participantes eran principalmente profesionales y otros blancos de modesta extracción, así como negros y mulatos libres; gente toda carente de nexos esenciales con la esclavitud, que podía llegar a aceptar incluso la participación de algún esclavo en la lucha separatista. Esa característica del independentismo cubano, apreciable ya en las conspiraciones apuntadas, se haría todavía más palpable en la década de 1820.

El ascenso que experimenta durante esos años el proceso independentista continental actuó como catalizador de las actividades conspirativas en la isla, por lo general conectadas con México o la Gran Colombia, interesadas ambas en desarticular la importante base que Cuba representaba para la contraofensiva española. El influjo de las ideas revolucionarias del momento era notable en ciertos medios de la isla, corrientes de pensamiento que tomaban cuerpo en las logias masónicas cuya actuación se vio facilitada por la coyuntura que creara el llamado "trienio liberal" en España. El movimiento militar que en 1820 obligó a Fernando VII a reimplantar la Constitución de Cádiz, aunque desunido y transitorio, abrió en la isla una etapa de intensa actividad política en la cual la libertad de prensa y reunión, la elección de diputados a Cortes y el enfrentamiento de tendencias contribuyeron a crear un cuadro de desorden en el que prosperaron los movimientos conspirativos. De estos el más resonante fue la conspiración de los "Rayos y Soles de Bolívar", descubierta en 1823. Esa trama había comenzado a tejerse dos años antes, teniendo como ejes a la logia habanera de Los Soles y al cubano José Francisco Lemus, que ostentaba el grado de coronel en el ejército bolivariano, pero sus hilos se extendían a Matanzas, Puerto Príncipe y otras ciudades, en las cuales llegarían a detectarse unos 600 conspiradores. El levantamiento coordinado, que con-

taría con el apoyo de una fuerza de 3 000 hombres procedentes de Venezuela, proclamaría en la isla la República de Cubanacán. Algunos de los encartados —Lemus entre ellos— fueron detenidos y otros, como el poeta José María Heredia, pudieron huir; el movimiento se saldó así con algunas docenas de desterrados, pues el capitán general Francisco Dionisio Vives prefirió evitar las condenas a muerte y obtener, en cambio, una considerable ampliación de sus atribuciones. Ante las amenazas internas y externas, el restaurado absolutismo fernandino suprimió las libertades y concedió al gobernador de Cuba "facultades omnímodas" que le permitían ejercer su poder en condiciones de plaza sitiada, excepcionales prerrogativas que habrían de perdurar durante décadas. No obstante el fracaso de "los soles y rayos", las intentonas independentistas continuaron; mientras varios cubanos gestionaban nuevos apoyos de Simón Bolívar, dos de los conspiradores fugados en 1823, Francisco Agüero y Manuel Andrés Sánchez, desembarcaron en Camagüey tres años después para recomponer los hilos del complot, pero fueron capturados y terminaron en el cadalso. Casi al mismo tiempo tomaba cuerpo otra conspiración, la de la "Gran Legión del Águila Negra", en esta ocasión alentada desde México, movimiento que ya estaba prácticamente desmontado al descubrírsele un par de años después.

Dos factores se conjugaban para dar al traste con las pretensiones del independentismo cubano. Por una parte el rechazo de la oligarquía insular, que no solo se manifestaba renuente a toda acción separatista, sino que puso sus recursos a disposición de la metrópoli para la reconquista del imperio americano, sosteniendo San Juan de Ulúa y otros reductos realistas en el continente o financiando expediciones como la del brigadier Isidro Barradas, derrotada en las cercanías de Tampico en 1829. Esa actitud no puede calificarse de excepcional, pues también se observa en las élites de otras colonias a las cuales la independencia les vendría desde fuera, como ocurrió en Perú con la sucesiva invasión de las fuerzas de José de San Martín y de Bolívar.

Es cierto que la insularidad de Cuba resultaba un estorbo considerable para dicha alternativa, pero el obstáculo mayor fue sin duda la política adoptada por Estados Unidos e Inglaterra. Convencido de que al desprenderse de España Cuba caería inevitablemente en sus manos, Washington prefería aguardar por la maduración de ese proceso, de modo que su delegación al Congreso Anfictiónico de Panamá (1826) objetó de forma categórica el proyecto bolivariano de aunar fuerzas para independizar a Cuba y Puerto Rico. Gran Bretaña, que se había apresurado a reconocer a las nuevas repúblicas hispanoamericanas, como una suerte de compensación a España decidió respaldar el estatus colonial en las islas. Hacia 1830 las esperanzas cubanas de independencia se habían esfumado.

No obstante sus manifiestas debilidades, ese independentismo temprano contribuyó en medida nada desdeñable a la gestación nacional, particularmente con las personalidades señeras de Félix Varela y Jose María Heredia. Sacerdote el primero, sus enseñanzas habían constituido un factor decisivo para la superación del escolasticismo en el seminario de San Carlos y San Ambrosio, auténtica forja de la intelectualidad criolla en aquellos momentos. Elegido posteriormente como diputado a Cortes durante el "trienio", defendió en ese órgano legislativo una política descentralizadora que creía la más conveniente para la isla, pero sus convicciones liberales y su sentido cristiano de la libertad lo impulsaron a presentar en el órgano legislativo una memoria favorable a la libertad de los esclavos que le enajenó las simpatías de la élite criolla. Al restaurarse el absolutismo y con precio puesto a su cabeza, Varela huyó a Estados Unidos donde radicaría hasta el final de su vida. Allí comenzó en 1824 a publicar *El Habanero*, periódico abiertamente dedicado a la propaganda por la independencia. Aunque algunos años después Varela se alejaría de la política, desencantado por la conducta de muchos de sus coterráneos, su pensamiento quedaría como la fuente doctrinal primigenia del independentismo en

Cuba. El poeta Heredia, exiliado muy joven a consecuencia de su participación en los "Soles y Rayos", con su espléndida "Oda al Niágara" y otros hermosos poemas se erigió muy pronto en una de las cumbres del romanticismo en las letras hispánicas Sus encendidos versos, que lo consagraron como un verdadero ídolo para la juventud cubana, representarían un aporte decisivo a la simbología de la nación.

VARIANTES REFORMISTAS

Al optar por la prosperidad y los privilegios frente a la independencia, las élites criollas quedaron obligadas a aceptar estructuras coloniales que las condenaban a una posición subordinada, estricto marco al cual habrían de constreñir su actuación política. La conducta a seguir tenía que ser de colaboración y no de enfrentamiento, de tímidas reformas más que de transformaciones radicales, conformándose con modificar las políticas y los procedimientos sin apenas tocar los fundamentos del régimen colonial. Semejante línea de acción y su afiliación a un sistema de naturaleza excluyente como la esclavitud limitarían tremendamente la capacidad hegemónica de la oligarquía dentro del proceso de formación nacional.

Como resultado de la situación descrita, las concepciones políticas predominantes en Cuba durante la primera mitad del siglo XIX tuvieron un carácter reformista. En tanto corriente, el reformismo puede tener muy diverso signo de acuerdo con su fundamento ideológico, la naturaleza de las reformas perseguidas y los métodos adoptados para impulsarlas. En el caso cubano el reformismo presentó variantes que permiten apreciar serias diferencias internas, así como un perfil cambiante según sus etapas. Tal heterogeneidad respondía también a las ideas en boga tanto en Europa como en Estados Unidos, cuyo flujo y reflujo se dejaban sentir en la isla, sobre todo entre una intelectualidad que

las incorporaba y reformulaba en función de las anómalas realidades que caracterizaban a la sociedad cubana.

El primer reformismo criollo tuvo sus mayores exponentes en una pléyade de personalidades de la oligarquía habanera agrupadas en torno a Francisco de Arango y Parreño, que desempeñaron un rol predominante en los distintos ámbitos —economía, política, ciencia, etc.— de la vida insular durante más de tres décadas. Formados en la atmósfera del iluminismo, su saber enciclopédico se enriqueció al calor de una intensa práctica productiva y mercantil, a la cual hubo de sumarse su sobresaliente presencia en los medios gubernamentales —tanto en la colonia como en la metrópoli— y el prestigio derivado de un notable quehacer intelectual. Tenía este grupo muy clara noción de la especificidad de los intereses cubanos —que apenas diferenciaba de los propios— y en modo alguno ignoraba las contradicciones inherentes al estatus colonial, pero su confusa idea de patria —que Arango unas veces identificaba con La Habana y otras con España— se hallaba aún lejana de una conciencia nacional. Hijos de su tiempo, las vías políticas escogidas por estos reformistas para promover sus intereses fueron las que se correspondían con el "despotismo ilustrado": ganar el favor de un monarca benévolo que proveyese las medidas apropiadas para satisfacer las necesidades sociales y económicas del momento, así como asegurar la eficacia de esos cambios actuando de consuno con las autoridades coloniales. Eran, en síntesis, hombres de la Ilustración, afanosos de progreso pero ajenos a los sobresaltos.

Las circunstancias en que actuaron, aunque convulsas, les resultaron extremadamente favorables. Las guerras constantes, el derrumbe de la marina española —de guerra y mercante— y la consiguiente incomunicación, la metrópoli invadida, la monarquía absoluta desafiada por el constitucionalismo liberal y, por último, el movimiento independentista americano que hizo trizas el imperio, crearon complicadas situaciones de las cuales los reformistas ilustrados supieron aprovecharse. Con suprema

habilidad y una adhesión invariable al Antiguo Régimen, se las ingeniaron para conseguir de las débiles autoridades la satisfacción de sus demandas; el rosario de reales cédulas y decretos que se suceden entre 1791 y 1819 —y en su defecto, ciertas disposiciones de los capitanes generales— jalonan una trayectoria de éxitos indiscutibles. En unas ocasiones mediante la participación directa en las instancias de gobierno —fueron consejeros, generales y hasta ministros— o haciendo gala en otras de una influencia ineludible, los criollos reformistas impusieron sus reglas del juego y ejercieron un muy efectivo ascendiente en el gobierno de la isla. Los resultados pronto pudieron apreciarse: al concluir la segunda década del siglo XIX los hacendados habían obtenido la propiedad de las tierras mercedadas, podían explotar sin limitaciones los recursos forestales, liquidaron el estanco del tabaco, comerciaban con cualquiera de los estados reconocidos y, para colmo, disfrutaban mediante "arreglos" de un régimen arancelario con derechos inferiores a los de la Península.

El goce de tales privilegios despertaba el encono de la burguesía metropolitana, que ya operase en la esfera del comercio o en la manufactura no aceptaba verse marginada del aprovechamiento de las riquezas coloniales. El interés por supeditar la economía cubana era ostensible entre los políticos liberales que en las Cortes gaditanas representaban a los medios mercantiles, los cuales se oponían tenazmente a que se ampliasen las prerrogativas comerciales de las colonias. Ello permite entender el regocijo con que los grandes propietarios de la isla acogieron la derogación de la Constitución por Fernando VII, así como el idilio que a partir de entonces sostuvieron el déspota madrileño y sus felices súbditos habaneros. Cuando sobrevino el "trienio", las Cortes liberales implantaron aranceles fuertemente proteccionistas, pero las protestas que ello provocó, en medio de la generalizada rebelión colonial, determinaron que se autorizase al intendente de Hacienda para modificar las tarifas en corres-

pondencia con las particularidades cubanas, una concesión que en la práctica tuvo muy parcial alcance.

La restauración absolutista que dio inicio a la llamada "década ominosa" en España, constituyó para Cuba una nueva etapa de entendimiento entre los reformistas y la monarquía, solo que ahora su saldo ya no estaría representado por nuevas concesiones y aperturas, sino por una permisividad —incluida la trata clandestina— que se conjugaba con el extraordinario auge de la economía. El reformismo ilustrado comenzó entonces a opacarse, a medida que la generación de Arango —como él mismo, bastante envejecida— iba siendo reemplazada por nuevas figuras. El personaje capital en ese relevo fue Claudio Martínez de Pinillos —conde de Villanueva—, designado en 1824 intendente de Hacienda, cargo que hubo de desempeñar por casi tres décadas. Con el cauteloso y enigmático Pinillos el poder económico en la isla quedaba en manos de la más rancia oligarquía, para la cual los arrestos políticos de Arango ahora serían cosa del pasado. El intendente supo rodearse de personas talentosas, aunque pragmáticas y conservadoras a su imagen y semejanza. Su arte era la negociación y para llevarla a cabo poseía un arma formidable: el Tesoro de Cuba, probablemente el único segmento de la Hacienda española que había escapado de la ruina. Con los caudales cubanos podían satisfacerse las veleidades del monarca y sus ilusorios proyectos de reconquista; a cambio de ello ya no se obtendrían reformas, sino ventajas precisas con resultados contantes y sonantes.

Tras la muerte de Fernando VII en 1833, su hija Isabel —menor de edad— aseguró la sucesión al trono gracias al respaldo liberal. Desde posiciones moderadas durante ciertas etapas y en otras con una proyección más radical, el liberalismo marca en lo sucesivo el rumbo político de España y —más importante aún desde nuestra perspectiva— consigue diseñar una nueva política colonial. Aceptada la independencia americana como un hecho irremediable, la vieja concepción imperial que consideraba

en términos similares las posesiones a ambos lados del océano fue cediendo su lugar a una creciente diferenciación entre la metrópoli y sus colonias, tanto en el plano jurídico como en los procedimientos de gobierno. La explotación colonial, concebida por la monarquía absoluta sobre bases esencialmente tributarias, ahora habría de ampliarse de manera que las colonias fuesen también un mercado preferente para los productos metropolitanos; se trataba, sin duda, de una concepción más moderna, solo que al carecer la economía española del desarrollo necesario para una genuina complementación, dicha política daría lugar a una situación inicua, sustentada en un régimen arancelario prohibitivo y empobrecedor.

Como primer indicio de la nueva política, las "facultades omnímodas" conferidas por la reacción absolutista a las autoridades gubernamentales fueron derogadas en la Península pero se mantuvieron vigentes en Cuba. Y para ejercerlas sin contemplaciones se envió a la isla como capitán general a Miguel Tacón, uno de los militares derrotados en el continente durante la contienda independentista, traumática experiencia que le legó una profunda desconfianza respecto a los criollos. Reveladora evidencia de los nuevos tiempos, el gobernador recién llegado desplazó a los más ilustres y adinerados habaneros de su posición preeminente en el círculo palaciego, sustituyéndolos por una camarilla de poderosos comerciantes peninsulares, casi todos involucrados en la trata clandestina. La tradicional connivencia entre la oligarquía y las autoridades que sustentara a la práctica reformista quedó así definitivamente quebrantada.

El reformismo, bastante desmedrado ya en la conducta del intendente Pinillos y sus allegados, reencarnó en un conjunto de jóvenes intelectuales, en su mayoría discípulos del presbítero Varela durante sus años de magisterio en el seminario de San Carlos. El vocero indiscutible del grupo era el bayamés José Antonio Saco, reconocido como ensayista brillante, junto a quien destacaban, entre otras figuras, las de Domingo del Monte, lite-

rato bien informado y talentoso, animador incansable de la vida cultural en revistas y tertulias, y José de la Luz y Caballero, filósofo y sabio, entregado desde muy joven a la educación de sus coterráneos. Hijos de su tiempo, el pensamiento de este grupo ya no respondía tanto a los moldes clásicos del iluminismo como a un liberalismo de tintes románticos, alimentado de las experiencias republicanas de Estados Unidos, Francia e Hispanoamérica, así como del fluido juego político británico y, claro está, del propio constitucionalismo español. No eran, sin embargo, sus fuentes ideológicas lo único que diferenciaba a estos jóvenes reformistas liberales de sus antecesores de la época ilustrada. Aunque estrechamente vinculados con algunos círculos del poder económico —Del Monte era yerno de uno de los más ricos hacendados de la isla— ninguno de ellos era propiamente un hombre de negocios, como sí lo habían sido Arango y la mayor parte de sus colaboradores. Mostraban así un claro distanciamiento de las prácticas económicas, que unido a la observancia de ciertos principios éticos varelianos los llevaría a sostener una línea de tensión entre moralidad e interés, entre el patriotismo y la especulación, términos que contemplados como antinomias alimentaban en ellos cierto sentimiento de aristocracia del espíritu. A esto debe añadirse su escaso peso institucional, pues aunque presentes en la Sociedad Económica o incluso eventualmente en la Junta de Fomento —organismo sucesor del Real Consulado—, ambas instituciones se hallaban en realidad bajo el control del conde de Villanueva.

Ajenos a las estructuras del poder —del económico y, todavía más, del político— los nuevos reformistas no encontraron sus armas en el tráfico de influencias y la negociación, sino en la crítica. Dado el cuadro descrito, es comprensible que sus primeros choques públicos hayan sido con el intendente y su grupo y no con el recién llegado gobernador Tacón. El primer enfrentamiento, apenas un escarceo, estuvo motivado por las críticas lanzadas contra Heredia por el intelectual gallego Ramón de la

Sagra, un protegido de Pinillos. El segundo, más enconado, tuvo por escenario a la Sociedad Económica de Amigos del País, cuya revista —dirigida por Saco— se atrevió primero a publicar un trabajo de Varela y algo después otro, del propio ensayista bayamés, donde a tenor de un análisis sobre los problemas de Brasil se deslizaban veladas críticas a la esclavitud, razón que estimó suficiente el presidente de la Sociedad, Juan Bernardo O'Gavan —un viejo y deslustrado reformista, también al servicio del intendente—, para pedirle a Saco la renuncia. El encontronazo definitivo lo motivaría el intento de los jóvenes liberales por dotarse de una base institucional, la Academia Cubana de Literatura, iniciativa rechazada con vigor por Pinillos, quien valiéndose del agrio tono y las implicaciones de la controversia obtuvo del capitán general el destierro de Saco, que se vería obligado a pasar en Europa la mayor parte de su vida.

Ante tal circunstancia, los reformistas liberales optaron por un repliegue transitorio, pasando al primer plano las contradicciones, hasta entonces sordas, entre el gobernador y el intendente. Era este un clásico conflicto de poderes, pues Tacón aspiraba a presidir la Junta de Fomento y con ella controlar toda la economía insular. En su aspecto visible, sin embargo, la batalla parecía librarse en el campo simbólico, entre los monumentos erigidos por ambas autoridades —dadas sus referencias a los valores heráldicos hispánicos en un caso y a las imágenes criollas en otro— y sobre todo, en torno a la construcción del ferrocarril, iniciativa primordial del conde de Villanueva que Tacón obstaculizaba, renuente a que la colonia dispusiese de ese genuino paradigma de progreso antes que su metrópoli.

La contienda en realidad se desarrollaba a tres bandas, pues los reformistas liberales, ahora liderados por Luz y Caballero, dirigían sus dardos tanto contra Tacón y su camarilla como contra Pinillos, haciendo cada vez más patente la denuncia de la trata clandestina, actividad ilegal que constituía el punto de confluencia entre los intereses de todos sus adversarios. La situación

se caldeó con la convocatoria a elegir diputados a Cortes, representación que cada grupo aspiraba a controlar. Confiados en la posibilidad de llevar a Madrid su programa, que exigía para Cuba iguales derechos a los de una provincia española —la "asimilación"— y el efectivo cese de la trata, los jóvenes liberales hicieron de la candidatura de Saco su estandarte, pero el proceso electoral, después de haber sido objeto de sucias maniobras, se vio interrumpido en agosto de 1836 por el motín de La Granja que reimplantó en la Península la Constitución de 1812. Al recibirse la noticia en Cuba, el gobernador del Departamento Oriental, general Manuel Lorenzo, contando con el decidido apoyo de los liberales reformistas de Santiago de Cuba decidió proclamar la carta magna gaditana sin hacer consultas. Muy lejos de seguir tales pasos, Tacón consideró los actos de su subordinado como un desacato, y tras lanzar contra el movimiento las mayores acusaciones —incluyendo la de independentismo— movilizó fuerzas militares contra la capital del oriente consiguiendo que Lorenzo depusiese su actitud. En medio de la confusión, al menos había podido conseguirse que José Antonio Saco fuese reconocido como diputado, ratificándose la victoria electoral de su candidatura, promovida por Juan Bautista Sagarra y los liberales santiagueros. Sin embargo, ni Saco ni los otros dos diputados cubanos lograrían ocupar sus asientos en las Cortes, pues estas decidieron que Cuba y las demás colonias habrían de regirse por "leyes especiales", sancionando su estatus diferenciado —y subordinado— dentro del Estado español. Saco, que escribió una encendida protesta a raíz de esos hechos, abandonaría a partir de entonces las posiciones asimilistas valorando la conveniencia de que se aplicase a Cuba una fórmula de gobierno de relativa autonomía, similar a la que Gran Bretaña empleaba en algunas de sus colonias.

Como una suerte de compensación para los cubanos, Tacón fue removido del cargo de capitán general, victoria que debía acreditarse más a la influencia política del conde de Villanueva

que a las gestiones de los liberales de la isla. Con la expulsión de los diputados de las Cortes, estos vieron apagarse sus esperanzas reformistas o al menos la posibilidad de canalizarlas dentro de las reglas impuestas por España. Encauzaron entonces sus aspiraciones hacia lo social y lo cultural. Desde su cenáculo, Domingo del Monte desplegó una labor encaminada a pertrechar el arsenal simbólico de la naciente conciencia nacional, al mismo tiempo que colaboraba con el cónsul británico Turnbull en la persecución de la trata y se permitía incluso impugnar ciertos aspectos de la esclavitud, aunque sin asumir con franqueza una posición abolicionista. En el vínculo entre esos dos aspectos del drama cubano —nación y esclavitud— estaba el talón de Aquiles del reformismo liberal. Su conciencia nacional era mucho más clara que la de sus antecesores ilustrados, al extremo que uno de sus mayores empeños estuvo encaminado a perfilar una identidad cubana, distinta de lo español. Pero la Cuba que avizoraban era una nación de blancos, donde los negros —y particularmente los esclavos, con sus "bárbaras" costumbres— no tendrían cabida; de ahí que se opusiesen a la trata —que además de enriquecer a los comerciantes peninsulares, "llenaba la isla de negros"— y considerasen el "blanqueamiento" como una condición indispensable para la afirmación nacional.

PROCESOS CULTURALES E IDENTIDAD NACIONAL

Sin subordinarse a la política, los procesos culturales de estos años guardan con ella una perceptible relación, en buena medida por la coincidencia de sus protagonistas. Los reformistas ilustrados fueron, desde la Sociedad Económica de Amigos del País, los principales impulsores de la extensión y modernización de la enseñanza, que comenzó a salir de conventos e iglesias y a superar los moldes del escolasticismo con el impulso de un religioso, el obispo de La Habana, Juan José Díaz de Espada. Un protegido

de este, el padre Varela —cuya relevancia política ya apuntamos— desempeñó un papel primordial en la transformación educativa; además de los cambios en la pedagogía, que contaron con el respaldo del obispo, se crearon cátedras para la enseñanza de la química —una necesidad de la manufactura azucarera— y también de economía política y otras "artes liberales", tendencia que se continuó con la creación de instituciones como la escuela de comadronas, la de náutica y el Jardín Botánico. Sin embargo, pese al esfuerzo de los ilustrados y la ingente labor de la Sociedad Patriótica, sería vano hablar siquiera de algo parecido a una red escolar hacia 1830, pues con la reacción absolutista en 1823 los escasos fondos públicos destinados al financiamiento de escuelas desaparecieron. Tal era la situación denunciada por Domingo del Monte en su *Informe sobre la enseñanza primaria* de 1836, que la Sociedad Económica intentó aliviar con las propuestas que cuatro años después dieron lugar al "Reglamento de maestros". Sin embargo, el problema no solo radicaba de la escasa preocupación del gobierno colonial por el asunto, sino que a esta se sumaba su evidente interés por despojar a la instrucción pública del menor asomo de cubanía.

El incipiente carácter nacional de la educación tuvo su refugio en la escuela privada. En el colegio de Carraguao, entre 1833 y 1836, José de la Luz y Caballero promovía una enseñanza racional, fundamentada en la experiencia como fuente de conocimientos, que aspiraba a formar ciudadanos para la Cuba del futuro. Ese proyecto, continuado años después en su propia escuela —El Salvador—, se difundió hacia otras ciudades como Matanzas, donde los hermanos Guiteras fundaron La Empresa, y Santiago de Cuba, gracias a la ingente labor educativa de Juan Bautista Sagarra. Pero estas eran escuelas para la élite y unos pocos alumnos de clase media; al alcance de la mayoría solo había maestros de "primeras letras", y eso en el caso de los blancos, pues en los campos y para la gente libre de color las posibilidades educativas resultaban todavía menores.

Pese a todo la instrucción se difundía y con la maduración de una intelectualidad se abrieron los espacios públicos para las letras. Tras el *Papel Periódico*, fundado —según apuntáramos— con el patrocinio del gobernador Las Casas, aparecieron otros diarios como *El Aviso*, *El Regañón* y el *Noticioso y Lucero*, llegando a multiplicarse los periódicos durante las breves etapas constitucionales en que se gozó de libertad de expresión. Desde *El Lince* (1811) al *Faro Industrial* (1841), la prensa iba perfilando un pensamiento propio, lo cual se hacía notar también en los diarios publicados en otras ciudades de la isla —*La Aurora* (Matanzas), *La Gaceta Cubana* (Santiago de Cuba), *El Espejo* (Puerto Príncipe), son buenos ejemplos— e incluso en los de localidades relativamente pequeñas como Bejucal o Guanajay. Desde fecha relativamente temprana se contó también con revistas, que por su mayor volumen y más dilatada frecuencia daban espacio a lo mejor de la literatura que se producía en la época; así lo atestiguan el *Aguinaldo Habanero*, anuario fundado por Heredia, *La Moda* —publicada en 1829 por Domingo del Monte—, *El Plantel*, *El Álbum* y, sobre todo, la *Revista Bimestre Cubana*, órgano de la Sociedad Económica, cuyo primer director fuera Saco.

La literatura resulta un terreno particularmente idóneo para seguir el complicado proceso en que se fue forjando una identidad cubana. Los principales poetas criollos de la Ilustración, Manuel de Zequeira y Manuel Justo de Rubalcaba, compartían con Arango y su círculo una noción de patria apegada a la tierra —y a veces al terruño—, que se expresaba sobre todo en la referencia a los paisajes y frutos del país, de manera que entre versos cargados de retórica y frecuentes alusiones mitológicas se elogiaba a la piña como reina de las frutas o se hacía rivalizar al tamarindo con la uva, trazando un imaginario distinto al de la metrópoli mediante el cual se identificaba el poeta con su lugar de origen. Ese apego a la tierra como sentimiento patrio, que ya habíamos destacado al examinar la obra de Arrate, se reitera todavía en las páginas de Antonio José Valdés, el primero de los historiadores

que intentó abarcar toda la isla en el enunciado de su *Historia de la isla de Cuba*, no obstante el inevitable énfasis habanero.

El patriotismo adquiere otro sentido en los escritos del padre Varela; para él era también el amor al país en que se nace, pero expresado en el compromiso con su defensa aun a costa de cualquier sacrificio, como una genuina virtud cívica; de ahí que hiciese de la independencia premisa imprescindible para la formación nacional. Parejo sentimiento es perceptible en Heredia, pues más allá de su pasión por el paisaje cubano —"¡ay! las palmas deliciosas"— se advierte en sus versos la cólera que lo consumía contra el opresor de "la patria desolada" y la certeza de que Cuba finalmente se vería "libre y pura".

Ese significado más profundo —y, si se quiere, espiritual— de la patria se manifiesta también con bastante claridad entre los reformistas liberales de la nueva generación, algunos de los cuales asumieron la formación de la conciencia nacional con el carácter de una auténtica misión. Así lo expresan de manera explícita varios de los ensayos de Saco y puede observarse entrelíneas en los aforismos de Luz y Caballero, al igual que en su paciente labor pedagógica. Pero fue sobre todo Del Monte quien cumplió dicho cometido de una manera más cabal en el plano literario, no solo por la perspectiva criolla con que sus ensayos críticos se empeñaban en la actualización cultural, sino por la labor de orientación y promoción que ejercía en sus tertulias, a las cuales acudían, junto a José Jacinto Milanés, Anselmo Suárez Romero, José Antonio Echevarría y Cirilo Villaverde, lo más granado de la joven intelectualidad criolla. Dentro de ese círculo, Del Monte se dio a la tarea, bastante más espinosa, de criticar la esclavitud. Su aliento impulsó a Suárez Romero a escribir *Francisco*, novela cuyas lacerantes imágenes de la vida del esclavo retrasarían por casi medio siglo su publicación, y fue él quien dio a conocer los versos de Juan Francisco Manzano, el poeta esclavo cuya libertad compraría mediante pública —y publicitada— suscripción. La crítica de la intelectualidad liberal a la

esclavitud respondía, por una parte, a la comprensión de que se trataba de una institución insostenible dentro del proyecto de modernidad capitalista y, por otra, a la evidencia de que en política actuaba como un factor de la sujeción colonial. Dicha posición, sin embargo, no conducía a un genuino abolicionismo y mucho menos al reconocimiento de la igualdad del negro, que tanto Del Monte como Saco y otras figuras de su grupo excluían de manera expresa del cuerpo de la nación en ciernes. No obstante su moderación, el antiesclavismo le valdría a Del Monte —como a Luz y Caballero— verse implicado en la ya mencionada "conspiración de La Escalera", circunstancia tras la cual su activismo político e intelectual languideció.

Pese a todo, la empresa de dar forma a una literatura de perfiles propios se mantuvo viva en continuadores como José Jacinto Milanés, tanto en sus versos románticos como en su pieza teatral *El conde Alarcos*, donde la fidelidad del súbdito traicionada por un monarca ingrato hacía un símil manifiesto con el "triste" destino de la élite criolla. El costumbrismo que prevalecía en la narrativa acercaba esta a la realidad cubana por encima de las influencias estilísticas de los modelos europeos, tensión por demás perceptible en los trazos con que Villaverde pinta a la sociedad habanera en la primera versión (1839) de su *Cecilia Valdés*. Incluso una escritora como Gertrudis Gómez de Avellaneda, quien desde temprana edad radicó en España, trasluce su origen —y hasta cierto sentimiento patrio— en poemas como "Al partir" o "A un jilguero" y en la proyección antiesclavista de su novela *Sab*. La exploración de lo nacional presenta también sus vericuetos en el criollismo de Francisco Poveda, en el acento campesino de la poesía de Juan Nápoles Fajardo —el "Cucalambé"—, y llega hasta el extravío con José Fornaris y su "siboneyismo", nostalgia romántica por un pasado indígena del cual apenas quedaban vestigios. El escaso valor literario de esas expresiones suscitaría la reacción de poetas mejor formados, como Rafael María Mendive, Luisa Pérez de Zambrana y Juan Clemen-

te Zenea, que dieron vuelo a una poesía más elaborada. En la nueva tendencia, el verso bien cincelado dejaría espacio para recuperar los timbres patrióticos heredianos, como bien lo ilustran los poemas de Joaquín Lorenzo Luaces.

El auge azucarero originó una verdadera eclosión arquitectónica: en La Habana, Matanzas y algunas otras ciudades se construyeron grandes palacetes, así como casas quintas en la periferia urbana, donde bajo inspiración neoclásica la madera comenzó a ser sustituida por el hierro en ventanas, cancelas y escaleras. Con sus frontones, columnas jónicas y órdenes superpuestos, el rigor neoclásico no alcanzó sin embargo a suplantar las expresiones de lo criollo en las viviendas, que con sus medios puntos de vivos colores y el mobiliario de rejilla respondía a las peculiaridades del trópico apelando a recursos que ya llevaban un sello de identidad. El neoclasicismo trajo la academia a la plástica naciente, tanto en lo institucional como en los modos de hacer. Bajo el auspicio de la Sociedad Patriótica se fundó en 1818 la Escuela de Dibujo y Pintura de San Alejandro, fragua de generaciones de pintores que a lo largo del siglo cultivarán la pintura religiosa, el paisaje, el retrato y el costumbrismo, la cual tuvo como primer director al pintor neoclásico francés Juan Bautista Vermay. La prosperidad actuaba como un imán para los pintores extranjeros, cuyos nombres predominarán en el arte insular durante algunas décadas. Pero los atractivos del paisaje, los tipos y las costumbres de Cuba lograrían imponerse a lo foráneo en la perspectiva de esos artistas, especialmente entre los grabadores como Hipólito Garneray, Federico Mialhe y Eduardo Laplante, cuyas litografías difundieron por el mundo —en imágenes a menudo idílicas— las escenas de la vida cubana. Fue así como la pintura, aunque en manos mayoritariamente extranjeras, desempeñó de manera paradójica un papel nada desdeñable en la construcción de la identidad.

En la primera mitad del siglo XIX los medios musicales registraron la aparición de los ritmos que imprimirán su carácter a la

música cubana. La contradanza, llegada con los colonos huidos de Saint-Domingue, se acriolla rápidamente y adquiere un acento distintivo especialmente en las composiciones de Manuel Saumell. Su hegemonía era indiscutible tanto en la música que se escuchaba como en la bailada. La moda introducida en los salones hacia 1840 de que los bailadores improvisasen versos al compás de la música, sentaría las bases de la habanera. En la región oriental la contradanza adquirió un tono más popular con la incorporación de ritmos de matriz africana que imprimieron un nuevo sentido a su evolución. La afición al baile, que al decir de algunos contemporáneos rayaba en la locura, daba vida a un buen número de orquestas, integradas en su mayoría por negros y mulatos criollos. Aunque el gusto de las clases altas en cuyas fiestas tocaban esos conjuntos —y donde eran mejor pagados— impusiese pautas musicales europeas como el vals o la polka, los ejecutantes le aportaban componentes rítmicos llegados de la profundidad de las plantaciones, y esa contribución africana infundía sustancia a una cubanización de la cual darán testimonio la guaracha, el bolero y otros géneros musicales.

Las expresiones culturales que se desarrollan en esta época reflejaban de una u otra forma la dinámica de la sociedad. En las ciudades la vida se fue tornando bastante más animada, ya no solo por la actividad de los mercados —que se multiplicaron, sobre todo en La Habana—, el ajetreo de los artesanos y los pregones de infinidad de vendedores ambulantes, sino por la apertura de plazas, paseos, cafés y otros espacios públicos, que constituyeron marco propicio para una sociabilidad ascendente. La asistencia al teatro devino costumbre entre las clases media y alta; en esta última causaba furor la ópera, cuyo escenario más apropiado fue la gran sala teatral que con el nombre del gobernador Tacón se inauguró a finales de los años treinta. Más al alcance de otras capas sociales se hallaba el teatro bufo, nacido en estos tiempos bajo innegable influjo extranjero —los *minstrels* norteamericanos, por ejemplo—, pero que muy pronto consi-

gue crear tipos populares que con cantos y bailes se movían por lo regular entre situaciones humorísticas. Para los negros y mulatos en las ciudades quedaban los bailes y festejos en el marco de los cabildos, así como la gran fiesta del Día de Reyes, única oportunidad en que podían salir a los espacios públicos. En tales circunstancias y, por supuesto, en las ocasionales festividades que tenían lugar en los barracones de los ingenios, mediante danzas, cantos y narraciones se recreaban ritos y expresiones artísticas ancestrales que mantenían vivos valores de matriz africana a la vez que propiciaban un decisivo proceso de sincretización. Definida e identificada por el color de la piel, la población de procedencia africana iría así superando la diversidad de sus orígenes étnicos.

En toda la sociedad insular, la interacción y mezcla de componentes culturales que imponía la convivencia, tendía también necesariamente a una síntesis de lo español, lo africano y lo criollo que iba dando lugar a la nueva calidad de lo cubano. Sin embargo, la rígida estructura estamental derivada de la esclavitud representaba un obstáculo formidable en dicho proceso, pues la élite criolla que impulsaba la construcción nacional no sólo excluía de esa comunidad a algo más de la mitad de la población, sino que resultaba incapaz de interpretar los valores culturales de que esta era portadora.

EL ANEXIONISMO

La frustración que supuso para las aspiraciones reformistas la formal exclusión de Cuba del sistema político español en 1837, determinó que en ciertos círculos del liberalismo insular se plantease la búsqueda de una alternativa a la dominación hispana, salida que estimaban tanto más imperiosa cuanto la debilidad manifiesta del gobierno madrileño hacía temer que este cediese ante las presiones británicas para abolir la esclavitud. Desecha-

da desde tiempo atrás la independencia por la oligarquía, la opción preferible frente a España resultaba ser una potencia cercana, en la cual una economía creciente y un moderno régimen político coexistían con la esclavitud: Estados Unidos.

La anexión de Cuba a la Unión americana —solución cuya viabilidad parecía demostrar la experiencia de Texas— no solo garantizaba la supervivencia de la plantación esclavista, sino que prometía simplificar las relaciones comerciales con un cliente —y proveedor— de excepcional importancia para la isla. Al incorporarse como un estado a la federación norteña, los cubanos —blancos— obtendrían la representación política y gozarían de libertades que España les negaba, gracias a lo cual podrían modificar a voluntad el oneroso régimen fiscal impuesto por la vieja metrópoli. Frente al retraso y la inercia hispánicos, el potente vecino resultaba todo un paradigma de progreso, del cual provenía buena parte del equipamiento ferroviario, del utillaje azucarero y otros recursos tecnológicos empleados en la isla. Y, por añadidura, en los rápidos clíperes de la marina mercante norteamericana se transportaban muchos de los esclavos africanos introducidos en Cuba por vía clandestina.

Como conducta el anexionismo en realidad solo constituía una variante más del reformismo, por cuanto apuntaba a obtener beneficios materiales y ventajas políticas de una formación estatal en la cual las élites insulares no ejercerían soberanía. El tránsito de una condición a otra podría realizarse además —y así se deseaba— sin provocar convulsiones o trastornos que alterasen el orden social. Prueba definitiva de la íntima conexión entre ambas corrientes lo constituía el hecho de que muchos de quienes propugnaban la nueva fórmula anexionista pocos años antes habían sido firmes sostenedores del reformismo liberal.

Condición indispensable para que pudiese materializarse el proyecto de anexión era la disposición norteamericana de asimilar a Cuba, un interés que ciertamente podía darse por descontado. Apenas iniciado el siglo XIX, en las movedizas circunstan-

cias creadas por las guerras napoleónicas, la incorporación de Cuba a Estados Unidos había sido incluida entre los designios de la política expansionista propugnada por Thomas Jefferson. Invadida España por los franceses, el presidente envió en 1809 un representante a La Habana, James Wilkinson, para que explorase con el gobernador Someruelos las posibilidades de una anexión, eventualidad sobre la cual también conversó dicho agente con otras personalidades en la capital cubana. Poco tiempo después, y ya bajo la administración de James Madison, otro enviado norteamericano en misión confidencial, William Shaler, contactó con un grupo de hacendados habaneros y, aprovechando la dudas que despertaban las Cortes de Cádiz sobre el futuro de la esclavitud, intentó convencerles de que la anexión resultaría una opción más segura y viable que la independencia. La siguiente gestión se produjo a principios de la década de 1820, en medio de la incertidumbre y el desorden creado por el "trienio constitucional". En la nueva trama parece haber correspondido un papel prominente a otro enviado confidencial, Joel Poinsett, quien desplegó una febril actividad entre las logias masónicas de La Habana; coincidiendo con esos manejos, se registra la presencia en Washington de un enigmático "Mr. Sánchez", quien decía representar a un grupo de prominentes habaneros partidarios de la anexión. Sin embargo, el temor a que el movimiento anexionista provocase una violenta reacción por parte de Gran Bretaña determinó que las autoridades norteamericanas desestimasen el proyecto; Washington optó entonces por sellar la partida cubana en la seguridad de que —según lo advirtiera el secretario de Estado John Quincy Adams— al transcurrir el tiempo la isla habría de caer como una "fruta madura" en manos de Estados Unidos. En la década de 1840, cuando el anexionismo cuaja como tendencia dentro de la política cubana, a las consideraciones geopolíticas que inicialmente habían determinado la conducta estadounidense respecto a Cuba, vino a sumarse el interés del Sur esclavista por fortalecer su posición frente a los estados

del Norte en la delicada correlación de fuerzas existente dentro de la Unión, aspiración para la cual la conversión de la isla vecina en un estado federal resultaba más que oportuna.

El anexionismo cubano resultaba tan heterogéneo como lo fueran las anteriores expresiones de reformismo, pues según puede observarse en las distintas etapas por las que atraviesa ese movimiento, en su seno actuaban individuos con características y motivaciones bien diferentes. En su etapa inicial, la corriente anexionista estuvo encabezada por un círculo de ricos hacendados criollos, entre los cuales destacaba el clan de los Aldama-Alfonso, quienes pocos años atrás habían constituido el principal respaldo —sobre todo económico— del reformismo liberal. Agrupados en lo que se dio en llamar el "Club de La Habana", estas personas consideraban que la incorporación de la isla a Estados Unidos sería la mejor garantía para preservar sus extensos intereses, que en conjunto incluían unos 40 ingenios y algo más de 15 000 esclavos. Para promover su proyecto, contaban sobre todo con excelentes contactos —incluso familiares— con algunos políticos sureños de gran influencia dentro de la administración de James Polk, que con la anexión de Texas en 1845 y la consiguiente guerra contra México había llevado el expansionismo norteamericano a uno de sus momentos culminantes. En el caso de Cuba, los poderosos miembros del Club no se inclinaban hacia una anexión por métodos violentos, sino por el traspaso de la isla a Estados Unidos por parte de España mediante una pacífica compraventa, infructuosa operación que por un monto de 100 millones de dólares propuso la administración Polk al gobierno de Madrid en 1848.

Si bien para los acaudalados clubistas habaneros la anexión debía ser una maniobra de "alta política", tampoco fueron remisos a concertar sus esfuerzos con otros grupos algo más radicales que veían en la propaganda y la conspiración los medios más apropiados para alcanzar sus objetivos, en el entendido de que esas amenazadoras actividades podían resultar útiles para arran-

car concesiones a España. Entre esos activistas figuraba un conjunto de exiliados, algunos de ellos involucrados antaño en conspiraciones separatistas, que agrupados en torno al camagüeyano Gaspar Betancourt Cisneros —"El Lugareño"— publicaban en Nueva York el periódico *La Verdad*. Para ese grupo —que contaba con ramificaciones en Puerto Príncipe y algunas localidades orientales— el principal beneficio que reportaría la anexión, más que la preservación de la esclavitud, sería el progreso económico, político y cultural que traería aparejado el asentamiento en Cuba de decenas de miles de colonos blancos. Otro activo núcleo conspirador estaba integrado por hacendados y profesionales de Trinidad, Sancti Spíritus y varias villas del centro de la isla, que se nuclearon en torno al liderazgo de un general de origen venezolano, Narciso López, quien, tras haber alcanzado muy elevada jerarquía en el ejército español —llegó a ser gobernador de Trinidad y presidente de la represiva Comisión Militar—, se había visto apartado del poder cuando las alternativas de la política española provocaron su licenciamiento. Fracasado en varios proyectos empresariales, López se embarcó en los trajines conspirativos junto con algunos socios y vecinos que profesaban un anexionismo de corte conservador. La conspiración, conocida como la "Mina de la Rosa Cubana", se fue extendiendo por la región central y estableció contactos con el Club de La Habana, hasta que una delación puso sobre aviso a las autoridades coloniales y el venezolano se vio obligado a huir de la isla.

A los reveses iniciales del anexionismo, hubo de sumarse la crítica acerba de esa corriente por parte de José Antonio Saco, quien en encendida polémica con "El Lugareño" y los redactores de *La Verdad* denunció la anexión como un escollo mortal contra el cual naufragaría la naciente nacionalidad cubana, criterio que parece haber hecho mella en algunos miembros del Club de La Habana. Sin embargo, la fallida gestión de compra de la isla por Estados Unidos, así como la oleada revolucionaria que había llevado en Francia y otras naciones europeas a la abolición de la

esclavitud, infundió en los anexionistas un sentimiento de urgencia inclinándolos a forzar las acciones por la vía militar. Fracasado el intento de captar a un afamado general norteamericano para que dirigiese una invasión a la isla, la llegada de López a Estados Unidos hizo converger sobre su persona todas las esperanzas. Con el apoyo de importantes políticos sureños y los recursos aportados por algunos cubanos pudientes, el general venezolano organizó una expedición de 400 hombres —casi todos norteamericanos y europeos— con los cuales desembarcó en Cárdenas en 1850; allí hizo tremolar una bandera tricolor —visiblemente influida por la de Texas—, pero ante la falta de apoyo local decidió retirarse. López repetiría su tentativa al año siguiente por la costa norte de Pinar del Río, ocasión en la que el venezolano corrió peor suerte, pues derrotado el contingente expedicionario fue capturado y ejecutado en La Habana. Por esos mismos días era fusilado en Camagüey, tras levantarse en armas, Joaquín de Agüero, un hacendado de dicha región cuya confesa adhesión al abolicionismo atestigua las variadas motivaciones ideológicas que animaban a los partidarios de la anexión.

A pesar de estos fiascos, el anexionismo alentaría aún otros movimientos conspirativos, como la llamada “conspiración de Vuelta Abajo”, abortada en 1852 y la que tres años después costaría la vida al rico comerciante catalán Ramón Pintó. Este complot, el último en la lista de las intentonas anexionistas, resulta muy significativo, no solo porque Pintó era íntimo del capitán general José Gutiérrez de la Concha, sino porque parece indicar el retorno de la iniciativa de anexión a los más altos círculos del poder económico. Coincidentemente, la administración de Franklin Pierce hizo una nueva oferta de compra de Cuba a España, en esta ocasión por 130 millones de dólares, la cual fue rechazada una vez más a pesar de haber sido respaldada con un amenazador manifiesto por los embajadores norteamericanos en las principales capitales europeas. Más que por esa sucesión de fracasos, el ocaso del anexionismo estuvo determinado por la propia política

estadounidense, cuyo delicado equilibrio quedaría definitivamente quebrado en 1861 con el estallido de la Guerra Civil.

Disuelto como movimiento político, el anexionismo habría de perdurar como tendencia ideológica para rebrotar esporádicamente en el curso ulterior de la historia cubana. En lo inmediato, el grupo de los anexionistas democráticos, en su mayoría exiliados en Estados Unidos, radicalizaría sus posiciones e iría evolucionando hacia el independentismo. Considerada por sus propios partidarios más como un cálculo que como un ideal, la anexión había representado la mayor amenaza para el desarrollo futuro de la nación cubana, no obstante lo cual legaría a esta, paradójicamente, algunos de sus símbolos —la bandera y el escudo nacionales— más preciados.

FINAL DE UNA ILUSIÓN

Algo más de una década de intentonas anexionistas había hecho comprender al gobierno español la necesidad de delinear de una manera más clara y estable su política colonial en Cuba. La gestión del capitán general Gutiérrez de la Concha durante sus dos mandatos en la isla apuntaba en esa dirección, no solo por las medidas tomadas para incrementar la eficacia de la administración, sino porque por primera vez en años convocó a miembros de la élite criolla — incluyendo a algunas personalidades notoriamente involucradas en trajines anexionistas— a participar en ciertas funciones gubernativas. En 1856, el ascenso al poder en Madrid de la Unión Liberal despejó de manera definitiva el camino para que en la política cubana prevaleciesen nuevamente las expectativas de reforma. En el desenvolvimiento de dicha tendencia resultó determinante el nombramiento sucesivo como gobernadores de la isla de los generales Francisco Serrano y Domingo Dulce, casados ambos con ricas herederas de la nobleza criolla, conexión que representó para la oligarquía la posi-

bilidad de anudar nexos con el poder como no existían desde los memorables gobiernos de Luis de las Casas y el marqués de Someruelos. Un factor adicional entre las condiciones favorables al reformismo sería el empeño de los gobiernos de la Unión Liberal por restaurar para España una imagen de potencia, política que los condujo a iniciar empresas coloniales en África, a involucrarse en la intervención francesa en México, a intentar la anexión de Santo Domingo y otras aventuras parecidas, varias de las cuales cargaron sus gastos al Tesoro cubano.

Una de las primeras medidas de Serrano, la reorganización del régimen municipal para posibilitar la elección de los regidores por un mayor número de contribuyentes, fue claro indicio de una voluntad de entendimiento. A guisa de ratificación, en 1861 se creaba un Consejo de Administración con facultades asesoras y jurídicas en el cual participarían, junto a los más altos funcionarios coloniales, algunos notables de la isla designados por la Corona. En un paso todavía más osado, el propio gobernador invitó a un grupo de prominentes criollos a que constituyesen el "círculo reformista", en cuyas reuniones podrían formular y debatir los cambios económicos, sociales y hasta políticos que se entendiesen útiles para el progreso de la isla.

Fue así como por tercera ocasión tomó cuerpo en Cuba un movimiento político que propugnaba reformas al régimen colonial. Aunque no faltaron personalidades de vuelo intelectual en su dirigencia —el economista Francisco Frías, conde de Pozos Dulces, por ejemplo— esta se caracterizó por la presencia de figuras descollantes en el mundo de los negocios, ya fuese debido a la magnitud de sus propiedades, como lo eran el millonario Miguel Aldama y su cuñado José Luis Alfonso, o por la relevancia de sus conexiones, cual era el caso de José Morales Lemus, propietario del más activo bufete de La Habana. En 1862 los reformistas comenzaron a publicar *El Siglo*, periódico en cuyas páginas irían dando forma a su programa mediante la enunciación de una serie de demandas. Entre estas figuraban la sepa-

ración de las funciones políticas y militares dentro de las atribuciones del gobernador de la isla, garantías contra los arrestos arbitrarios y la confiscación de propiedades, fomento de la inmigración blanca, representación cubana en las Cortes, así como la reforma de los aranceles y la tributación. Un lugar prominente entre dichos reclamos correspondía a la cuestión de la esclavitud, no solo en lo relativo a supresión de la trata —que una vez más se exigía hacer efectiva—, sino respecto al destino mismo de la institución, a todas luces ya condenada a desaparecer.

El nuevo proyecto reformista surgía en condiciones bien distintas al auge económico que presidiera los intentos anteriores. Si bien la producción de azúcar mostraba un moderado crecimiento, a partir de 1857 el precio del dulce había experimentado una sensible declinación, justo cuando la carestía de fuerza de trabajo comenzaba a presionar sobre los costos. En ese mismo año una crisis dio al traste con la incipiente estructura financiera de la economía insular, llevando a la quiebra a instituciones bancarias y a decenas de establecimientos comerciales, desastre que arrastró también a más de un centenar de ingenios que desaparecieron o cambiaron de manos, pues 95% de esas propiedades se hallaban sujetas a hipotecas que las colocaban a merced de los comerciantes prestamistas. Como aproximadamente la mitad del capital fijo de los ingenios estaba representado por el valor de sus esclavos, ante el futuro incierto de la esclavitud los hacendados depositaban sus esperanzas en que la abolición fuese indemnizada, compromiso que el Estado español no parecía propenso a asumir. De tal suerte, la problemática que los reformistas enunciaban bajo el eufemístico rubro de la "cuestión social", consistía sobre todo en encontrar una salida a la esclavitud que resultase viable para el negocio azucarero y lo mantuviese en manos de sus propietarios.

Espoleados por la abolición de la esclavitud en Estados Unidos y la previsible victoria del Norte en el conflicto que ensangrentaba aquel país, los reformistas apresuraron sus gestiones y en mayo de 1865 publicaron un memorándum en el cual sintetiza-

ban sus aspiraciones fundamentales: reforma arancelaria, representación cubana en Cortes, igualdad de régimen jurídico entre la isla y su metrópoli y definitiva supresión de la trata. El documento, para el cual consiguieron el respaldo de 24 000 firmas, daría inicio a un activo intercambio de criterios entre la élite criolla y relevantes personalidades del gobierno de Madrid. El sesgo que tomaban los acontecimientos movilizó en la isla al llamado "comité español", agrupación de los más poderosos comerciantes y propietarios peninsulares cuyo origen se remontaba a la camarilla palaciega de tratantes negreros que surgiera en tiempos del gobernador Tacón. En carta dirigida a la reina, esos "notables" admitían la necesidad de reformas en el régimen de comercio y la tributación, así como respecto a la trata —que daban por eliminada—, pero rechazaban rotundamente las reformas políticas que a su juicio pondrían en peligro la integridad nacional, fórmula en la cual envolvían la sujeción de la isla al poder español y por cuya defensa se les conocería como "integristas". En su réplica, los reformistas insistirían en que los cambios políticos debían preceder a la reforma arancelaria y a la social, concebida esta última en términos de una abolición gradual e indemnizada de corte muy conservador.

Ante las posiciones discrepantes, el ministro de Ultramar, Antonio Cánovas del Castillo, decidió convocar en noviembre de 1865 a una Junta de Información que tendría lugar en Madrid al año siguiente, con el objetivo central de someter a la consideración de sus integrantes un cuestionario relativo a los principales problemas que requerían solución dentro del régimen colonial. Para integrar la Junta, en las colonias se elegirían 22 comisionados, 16 en representación de Cuba y seis de Puerto Rico, a quienes se unirían otras 22 personalidades designadas por el ministerio de Ultramar. A pesar de que los procedimientos establecidos para la elección de estos delegados se manipularon en favor del grupo peninsular, los reformistas obtuvieron una resonante victoria, pues lograron elegir a 12 de los 16 representantes de Cuba y una proporción todavía mayor de los puertorriqueños. Para

contrarrestar dicho resultado, los miembros del "comité español" obtuvieron una mayoría de personas afines a sus posiciones entre los comisionados designados y, medida de mayor trascendencia aún, que Domingo Dulce fuese sustituido en el gobierno de Cuba por Francisco Lersundi, general reaccionario, de despótico talante, que apenas llegado a la isla prohibió las reuniones políticas y consiguió disolver el círculo reformista.

Pospuesta por un cambio de gobierno en Madrid, la Junta solo inició sus sesiones en noviembre de 1866. Para sorpresa de los reformistas, una modificación de la agenda desplazó a último término la "cuestión política", de manera que las discusiones comenzaron por los problemas relativos al régimen laboral y la fuerza de trabajo, asunto sobre el cual se hizo evidente el generalizado interés por aprontar fórmulas que, como la abolición gradual e indemnizada, aliviasen la creciente presión internacional sobre el sistema esclavista. Respecto a ese punto y, todavía más, en la problemática económica fue posible alcanzar cierto consenso, pues tanto reformistas como integristas se mostraban partidarios de que el comercio en las Antillas tendiese al librecambio y coincidían en la racionalización del régimen tributario, concentrándolo en una sola contribución de 6% sobre la renta líquida. Relegadas a los últimos días, las conferencias sobre asuntos políticos fueron, en cambio, escenario de muy serias discrepancias, pues incluso en el seno del reformismo se evidenciaron diferencias entre los partidarios de una representación cubana en Cortes y los que, como Saco, propugnaban un régimen especial de tipo autonómico. A finales de abril de 1867 el gobierno dio por terminados los trabajos de la Junta de Información sin asumir compromiso alguno, con el único resultado visible de una reforma fiscal que pocos meses después implantaría un impuesto único de 10%, decisión apreciada en las colonias como un incremento de la presión fiscal. Con sus expectativas frustradas una vez más y en un acentuado ambiente represivo, el reformismo optó por retirarse de la escena política.

6
EL CAMINO DE LA INDEPENDENCIA

Décadas de sordos enfrentamientos y amargas frustraciones habían hecho evidente que los graves problemas económicos, sociales y políticos que planteaba la modernización de la sociedad cubana no podrían solucionarse bajo el régimen colonial español. Al mismo tiempo, en la isla había venido madurando una conciencia nacional, desigualmente compartida aún, pero fraguada hasta el punto necesario para que un vasto sector de la población se sintiese impulsado a la búsqueda de una salida radical, capaz de erigir a Cuba en un Estado soberano. Iniciada con medio siglo de retraso respecto al continente, la gesta cubana por la independencia habría de desplegarse en solitario, durante largos años de combate.

SE FRAGUA LA INSURRECCIÓN

A finales de 1866, cuando se iniciaban las sesiones de la Junta de Información, una contracción en el precio del azúcar hundió nuevamente a la isla en un cuadro recesivo, caracterizado por suspensiones de pagos, quiebras de casas comerciales, ejecución de hipotecas incumplidas y otras incidencias que creaban un clima de agobio e incertidumbre. En tales condiciones hubieron de conocerse los cambios en el régimen tributario, a primera vista destinados a engrosar un presupuesto cuyos gastos en más de 80% se destinaban a las partidas de “guerra y marina”, así como a satisfacer las necesidades de una administración

colonial plagada de funcionarios ineficientes y venales. La coyuntura enconaba así antiguas contradicciones en una sociedad donde casi 100 000 peninsulares —7% de la población— controlaban la mayoría de los puestos públicos y las plazas del comercio, haciendo de los antagonismos nacionales un hecho cotidiano, circunstancia agravada por los prejuicios étnicos. Este último factor dividía también a la población cubana, hasta el punto de haber constituido un obstáculo esencial para la independencia, pero a esas alturas del proceso histórico ya era claro para los criollos independentistas que el pueblo —en particular el sector negro y mulato— solo se lanzaría a la lucha si el programa de la independencia comportaba respuestas a los problemas de la esclavitud y la discriminación racial.

La acentuación de las contradicciones coloniales por el deterioro de la situación socioeconómica ocurría en una coyuntura internacional ciertamente favorable al proyecto independentista. En primer término la victoria del Norte en la Guerra Civil norteamericana no presagiaba buenas relaciones entre Washington y España, pues la monarquía ibérica había reconocido la beligerancia y auxiliado de manera más o menos manifiesta a la Confederación sureña. Respecto a Latinoamérica, el apoyo español a la intervención francesa en México, el conflicto con Perú y Chile por las islas Chinchas y la anexión dominicana, habían retrotraído la animadversión contra la Península a sus peores momentos en el siglo. El desastroso final de esas aventuras hacía, por cierto, muy poco favor al prestigio de la metrópoli ante los ojos de los cubanos, que habían visto desfilar las tropas maltrechas que regresaban de México y Santo Domingo, al tiempo que los hospitales de la isla se repletaban de soldados heridos o enfermos. Por último, el triunfo de la revolución liberal española que en septiembre de 1868 destronó a la reina Isabel II, abrió una etapa de notable inestabilidad en la situación política de la metrópoli.

Aunque el repudio al estatus colonial estaba bastante generalizado entre los cubanos, este se hacía más acerbo en las re-

giones orientales de la isla donde apenas se había dejado sentir la prosperidad de que disfrutara el Occidente durante las décadas anteriores. Marginados del gran desarrollo azucarero, relativamente limitados en su acceso a los mercados, con menores producciones y aquejados por las deudas, los propietarios de Camagüey y Oriente resultaban más débiles ante la crisis y se sentían especialmente perjudicados por la política fiscal española que, por ejemplo, arrebataba a los ganaderos camagüeyanos hasta 25% de las ganancias obtenidas por la venta de cada cabeza de ganado. En esa parte del país, donde el número de esclavos era relativamente bajo, mayor la población libre de color y algo más tenues los prejuicios raciales —y menor la presencia de pobladores peninsulares—, el escenario resultaba muy propicio para la rebelión.

Aún no se había hecho patente el fracaso de la Junta de Información y ya en las logias masónicas de Santiago de Cuba, Puerto Príncipe, Bayamo, Las Tunas y Holguín se conspiraba por la independencia, conducta seguida poco después en Santa Clara, Sancti Spíritus, Trinidad y Cienfuegos. Los participantes en las reuniones masónicas eran principalmente propietarios blancos de condición más o menos acomodada, personas a quienes su relevancia social en las respectivas localidades les facilitaba el establecimiento de redes conspirativas con la participación de individuos de diversos estratos sociales. En la articulación de su proyecto esos grupos, además de relacionarse entre sí, establecieron contacto con la antigua dirigencia reformista habanera —en particular con José Morales Lemus— de la cual recibieron un cauteloso respaldo, actitud contrastante con el entusiasmo que despertó entre los jóvenes profesionales capitalinos el plan independentista. En el verano de 1868 la conspiración había madurado lo suficiente para un levantamiento, solo que la fecha más apropiada para llevarlo a cabo suscitaba discrepancias entre quienes proponían hacerlo de inmediato y los que consideraban conveniente aplazarlo hasta concluir la siguiente zafra para dis-

poner de más recursos. Finalmente, la noticia de que la trama había sido descubierta impulsó al jefe de los conspiradores en la zona de Manzanillo, el abogado bayamés Carlos Manuel de Céspedes, a levantarse en armas en su pequeño ingenio Demajagua el 10 de octubre de 1868.

LA GUERRA DE LOS DIEZ AÑOS

El alzamiento de Céspedes tomó por sorpresa a los restantes conspiradores, que en su mayoría lo conocieron al difundirse la noticia del fallido intento insurreccional de tomar el poblado de Yara. Los complotados orientales, sin embargo, secundaron el movimiento y con la incorporación de cientos de campesinos y pobladores blancos y negros —incluso esclavos liberados por sus amos, como hiciera el propio Céspedes— consiguieron ocupar la ciudad de Bayamo y otras poblaciones de la región. Para la conducción de las bisoñas tropas cubanas resultó decisiva la participación de un grupo de oficiales dominicanos, curtidos de la reciente guerra "restauradora" de su país, que decidieron sumarse al movimiento rebelde. Generalizada la insurrección por el territorio oriental, a principios de noviembre los camagüeyanos se alzaron en la hacienda Las Clavellinas, aunque sin reconocer la autoridad de Céspedes —cuya jefatura había sido acatada por los orientales— y tomando como símbolo nacional la bandera que años antes enarbolara Narciso López en Cárdenas. Los conspiradores en la central región de Las Villas dilataron aún más su decisión —hasta febrero de 1869—, pues prefirieron esperar instrucciones de la dirigencia conspirativa de Occidente, región donde la rebelión no fue más allá de aislados conatos.

El movimiento independentista había logrado extenderse por más de la mitad del país, pero su debilidad era notoria, no solo debido a la ausencia de una dirección única, reconocida por

todos, sino por su pobre armamento y preparación militar. Incapaces de contener la ofensiva española en el valle del Cauto, los insurrectos orientales tuvieron que abandonar sus posiciones en los poblados, incluyendo la ciudad de Bayamo de la cual se retiraron después de incendiarla. Para prevalecer, la insurrección necesitaba una organización, tanto militar como civil, a la cual solo podría llegarse mediante la concertación de esfuerzos y una clara definición de objetivos. La dirigencia revolucionaria había emprendido el camino de la independencia, mas en sus acciones se apreciaba el estorbo que representaba el bagaje ideológico acumulado por la política criolla a lo largo de su problemática trayectoria. Aunque decididamente independentista y hasta radical en sus pronunciamientos —reivindicaba, por ejemplo, el sufragio universal—, el manifiesto redactado por Céspedes para dar a conocer los propósitos de su levantamiento pretendía también ganar para su causa a los hacendados y propietarios de toda la isla, por lo cual asumía varios de los postulados programáticos del reformismo, entre estos la abolición gradual e indemnizada de la esclavitud. Dicha posición atizaba las discrepancias con los camagüeyanos, partidarios decididos de la abolición, aunque no menos lastrados por vacilaciones reformistas, como se encargaría de demostrarlo la temprana deserción de algunos de sus principales dirigentes. En la Junta Revolucionaria de La Habana, integrada por varios prohombres de reformismo, no se había renunciado a la posibilidad de un arreglo con España, y si dicha tendencia no prosperó fue sobre todo porque la conducta desaforada de los "integristas" peninsulares en la capital cerró el paso a cualquier avenencia. Incluso algunos connotados jefes insurrectos, en los difíciles momentos que siguieron a la ofensiva española sobre Bayamo y otras zonas orientales, llegaron a permitirse ciertos devaneos anexionistas, afanosos por conseguir el apoyo del gobierno estadounidense. La definitiva vertebración del movimiento revolucionario por la independencia, al exigir definiciones, implicaba también su radicalización.

Un paso decisivo en tal sentido se dio en el poblado de Guáimaro —Camagüey— donde los representantes de las distintas fuerzas insurrectas se reunieron en abril de 1869 para redactar una constitución. El breve texto creaba el Estado cubano bajo la forma de una "República en armas", con un gobierno cuyas atribuciones fueron claramente definidas. Como órgano supremo se establecía una Cámara de Representantes, a la cual se subordinaban tanto el mando militar representado por el general en jefe del Ejército Libertador, como el propio presidente de la República, cargo para el cual fue elegido Carlos Manuel de Céspedes. Adoptada con la evidente intención de evitar el caudillismo que había viciado las independencias latinoamericanas, tan complicada fórmula de gobierno plagaría de dificultades la conducción de la revolución. Al reconocer los derechos ciudadanos, la Constitución proclamó como enteramente libres a todos los habitantes de la República, dejando tácitamente resuelta la cuestión de la esclavitud, aunque la reglamentación posterior de este asunto no estaría exenta de contradicciones. La integración de la Cámara, así como la designación de los cuatro secretarios de despacho que auxiliarían al presidente de la República e incluso la determinación de los símbolos nacionales, fueron resultado de transacciones entre las distintas delegaciones, claro reflejo de la heterogeneidad de los intereses —sociales y regionales— presentes en la reunión. La importante representación de la revolución en el exterior, que no solo debía recabar el reconocimiento de la República cubana sino enviar expediciones para pertrechar y reforzar las fuerzas libertadoras, recayó en Morales Lemus, quien en unión de otras personalidades de la Junta Revolucionaria habanera se había visto obligado a exiliarse en Estados Unidos.

El triunfo de la revolución de septiembre de 1868 en España —"La Gloriosa"— había llevado al poder a hombres que como los generales Juan Prim y Francisco Serrano mantenían buena comunicación con la élite cubana, razón por la cual su estrategia inicial se inclinó al apaciguamiento. Para ello enviaron a Cuba

como capitán general a Domingo Dulce, quien sin cejar en las acciones tendientes a aplastar la insurrección —junto con él arribaron importantes refuerzos militares—, aplicó en la isla algunas medidas democratizadoras como la libertad de prensa, que habían sido implantadas en la Península por la "Gloriosa", e inició conversaciones con prominentes personalidades criollas. Pero esa política encontró un enemigo formidable, y no en el independentismo, sino en los integristas del poderoso "comité español". Temerosos de que las posibles concesiones de los liberales madrileños les hiciesen perder la primacía económica de que disfrutaban en la isla, esos acaudalados comerciantes y hacendados movilizaron a sus extensas clientelas convirtiéndolas en un agresivo mecanismo de presión. El medio utilizado fue la revitalización del Cuerpo de Voluntarios, creado en la época de las expediciones anexionistas, cuyos batallones estaban integrados principalmente por peninsulares dependientes del comercio, armados y comandados por los potentados integristas. Los voluntarios crearon una atmósfera de terror en las ciudades de la isla; bajo el pretexto de aplastar a los conspiradores —o "laborantes"— lo mismo irrumpían a tiros en un teatro, que imponían encarcelamientos y deportaciones sin mediar juicio alguno o saqueaban el palacio de la familia Aldama, acción esta última que determinó el exilio de la mayoría de los antiguos dirigentes reformistas. No contentos con frustrar la gestión pacificadora del gobernador Dulce dejándolo sin interlocutores, los voluntarios expulsaron a este de la isla tras escenificar un genuino golpe de Estado. Aunque desde Madrid se nombraron nuevas autoridades, los voluntarios quedaron como verdaderos dueños de la situación y desataron una incontenible escalada represiva cuyo punto culminante, en noviembre de 1871, sería el fusilamiento de ocho estudiantes de medicina, acusados de haber profanado la tumba de un periodista español. Alimentado por el rencor y las bajas pasiones, el conflicto que enfrentaba cubanos y españoles se desarrollaría con visceral ensañamiento.

Si la ofensiva hispana no pudo aniquilar la insurrección, al menos consiguió confinarla al este de la isla. Después de haber forzado la retirada de los rebeldes villareños hacia Camagüey, el mando español tendió una línea de fortificaciones —o trocha— en el límite oeste de ese territorio, con el propósito de impedir el acceso de las fuerzas cubanas a las ricas zonas azucareras de Occidente. Como la economía insular había sufrido relativamente poco a consecuencia de las hostilidades —de hecho la producción azucarera seguiría creciendo hasta mediados de los años setenta—, España podía extraer de la propia Cuba los recursos necesarios para sofocar los afanes de independencia. El éxito y hasta la sobrevivencia misma del movimiento libertador dependían de la capacidad de los cubanos para extender el teatro de sus operaciones y hacer de la guerra una verdadera contienda nacional.

Recuperados de los iniciales descalabros y con algún armamento recibido del exterior, los mambises —como se llamaba a los combatientes cubanos— habían logrado organizar su ejército y realizar algunas campañas exitosas, como lo demostrara la invasión dirigida por el general dominicano Máximo Gómez al rico valle de Guantánamo en 1871 —única zona oriental que se había mantenido al margen de las hostilidades—, o las sobresalientes acciones de la caballería camagüeyana comandada por Ignacio Agramonte, joven y brillante abogado ahora convertido en sagaz jefe militar. Pero las operaciones cubanas no lograban sobrepasar el ámbito regional; al crear el cargo de general en jefe la Constitución había establecido las premisas de una unidad de mando, pero en la práctica esta no llegó a cuajar. El primer oficial designado para el cargo, el general Manuel de Quesada —un militar camagüeyano, veterano de la guerra de México contra el invasor francés— fue destituido meses después cuando la Cámara interpretó como afanes dictatoriales sus justos reclamos de autonomía de mando. Thomas Jordan, un general norteamericano designado para sustituirlo, renunció al poco tiempo sin

haber llegado a comprender las características de la contienda cubana. El siguiente general en jefe, Federico Fernández Cavada —revolucionario cienfueguero que había ganado el grado de coronel de la Unión durante la Guerra Civil norteamericana—, tras varios intentos infructuosos por llevar la guerra al occidente para golpear la base económica colonialista fue capturado y fusilado por los españoles. En lo sucesivo el cargo de general en jefe se mantendría vacante, quedando la coordinación de las operaciones en manos del Poder Ejecutivo. No obstante, las notorias desavenencias entre el presidente Céspedes y la Cámara imposibilitaban la formulación de una estrategia y, todavía más, su aplicación. El celo con que el abogado bayamés defendía las prerrogativas presidenciales en la conducción de la guerra, frecuentemente era tomado por la Cámara como expresión de autoritarismo, estado de cosas a cuya solución no contribuía el talante categórico del presidente, que también generaba fricciones con algunos jefes militares. Las crecientes diferencias condujeron a la deposición de Céspedes por la Cámara en 1873, así como a la posterior muerte en combate de la primera figura de la revolución, al ser descubierto su refugio en la Sierra Maestra por un destacamento español.

Si bien la destitución presidencial sentaba un funesto precedente, en lo inmediato propició una mayor coherencia en la conducción de la guerra, al ser elegido para el cargo Salvador Cisneros Betancourt que hasta entonces había encabezado la Cámara de Representantes. Una de las más acertadas decisiones del nuevo Ejecutivo fue el nombramiento de Máximo Gómez para cubrir la sensible pérdida que en el mando del Camagüey había causado la muerte de Ignacio Agramonte, caído en combate en mayo de 1873. Gómez llegó a territorio camagüeyano acompañado de un nutrido refuerzo oriental, en el cual figuraban capaces oficiales como Antonio Maceo, que se habían formado bajo su mando. Con instrucciones de extender la guerra al Occidente, el general dominicano ejercitó sus tropas en una secuencia de

exitosos combates en torno a Puerto Príncipe, entre estos la batalla de Las Guásimas —marzo de 1874—, en la cual logró imponerse a una fuerza española que superaba los 4 000 hombres. Concluida esa campaña, Gómez cruzó la trocha y extendió sus operaciones por todo el territorio villareño hasta llevar sus avanzadas a la zona azucarera de Matanzas. Con el desgaste ocasionado por meses de incesantes combates, la tropa invasora requería refuerzos para continuar su marcha hacia Occidente, pero el contingente de orientales que se había dispuesto a tal efecto se involucró en la sublevación escenificada por el general Vicente García en Lagunas de Varona —abril de 1875—, sedición que culminó en la renuncia de Cisneros y la desmovilización del refuerzo oriental. Los sentimientos regionalistas exacerbados por esa insubordinación terminaron extendiéndose a otras unidades del Ejército Libertador; el propio Gómez hubo de sufrirlos, pues empantanadas sus fuerzas en Las Villas los oficiales villareños comenzaron a rechazar la autoridad de los jefes camagüeyanos y orientales, hasta que estos, y el propio general dominicano, se vieron forzados a abandonar ese territorio. Antes de concluir el año 1876 el esfuerzo bélico cubano se hallaba visiblemente quebrantado.

Al desgaste del independentismo contribuían también factores externos, en particular las pugnas en el seno de la emigración cubana en Estados Unidos. La Agencia General, creada en ese país para representar y allegar recursos a la revolución independentista, logró enviar a la isla algunas importantes expediciones durante los primeros años de la guerra, pero después quedó paralizada por las disensiones entre Miguel Aldama y sus colaboradores, que se habían hecho cargo de la Agencia tras la muerte de Morales Lemus, y un sector más radical de exiliados nucleado en torno a Manuel de Quesada, quien se radicó en Estados Unidos después de haber sido relevado como general en jefe. La otra tarea de la representación exterior, obtener el reconocimiento de la República en armas, había conseguido éxitos en algunos países

latinoamericanos, pero no así en Estados Unidos cuyo reconocimiento de la beligerancia cubana se consideraba vital. Con evidente duplicidad, la administración de Ulises Grant se hizo de la vista gorda frente a la preparación de algunas expediciones cubanas, a la vez que vendía a España las cañoneras necesarias para interceptarlas. Washington tantearía nuevamente las posibilidades de una venta de la isla por España, en una ocasión como mediador a instancias de la representación cubana, pero más adelante por evidente revitalización de sus apetencias anexionistas. Cada vez más distante del independentismo cubano, la política norteamericana optó por atenerse al paciente principio de la "fruta madura", que en la práctica sostenía la dominación española en Cuba.

Aislada en lo internacional y con su fuerza militar francamente debilitada, la revolución independentista debió enfrentar la difícil coyuntura que para sus propósitos representó la restauración de un monarca Borbón en el trono madrileño. Precisamente uno de los artífices de tal evento, el general Arsenio Martínez Campos, sería enviado a la isla con la misión de pacificarla. Para apoyar su gestión se concertó un crecido empréstito con el cual se pertrecharon decenas de miles de hombres para reforzar al ejército español en Cuba. Según los cálculos, durante los 10 años de guerra España envió a la isla algo más de 200 000 soldados, una fuerza que obviamente sufrió bajas, deserciones y relevos, a pesar de lo cual Martínez Campos pudo contar con casi la mitad de esos efectivos. Aun sin incluir a los batallones de voluntarios y los colaboradores —"guerrilleros"— cubanos, en 1877 el mando español podía mantener en el teatro de operaciones una fuerza varias veces superior —y bastante mejor armada— que la del Ejército Libertador. Sin dejar de hacer sentir el peso de sus tropas, el jefe español puso en práctica un nuevo estilo de combate que excluía las sangrientas represalias y aseguraba el perdón a los mambises que entregasen las armas, a la vez que disponía el reparto de alimen-

tos entre la población de las zonas insurrectas y ofrecía el reintegro de los bienes embargados a los independentistas que depusiesen su actitud.

La nueva estrategia demostró ser efectiva con un sector de la insurrección cuya moral se hallaba minada por la quiebra de la unidad y la escasez de recursos bélicos. En febrero de 1878, tras disolverse la Cámara de Representantes, un comité creado al efecto pactaba la paz con Martínez Campos en un punto del territorio camagüeyano. El Convenio del Zanjón, que concedía a Cuba las mismas prerrogativas políticas de que disfrutaba Puerto Rico, al proclamar "el olvido de lo pasado" disponía un perdón generalizado, facilitaba la salida de la isla a todo insurrecto que así lo desease y reconocía además la libertad de los antiguos esclavos que se hallasen en las filas del Ejército Libertador. Aunque lo pactado se daba por válido para todas las regiones del país, varias unidades cubanas decidieron mantenerse al margen del arreglo, aunque su actitud adolecía de la indispensable coordinación. El más resonante y organizado de los rechazos fue el presentado por las fuerzas libertadoras del extremo oriental de Cuba, al mando del general Antonio Maceo. Este convocó a conversaciones a Martínez Campos en un sitio conocido como Mangos de Baraguá, donde le hizo saber que sus hombres no aceptaban una paz sin independencia ni abolición de la esclavitud. Las posibilidades de continuar la lucha con perspectivas de triunfo eran prácticamente nulas, pero la acción protagonizada por Maceo tenía honda significación. Que la representación última del independentismo cubano fuese un arriero mulato, en cuyo estado mayor figuraban propietarios y profesionales blancos, junto a campesinos y artesanos negros e incluso antiguos esclavos, demostraba tanto el ascenso social propiciado por la guerra, como la capacidad del proyecto de independencia para unir a los cubanos por encima de diferencias de raza, situación económica o condición social.

INTERMEDIO MODERNIZADOR

En 1878, más que al fin de una guerra, en Cuba se asistía al término de una época. La sociedad cubana se había transformado en diversos aspectos durante los 10 años de la contienda, expresión sustancial de los profundos cambios que entrañaba su tránsito a la modernidad capitalista.

Con la guerra los problemas de la isla lejos de aliviarse se habían agravado. En las regiones del este la devastación era abrumadora. La jurisdicción de Santiago de Cuba había visto desaparecer 60% de sus ingenios, en Sancti Spíritus, de 43 ingenios existentes en 1861, en 1877 solo quedaban tres activos, mientras que en Camagüey, Bayamo y Manzanillo no había sobrevivido ninguno. De la otrora floreciente ganadería camagüeyana apenas quedaba algún bovino y la producción cafetalera oriental se hallaba prácticamente colapsada. Esas regiones del país tendrían que enfrentar los desafíos de su reconstrucción sin disponer de especial asistencia. Pero la guerra también tuvo efectos económicos indirectos que todos padecían; para sostener su esfuerzo militar España había cargado a la Hacienda cubana con una deuda de más de 100 millones de pesos cuyo servicio engullía una parte sustancial del presupuesto. Ese factor y el consiguiente desorden monetario provocaban una notable contracción del crédito, justamente cuando más se le necesitaba.

Desde finales de la década de 1870 el precio del azúcar comenzó a declinar ante la creciente competencia remolachera en los mercados europeos. Con sus exportaciones apoyadas por subsidios, el azúcar de remolacha no tardó en desplazar al dulce cubano del mercado británico confinándolo prácticamente a Estados Unidos, pues la propia metrópoli española estimulaba la producción interna del dulce en perjuicio de sus colonias. Para sostenerse, la producción cubana debía ser competitiva y ello solo podría conseguirse mediante una costosa transformación. Aunque desde tiempo atrás en las fábricas azucareras de la isla

venían introduciéndose máquinas de vapor y otros medios mecánicos, existían grandes disparidades entre los ingenios y ninguno de ellos había logrado alcanzar un desarrollo plenamente industrial. La mecanización debía completarse ahora hasta adoptar una tecnología de procesamiento continuo, capaz de duplicar la proporción de azúcar extraída de la caña y alcanzar una escala de producción 10 o 20 veces superior a la habitual en las antiguas manufacturas, con la consiguiente reducción de costos. Al ampliarse la capacidad industrial, la demanda de materia prima aumentaba también a ritmo exponencial, por lo cual se estimaba que las nuevas fábricas necesitaban unas 1 500 hectáreas de cañaverales, que debían enlazarse con la industria mediante el ferrocarril para asegurar una oportuna recepción de la caña. Si a esto se añaden ciertos complementos indispensables como talleres, almacenes, etc., es posible tener una idea de la magnitud de las inversiones requeridas.

Con el esquema organizativo de las antiguas plantaciones, semejante transformación hubiese supuesto una demanda de capitales francamente prohibitiva; ni pensar siquiera en la posibilidad de llevarla a cabo con mano de obra esclava, no solo por el insostenible costo de las enormes dotaciones requeridas, sino porque la organización de tamaña masa de trabajadores en condiciones de servidumbre constituía una quimera. Se impuso así una nueva concepción del negocio azucarero que deslindaba su aspecto agrícola del industrial; el grueso de la producción cañera quedaría en manos de los "colonos", agricultores reclutados entre los propietarios arruinados, campesinos con fincas cercanas a la fábrica o arrendatarios asentados en tierras del ingenio, el cual, en virtud de su condición receptora de toda la producción cañera de los contornos, ahora comenzaría a denominarse "central". Entre los determinantes de la separación agroindustrial figuraba por tanto la abolición de la esclavitud, proceso que transcurría paralelo a aquella. El tránsito al trabajo libre no solo implicaba el más o menos gravoso pago de salarios, sino que re-

sultaba un proceso complicado desde el punto de vista organizativo pues suponía contratar y dirigir a cientos de peones durante las labores de la zafra, razón por cual la introducción del "colonato" constituyó también una respuesta al problema laboral.

La centralización, como se conoce ese proceso, se desarrolló con sorprendente rapidez. Del millar de ingenios existentes en la isla al finalizar la Guerra de los Diez Años, solo 400 subsistían en 1894, pero casi la mitad de estos eran potentes centrales, incluyendo algunos que se contaban entre las mayores fábricas de azúcar de caña en el mundo. Como evidencia de la exitosa transformación, en ese propio año la zafra cubana superó por vez primera el millón de toneladas, espectacular salto productivo que respondía también al impulso que representó el tratado de reciprocidad comercial concertado por España y Estados Unidos en 1891; las favorables condiciones que este acuerdo ofrecía para el azúcar crudo circunscribieron a ese producto primario las exportaciones cubanas del dulce, que se concentraron hasta un 90% en el mercado norteamericano. Como además la banca y las casas comerciales estadounidenses habían facilitado una parte sustancial del crédito para el equipamiento de los centrales, es fácil deducir que la modernización de la economía azucarera cubana llevaba aparejada una creciente dependencia respecto del país vecino.

Tanta o mayor trascendencia tuvo la liquidación de la esclavitud. La "odiosa institución" había salido herida de muerte de la contienda emancipadora, pues a la abolición que de facto proclamara la Constitución cubana, España respondió en 1870 con una ley de "vientres libres" que otorgaba la libertad a todos los que nacieran de madre esclava, así como a quienes arribasen a la edad de 60 años. Con manifiesta intencionalidad política, la ley reconocía igualmente como libres a todos los esclavos que sirviesen bajo la bandera española y prometía una ley de abolición al término de la guerra, compromiso que el reconocimiento de la libertad a los ex esclavos mambises por el Pacto del Zanjón tornó

impostergable. Para cumplirlo, en 1879 se encargó a una Junta de Reformas estudiar distintos proyectos de abolición, de los cuales se escogió una de las variantes más conservadoras como base de la ley promulgada en febrero de 1880. De acuerdo con esta, los 200 000 esclavos que —aproximadamente— había entonces en Cuba serían libres, pero se mantendrían trabajando para sus amos durante ocho años bajo un régimen de patronato, concebido para compensar a los propietarios dada la ausencia de una indemnización. Como el complicado procedimiento tampoco satisfacía de manera plena las aspiraciones de los propietarios, terminó por ser desechado un par de años antes que expirase, con lo cual los últimos esclavos quedaron enteramente libres en 1886.

La abolición dio paso a un reordenamiento del régimen laboral en la isla sobre bases salariales, así como a la creación de un mercado de trabajo, cambios estos que distaron de ser automáticos. De entrada, la abolición no significó la conversión masiva e inmediata de los antiguos esclavos en jornaleros, por más que muchos permaneciesen en los ingenios, alojados incluso en los barracones ahora convertidos en "cuarterías". En virtud de la centralización cientos de ingenios desaparecieron y sus antiguas dotaciones debieron buscar nuevos destinos en poblados y ciudades, en las labores de los centrales y también emigrando hacia las poco pobladas regiones orientales. Fue así que la abolición de la esclavitud, sin llegar al caos laboral que provocó en otras islas antillanas, creó en Cuba circunstancias complejas para el proceso de formación del mercado de trabajo, en el cual a la inmigración de trabajadores le correspondería un papel fundamental; entre 1878 y 1895 entraron en Cuba unos 300 000 españoles —sin contar militares—, parte de ellos de manera estacional, para hacer la zafra, pero la mayoría permaneció en la isla. Esa masa laboral sustituyó a los esclavos en ciertas labores, particularmente en la esfera industrial del azúcar que experimentó un notable "blanqueamiento". A pesar de todo los hacendados se

quejaban por la escasez de mano de obra, mientras que en las ciudades se registraba una paradójica situación de desempleo, así como la salida de numerosos emigrantes que buscaban trabajo en Estados Unidos. Esa corriente migratoria, iniciada durante la Guerra de los Diez Años por razones políticas, se mantendría con posterioridad debido al proteccionismo norteamericano que prácticamente cerró el mercado al tabaco elaborado, circunstancia que obligó a algunos empresarios, así como a un elevado número de tabaqueros a emigrar, para procesar la hoja en talleres creados en Cayo Hueso, Tampa y otras ciudades de la Unión.

Tan contradictoria situación en materia de empleo reflejaba serios problemas de ajuste en el mercado laboral, pues los jornaleros se mostraban renuentes a contratarse en las condiciones ofrecidas por los hacendados. Estos apelaron a recursos como la oferta de alojamiento o el crédito en la tienda del ingenio para atraer trabajadores, mientras que los asalariados se valían de su derecho a la libertad de movimiento conquistado con la abolición de la esclavitud e iban de un lugar a otro en busca de los mejores jornales. En las ciudades, donde el trabajo libre ocupaba un considerable espacio desde antaño, la negociación de las condiciones de trabajo revistió formas mejor organizadas, particularmente en el sector tabacalero cuyos talleres empleaban a miles de trabajadores. En esa rama se funda el primer gremio apenas concluida la guerra, organización que sería seguida por una Junta Central de Artesanos que agrupaba a tipógrafos, panaderos y trabajadores de la construcción de La Habana, fórmulas organizativas que se difundirían hacia otras ciudades. No pasaría mucho tiempo sin que estallasen las primeras huelgas en demanda de mejores salarios, de modo que las tácticas sindicales se fueron perfeccionando en la lucha, así como con las ideas difundidas por la naciente prensa obrera, en la que se notaba una creciente influencia anarquista.

Al igual que otros sectores sociales, los trabajadores se beneficiaban de la extensión a Cuba —en 1881— de la Constitución

española promulgada en 1876, la cual ofrecía libertades de reunión y asociación, así como la posibilidad de realizar publicaciones sin censura previa. No obstante ciertas restricciones, esa legislación representó un notable avance en materia de derechos individuales y apertura de espacios públicos, al igual que otras leyes que, como el código de comercio, el código civil, la ley de propiedad intelectual y otras, imprimieron mayor fluidez y modernidad a las relaciones económicas y sociales. Especial significación revestía en ese contexto el llamado "problema negro". La abolición no implicó el cese de la discriminación racial; por ejemplo, para que se levantase la prohibición a los matrimonios interraciales fue necesaria una ley específica y solo cuatro años después de eliminada la esclavitud —1890— los antiguos esclavos pudieron obtener la igualdad de derechos civiles. Otros cuatro años habrían de transcurrir para que se proscribiese la segregación racial en los espacios públicos, una disposición de muy relativo acatamiento en la conducta social e individual, pues el "problema negro" era sobre todo un legado cultural de cuatro siglos de esclavitud que afectaba las mentalidades, con muy nocivas consecuencias para la identidad nacional. El progreso registrado en la condición social de negros y mulatos mucho debió a la actividad desplegada por las "sociedades de color" —que en 1890 llegarían a unirse en un Directorio Central—, por más que no pueda desconocerse el peso considerable que ejerció el interés del poder colonial por "ganarse a los negros", auspiciando algunas de esas asociaciones y tratando de controlarlas.

La modernización de la sociedad tuvo también muy significativas expresiones en los planos de la cultura y el modo de vida. El desarrollo urbanístico se hacía notar, sobre todo en La Habana cuya expansión se benefició del derribo de las murallas a partir de 1863, un proceso acompañado por numerosas operaciones especulativas. También se progresaba en el equipamiento urbano; la capital dispuso finalmente de un acue-

ducto, de un sistema de transporte colectivo, de alumbrado público —incluso eléctrico—, avances que en mayor o menor cuantía podían apreciarse en otras ciudades como Matanzas, Cárdenas, Cienfuegos y Santiago de Cuba. Al margen de las novedades constructivas, los adelantos técnicos y las diversiones, en el medio urbano se apreciaban grandes disparidades sociales, especialmente por las deplorables condiciones higiénicas de los barrios pobres. Cierta afluencia de antiguos culíes chinos devenidos vendedores ambulantes, el incremento de la población "de color" que propiciara la abolición y, sobre todo, la creciente presencia de jóvenes peninsulares, muchos de ellos empleados como dependientes de comercio, dieron a las ciudades —y más que todas, a La Habana— un toque de cosmopolitismo. La aparición de grandes núcleos de gallegos y asturianos entre los inmigrantes impulsó la creación de las llamadas sociedades regionales, que de algún modo apoyaban cierta política oficial de "hispanización" de la sociedad, favorecida por el casi absoluto control peninsular sobre el comercio y los empleos públicos, sector este último afectado por una notoria corrupción.

Dos novelas de esta época, *Mi tío el empleado* y *Don Salustiano el tendero*, ambas de Ramón Meza, tomaban esos personajes típicos para hacer una crítica devastadora de funcionarios y comerciantes corruptos, panorama enriquecido por otros autores, como Martín Morúa y Nicolás Heredia, con narraciones que ilustraban en sus diversas facetas la descomposición de la sociedad colonial. La misma intencionalidad se advierte en el teatro, especialmente el bufo, cuyas compañías recorrían las principales ciudades del país. Con títulos que a menudo aludían de manera irónica al acontecer político, estas obras desenvolvían sus tramas entre parodias, chistes y guarachas, donde personajes populares deslizaban descarnadas críticas al régimen colonial, como bien lo ilustran *Del parque a la luna* y otras obras de Raimundo Cabrera, autor también de un ensayo de enorme popularidad, *Cuba y sus jueces*, ardorosa defensa de los valores cubanos. El espíritu

crítico y el sentido de cubanía tuvieron muy elevados exponentes en Enrique José Varona y Manuel Sanguily, escritores que animaban las más influyentes revistas literarias de estos años —la *Revista Cubana* y *Hojas Literarias*—, pero alcanzarían la cumbre, como habrá de verse, en la obra sin par de José Martí.

Tras una década de sangrientos combates por la independencia el significado de lo cubano alcanzó una nueva dimensión. De la mano de la modernidad, la esencia de lo nacional se expresaba de manera más compleja, con tensiones que muy bien evidencia la poesía espléndida de Julián del Casal. Lo popular y especialmente las manifestaciones de matriz africana pugnaban a la vez por ser reconocidos como parte de la identidad cubana, terreno en el cual se avanzaba de manera muy desigual, según géneros y creadores. Fue quizá la música —en cuyas agrupaciones negros y mestizos eran desde tiempo atrás decisivos protagonistas— la esfera de la creación que mayores logros registra en esa simbiosis de lo cubano y lo popular, plasmada en grado superlativo por un género como el danzón, que irrumpe en los aristocráticos salones del Liceo de Matanzas en 1879, para difundirse bajo las acerbas —y significativas— criticas de las dos corrientes políticas asociadas al régimen colonial.

LAS ALTERNATIVAS POLÍTICAS

El fracaso de la primera contienda independentista dejó a España en posición de arbitrar el curso de los acontecimientos en Cuba. Ello se haría con arreglo a la Constitución de 1876, que preveía la promulgación de una legislación especial para las colonias y reconocía a la vez la representación de estas en las Cortes, dejando así cierto margen para la determinación del futuro estatus colonial.

Las definiciones, en lo inmediato, comenzaron de la mano del propio Martínez Campos como gobernador de la isla, un car-

go que ya no disfrutaría de facultades omnímodas pero que continuaba centralizando los poderes político y militar. Para su administración Cuba quedó ahora dividida en seis provincias, dentro de las cuales se generalizó el régimen municipal. Aunque formalmente electivo, el gobierno de estas instituciones se hallaba en buena medida a discreción del capitán general, pues este designaba a las personas que habrían de regirlas. El propio proceso electoral se estableció sobre bases bastante más restrictivas que las vigentes en la Península, ya que para ser elector se exigía el desempeño de funciones públicas y profesiones o el pago de una contribución relativamente elevada, condición esta última que de manera manifiesta favorecía el voto de los residentes de origen peninsular. Todas estas regulaciones se adoptaron además a título provisional, lo cual dejaba amplias posibilidades al gobierno metropolitano para modificarlas. El régimen así delineado constituía un avance indiscutible respecto a lo existente antes de la guerra, pero resultaba del todo insuficiente para enfrentar los graves problemas que aquejaban al país.

Satisfechas con el fin de las hostilidades, las élites criollas apreciaron que el nuevo orden, no obstante sus limitaciones, abría posibilidades para alcanzar una participación amplia y regular en las funciones de gobierno. De ahí la rapidez de su respuesta a la invitación de Martínez Campos para organizarse políticamente. En julio de 1878 constituyeron el Partido Liberal —poco después Autonomista— en cuyo programa recogieron muchas de las antiguas demandas del reformismo, algunas de las cuales ya habían devenido meros reclamos administrativos. En lo económico proponían una reforma del régimen fiscal, en particular la remodelación de los aranceles para acercarlos al librecambio, así como el establecimiento de una relación comercial preferente con Estados Unidos. Partidarios de la abolición indemnizada, los liberales criollos también se pronunciaban por el fomento de la inmigración blanca. Lo definitorio, sin embargo, era su propuesta política, la cual reconocía la soberanía es-

pañola y rechazaba la violencia independentista, pero aspiraba a conseguir para Cuba la mayor autonomía posible "dentro de la unidad nacional". En las filas del autonomismo se nuclearon algunos propietarios criollos y sobre todo cubanos de clase media —en particular brillantes intelectuales como José Antonio Cortina, Rafael Montoro y el presidente del partido, José María Galvez—, sin excluir cierto número de antiguos independentistas. Muy poco después, los más acaudalados hacendados y comerciantes de la isla —mayoritaria aunque no exclusivamente peninsulares— creaban la Unión Constitucional. En su dirigencia figuraban prominentes figuras del "comité español" de los años de la guerra, quienes aportaban además a la nueva agrupación sus extensas clientelas de burócratas y dependientes del comercio. Aunque en algunas de sus propuestas económicas ese partido no se diferenciaba demasiado del Autonomista, su programa político sí trazaba un límite tajante al demandar, como fervientes defensores de la "integridad nacional", la plena asimilación de Cuba dentro del Estado español, fórmula que entendían la más apropiada para preservar sus privilegios. Por su perfil social los dos proyectos eran igualmente excluyentes: el integrismo defendía a ultranza la preeminencia de los españoles nativos en la sociedad insular, mientras que el autonomismo, aunque reivindicaba los derechos de los cubanos, apreciaba con evidentes prevenciones a los elementos populares del país a los cuales consideraba potenciales factores de disolución social.

Ambos partidos resultaron piezas vitales para el sistema político de la colonia. La legislación electoral y el apoyo de las autoridades aseguraron a la Unión Constitucional un predominio invariable, que hizo de ese partido fiel servidor de los gobiernos madrileños, cualquiera que fuese el signo político de estos. A los autonomistas, sus credenciales como opción frente al independentismo no les resultaron suficientes para que España les concediese una cuota de poder. En invariable minoría electoral,

debieron contentarse con el ejercicio sistemático de la crítica, contribución nada desdeñable por cierto, pues sus constantes denuncias de las arbitrariedades y corruptelas del régimen español contribuían a la vitalidad del sentimiento anticolonial. Las contingencias del proceso político introdujeron matices y alternativas en el esquema partidista, como ocurrió a raíz del llamado "movimiento económico", organizado en 1891 para promover la reciprocidad comercial con Estados Unidos, demanda en la cual coincidían los intereses del autonomismo y de un sector del empresariado peninsular agrupado en la Unión Constitucional. La potente movilización daría origen a un tercer partido —el Reformista— creado por una facción moderada del integrismo, así como a ciertas manifestaciones de anexionismo que, sin llegar a cuajar en un movimiento político, ponían de manifiesto la fascinación ejercida en ciertos medios sociales por los adelantos técnicos, realizaciones económicas y modo de vida del modelo norteamericano.

Pese a sus palpables limitaciones, el régimen post-Zanjón, con su libertad de prensa y de asociación, los debates públicos y el juego electoral, daba un margen a los anhelos de los cubanos, incluso para los negros, los obreros y otros sectores populares que podían sostener sus periódicos y asociaciones, aunque estuviesen excluidos del juego político. Por otra parte, la discusión pública de problemas centrales de la sociedad, ya fuese en actos de calle, en liceos y sociedades o en la prensa, así como las contiendas electorales y otros atributos de la vida política moderna que se observan en estos años —sin olvidar algunas de sus notorias patologías como el escamoteo de las elecciones y el clientelismo, también presentes— tuvieron innegable trascendencia en la cultura política del país.

Formalmente excluidos de la legalidad, los independentistas no cejaron en su empeño, por más que el fracaso de 1878 hubiese dejado entre ellos una secuela de enconos y frustraciones. Aún no se habían apagado los ecos de la guerra cuando esta volvía a

estallar, bajo el liderazgo de uno de los más prestigiosos mambises, el general Calixto García. Dirigido desde Nueva York, este movimiento llevó a cientos de combatientes a los campos, pero falto de coordinación y recursos bélicos, la "guerra chiquita" —como se la conoció— no tardó en ser sofocada por los españoles, que aprovecharon la elevada presencia de mambises negros y mulatos para propalar la falacia de que se trataba de un levantamiento racista. A ese intento seguiría una sucesión de pequeñas expediciones fracasadas, destino al cual no escapó siquiera el mejor concebido de los proyectos liberadores de esos años, dirigido por lo generales Gómez y Maceo. Los continuos descalabros hacían evidente que el independentismo estaba urgido de una reformulación, tanto en sus pautas organizativas como en sus proyecciones programáticas y sus fundamentos sociales. El encargado de esa colosal tarea sería José Martí.

Nacido en la Habana, en 1853, Martí fue condenado a prisión a principios de la Guerra de los Diez Años, cuando era apenas un adolescente, y desterrado después a España, inicio de un exilio que lo llevaría más tarde a México y otros países latinoamericanos, hasta radicarse finalmente en Estados Unidos donde vivió buena parte de su vida. El persistente ejercicio del periodismo, que afinó y acrecentó su innata sensibilidad humana; el cultivo de diversos géneros literarios y en particular de la poesía, en la cual se elevaría hasta la cumbre de las letras hispánicas; sus excepcionales dotes oratorias, hicieron de José Martí un político de talla excepcional, a la medida de los desafíos que enfrentaba la causa de la independencia. Su renovador proyecto se sustentaba en un amplio análisis crítico, no solo de las experiencias acumuladas por el independentismo cubano, sino de los resultados de seis décadas de vida republicana en Latinoamérica, así como de las tendencias prevalecientes en el desarrollo de Estados Unidos.

Conocedor profundo de la sociedad norteamericana, cuya naturaleza democrática y dinámica progresista admiraba, Martí

fue también testigo del desarrollo de los apetitos imperiales de Washington, tendencia especialmente amenazadora para el destino de las repúblicas “feudales y teóricas” de América Latina. De ahí que considerase urgente que en estas se abriesen espacios a las clases y sectores preteridos por las estructuras oligárquicas y el caudillismo, transformación indispensable para asegurar una relación cordial entre las dos Américas, a la cual la independencia de Cuba haría un aporte decisivo. Pero la creación de la República cubana no solo demandaba liquidar el régimen colonial español y contener la expansión estadounidense, sino superar, ante todo, las profundas divisiones que fragmentaban a la sociedad insular. Factores de raza —blancos y negros—, origen —españoles y cubanos— y condición económica obstaculizaban la articulación de un verdadero movimiento nacional en Cuba y debilitaban al independentismo, en cuyas propias filas eran perceptibles contradicciones entre militares y civiles, cubanos de la isla y de la emigración, entre viejas y nuevas hornadas de revolucionarios. Unir fue, por tanto, la clave de la estrategia martiana. En la tribuna y en la prensa, con la carta amigable y la conversación diáfana, Martí fue limando asperezas, apartando prevenciones y superando prejuicios que resultaban asideros eficaces de la dominación colonial.

Con Martí el independentismo devino la única corriente política auténticamente inclusiva en la Cuba finisecular. La “República con todos” no hacía distingos; en ella tendrían cabida negros y blancos, cubanos y peninsulares, ricos y pobres, cultos e ignorantes, todos con sus derechos igualmente respetados. Sin demeritar el espíritu armonizador de su proyecto, el “Apóstol de la independencia cubana” no perdía de vista que esta tenía su más firme sostén en aquellas clases y sectores marginados por el régimen colonial —campesinos, negros, obreros, intelectuales, propietarios blancos empobrecidos—, a quienes debía ofrecerse una efectiva participación; de ahí que la democracia constituyese el eje de la propuesta martiana, meta y medio imprescindible de la revolución independentista.

La fórmula organizativa concebida por Martí para llevar a cabo su proyecto fue el Partido Revolucionario Cubano (PRC), constituido en 1892 entre los emigrados en Estados Unidos, cuyos clubes y cuerpos de consejo, mediante una genuina práctica democrática, se encargarían de allegar los fondos para adquirir los recursos bélicos y llevar a la isla la "guerra necesaria". Concebida como una contienda relativamente rápida, para dirigirla era imprescindible concertar las voluntades de los más experimentados jefes militares, cuyo concurso Martí recabó en su condición de delegado del Partido Revolucionario. Obtenida la anuencia de Máximo Gómez, quien aceptó ser general en jefe del Ejército Libertador, uno tras otro se fueron sumando al proyecto destacados generales de la "guerra del 68", como Antonio Maceo, Flor Crombet, Serafín Sánchez y Carlos Roloff. Esos jefes deberían llegar a la isla al frente de tres fuertes expediciones, con armamento suficiente para asegurar la acometida de las tropas mambisas, aglutinadas mediante una extensa red conspirativa que tenía como eje a Juan Gualberto Gómez, un audaz periodista mulato, organizador y presidente del Directorio Central de las Sociedades de Color, a quien Martí había designado su representante en Cuba. Con la contribución de los emigrados, particularmente de las comunidades de tabaqueros, a finales de 1894 se habían logrado aprestar en la Florida tres barcos bien armados, pero una delación provocó que estos fuesen incautados por las autoridades norteamericanas. Pese al serio revés, el plan insurreccional continuó adelante y se autorizó el levantamiento de los conspiradores en la isla sin esperar al arribo de las expediciones.

LA REVOLUCIÓN DE 1895

La decisión de desatar la insurrección aun sin que esta dispusiese de suficientes recursos materiales era comprensible, si se tiene en cuenta que desde el año anterior se habían venido produ-

ciendo alzamientos fuera del control del PRC, claro indicio de que la impaciencia aguijoneaba a los independentistas en la isla. Los aires allí soplaban en favor del levantamiento; a la decepción que ocasionara el fracaso de las reformas propugnadas en Madrid por el ministro liberal Antonio Maura en 1893, se había unido la cancelación del tratado de comercio por Estados Unidos al año siguiente, con lo cual la bonanza económica tocó a su fin.

El 24 de febrero de 1895, de manera coordinada, se alzaban en armas los conspiradores en Baire, Jiguaní, Guantánamo y otras localidades orientales, así como en Ibarra —Matanzas—, aunque esta última acción fue inmediatamente sofocada y capturados sus dirigentes, incluido Juan Gualberto Gómez; en Las Villas y Camagüey los conjurados preferían esperar por la llegada de los jefes, que se creía inmediata. Martí había viajado a República Dominicana para unirse a Máximo Gómez y allí, en el poblado de Montecristi, redactaron el manifiesto que proclamaba los propósitos de la revolución. Un par de semanas después, el 11 de abril, ambos arribaban en una diminuta expedición al extremo sudoriental de Cuba. Pocos días antes había llegado Antonio Maceo procedente de Costa Rica, acompañado por su hermano José, Crombet, y otros oficiales; vencidos iniciales contratiempos, Maceo asumió el mando de los patriotas orientales que en número superior a los 2 000 ya se encontraban en los campos. Las diferencias de la nueva contienda con la que se iniciara en 1868 eran ostensibles, no solo por su mejor preparación y centralizada organización, sino porque en contraste con el patriciado que encabezara aquel proceso, este contaba con una dirigencia de extracción popular, compuesta por profesionales y otros individuos de las capas medias, así como por artesanos, obreros y numerosos representantes de un campesinado empobrecido. Sus proyecciones, como lo expresara el Manifiesto de Montecristi, iban bastante más allá de la separación de España, pues apuntaban a una remodelación profunda y a la democrati-

zación de la sociedad cubana. Por ello, más que una guerra, la nueva gesta independentista constituía realmente una revolución.

Para encauzarla se requería una estrategia, que Martí, Maceo y Máximo Gómez se propusieron definir reunidos en La Mejorana, cerca de Santiago de Cuba. Fue esa una reunión difícil, pues movido por sus experiencias en la "guerra grande" Maceo era partidario de un mando esencialmente militar, mientras que Martí, si bien reconocía la necesaria autonomía de los jefes para conducir la guerra, sostenía que la República debía fundarse al fragor del combate con un sólido y respetado basamento institucional. Aplazada la determinación de ese asunto para una futura asamblea constituyente, sí hubo plena coincidencia en el principio estratégico de extender las acciones bélicas a toda la isla, para lo cual, en lo inmediato, Maceo concentraría las fuerzas y consolidaría el dominio del campo oriental, mientras que Gómez —acompañado por Martí— marcharía hacia Camagüey donde se le aguardaba para desencadenar la insurrección. En ese trayecto, al entablarse combate en Dos Ríos con una columna española, cayó mortalmente herido José Martí; con él se perdía al organizador de la guerra, al ideólogo de la revolución, una pérdida que el tiempo demostraría irreparable.

Llegado a su destino, el "generalísimo" Máximo Gómez inició una campaña en torno a Puerto Príncipe para foguear a los cientos de jóvenes camagüeyanos alzados en armas junto al veterano mambí Salvador Cisneros. Al producirse en julio el desembarco en Las Villas de una fuerte expedición comandada por Serafín Sánchez, la única que había podido salvarse de las inicialmente proyectadas por Martí, el teatro de operaciones se extendió a toda la mitad oriental de la isla. Dos meses después se reunían en Jimaguayú —Camagüey— los representantes elegidos por los distintos cuerpos del Ejército Libertador para redactar una constitución. Tal como lo quería el Apóstol, la República en armas tendría una expresión civil, aunque mucho más simple y dinámica que la de Guáimaro, pues consistiría solo en un Con-

sejo de Gobierno con facultades ejecutivas y legislativas para cuya presidencia fue elegido Salvador Cisneros Betancourt; como general en jefe se ratificó a Máximo Gómez, quien tendría por lugarteniente al general Antonio Maceo. El cuadro dirigente de la revolución se completaba con la designación de Tomás Estrada Palma como representante plenipotenciario del gobierno en el exterior. Elegido poco antes como delegado del Partido Revolucionario Cubano en sustitución de Martí, este veterano patriota de inclinaciones conservadoras había sido presidente de la República en armas en 1876 y gozaba de un bien ganado prestigio entre las comunidades emigradas, con las que conviviera por largos años en Estados Unidos, país de cuyas instituciones era un ferviente admirador.

El gobierno español había sido sorprendido por el levantamiento cubano pero en modo alguno lo subestimó. Apostando por una rápida pacificación nombró a su mejor carta negociadora, el general Martínez Campos, como gobernador de la isla, aunque sin confiarse a la posibilidad de un arreglo comenzó a reforzar su ejército en Cuba, de modo que antes de concluir el año 1895 este ya superaba los 100 000 hombres. Los autonomistas, que habían denunciado como criminal a la insurrección poco después de su estallido, creyeron llegado el momento de las ansiadas reformas, aunque una vez más estas se postergaron, ahora con el pretexto de que solo resultarían posibles una vez restaurada la paz, algo que cada vez parecía más lejano.

Tras librar una brillante campaña en el valle del Cauto, en uno de cuyos combates —Peralejo— estuvo a punto de hacer prisionero al propio Martínez Campos, Maceo congregó un fuerte contingente de 1 500 hombres y el 22 de octubre, desde Baraguá, dio inicio a la invasión a Occidente. Eludiendo a las fuerzas españolas enviadas en su contra, apenas en un mes Maceo alcanzó la restaurada trocha de Júcaro a Morón, la cual cruzó para reunirse con Gómez, quien había atravesado previamente esa línea de fortificaciones y lo esperaba en Las Villas. Con la espe-

ranza de contenerlos, Martínez Campos desplegó 30 000 hombres en esa provincia, pero tras una sucesión de exitosos combates el contingente invasor quebró en Mal Tiempo las líneas españolas y pudo penetrar en Matanzas. Dejando tras de sí la humareda de ingenios y cañaverales incendiados, la invasión llegó a La Habana, donde Gómez y Maceo decidieron separarse para que el segundo avanzase hasta el extremo occidental de Pinar del Río, mientras que el genial jefe dominicano cuidaba su retaguardia. En solo tres meses y cubriendo más de 1 000 kilómetros, la columna invasora había burlado o batido a decenas de regimientos españoles para llevar la guerra a todo el país. Al extender el teatro de operaciones hasta las provincias occidentales, la invasión cumplía otro de sus propósitos estratégicos: paralizar la economía cubana. La tea incendiaria dejaba ver sus efectos no solo en las plantaciones azucareras, sino también en las vegas de tabaco y otros cultivos, así como en la destrucción de almacenes y vías férreas. De cerca de un millón de toneladas de azúcar producidas en 1895, la zafra caería hasta algo menos de 300 000 toneladas en 1896. En esta ocasión España no podría extraer de Cuba los recursos para combatirla.

Anonadado por el éxito cubano, el gobierno de Madrid decidió librar una guerra sin cuartel. Para implementar esa nueva política sustituyó en el mando a Martínez Campos por Valeriano Weyler, quien trajo a la isla más de 50 000 hombres de refuerzo. Pero la estrategia del pequeño general mallorquín no descansaba tanto en desplegar mayores fuerzas sobre el terreno, como en suprimir las bases de apoyo del Ejército Libertador. Para lograrlo decretó que toda la población de los campos se concentrase en poblados fortificados y ciudades, con la amenaza de ejecutar como rebelde a todo aquel que desobedeciese esa orden. En un corto plazo centenares de miles de personas tuvieron que abandonar sus fincas para refugiarse, apenas sin medios de vida, en los portales y parques de las poblaciones donde fueron víctimas fáciles del hambre y las enfermedades. Considerada un auténti-

co genocidio, la "reconcentración" consiguió cortar en parte los suministros a los mambises sin llegar a limitar mucho su capacidad operativa; sí terminó, sin embargo, por arruinar definitivamente a la agricultura y aceleró la emigración de familias cubanas, ahuyentadas por la situación de penuria y la atmósfera de terror que imperaba en las ciudades. Los efectos de esa política se dejaron sentir también en Estados Unidos, donde ya se venían experimentando restricciones en el abastecimiento de azúcar y tabaco, pues con el arribo de miles de inmigrantes comenzarían a conocerse espeluznantes historias de lo que ocurría en la isla vecina. Como reflejo de la deteriorada situación, hasta las más altas esferas de Washington comenzaron a llegar las quejas y reclamos de cubanos acaudalados y ciudadanos norteamericanos con inversiones en la isla, urgiendo la adopción de una actitud más decidida ante el conflicto cubano.

En el plano militar, Weyler se había propuesto acorralar a Maceo en Pinar del Río mediante la construcción de una nueva trocha de fortificaciones en el límite de esa provincia, a la vez que enviaba sobre el jefe mambí fuertes columnas móviles, que este fue venciendo una tras otra en una brillante campaña guerrillera que tuvo las serranías pinareñas por escenario. Máximo Gómez, de regreso a la región central, organizaba el envío de refuerzos a Occidente, a la vez que libraba acciones combativas en Las Villas y Camagüey, algunas de cierta envergadura como el combate de Saratoga en que batió a una columna española de más de 3 000 hombres. Aunque la logística mambisa —sobre todo en el occidente— sufría los efectos de la campaña de Weyler, la situación se compensaba en algo con el arribo de una docena de expediciones a lo largo de 1896, algunas muy bien pertrechadas como la que trajo a Oriente al general Calixto García, quien asumiría el mando de esa provincia al caer en combate José Maceo. La nota negativa del lado cubano la daban una vez más las desavenencias intestinas, en este caso entre Gómez y el Consejo de Gobierno, por desacuerdos en lo relativo a la des-

trucción de instalaciones productivas —la “tea incendiaria”— y ciertas medidas gubernamentales —sobre todo ascensos— que el general en jefe estimaba una transgresión de sus atribuciones. Convocado Maceo a Camagüey para zanjar las diferencias, cayó en combate cuanto atravesaba la campiña habanera con un pequeño destacamento. Su muerte constituyó una verdadera desgracia para el independentismo, no solo porque con él se perdía a uno de sus jefes más arrojados y talentosos, sino porque Maceo era también su figura de mayor relevancia internacional. Quizá lo peor era que esa pérdida constituía la culminación de toda una cadena de bajas, cubiertas en general por el ascenso de otros jefes capaces, pero que ocasionaban un serio debilitamiento político a la dirección de la revolución.

Tratando de tomar ventaja tras la muerte de Maceo, Weyler concentró sus fuerzas sobre Máximo Gómez. El generalísimo, con suprema habilidad, inició una campaña en La Reforma —escenario operativo de la región central que muy bien conocía— distrayendo a fuertes columnas españolas mediante marchas y contramarchas en un terreno hostil, donde el cansancio y las enfermedades les causaban más bajas que las balas mambisas. Con esa guerra de desgaste dejaba las manos libres a su nuevo lugarteniente, Calixto García, quien al mando de las fuerzas orientales —ahora dotadas de artillería— comenzó a tomar poblaciones fortificadas como Tunas y Guisa, obligando a los españoles a concentrarse en las ciudades. Aunque la prolongación del conflicto también hacía mella entre las tropas cubanas —en Occidente ya no disponían de caballería—, Weyler no había conseguido pacificar región alguna del país, ni siquiera el territorio habanero donde las armas mambisas libraban incesantes acciones de guerrillas e incluso exitosos combates como el del Caimán. Sin otro desenlace previsible que una victoria cubana, la guerra se prolongaba en medio de una trágica situación económica y social por el empecinamiento de políticos como el presidente del gobierno español, Antonio Cánovas del Castillo —quien aseguraba que la sos-

tendría "hasta el último hombre y la última peseta"—, convencidos de que sus carreras, y quizá la propia monarquía, no podrían sobrevivir a la pérdida de Cuba. El rumbo seguido por los acontecimientos y las atroces noticias cubanas que inundaban la prensa en Estados Unidos, tornaron más enérgica la política norteamericana, sobre todo después de que William McKinley asumió la presidencia en enero de 1897. Con una opinión pública cada vez más favorable a la independencia de Cuba, la nueva administración comenzó a presionar a España para que introdujese reformas que detuviesen la carnicería en la isla vecina.

El cambio en la política española sobrevino tras el asesinato de Cánovas y el ascenso al poder en Madrid de un gobierno liberal, el cual decidió relevar a Weyler y anunció poco después el otorgamiento de la autonomía a Cuba. La nueva orientación pretendía detener la amenazadora tendencia intervencionista estadounidense y, sobre todo, apostaba porque la oferta autonómica inclinase a los independentistas cubanos a una avenencia o, al menos, produjese una escisión en sus filas. Aunque se registraron algunas deserciones, el independentismo —cuyos propósitos había reiterado la reciente constitución de La Yaya— se mantuvo intransigente y después de decretar la pena de muerte para todo emisario de paz acentuó su beligerancia. Las divisiones resultaron más agudas del lado español, pues las calles de La Habana se vieron invadidas por vociferantes turbas integristas que condenaban la autonomía, protestaban contra el nuevo gobernador Ramón Blanco y hacían también a Estados Unidos objeto de los peores vituperios.

INTERVENCIÓN NORTEAMERICANA

Preocupado por el curso de los acontecimientos, el gobierno norteamericano despachó para La Habana en "visita de amistad" al acorazado *Maine*, que tras una formidable explosión se

hundiría en la rada habanera el 15 de febrero de 1898. Investigaciones posteriores apuntan a un accidente, pero la prensa estadounidense se aprovechó de la catástrofe para desplegar una estridente campaña antiespañola que acrecentó la influencia de los elementos expansionistas en la administración. Con una orientación francamente belicista, McKinley lanzó un ultimátum a España, hizo una nueva —e igualmente inútil— oferta de compra de la isla y terminó por solicitar al Congreso poderes para declarar la guerra. El mensaje presidencial se cuidaba de hacer referencia a la independencia de Cuba, probablemente para conservar las manos libres de cara a una posible anexión; sin embargo, la Resolución Conjunta de ambas cámaras legislativas reconoció el derecho de los cubanos a ser independientes, a la vez que hacía renuncia explícita a toda pretensión sobre la isla. Era esa, sin duda, una expresión de la simpatía que despertaba la causa cubana en el pueblo norteamericano, pero también el resultado de los esfuerzos de Estrada Palma y la representación exterior, que desde tiempo atrás venían trabajando denodada —e infructuosamente— por que se reconociese la beligerancia de Cuba, y que en esa crucial coyuntura no escatimaron esfuerzos —soborno incluido— para asegurarse el respaldo de los legisladores. Sin parar mientes en la formalidad de aquella declaración, Estrada Palma se apresuró en empeñar el apoyo de las fuerzas cubanas, a pesar de que no había consultado a la dirigencia independentista en la isla y de que el gobierno norteamericano no manifestaba intención alguna de reconocer a la República en armas y sus instituciones. Aunque el Consejo de Gobierno en la isla se percató de esa incierta circunstancia, terminó por aceptar los hechos y atenido a la buena voluntad de Estados Unidos ofreció a ese país su colaboración, seguramente ansioso por dar fin a una guerra cruel y agotadora.

Evitando todo compromiso, Washington optó por recabar directamente el apoyo del general Calixto García, quien movilizó sus combatientes en auxilio del desembarco norteamericano

en las cercanías de Santiago de Cuba y posteriormente cooperó para facilitar el avance de esas tropas sobre la ciudad; mientras tanto, en otras partes de la isla los destacamentos mambises se desplegaban para obstaculizar los movimientos de las unidades españolas. El Ejército Libertador se vio así en la anómala situación de actuar como aliado de una fuerza que no lo reconocía oficialmente como tal. La rapidez de los acontecimientos tampoco contribuiría a aclarar el panorama; en menos de cuatro meses España se dio por vencida, tras ser hundida su escuadra el 3 de julio cuando intentaba escapar del puerto santiaguero donde había quedado acorralada. Poco antes el destacamento naval español en Filipinas había corrido igual suerte, mientras que la isla de Puerto Rico era ocupada en apenas tres semanas. El 11 de agosto un protocolo de paz firmado en Washington puso fin a las hostilidades

Aun antes de la rendición española, las intenciones norteamericanas empezaron a hacerse evidentes cuando al ocupar Santiago de Cuba el general William Shafter, jefe de las fuerzas de Estados Unidos, se negó a que el general García entrase con sus soldados a esa ciudad, arbitraria decisión que ocasionó una digna protesta —así como la renuncia— del jefe mambí. La tendencia a marginar a los cubanos se hizo patente; mientras se respetaba y dialogaba con las autoridades españolas, las suspicacias y prevenciones contra los mambises fueron haciéndose ostensibles y la prensa estadounidense, que hasta entonces había glorificado a esos combatientes, comenzó a minimizar su papel y algunos periódicos no tardarían en denostarlos. Marginados de las conversaciones en torno al armisticio entre las fuerzas contendientes, los cubanos fueron finalmente excluidos de las conversaciones que llevarían a la firma del tratado de paz en París. La actitud española contribuyó incuestionablemente a dicha situación, pues se contemplaba con verdadero pánico la posibilidad de que un traspaso del poder a los cubanos diese origen a actos de represalia. El propio ministro de Estado español no

vaciló en expresar a los estadounidenses su preferencia por la anexión de la isla. Sin embargo, las obligaciones contraídas por la Resolución Conjunta cancelaban, al menos de momento, semejante opción. Por el Tratado de París los Estados Unidos quedaron dueños de Filipinas y Puerto Rico, pero en el caso de Cuba, aunque España renunció a su soberanía, la isla solo sería ocupada a título provisional, aunque por término indefinido. La gesta que los cubanos habían iniciado como una guerra de liberación, con la intervención norteamericana derivaba en una operación de conquista.

7
UNA REPÚBLICA TUTELADA

El 1 de enero de 1899, al arriarse el pabellón español en fortalezas y edificios públicos, en su reemplazo no fue izada la bandera de Cuba sino la norteamericana. La República por la que habían luchado los cubanos durante tres décadas seguía pendiente; ahora habría de constituirse bajo la autoridad de Estados Unidos cuyo ejército ocupaba la isla. Cuba alcanzaría finalmente la modernidad como Estado-nación bajo la hegemonía estadounidense, circunstancia que no solo limitó su soberanía, sino que también contribuyó a delinear el perfil de sus instituciones y trazó las pautas de su desenvolvimiento económico y social.

SENTANDO LAS BASES

El país que emergió de la guerra ofrecía un panorama desolador. El censo levantado en 1899, que totalizó 1 572 797 habitantes, registraba 58 890 individuos menos que el anterior conteo —1887—, pero si se tiene en cuenta el probable incremento demográfico en el plazo que medió entre aquella operación y el inicio de la guerra, las pérdidas humanas podían representar 15% de la población. Muchos de los sobrevivientes vagaban hambreados y enfermos, bien lejos de sus desaparecidos hogares. La devastación originada por la contienda era palpable: 100 000 fincas habían sido destruidas, la mitad de las tierras anteriormente en cultivo se hallaban abandonadas, la producción de azúcar había disminuido 70% y la tabacalera 80%,

mientras que en vastas regiones era imposible encontrar una sola cabeza de ganado. Tanto o más deplorable se presentaba el cuadro social, con la siempre insuficiente red escolar desarticulada y las ciudades asoladas por la fiebre amarilla y otras epidemias.

En el terreno político primaba el desconcierto. Marcada por su compromiso con España, la burguesía insular adoptó una actitud cautelosa. El sector español —todavía el más poderoso en lo económico— prefirió marginarse, envuelto en sus contradictorios sentimientos entre un vencedor norteamericano al que repudiaba y los mambises cubanos a quienes temía. La élite criolla había perdido su representación al desacreditarse el autonomismo, pero tampoco alcanzaba a reconocerse en algunas figuras de aquel partido, ahora instalados en la dirigencia independentista. Esta última tendencia, que hasta cierto punto podía considerarse vencedora, paradójicamente se hallaba a la desbandada. A finales de 1898 Estrada Palma había disuelto de manera inconsulta el Partido Revolucionario Cubano, dando sus propósitos por cumplidos. El Ejército Libertador permanecía acampado fuera de las poblaciones viviendo casi de la caridad pública, pues ni recibía ya suministros de las expediciones, ni podía cobrar impuestos o realizar confiscaciones. Su licenciamiento era imperioso, y para llevarlo a cabo la Asamblea de Representantes —ahora el órgano supremo del independentismo— gestionaba la concertación de un empréstito, recurso que a su juicio implicaría su reconocimiento oficial por los medios financieros estadounidenses. A Washington, por el contrario, le urgía desarmar lo que todavía consideraba una fuerza amenazadora, por lo cual McKinley ofreció a Máximo Gómez un donativo de 3.5 millones de dólares para cubrir el pago que recibirían oficiales y soldados al licenciarse. Renuente a que la República naciese endeudada el austero general aceptó la oferta, pero la Asamblea, que calificó dicho acto como una insubordinación, decidió destituirlo. Apabullada por el

clamoroso respaldo popular al generalísimo, la Asamblea terminaría a su vez por disolverse. En menos de cinco meses no quedaba en Cuba ninguna fuerza política organizada; los gobernantes estadounidenses tenían las manos libres para diseñar el futuro.

Al acometer esa tarea contaban a su favor con importantes ventajas. En un país por reconstruir, mucho de lo que se hacía iba al crédito de las nuevas autoridades. Y debe reconocerse que las norteamericanas eran eficaces. Primero fue la obra benefactora iniciada por Clara Barton en ayuda de las víctimas de guerra, a la cual seguiría —una vez comprobada la tesis del médico cubano Carlos J. Finlay sobre el agente transmisor— una formidable campaña de higienización cuyas efectivas medidas conseguirían liquidar el viejo flagelo de la fiebre amarilla. A esto se unió el considerable impacto social de la labor educativa del gobierno provisional, que reformó el sistema de educación y lo dotó de los recursos necesarios para ampliar la cobertura escolar y modernizar la enseñanza, función a la cual fueron convocados cientos de jóvenes maestros, muchos de los cuales fueron adiestrados en Harvard y otras universidades norteñas. Para sufragar esas actividades, así como otros servicios y obras públicas, las autoridades interventoras solo disponían de lo recaudado por la Hacienda insular, pues salvo el donativo para licenciar al Ejército Libertador, Washington no proporcionó a Cuba un solo centavo para la reconstrucción, de modo que hasta las tropas de ocupación debían sostenerse con cargo al presupuesto cubano. Sin estar enteramente exento de corrupción, el manejo de los fondos públicos por los gobernantes norteños contrastaba por su eficiencia con el pésimo antecedente español, tanto más cuanto muchos oficiales del Ejército Libertador y otros cubanos independentistas fueron llamados a participar en la administración. A los beneficios de la nueva situación, debe añadirse el amplio surtido de mercancías y utensilios norteamericanos que podía encontrarse ahora a precios relativamente baratos, pues

una de las primeras medidas del gobierno estadounidense fue desmantelar el régimen arancelario español, disposición que benefició a los consumidores cubanos, e incrementó también de manera notable la presencia de productos norteños en el mercado de la isla. Servida casi a domicilio, la modernidad norteamericana dejaba de ser un paradigma lejano para comenzar a descargar sus favores entre los cubanos.

Todos esos disímiles factores entraron en juego a la hora de definir el destino político de Cuba. Los partidarios de la anexión eran mayoría en la administración de McKinley, pero la Resolución Conjunta —ya calificada de "error sentimental"— resultaba un formidable obstáculo para sus designios, no solo por tratarse de un compromiso de alcance internacional y para con los cubanos, sino de cara al propio pueblo norteamericano que vería su desconocimiento como un fraude. La anexión solo sería viable si la solicitaban los propios cubanos; a tal finalidad parece haber respondido la sustitución del general John Brooke como gobernador de la isla por el general Leonard Wood, personalidad muy cercana a la tendencia expansionista que Theodore Roosevelt representaba dentro del Partido Republicano. El nuevo gobernante se dio a la tarea de movilizar a las "mejores clases" del país con el incentivo de posibles beneficios económicos y algunas concesiones comerciales, a la vez que se granjeaba las simpatías de los dispersos independentistas ampliando su participación en la administración pública. La prueba decisiva debían aportarla las elecciones municipales de junio de 1900, a las cuales concurrió una diversidad de partidos, algunos de alcance puramente local. El triunfo de los candidatos independentistas resultó, sin embargo, aplastante, tanto que muchos en Washington comprendieron que, de no reconocerse la independencia, se arriesgaban en Cuba a una rebelión similar a la que había estallado en Filipinas. Si como tendencia política el independentismo carecía de organización y de cohesión ideológica, en tanto sentimiento popular representaba una fuerza imbatible.

Para encauzar el país hacia la independencia se convocó a una Convención Constituyente, en la cual fueron otra vez mayoría los patriotas más resueltos. Redactada en poco más de tres meses, la Constitución proclamaba a Cuba como una República unitaria, mantenía la división en seis provincias y adoptaba la clásica partición en tres poderes, aunque bajo un sistema presidencialista. En ese último aspecto, así como en el establecimiento de dos cámaras legislativas y otros detalles, se hacía visible la influencia del texto constitucional norteamericano, si bien la adopción del sufragio universal masculino, el carácter laico del Estado y otros puntos aprobados —venciendo la resistencia de los delegados más conservadores— hacían de la carta magna un documento relativamente avanzado en el contexto continental.

Cuba se convertiría en República, pero vinculada a Estados Unidos por "lazos de singular intimidad", según advirtiera el propio presidente McKinley. Cuando la Convención Constituyente estaba a punto de concluir sus labores, una enmienda presentada en Washington por el senador Orville Platt a la ley del presupuesto de guerra, develó la naturaleza de esos lazos. Concebida para añadirse como un apéndice a la Constitución de Cuba, la enmienda reconocía a Estados Unidos el derecho a intervenir en la isla, limitaba las facultades del gobierno cubano para concertar tratados y empréstitos con terceros países, cedía cuatro enclaves portuarios para estaciones de la Armada estadounidense, amén de otras prerrogativas que reducían la República en ciernes a la condición de un virtual protectorado. Rechazada durante tres meses por la Convención Constituyente cubana con amplio respaldo popular, la Enmienda Platt sería finalmente aprobada por exigua mayoría, cuando algunos delegados nacionalistas entendieron que no habría otro modo de poner fin a la ocupación norteamericana.

El camino para la instauración de la República quedó despejado; el siguiente paso fue la convocatoria a los comicios en

que se elegirían las nuevas autoridades nacionales. A ellos se presentaron dos candidatos presidenciales: Tomás Estrada Palma, apoyado por las mayores agrupaciones partidistas, que contaba además con el valioso respaldo de Máximo Gómez —quien había rehusado su propia nominación—, y Bartolomé Masó, último presidente de la República en armas. Ciudadano norteamericano y con excelentes conexiones en Washington, Estrada Palma era el preferido de los gobernantes estadounidenses, pues Masó, además de mostrarse crítico con la Enmienda Platt, congregaba en torno a su candidatura a muchos independentistas inconformes. Ante lo que estimó como muestras evidentes de parcialidad en favor de Palma, Masó optó por el retraimiento, facilitando el triunfo arrollador del viejo maestro bayamés, que ni siquiera había viajado a Cuba para hacer campaña.

El 20 de mayo de 1902, en medio de amplias manifestaciones de júbilo, fue proclamada la República de Cuba. A Estrada Palma y su equipo de gobierno correspondía encauzarla, haciendo funcionar un Estado cuya soberanía se hallaba muy limitada. Precisamente, una de sus tareas capitales era establecer sobre bases contractuales las determinaciones de la Enmienda Platt. Casi al año exacto de constituirse la República, esta firmaba un Tratado Permanente con Estados Unidos en el cual se recogía todo el articulado de la enmienda intervencionista, convertida así en una suerte de patología congénita del sistema político republicano. Para dar cumplimiento a una cláusula de dicho tratado se suscribió otro convenio, el relativo a las estaciones navales; en la negociación de ese acuerdo —y en el que posteriormente reconocería a la isla de Pinos como parte de Cuba— el gobierno de Estrada Palma actuó con indiscutible habilidad y sentido nacional, logrando disminuir hasta dos las cuatro instalaciones inicialmente exigidas, que finalmente se redujeron a solo una: la base naval de Guantánamo.

Si la sujeción política de Cuba quedó bien establecida sobre la base de esos instrumentos, para la supremacía económica es-

tadounidense fue un factor decisivo la concertación paralela de un tratado de reciprocidad comercial. Gracias a la reforma del discriminatorio arancel español las mercaderías norteamericanas habían ganado considerable espacio, pero se hacía evidente que el pleno control del mercado cubano solo sería posible si se gozaba de ciertas preferencias frente a la competencia europea. Para Cuba, y especialmente para los intereses azucareros, la rebaja del arancel norteamericano constituía la garantía de un mercado floreciente en el cual sustentar su ulterior crecimiento productivo. La reciprocidad afianzaba en el plano económico la dependencia que en lo político entrañaba la Enmienda Platt; si el derecho de intervención ofrecía al capital estadounidense la deseada seguridad para sus inversiones, el tratado comercial garantizaba las posibilidades de expansión.

UN CRECIMIENTO PORTENTOSO Y UNILATERAL

La reconstrucción de la economía cubana avanzó con notable rapidez, sobre todo si se tiene en cuenta que hubo de verificarse en un marco de notables limitaciones financieras. En 1900 los gravámenes por hipotecas y censos se calculaban en 247.9 millones de pesos —sobre un valor de la propiedad de 324 millones—, más de la mitad de los cuales pesaban sobre las fincas rústicas. Para enfrentar ese problema el gobierno interventor prorrogó la moratoria hipotecaria vigente desde los años de guerra, medida que evitaba el caos, aunque sin aportar apoyo financiero alguno. Las limitaciones del crédito propiciaron los traspasos de propiedad; solamente en fincas se calcula que algo más de 7000 cambiaron de manos entre 1899 y 1900. Los grandes beneficiarios de tal movimiento fueron los inversionistas norteamericanos que adquirieron propiedades —sobre todo agrarias— a precios francamente irrisorios. En el occidente estos podían oscilar entre 25 y 60 pesos por hectárea, pero en las

regiones orientales, con sus extensos terrenos vírgenes y linderos pobremente definidos, se registraron transacciones inverosímiles, como las 170 000 hectáreas que por menos de 200 000 dólares compraron los ejecutivos de la United Fruit.

El objetivo principal de ese proceso inversionista era la industria azucarera, sobre la cual convergieron empresarios con experiencia en los negocios cubanos como el asturiano-neoyorkino Manuel Rionda, quien en 1898 adquirió el ingenio Tuinucú y dos años después fundaba el Francisco —en Camagüey—, o el legislador R.B. Hawley que en representación de un agresivo sindicato se hizo con tres centrales en el occidente y más tarde fomentaría el Chaparra para poner en explotación 27 000 hectáreas adquiridas en la zona nororiental. Otras operaciones corrieron a cargo de inmobiliarias, que con la promesa de una "nueva frontera" atrajeron a colonos norteamericanos y europeos hacia ciertas zonas de Camagüey y Oriente, así como a la isla de Pinos. En el sector industrial la expansión tuvo lugar ante todo en el renglón tabacalero, donde capitales británicos habían iniciado un proceso de concentración fabril, continuada por los estadounidenses con ímpetu tal que en 1902 ya tenían en sus manos 181 marcas de puros y 42 de cigarrillos. Otro escenario privilegiado por la inversión fue el de las infraestructuras y particularmente el ferrocarril, área en la cual un poderoso consorcio norteamericano-canadiense creó la Cuba Company, empresa que extendería sus vías férreas en la mitad oriental de la isla, hasta entonces casi carente de ese servicio. Las autoridades de la isla facilitaron la penetración de capitales por distintos medios y, en particular, con la promulgación de normativas legales como la Orden Militar 62, que dispuso el procedimiento para deslindar las imprecisas haciendas de la parte oriental, o la Orden Militar 33 que facilitó la expansión —y monopolización— ferroviaria. En 1906, apenas cuatro años después de creada la República, las inversiones norteamericanas en Cuba superaban los 150 millones, cifra tres veces superior a la cuantía

estimada al estallar la guerra en 1895. Contra todos los cálculos, el fin del régimen colonial no facilitó el acceso de los cubanos a la propiedad.

Sin embargo, fueron sobre todo los recursos propios del país los que permitieron restaurar su economía. Apenas un año después de inaugurada la República, el valor de las exportaciones tabacaleras ya superaba los niveles de preguerra y la cabaña ganadera se acercaba a su cuantía habitual, mientras que la decisiva zafra azucarera alcanzaba nuevamente el millón de toneladas, contando solo con 171 centrales, menos de la mitad de las fábricas que habían molido en 1895. A partir de ahí la producción del dulce crecería a un ritmo algo superior a las 100 000 toneladas por año, aprovechando las facilidades de acceso al mercado estadounidense brindadas por el tratado comercial. Ese incremento productivo respondía a la modernización y ampliación de los centrales ubicados en las zonas azucareras tradicionales, pero cada vez más se hacía sentir el peso de la expansión hacia las provincias del este, cuyos protagonistas principales eran las grandes compañías norteamericanas que, propietarias de 38 centrales, ya aportaban en 1913 algo más de un tercio de la zafra. En ese mismo año, con la venta de 2.1 millones de toneladas —87% de lo producido— Cuba completaba el desplazamiento de los restantes abastecedores externos del consumo estadounidense, tras lo cual cabía esperar que la progresión productiva moderase su ritmo; sin embargo, el estallido de la primera Guerra Mundial vino a refutar casi de inmediato tales previsiones imprimiendo un nuevo impulso a la fabricación del dulce. Ante el déficit creado por las devastaciones en las zonas remolacheras de Europa, la zafra cubana iría elevando su monto hasta alcanzar 4.8 millones de toneladas en 1919. Semejante salto productivo hubiese resultado imposible sin el fomento de decenas de miles de hectáreas de cañaverales, el trabajo de una nutrida masa de inmigrantes —incluyendo miles de braceros estacionales—, así como la extraordinaria afluencia de capitales, en primer término

estadounidenses. De los 34 centrales construidos en esta etapa, 10 fueron fomentados por firmas de Estados Unidos, las cuales adquirieron otras 17 unidades y llegaron a controlar en 1919 la mitad de la producción nacional. La febril atmósfera de precios galopantes y fabulosas ganancias atrajo en esta ocasión a la banca norteamericana, que hasta entonces se había limitado a financiar las inversiones de empresarios estadounidenses y cubanos. La casa Morgan, el National City Bank de Nueva York y otras importantes entidades entraron directamente en el proceso inversionista, contribuyendo a crear enormes corporaciones como la Punta Alegre Sugar Company o la Cuba Cane.

El espectacular crecimiento económico que tuvo lugar en Cuba durante las primeras dos décadas del siglo XX contó con el azúcar como principal protagonista, pues a ella principalmente se debió que las exportaciones multiplicasen por 10 su valor entre 1900 y 1919. Se trataba, por tanto, de un crecimiento esencialmente volcado hacia los mercados exteriores —y sobre todo, al norteamericano— del cual participaron también otros renglones exportables —las ventas de tabaco duplicaron su valor durante los años de la "gran guerra"— aunque en un plano muy secundario. El auge exportador tuvo como correlato un crecimiento paralelo de las importaciones, a lo cual coadyuvaba la reciprocidad comercial, aunque tampoco puede desconocerse que el rápido crecimiento de la población —se alcanzan los tres millones de habitantes en 1921—, el aumento del circulante en manos de esta, la ampliación de los servicios, el desarrollo de los puertos y la red ferroviaria, etc., impulsaron la actividad en algunos renglones orientados hacia el mercado interior, como el de materiales de construcción, la industria alimentaria y licorera, las confecciones textiles, el calzado, así como la manufactura de jabón y perfumes.

El auge del azúcar comportó un progreso material indiscutible. Baste constatar cómo el fomento de centrales llevó aparejado un proceso de urbanización, evaluar la contribución de los

ferrocarriles azucareros a sacar de su aislamiento intrincadas zonas rurales, determinar la medida en que la apropiación de las tierras, los contratos de colonato y el masivo empleo de jornaleros propagaban las relaciones mercantiles, o confirmar la contribución de los establecimientos comerciales asociados a las compañías azucareras a difundir el consumo de artículos y utensilios propios de la vida moderna. En las ciudades —sobre todo en La Habana— proliferaron urbanizaciones exclusivas y edificaciones fastuosas, a la vez que iba haciéndose cada vez más amplia la disponibilidad del alumbrado eléctrico y el uso de tranvías para el transporte colectivo. En otro plano era igualmente notable la difusión del automóvil y, con este, la pavimentación de las calles y el desarrollo de una incipiente red de carreteras.

En el marco de semejante bonanza la crisis provocada por la brusca caída de las cotizaciones azucareras en 1920 constituyó un verdadero cataclismo. Liberado del control a que había estado sometido durante algunos años durante la guerra, el precio del azúcar comenzó a ascender desde finales de 1919 hasta alcanzar la increíble cota de 20 centavos —de dólar— por libra en el verano siguiente. En medio de una verdadera "danza de los millones" se desató la especulación, y la banca —a la cual se habían incorporado 30 nuevas entidades durante estos años— comenzó a prestar dinero a manos llenas a hacendados, colonos y otros empresarios. Cuando en septiembre de 1920 el precio del dulce cayó en picada, sobrevino el pánico y los bancos se declararon en quiebra uno tras otro, catástrofe a la cual solo sobrevivió la banca norteamericana que contaba con el sólido respaldo de sus casas matrices. A manos de esas entidades pasó la mayoría de las propiedades endeudadas, incluyendo decenas de centrales azucareros —en 1922 casi dos tercios de la zafra se elaboraba en fábricas de propiedad estadounidense— y miles de hectáreas de cañaverales. El crac de 1920 representó un golpe terrible para los capitalistas cubanos y también los españoles, pues estos

últimos aún predominaban en el comercio y ciertas manufacturas. Y, sobre todo, vino a mostrar el frágil fundamento de la prosperidad nacional.

El país dependía de las exportaciones de un producto —el azúcar representaba más de 80%— y prácticamente de solo un mercado, pues las tres cuartas partes del intercambio comercial se concentraban en Estados Unidos. El grueso del potencial industrial y casi la mitad de la tierra cultivable se hallaban dedicados al azúcar, sector al cual correspondían además dos tercios de las vías férreas, así como los mayores almacenes y buena parte de las instalaciones portuarias, estas últimas en muchos casos de carácter privado. Constituidas en enormes latifundios —algunas compañías acaparaban hasta 100 000 hectáreas—, las tierras cañeras permanecían incultas en elevada proporción y la mayoría de los colonos, por su condición de arrendatarios, estaban bajo el control de las firmas azucareras. El predominio del capital extranjero, por una parte, y el empleo masivo de mano de obra inmigrante —incluso de carácter estacional— por otra, generaban un serio drenaje de recursos monetarios en la balanza de pagos, lo cual explica que Cuba enfrentase inerme el crac de 1920 a pesar de haberse acumulado durante la década precedente un superávit de 1 000 millones de dólares en la balanza comercial. La estructura económica, deformada al calor de la expansión azucarera, carecía de medios para amortiguar los vaivenes del mercado del dulce, pues sus restantes renglones se hallaban indirectamente a merced de esos mismos movimientos. Ni siquiera el Estado podía actuar como un factor de equilibrio, ya que por su génesis y condiciones funcionales se hallaba igualmente subordinado a los intereses del azúcar, tanto en su política comercial como en el terreno tributario, pues por más absurdo que parezca, el azúcar no contribuyó al fisco durante los primeros tres lustros de vida republicana.

DISGREGACIÓN SOCIAL Y DESCOMPOSICIÓN POLÍTICA

Lejos de poner fin al desplazamiento de los cubanos de la propiedad agraria, el tránsito a la República en cierto modo contribuyó a acentuarlo. No se trataba solo de los grandes propietarios criollos que al borde de la ruina vendieron sus tierras a las compañías estadounidenses, sino de los numerosos campesinos poseedores de fundos pobremente legalizados que se vieron expulsados de sus fincas al deslindarse muchas haciendas en las regiones orientales. Es verdad que de manera paralela las empresas extranjeras asentaron miles de colonos para fomentar sus plantaciones, entre estos un buen número de oficiales del Ejército Libertador, a quienes se arrendaron grandes colonias confiando en su prestigio y experiencia de mando para la atracción y organización de la fuerza de trabajo. Pero en realidad ese movimiento no compensaba al precedente y entrañaba, además, una posición subordinada; la independencia defraudó la esperanza de que la tierra retornase a manos cubanas.

Las expectativas de mejoramiento tampoco se cumplieron en el ámbito urbano. En esa esfera resultaba bien visible el predominio de los españoles, para quienes la independencia en modo alguno implicó una pérdida de posiciones económicas. Es más, desde el punto de vista demográfico, la presencia hispana, más que mantenerse, se incrementó. Si en el censo de 1899 se habían registrado unos 130 000 peninsulares, en las dos décadas siguientes inmigraron otros 430 000. Estos continuaron preponderando tanto en el comercio como en la industria. En 1907 se registraban en la isla 24 000 comerciantes españoles frente a 21 000 cubanos, mientras que en el número de empleados del comercio los primeros duplicaban a los segundos. A inicios de la década de 1920, 40% de las instalaciones industriales se hallaban en manos hispanas, incluyendo la mitad de las fábricas de cigarrillos y tabacos. Los peninsulares también se hicieron presentes en el ámbito profesional, aunque ese espacio y el de los

empleos administrativos constituyeron destinos preferentes para los cubanos de clase media.

La situación apuntada repercutía de una u otra manera en el mercado laboral. Aunque el auge económico supuso una demanda creciente de fuerza de trabajo, la corriente de inmigrantes sostuvo la oferta de mano de obra, de modo que no se registraron serias presiones alcistas sobre el salario. Desde el punto de vista del acceso al empleo, especialmente en las ocupaciones mejor pagadas, los lazos familiares y culturales favorecían al trabajador español, el cual era preferido incluso por algunos empleadores norteamericanos, que lo consideraban más vigoroso y frugal. Se produjo así una suerte de discriminación de origen nacional en el acceso al empleo que daría origen a la primera gran huelga republicana —noviembre de 1902—, la llamada "huelga de los aprendices", cuyo principal escenario fueron las tabaquerías de la capital. Por tal razón, y por lo que en ocasiones se apreciaba como favoritismo por parte de patrones y capataces, la diversa composición nacional era fuente de enfrentamientos en el seno de los núcleos proletarios.

En materia de discriminación laboral, la peor suerte correspondía, desde luego, a los negros. La propuesta igualitaria del independentismo, especialmente en su formulación martiana, no había llegado a cristalizar, pues a pesar del ascenso de negros y mulatos hasta los rangos más elevados del Ejercito Libertador, esa movilidad no se sostendría en la República. El trato discriminatorio se hizo notar a partir del propio gobierno interventor norteamericano, muchos de cuyos oficiales y funcionarios eran de origen sureño. Fue así como resultó minimizada la participación negros y mulatos en la policía y en la Guardia Rural, e incluso formalmente excluida en el caso del Cuerpo de Artillería. Mambises negros con excelentes hojas de servicio a la causa de la independencia, al inaugurarse la República continuarían siendo relegados en el acceso a puestos de importancia en la administración pública, en la cual su presencia a menudo respondía

a intereses de orden político. El legado de la esclavitud, visible en la tasa de analfabetismo registrada al cesar el régimen español —72% entre los negros contra 49% entre los blancos—, se mantendría vigente dos décadas después, ya que a pesar del descenso en la proporción general de analfabetos apreciable en el censo de 1919, el analfabetismo entre negros y mulatos —49%— continuaba siendo muy superior al registrado entre los blancos: 37%. Las diferencias eran todavía más marcadas de atenderse a otros indicadores sociales —429 profesionales negros contra 10 123 blancos en 1919— y económicos, pues la proporción de negros y mulatos era regularmente más baja en las ocupaciones mejor remuneradas y peor aún en cuanto al acceso a la propiedad.

Aunque de otra índole, la desigualdad que afectaba a las mujeres era también muy notable. La proporción de analfabetas era superior a la de los hombres y relativamente bajo el número de las profesionales, entre las cuales predominaban de manera abrumadora las maestras; el incremento en el número de estas últimas así como la entrada de personal femenino al trabajo en oficinas fueron los mayores avances logrados por las mujeres en el mercado laboral. Las mujeres empleadas constituían una parte bastante pequeña de la población ocupada y casi dos tercios de ellas lo estaban en el servicio doméstico; solo 16% aparecía dedicado a labores manufactureras —muchas en confecciones y tabaquerías—, y una proporción aún menor trabajaba en faenas agrícolas, casi todas negras. Entre las prostitutas registradas —a principios de siglo había casi 3 000 en La Habana— predominaban, en cambio, las blancas, incluyendo una significativa cantidad de extranjeras. En materia de derechos políticos, las mujeres habían quedado excluidas del ejercicio del sufragio por la Constitución de 1901, prerrogativa en cuya demanda comenzarían a movilizarse a partir de 1912.

La posición relativamente desfavorable de los cubanos, tanto respecto a la propiedad como en las actividades productivas

y comerciales, restringía sus opciones de ascenso social, circunstancia agravada por su escaso acceso —en comparación con norteamericanos y españoles— a las instituciones de crédito. Con menores oportunidades en el terreno económico, muchos cubanos de clase media encauzaron sus carreras hacia el campo en que se hacía evidente su ventaja comparativa: la política. El control de la administración pública —sector reservado a los españoles durante la colonia— vino a resultar así, paradójicamente, la mayor conquista socioeconómica de la independencia. Los desempeños burocráticos y sobre todo la política adquirieron entonces una significación especial, en la medida en que el presupuesto del Estado devino principal —y a menudo única— fuente de ingresos y bienestar para numerosos criollos, especialmente para antiguos miembros de la oficialidad mambisa, a quienes su participación en la lucha contra España les otorgó una ascendencia social que no derivaba de la riqueza. Esa suerte de nuevos caudillos, cuyo poder se asentaba en redes y lealtades forjadas durante la guerra, vendría a conformar la nueva élite política, en unión con ciertas personalidades civiles del independentismo cuyo prestigio descansaba en su relevancia intelectual. El recién nacido Estado cubano sería una "república de generales y doctores".

Las peculiares circunstancias descritas perfilaron en Cuba el sentido y las características de la vida política. A raíz de constituirse la República, en las nóminas de las distintas instancias estatales figuraban unos 20 000 empleados, cifra que una década después ya superaba los 35 000 y al comenzar los años veinte ascendía hasta cerca de 45 000, incluidos los jornaleros de obras públicas y otros empleados temporales. Dos tercios del presupuesto de gastos del Estado lo consumían los salarios y era la oferta de empleo, más que los propios servicios públicos, la principal expectativa creada por un nuevo gobierno. Quizá las mayores críticas que se ganó la administración de Estrada Palma (1902-1906) estribaron en su austeridad excesiva, pues empe-

ñado en mantener en superávit la ejecución de los presupuestos, su sobria política apenas dedicó recursos al desarrollo de obras públicas y otras actividades de fomento, de manera que a su gestión solo se le reconocía el escrupuloso manejo de los fondos del Estado y muy poco más. En la mecánica política que se perfilaba, la oferta de empleos constituía una operación de importancia capital para asegurar las clientelas con las que se vertebraban los partidos, como habría de demostrarlo el propio Estrada Palma al crearse el Partido Moderado, cuya presión sobre la nómina estatal —"a moderarse tocan", rezaba la consigna— fue uno de los recursos utilizados para asegurar su reelección en 1906.

Más que en torno a propuestas programáticas, los agrupaciones políticas se irían articulando alrededor de líderes influyentes, como poderosas redes clientelares ansiosas de tener acceso al presupuesto del Estado. Ello se hizo bastante más claro al quedar definidos los dos partidos fundamentales de las primeras décadas republicanas: el Conservador, constituido en 1907 por muchos de los antiguos adeptos del Partido Moderado que promoviera la reelección de Estrada Palma, y el Partido Liberal, que agrupaba a los opositores a esta en torno a dos líderes no siempre concordes, el general José Miguel Gómez y el doctor Alfredo Zayas. La primera de esas entidades, con cierto perfil elitista, se presentaba como el partido del orden frente a los liberales, de base popular y apariencia algo más nacionalista. Sin embargo, no eran las ideologías sino las promesas y las prebendas las que cohesionaban a las maquinarías electorales de ambos partidos, entre cuyos líderes —sobre todo de nivel medio— eran frecuentes los cambios de bando. El bipartidismo se sustentaba entonces no tanto en férreas lealtades como en compromisos coyunturales y procedimientos excluyentes. De esto último resulta más que ilustrativo el caso del Partido de los Independientes de Color (PIC). Creado con la intención de movilizar el voto de los negros y mulatos, único recurso a disposición de ese sector para alcanzar

algunas de sus legítimas aspiraciones, los independientes enfrentaron de inmediato el cerrado antagonismo del Partido Liberal, que tenía en el voto negro una de sus mayores ventajas electorales. Para impedir la pérdida de ese significativo caudal, un senador liberal negro consiguió que se aprobase una disposición prohibiendo la creación de partidos que agrupasen individuos de una sola raza o condición. Tras varios intentos infructuosos por sortear esa medida, la dirigencia del PIC terminó por lanzarse a un levantamiento, reprimido de manera tan atroz que parecieron revivir los tristes tiempos de la "conspiración de La Escalera".

Si el sistema político cubano se acercaba al bipartidismo, el complemento natural de esa fórmula, la alternancia en el poder, demostró ser casi un imposible. Los beneficios económicos del ejercicio del gobierno eran tan manifiestos —e irreemplazables—, que ningún grupo político se hallaba dispuesto a abandonarlo. La reelección se intentaría una y otra vez como una forma de perpetuar el disfrute de privilegios y sinecuras. Para conseguirlo el candidato-gobernante no solo movilizaba en su favor todos los recursos del Estado —sin excluir las fuerzas armadas—, sino que apelaba abiertamente a procedimientos fraudulentos, falseando los conteos y los votos mismos. La consecuencia habitual era que los opositores defraudados desconociesen los resultados y optasen por la rebelión. Así sucedió ante la reelección de Estrada Palma en 1906, que suscitó la insurgencia liberal conocida como la "guerrita de agosto", y habría de repetirse en 1917 cuando el presidente conservador Mario García Menocal forzó su reelección. Como las revueltas en repudio a los comicios derivaban en graves perturbaciones del orden, estas solían concluir en una intervención norteamericana, como sucedió en 1906, cuando incapaz de controlar la situación Estrada Palma renunció para dar paso a un nuevo gobierno interventor que se prolongaría por casi tres años.

Por obra de la Enmienda Platt, Estados Unidos se había erigido en árbitro de la política cubana y no cabe duda de que las

sublevaciones electorales pretendían forzar dicho arbitraje. En cumplimiento de sus “obligaciones”, los norteamericanos intentaron poner orden mediante la reforma de la legislación, puesto que consideraban que la debilidad institucional propiciaba la viciosa conducta política de los cubanos. Durante la segunda intervención (1906-1909), se encargó a una Comisión Consultiva la elaboración de leyes complementarias a la Constitución —las leyes orgánicas de los municipios y las provincias, entre otras—, tarea francamente descuidada por el Congreso cubano durante el gobierno de Estrada Palma, y, sobre todo, se establecieron las cruciales normativas electorales, cuya redacción fue encargada al coronel Enoch Crowder. Este personaje, genuina encarnación del intervencionismo, sería enviado de nuevo a la isla tras la rebelión liberal de 1917 —ocasión en que se despacharon tropas sin llegar a una intervención formal—, con la misión de perfeccionar el código electoral, y habría de retornar a principios de la década de 1920 ya con talante abiertamente proconsular. Como la inestabilidad republicana en Cuba podía demandar la intervención de Estados Unidos en el momento menos conveniente, ese país optó por una política de “intervención preventiva”, asignando a los sucesivos ministros norteamericanos en La Habana el ejercicio de un continuo tutelaje sobre la gestión de los gobiernos cubanos. Practicada de manera sistemática, la injerencia extranjera constituía un factor de perversión en la política nacional.

El corolario inevitable de una economía de limitadas oportunidades y de una política codiciosa era la corrupción. Ese vicio, con antecedentes coloniales bien arraigados, si no suprimido, al menos había sido atajado durante el primer gobierno interventor y la administración de Estrada Palma. Sin embargo, durante la intervención subsiguiente, en un ambiente de pasiones desatadas, el gobernador Charles Magoon recurrió extensamente a los fondos públicos para promover la tranquilidad. Con el Tesoro bien nutrido, Magoon impulsó un amplio progra-

ma de obras para cuya ejecución hizo un manejo un tanto turbio de las concesiones, al mismo tiempo que otorgaba indemnizaciones a diversas personas y entidades —incluyendo la Iglesia católica— para satisfacer reclamaciones que en algunos casos se remontaban bastante tiempo atrás y resultaban más que dudosas. De manera descarnada, el gobernador apaciguaba a los políticos repartiendo puestos públicos o apelaba directamente al soborno. Por esas acciones algunos historiadores han presentado a Magoon como el padre de la corrupción republicana, acusación un tanto injusta, pues ese era un mal de muy antiguas raíces, aunque deba aceptarse que los extravíos del "tutor" inevitablemente dejan su huella en el "pupilo". Y su discípulo más inmediato, José Miguel Gómez —presidente entre 1909 y 1913— no tardaría en superarlo. Típico caudillo de base rural, Gómez afianzó la autoridad gubernamental, organizó el ejército permanente y creó una marina de guerra, amplió las representaciones diplomáticas de la República, fundó instituciones culturales, inauguró la legislación social —prohibiendo el pago de jornales en medios no monetarios— e impulsó obras de indiscutible trascendencia económica. Dotar a La Habana de alcantarillado, dragar los puertos o propiciar el trasladado de una terminal ferroviaria para embellecer la capital fueron acciones de evidente utilidad, pero todas ellas estuvieron asociadas al cobro de sustanciosas comisiones y otras maniobras fraudulentas que les ganaron el apelativo de "chivos", pues algo olía muy mal en esas operaciones. Autorizar las peleas de gallos no podía considerarse precisamente como una contribución a la moral ciudadana y mucho menos la reimplantación de la Lotería, convertida de inmediato en un sofisticado recurso de manejos políticos mediante las llamadas "colecturías". Esas concesiones para la venta de un determinado número de billetes reportaban a su tenedor suculentos ingresos, de manera que el presidente de la República comenzó a distribuirlas a discreción para premiar adhesiones y sobornar oponentes.

El adusto conservadurismo de su sucesor, Mario García Menocal (1913-1921), no alcanzaría para encubrir prácticas igualmente corruptas. Con fama de buen administrador —en un negocio azucarero norteamericano—, Menocal prometió un gobierno ordenado y eficiente, para lo cual no le faltaron condiciones, pues al año de instalado en el poder la Gran Guerra abrió una coyuntura excepcional para el azúcar cubano. El presidente conservador adoptó entonces medidas para facilitar el crecimiento productivo, como la libre inmigración de braceros antillanos para ser empleados en la zafra o el otorgamiento de nuevas concesiones ferroviarias y portuarias y creó también la moneda nacional —el peso, en paridad con el dólar estadounidense—, pero sorprendentemente, dados los mayores ingresos que el auge económico reportaba al Estado, dio impulso al endeudamiento público mediante la concertación de empréstitos y la emisión de títulos por un valor total cercano a los 50 millones de dólares. La tendencia al endeudamiento se había iniciado bajo el gobierno de Estrada Palma, quien con cierta reticencia concertó un empréstito de 35 millones de dólares para pagar adeudos al Ejército Libertador, operación que en conjunto se había saldado con limpieza. No sucedió lo mismo con Menocal, pues desde la primera emisión de bonos se hizo notar un manejo poco escrupuloso de la Hacienda pública, percepción que se acentuaría tras la introducción de nuevas cargas fiscales y que habría de acompañarle a lo largo de todo su mandato, bien largo por cierto, pues fue el primer presidente que —fraude electoral mediante— consiguió concluir dos términos sucesivos de gobierno.

DESPERTAR NACIONALISTA

Las “vacas gordas” que representaron para la isla los años de la primera Guerra Mundial vinieron a culminar un ciclo expansivo de casi dos décadas, cuyas consecuencias sociales y culturales

eran bien visibles. Las extensas regiones orientales que habían llegado al siglo XX prácticamente vírgenes, ahora se hallaban invadidas por cañaverales y surcadas de vías férreas, mientras su vida transcurría entre los toques de sirena del central durante la zafra y el angustioso silencio del "tiempo muerto". La población urbana, que llegó a ser mayoría, palpaba de manera mucho más directa los avances de la modernidad, especialmente en la capital, cada vez más diferenciada de las ciudades de provincia. Con la construcción del malecón La Habana había ganado una fachada marítima, de la cual no tardó en apropiarse la clase alta que también levantó sus palacetes a lo largo del paseo del Prado y en El Vedado y comenzó a desplazarse, durante la "danza de los millones", hacia urbanizaciones más alejadas donde se asentaban los clubes aristocráticos. Los sólidos edificios erigidos por los bancos en la ciudad vieja y alguno que otro rascacielos de modestas proporciones conformaban una pequeña *city* capitalina, desde la cual podía admirarse el fastuoso Palacio Presidencial construido por Menocal. Santiago de Cuba, Camagüey, Cienfuegos y Matanzas, aunque en menor escala, también exhibían atributos de la modernidad urbana e incluso en poblaciones más pequeñas ciertas edificaciones de estos años permanecerán como símbolos de identidad. Las desigualdades sociales tenían también su expresión física; junto a los primeros edificios multifamiliares para las capas medias, La Habana ya disponía de una parcelación explícitamente obrera —Pogolotti— y, en los suburbios, sin orden ni apenas equipamiento, brotaban los barrios marginales, que con menores dimensiones se dejaban ver igualmente en otras ciudades. El equivalente rural de esa compartimentación la ofrecían sobre todo los bateyes azucareros, donde las amplias y modernas casas de "la compañía" contrastaban con los barracones de los trabajadores, que no solo de nombre recordaban a los sórdidos alojamientos de la esclavitud.

Las circunstancias y características del crecimiento azucarero tuvieron muy singulares y contradictorios efectos en la socie-

dad cubana, pues si bien sus componentes aumentaron con notable rapidez desde el punto de vista demográfico, se originaron al mismo tiempo presiones disgregadoras que conspiraban contra la cohesión de los agrupamientos sociales e inhibían su proyección nacional. La burguesía, debilitada por la contienda independentista, logró recomponerse en las dos décadas subsiguientes. Aunque con menos centrales en su poder, los hacendados cubanos consiguieron incrementar su producción, mientras otros capitalistas locales —principalmente españoles— aprovechaban las posibilidades del creciente mercado interno e invertían en el comercio y ciertos renglones productivos; a ellos se sumó la nueva élite burocrática, enriquecida en el ejercicio de la función pública, algunos de cuyos miembros más prominentes terminaron convertidos en hacendados y colonos. Sin embargo, por más que esa burguesía hiciese ostentación de opulencia, en su conducta se dejaba sentir la posición subalterna a que se hallaba reducida, tanto en lo económico como en lo político. Desarticuladas además por factores de origen o rivalidades políticas, esas primeras élites republicanas mostraban escasa coherencia, ya no solo como expresión nacional sino incluso en el plano corporativo, lo cual bien ejemplifican los hacendados azucareros, que después de haber creado una influyente y representativa corporación en la etapa final de la colonia, se mostraron incapaces de sostenerlo o reemplazarlo en estos primeros tiempos republicanos.

Las tendencias divergentes eran igualmente apreciables entre las capas medias. El artesanado y algunos pequeños comerciantes se vieron perjudicados por las importaciones que favorecía la reciprocidad comercial, del mismo modo que la geofagia de las compañías azucareras sacó de sus tierras a muchos agricultores; pero a la vez se originaron efectos contrarios, dado el número de los que adquirieron la condición de colonos arrendatarios. De igual manera se hacía notar el crecimiento del número de empleados —tanto en las nuevas compañías como en

la administración pública— y se incrementaba el ejercicio de las profesiones liberales. Sin embargo, estas tendencias no reportarían una mayor coherencia a capas sociales tradicionalmente desarticuladas, pues el simultáneo crecimiento de la inmigración acentuó las diferencias internas en sectores como el comercio, imprimiendo connotaciones nacionales al tradicional antagonismo entre vendedores y consumidores. Semejantes efectos disgregadores originaban las prácticas clientelares en la burocracia estatal. Las capas medias aportaban un buen número de instituciones a la sociedad civil —asociaciones profesionales, de inmigrantes, etc.— pero carecían en cambio de un mínimo de cohesión. Circunstancias similares ya habíamos apuntado en el caso del proletariado, disperso en multitud de oficios y pequeños talleres, fraccionado —y hasta enfrentado— además por el distinto origen nacional, la diversidad de culturas e idiosincrasias y los prejuicios raciales. Debido a ello, las combativas huelgas que provocara el aumento del costo de la vida durante los años de la guerra mundial no cuajaron en un progreso apreciable de la organización sindical.

Dado semejante cuadro social, no ha de extrañar que floreciesen conductas dañinas. La República cobijaba una sociedad violenta: en 1913 los hechos de sangre duplicaban el promedio norteamericano y a menudo obedecían a rivalidades políticas. El parejo florecimiento de los delitos contra la propiedad durante esos años de prosperidad, constituía un claro indicio de que la dicha no alcanzaba a todos. Para muchos la mejor alternativa eran los juegos de azar, cuya difusión se favorecía desde los medios gubernamentales; no resulta fácil evaluar la extensión de ese vicio, pero la diversidad de sus modalidades, desde los barrios marginales hasta los aristocráticos casinos, ponía de manifiesto que a esa lacra no escapaba sector alguno de la población.

La cultura, en cambio, no se propagaba con tanta facilidad. El índice de analfabetismo disminuyó en las dos primeras décadas del siglo, aunque no así la cantidad de analfabetos, pues

como las aulas aumentaban a un ritmo menor que la población, la escolarización fue disminuyendo en términos proporcionales. Según el criterio de los más renombrados educadores de la época, la enseñanza, que con tan buenos augurios se desarrollara en los albores de la República, experimentaba un visible deterioro, más acusado aún en el nivel medio, sector cuyo mayor avance se dio en la formación de maestros, para la cual se fundaron varias escuelas normales durante la administración de Menocal. El desmedro de la enseñanza pública propició el auge de la privada, en particular los colegios para hijos de familias acomodadas, un espacio en el que se hizo ostensible el avance de la Iglesia católica. Apartada de su base nacional desde mediados del siglo XIX, el prestigio de la Iglesia se había visto muy menguado por su irrestricto apoyo al régimen colonial durante el proceso independentista. Sin conseguir cubanizarse —en 1919 se contaban 156 sacerdotes cubanos por 426 españoles— y separada del Estado por la Constitución de 1901, la institución religiosa se había propuesto recuperar terreno —y sustento económico— con la educación de las nuevas élites, a cuya sensibilidad nacional no hacía precisamente la mayor contribución. Tampoco podía esperarse esto de las escuelas protestantes. El protestantismo había comenzado a propagarse en el último tercio del siglo anterior, cuando fue considerado por algunos creyentes como una alternativa patriótica ante la filiación colonialista de la jerarquía católica, pero tras la intervención norteamericana esas iglesias cayeron bajo el influjo directo de sus homólogas estadounidenses y devinieron instrumentos —conscientes o no— de americanización. El sentimiento nacional, debilitado por la frustración del independentismo y la cuantiosa oleada de inmigrantes, se reproducía en buena medida gracias al celo de los maestros cubanos que, especialmente en la escuela pública, se esforzaban por mantener vivas las tradiciones patrióticas.

Las tensiones generadas por una modernización que respondía a la penetración extranjera y la creciente desmoraliza-

ción de la vida política, resultan visibles en la creación cultural de estos años. De un lado es perceptible el auge de las publicaciones periódicas, con revistas culturales de notable calidad como la *Bimestre Cubana*, *Cuba Contemporánea* o *La Reforma Social,* y de otro el florecimiento de una literatura de lustre indiscutible, en la cual la frustración, el desengaño y hasta el cinismo, apreciables en la narrativa de Jesús Castellanos, Miguel de Carrión, José Antonio Ramos o Carlos Loveira, contrastaban con el cosmopolitismo y la despreocupación predominantes en una poesía todavía impregnada de alientos modernistas. Atrapada en moldes académicos, la pintura plasma admirables imágenes impresionistas en los cuadros de Leopoldo Romañach, pero incluso al abordar temas patrióticos —como lo hacía Armando Menocal— no conseguía dar a sus trazos un genuino timbre de cubanía. En la música se deja sentir el distanciamiento entre los géneros más populares, como el danzón y la trova, y una lírica que bajo el influjo de ópera italiana logra notables composiciones con Eduardo Sánchez de Fuentes, autor que, significativamente, rechazaba de manera explícita y vehemente el carácter nacional de los ritmos de origen africano.

Las inquietudes sociales se hallan latentes en ensayos como *Los negros brujos* y *Entre cubanos*, de Fernando Ortiz, y en el *Manual del perfecto fulanista* de Ramos, al mismo tiempo que una historiografía "de campaña" —las *Crónicas de la guerra* de José Miró Argenter, la ejemplifica— nutría la historia con testimonios de la más reciente gesta independentista. Pero nada de ello sacaba de su letargo a una conciencia nacional que parecía dormitar ante injerencias y corruptelas. En aquellos años de la danza millonaria, cuando la élite adinerada disipaba su tiempo en bailes fastuosos y funciones de la mejor ópera —Enrico Caruso tenía entonces temporadas habaneras—, y los momentos de ocio de las clases populares transcurrían entre las salas de cinematógrafo, los estadios de beisbol, el boxeo o el carnaval, no parecían existir motivos de preocupación.

Esa era la atmósfera en que irrumpió como un desconcertante relámpago el crac de 1920. Con la liquidación de la banca doméstica y la masiva pérdida de propiedades a manos extranjeras, la burguesía se percató de los peligros que entrañaba su confiada asociación con el capital estadounidense, mientras empleados, profesionales y pequeños comerciantes veían esfumarse sus ahorros depositados en los bancos quebrados. La deflación descargó todo su peso sobre los trabajadores, pues las empresas optaron por rebajar salarios y cesar personal para hacer economías, lo que ocasionó un vasto e irregular movimiento huelguístico. Para colmar la copa, el relevo gubernamental previsto para las elecciones de 1920 se saldó con la permanencia en el poder de los desprestigiados conservadores, pues Menocal decidió apoyar la candidatura presidencial de Alfredo Zayas quien promovía un pequeño partido escindido del liberalismo, que una vez más se quedó en la estacada. El malestar creado por la burda operación trajo de vuelta a La Habana al general Crowder, que esta vez desde el acorazado *Minnesota*, surto en el puerto habanero, enviaría un memorándum admonitorio tras otro al presidente Zayas dictando las condiciones para concederle el empréstito de 50 millones de dólares que el gobierno requería con urgencia. La injerencia nunca había sido tan desembozada y el gracejo popular lo hizo patente: "Es como el *Minnesota*, que ni se nota".

La crisis que se abate sobre la isla en los primeros años veinte aviva una sensibilidad nacionalista que tomaría cuerpo entre las élites intelectuales y políticas, en las masas trabajadoras y hasta en los propios medios de negocios, desencadenando potentes movimientos sociales. Con anchísimo espectro ideológico, ese nacionalismo tuvo muy variadas manifestaciones y de hecho se proyectaba en sentidos distintos, tanto hacia el rescate de la propiedad o la soberanía como a la reconsideración de las identidades.

Movilizados en defensa de sus condiciones de vida, los obreros escenificaron huelgas de consideración, tanto en la rama fa-

bril como por parte de los ferroviarios, sector este último que en Camagüey articuló importantes acciones con los trabajadores azucareros. Una decidida dirigencia anarcosindicalista y la radicalización que entre los grupos socialistas generó la Revolución rusa de 1917, propiciaron la creciente vertebración de organizaciones sindicales, primero en una federación habanera y más adelante, tras la celebración de amplios congresos, en la Confederación Nacional Obrera de Cuba, central sindical fundada en 1925 que contaba con sindicatos afiliados a todo lo largo del país. Casi simultáneamente, la radicalizada tendencia socialista dejaría constituido el primer Partido Comunista. Entre las capas medias, el movimiento lo encarnaba, sobre todo, la joven generación. En la Universidad de La Habana —entonces único centro de educación superior del país—, a finales de 1922 el estudiantado se levantó en demanda de la autonomía universitaria y la depuración de profesores corruptos. Visiblemente inspirado en la reforma que alentara la universidad argentina de Córdoba, el movimiento se extendió muy pronto a la enseñanza media, hasta cuajar al año siguiente en un combativo congreso nacional, que bajo el magnético liderazgo de Julio Antonio Mella trascendería las demandas estrictamente estudiantiles para denunciar la injerencia norteamericana, las corruptelas y otros males mayores de la nación. Las mujeres, que desde la década anterior reclamaban su derecho al sufragio, protagonizan ahora un movimiento más amplio, no solo en su composición sino en sus aspiraciones, el cual cristaliza en la realización de un primer Congreso Nacional de Mujeres, celebrado en abril del propio *annus mirabilis* de 1923.

Pocos días antes un grupo de 13 jóvenes intelectuales había protagonizado una sonada protesta en un acto público presidido por el ministro de Justicia, personaje de notoria corrupción. En ese sector de la intelectualidad el compromiso social coincidía con una reformulación del lenguaje y las concepciones estéticas, bajo el evidente influjo de las vanguardias europeas. La reivindi-

cación de los componentes africanos de la cultura nacional emprendida por Fernando Ortiz, toma cuerpo en las composiciones musicales de Amadeo Roldán y Alejandro García Caturla, popularizándose en las canciones de Moisés Simmons y Eliseo Grenet, a la vez que en lo literario se consagraba con la poesía "negrista" de José Z. Tallet, Emilio Ballagas y —algo después— Nicolás Guillén. La denuncia social que en lo poético expresan *La zafra* de Agustín Acosta o el "Mensaje lírico civil" de Rubén Martínez Villena —cabeza indiscutible de "la protesta de los trece"—, se plasmaba en la ensayística de Jorge Mañach y en la obra de un historiador ya renombrado como Ramiro Guerra, a la vez que adquiría, en la pluma de Emilio Roig de Leuchsenring, una proyección francamente antiimperialista. Las inquietudes que alentaba el movimiento intelectual cristalizaron en el Grupo Minorista y tuvieron su más claro exponente en la *Revista de Avance*, aunque también se difundían desde las páginas de una publicación de tan frívola apariencia como *Social*.

Que el malestar corroía a todo el cuerpo de la sociedad lo hacían evidente desde las protestas de los colonos orientales hasta algún inusitado manifiesto de la Cámara de Comercio. Como se trataba de inquietudes compartidas, las coincidencias no tardaron en producirse: la condena a la decadencia republicana, expresada por Fernando Ortiz, encontró eco en los elementos más sanos del viejo independentismo, creadores del Movimiento de Veteranos y Patriotas, en cuya acción más decidida habría de enrolarse un poeta como Martínez Villena. Esa convergencia de los movimientos sociales, que muy bien ejemplifican la creación de una "universidad popular" para los obreros por la Federación Estudiantil Universitaria, a iniciativa de Mella, así como la propia participación de este en la fundación del Partido Comunista, generaba una constante turbulencia que mantenía en vilo al país. Si las ansias de regeneración no derivaron entonces en la quiebra de la institucionalidad republicana, ello se explica en buena medida por la suprema habilidad con que el presiden-

te Zayas manejó la situación, haciendo gala de tolerancia, así como un oportuno uso del soborno. Casi al borde del desastre, las dirigencias políticas optaron por unirse y presentar al país una propuesta "salvadora" cuyo exponente era, otra vez, un general de la independencia: Gerardo Machado.

Ministro de gobierno con José Miguel Gómez, Machado llegó al liderazgo del Partido Liberal tras el fallecimiento del viejo caudillo; a ese ascenso contribuyeron un carácter enérgico, cierto don de gentes y la fama de buen administrador —dueño de un pequeño central—, atributos que le granjearon el respaldo del empresariado y varios sectores populares hasta conducirlo a la victoria electoral en 1925. Al margen de ciertas poses nacionalistas y promesas más o menos demagógicas, el norte del programa machadista era la estabilización de la vida del país. En lo económico la situación era compleja, pues apenas llegado Machado al poder el azúcar experimentó una notable caída de precios, resultado de la sobreproducción mundial a la cual Cuba había contribuido con una zafra superior a los cinco millones de toneladas. Las señales del mercado y el creciente proteccionismo norteamericano indicaban que dicho descenso en esta ocasión no sería pasajero como en 1920, por lo cual el gobierno se vio obligado a intervenir. En respuesta a los reclamos de los hacendados cubanos y de un sector de las corporaciones norteamericanas sobrecargado de deudas, Machado diseñó una política encaminada a sostener el precio del dulce mediante un convenio internacional que restringiese la oferta, así como a la regulación interna de la industria distribuyendo cuotas de producción a todos los centrales y colonos para evitar que los más débiles fuesen desplazados por la competencia. La decisión era trascendente, pues en la práctica se daba por concluida la expansión azucarera, que constituía la esencia de esa suerte de "pacto neocolonial" entre Cuba y Estados Unidos sobre el cual se erigió la economía republicana. Para compensar los efectos recesivos de esa política, se puso en marcha un programa consistente en un vasto plan de obras públicas,

financiado a base de la ampliación tributaria y la concertación de sucesivos empréstitos con el Chase National Bank de Nueva York, así como una reforma arancelaria —aprobada en 1927— que, sin afectar los compromisos de la reciprocidad, extendía cierta protección a varios renglones hacia los cuales podría encauzarse la inversión y la creación de empleo.

La estabilización social machadista descansó en la antigua fórmula del garrote y la zanahoria. A la vez que atraía a los sectores laborales mejor pagados y a los dirigentes reformistas hacia un sindicalismo oficial, el gobierno desató una represión selectiva asesinando o deportando a los líderes anarcosindicalistas y desarticulando a los sindicatos más combativos. Para desmovilizar al estudiantado universitario se conjugó la construcción o remozamiento de instalaciones docentes y deportivas, con la expulsión de Mella de la Universidad —forzado al exilio y, más tarde, asesinado— y el aislamiento de quienes lo habían secundado. En el terreno político la estabilización radicaba en garantizar a las dirigencias tradicionales su acceso al tesoro público y así poner fin a las reyertas politiqueras, para lo cual se ideó el llamado “cooperativismo”. Este consistió en un arreglo entre los partidos representados en el Congreso que en la práctica eliminaba la oposición y preservaba la influencia proporcional de cada uno de ellos, a la vez que se establecía el reparto de destinos y prebendas en la extensa burocracia estatal. Los políticos renuentes a “cooperar” se vieron marginados o incluso asesinados, acciones de las cuales también fueron víctimas algunos periodistas. Como en política la estabilidad radicaba en la permanencia y Machado se había comprometido a no reelegirse, se apeló al subterfugio de prorrogar sus poderes mediante una reforma constitucional en 1927, maniobra que a pesar de ser repudiada por el estudiantado y otros sectores terminó por imponerse, acentuando los ya visibles rasgos dictatoriales del régimen.

Tras más de cuatro años de mandato, cuando el éxito parecía coronar la gestión del presidente Machado, un giro de los acon-

tecimientos vendría a demostrar cuán endebles eran sus logros. En marzo de 1930, ya bajo los embates de la crisis mundial, una huelga general de 24 horas, acatada por decenas de miles de trabajadores en La Habana y otras ciudades del país puso de manifiesto la vitalidad y beligerancia del movimiento obrero, que ahora contaba por añadidura con un liderazgo comunista cuya cabeza visible era el poeta Martínez Villena. Seis meses después una combativa manifestación estudiantil violentamente reprimida por la policía se saldaba con el primer mártir universitario. La movilización popular y las expresiones de resistencia habrían de acrecentarse mientras el país se adentraba en un proceso revolucionario.

VIENTOS DE REVOLUCIÓN

La Gran Depresión de 1929 encontró en Cuba una economía minada. Tras su infructuoso esfuerzo por estabilizar el precio del azúcar, el gobierno de Machado había abandonado la política restrictiva, de manera que el crac de Wall Street sorprendió a la isla con los almacenes abarrotados por otra zafra mayor de cinco millones de toneladas. En caída libre, el precio del dulce descendería hasta colocarse a menos de un centavo por libra en 1932. Pero esa deflación no era la principal causa de la tragedia económica; en vísperas de la crisis, Estados Unidos había adoptado el arancel Hawley-Smoot, cuya tarifa para el azúcar cubano —dos centavos por libra— resultaba superior al precio del producto gravado. La consecuencia inmediata fue la progresiva pérdida para Cuba del decisivo mercado norteño. Tratando de contener dicha tendencia, los hacendados cubanos en alianza con algunas corporaciones norteamericanas propusieron el llamado Plan Chadbourne, que preveía la concertación de un nuevo convenio azucarero internacional, así como un acuerdo entre los abastecedores de Estados Unidos para estabilizar la

oferta. Implementado por el gobierno de Machado, el plan implicó una mayor regulación de la industria, no solo en materia de cuotas y otros detalles productivos, sino también mediante la cartelización de las ventas. Parcialmente efectivo respecto al mercado mundial, el Plan Chadbourne fracasó por completo en su intención de detener el desplazamiento del dulce criollo en el consumo estadounidense. En 1933, con un monto de dos millones de toneladas, el valor de la zafra cubana era sólo de 42 millones de dólares, lo cual representaba apenas una quinta parte de los ingresos que reportara la cosecha de 1929.

La economía de Cuba, carente de renglones que la compensaran, exhibió la más profunda contracción en Latinoamérica. Con ventas que en 1933 eran inferiores en 70% a lo exportado en 1929 e importaciones por solo 42 millones de dólares, se estima que el ingreso nacional había disminuido ese año en más de 40% respecto al nivel previo a la crisis. No obstante las medidas de emergencia tributaria, las recaudaciones del Estado se redujeron aceleradamente hasta llegar a 43.7 millones de dólares en el año fiscal 1933-1934, disminución que ocasionó la progresiva rebaja del presupuesto así como la parálisis de las obras públicas y otros servicios, con la consiguiente cesantía de jornaleros y la acumulación de varios meses de adeudos en el pago a los empleados públicos. Según los estimados, en la fase más aguda de la depresión un tercio de la fuerza laboral del país se hallaba desempleada y los que conservaban sus ocupaciones percibían menores salarios; valga como escalofriante ejemplo la situación de los cortadores de caña, cuyos jornales totales en 1933, estimados en poco más de tres millones de pesos, constituían solo 15% de lo ganado en la zafra de 1929.

Quebrantada en lo económico y lo social, la propuesta estabilizadora de Machado comenzó a desvanecerse también en el terreno político. La fractura del cooperativismo se puso de manifiesto, no solo por la beligerancia creciente de la Unión Nacionalista, la disidencia liberal que se había agrupado en torno a

Carlos Mendieta —rival de Machado en 1925—, sino sobre todo por la ruptura con el dictador de Miguel Mariano Gómez —hijo del desaparecido caudillo liberal— y el alejamiento de Mario García Menocal, secundado por un nutrido grupo de "cooperantes" conservadores. En coordinación con algunos elementos del estudiantado y otros grupos menores, esos líderes impulsaron un movimiento insurreccional en el verano de 1931, el cual contemplaba el desembarco de una expedición en Oriente y levantamientos en varios puntos del occidente, incluyendo a la propia capital. Aunque no faltó combatividad, la insurrección fracasó en toda la línea, resultado que obró en detrimento del ya escaso prestigio de los viejos caudillos —Mendieta y Menocal— apresados de manera ignominiosa cuando intentaban sumarse al levantamiento. El desgaste de la oposición tradicional dio paso a nuevas fuerzas, en particular el ABC, organización conspirativa de clase media dotada de un moderado programa reformista —que algunos consideraban fascistoide—, cuya violenta lucha incluyó la realización de atentados y otros actos de corte terrorista, a lo cual la dictadura respondió recrudeciendo su ya bárbara represión.

El estudiantado, que había sido pionero en el combate a Machado, llevaba a cabo acciones de parecida índole a partir de su propia organización: el Directorio Estudiantil Universitario (DEU). Creado a raíz de la gran manifestación de septiembre de 1930, el DEU contaba también con el respaldo de buena parte del profesorado y, aunque había experimentado la escisión de un grupo radical que organizó el Ala Izquierda Estudiantil —cercana al Partido Comunista—, actuaba en la clandestinidad como expresión política de la Universidad mientras esta permanecía clausurada. En el movimiento obrero, el asesinato y la deportación de muchos dirigentes anarcosindicalistas abrió espacio al Partido Comunista que se empleó a fondo en la reconstitución de los organismos sindicales. Su primer éxito fue la gran jornada huelguística de 1930, a partir de la cual extendió su trabajo ha-

cia los sectores menos organizados del proletariado, en particular en los centrales azucareros. No obstante su corta militancia, los comunistas hacían gala de un notable activismo, y desarrollaron con tenacidad una red de organizaciones —la Defensa Obrera Internacional o la propia Ala Izquierda Estudiantil— que les permitían influir en otras esferas de la sociedad. Bajo la égida de la Tercera Internacional, el Partido Comunista proclamaba la realización de una "revolución agraria y antiimperialista" y la subversión del régimen mediante la lucha de masas, pero con su celo por preservar la independencia política del proletariado propendía a las actitudes sectarias.

A finales de 1932 el sistema político republicano se hallaba al borde del desplome. Favorecidas por el grave deterioro de la situación socioeconómica, las huelgas eran incesantes y llegarían hasta la temporal ocupación de algún central azucarero por sus trabajadores, mientras que los sabotajes, atentados y otras acciones insurreccionales mantenían en jaque a las fuerzas de la dictadura. Esta respondía con una represión desaforada, al tiempo que se mostraba notoriamente inefectiva en sus gestiones para revitalizar la economía. Los intereses norteamericanos habían aupado desde un principio el gobierno de Machado, al cual Washington ofreció en toda circunstancia muestras de respaldo, ya fuese con la presencia en La Habana del presidente Calvin Coolidge durante la VI Conferencia Panamericana, o mediante el invariable apoyo de su embajador en Cuba, Harry Guggenheim. Sin embargo, el ascenso a la presidencia de Franklin D. Roosevelt a principios de 1933 dio paso a un cambio de política. El renovador programa de la administración demócrata contemplaba medidas de alivio para la economía cubana, pero el nuevo gobierno estimaba que la aplicación de estas debía estar precedida por una solución a la crisis política en la isla.

Con tal finalidad se designó como embajador en Cuba al subsecretario de Estado Benjamin Sumner Welles. Apenas llega-

do a La Habana, el funcionario convocó a conversaciones entre el gobierno y las organizaciones opositoras. Aceptada con reticencia por Machado, esa “mediación” contó con el respaldo de la oposición tradicional —Unión Nacionalista, Menocal, etc.— así como con la participación del ABC y otras organizaciones menores, pero fue repudiada como injerencista por el DEU y otros grupos revolucionarios, así como por el Partido Comunista. Mientras las conversaciones se prolongaban debido a las maniobras dilatorias de los representantes gubernamentales, la situación nacional fue empeorando hasta desembocar a principios de agosto de 1933 en una huelga general convocada por el Partido Comunista, gradualmente acatada a todo lo largo del país. Acorralado, el dictador intentó entonces acciones desesperadas, desde el ametrallamiento de una manifestación popular hasta la oferta de concesiones a los comunistas para que pusiesen fin al movimiento —propuesta momentáneamente aceptada—, sin otro resultado que agravar la situación hasta extremos insostenibles. Ante circunstancias que hacían tambalear los propios fundamentos del sistema, el embajador Welles decidió apelar el ejército, que comunicó a Machado la retirada de su apoyo forzándolo a la renuncia. La huida del tirano y su sustitución por un débil gobierno integrado con los participantes de la “mediación”, originaron una situación anárquica que daría margen a saqueos y ajustes de cuenta, fenómeno este último que la ausencia de una justicia bien aplicada habría de prolongar durante años.

8
FACETAS DE LA CRISIS REPUBLICANA

El evidente agotamiento de las posibilidades de la producción azucarera como impulsora del crecimiento económico, así como la quiebra del régimen político puesta de manifiesto por la instauración y el posterior derrocamiento de la dictadura de Machado, condujeron a la República a una crisis cuya solución entrañaba enormes desafíos. De un lado se hacía imprescindible abrir nuevos cauces a la actividad económica para sustentar su desarrollo, tarea nada fácil en el marco de una rígida estructura orientada hacia la exportación azucarera. A su vez, en lo político, la grave situación demandaba prácticamente una refundación del Estado, de manera que este pudiese superar las lacras y limitaciones que caracterizaran las primeras décadas de su desenvolvimiento. Ambas tareas debían conjugarse además para satisfacer los intereses diferentes y hasta contrapuestos de una sociedad ya muy diversa y compleja. El cuarto de siglo que media entre la fuga de Machado y la revolución de 1959 sería, por tanto, una etapa crucial para el destino de Cuba.

POR LA VÍA DE LAS REFORMAS

Como sustituto de Machado el embajador Welles escogió a un diplomático cuyo mayor capital era su nombre, Carlos Manuel de Céspedes, colocado en agosto de 1933 a la cabeza de un gabinete compuesto por heterogéneas fuerzas políticas, que habían coincidido en la "mediación" pero albergaban muy encon-

tradas ambiciones. Envuelto el país en una situación caótica, con las autoridades locales destituidas, las fuerzas represivas a la desbandada y una treintena de centrales tomados por sus trabajadores, la incapacidad del nuevo gobierno no tardó en hacerse notoria. El 4 de septiembre de 1933, un movimiento de las clases y soldados del ejército apoyado por el Directorio Estudiantil y otras organizaciones opositoras derribó a Céspedes, reemplazándolo por un equipo colegiado —la pentarquía— que a los pocos días dio paso a otro gobierno provisional presidido por Ramón Grau San Martín, profesor de medicina que gozaba de amplia popularidad entre el estudiantado.

Proclamado como gestor de la "auténtica revolución", el nuevo gabinete incluía personalidades de diversas tendencias, desde el conservador Manuel Despaigne, designado secretario de Hacienda, hasta un revolucionario radical como Antonio Guiteras, antiguo dirigente estudiantil y protagonista de varias acciones insurreccionales contra Machado, quien fue encargado de las decisivas carteras de Gobernación y Guerra. Tan variopinta composición se completaba con la figura de Fulgencio Batista, un sargento taquígrafo que se había destacado como eficaz coordinador del movimiento castrense, a quien la pentarquía ascendió a coronel y designó jefe del ejército y el cual —como la mayoría de sus colegas— carecía de una ideología definida. La cohesión de semejante equipo descansaba en la personalidad de Grau, hombre de perfil centrista que demostraría una notable habilidad negociadora.

El gobierno provisional se mostró activo y decidido en el ejercicio de sus funciones, adoptando por decreto una serie de medidas que indicaban a las claras su intención reformista. Algunas de esas disposiciones tenían carácter social, como la implantación de la jornada laboral de ocho horas, el reconocimiento del derecho a la sindicalización, la Ley de Nacionalización del Trabajo —que obligaba a emplear 50% de cubanos en todas las entidades públicas y privadas—, mientras que las de naturaleza económica evidenciaban igualmente cierta intencionalidad so-

cial, lo cual podía apreciarse en las decisiones de beneficiar a los pequeños centrales y colonos azucareros en la distribución de cuotas de producción, limitar la proporción de cañas propias que molían los ingenios o la ley de moratoria hipotecaria. A esas acciones se sumaron otras, como la sustitución del banquero Thomas Chadbourne en la presidencia del organismo rector de la política azucarera, la suspensión del pago de la deuda contraída por Machado con el Chase Bank o la intervención de la subsidiaria de la Electric Bond & Share, que afectaban directamente intereses norteamericanos. Además, en un gesto simbólico pero cargado de significación, el presidente Grau se había negado a jurar la Constitución de 1901 como muestra de su repudio a la Enmienda Platt.

Las relaciones con Estados Unidos no eran buenas. El nuevo gobierno cubano había realizado movimientos conciliatorios, pero enfrentaba el antagonismo del embajador Welles, que furibundo por la destitución de Céspedes impidió que se reconociese la presidencia de Grau. Sin llegar a la intervención armada, Washington no escatimaba presiones y desplegó su flota a lo largo de las costas cubanas, mientras que el embajador urdía con las fuerzas políticas desplazadas del poder maquinaciones encaminadas a derribar al gobierno. Los movimientos conspirativos de la derecha tuvieron sus manifestaciones más beligerantes en la amenazadora concentración de la antigua oficialidad del ejército en el mayor hotel habanero y, algo después, en el intento protagonizado por el ABC de tomar importantes instalaciones militares en la capital, acciones ambas cruentamente aplastadas por las fuerzas de Batista. El gobierno de Grau era también hostigado desde otro ángulo por los comunistas, que promovían movimientos huelguísticos y hasta la constitución de "soviets" en los centrales tomados por sus trabajadores, desconfiando de las fórmulas conciliadoras implementadas por Guiteras para solucionar los conflictos laborales. La salvaje represión desatada por Batista contra los asistentes al entierro de las cenizas de Julio

Antonio Mella —que habían sido traídas de México—, tornaría insuperables las contradicciones con la izquierda.

A principios de 1934 el gobierno provisional sobrevivía en medio de un incesante desgaste. Agotada su capacidad de maniobra, Grau perdía el apoyo del estudiantado mientras era imposible poner coto al enfrentamiento entre Guiteras y Batista. En conciliábulos con el embajador norteamericano, el jefe militar maduraba su traición y tras presentar un ultimátum, consiguió que Grau renunciase a la presidencia. El 15 de enero se instauraba un nuevo gobierno presidido por Carlos Mendieta, con el cual regresaban al poder las fuerzas políticas que habían sido desplazadas por el golpe del 4 de septiembre; solo que ahora contaban con el decidido respaldo de uno de los protagonistas de aquel movimiento, Fulgencio Batista. Esa suerte de restauración sirvió para poner de manifiesto las escasas posibilidades políticas de la vieja oligarquía, pues su gestión gubernamental, que conjugaba cierta continuidad en las medidas reformistas de la administración anterior con un serio incremento de la represión, se mostró incapaz de estabilizar el país. Mientras la vida nacional continuaba sacudida por constantes huelgas y acciones armadas —muchas de estas últimas protagonizadas por Joven Cuba, organización creada por Guiteras— el equipo de gobierno experimentaba sucesivos desgajamientos, en particular la costosa salida del ABC. Aunque activa, la oposición no exhibía mayor coherencia; el ascenso del movimiento huelguístico —del cual era centro la Universidad— hizo pensar en la posibilidad de un desenlace similar al que pusiera fin a la dictadura de Machado. Con tal finalidad se fueron sumando —más que concertando— fuerzas, incluido el propio ABC y el Partido Revolucionario Cubano (auténtico) —PRC(a)—, organización creada por estudiantes y personalidades que habían respaldado la presidencia de Grau. Joven Cuba, así como el Partido Comunista y la Confederación Nacional Obrera de Cuba, aunque manifestando sus reservas, también decidieron apoyar el movimiento. Una

huelga general, convocada a principios de marzo de 1935, constituyó la confrontación decisiva. En ella se impuso la más cohesionada y efectiva de las fuerzas en contienda, el ejército, en cuya preparación había venido trabajando con eficacia el coronel Batista. Con la cobertura de una legislación de urgencia, los militares asesinaron opositores, encarcelaron a centenares de obreros y estudiantes y disolvieron sindicatos, desplegando una saña represiva cuyo colofón sería el asesinato de Guiteras, víctima de una delación cuando intentaba abandonar el país.

Batista quedó como el verdadero árbitro de la situación, contando además con el irrestricto apoyo del nuevo embajador estadounidense, Jefferson Caffery, quien consideraba a las instituciones armadas como el principal —y casi único— sostén efectivo del *statu quo*. Desde al año anterior la administración Roosevelt había dado los pasos que creía necesarios para contribuir a la estabilidad cubana. La renuncia al derecho de intervención se formalizó mediante un nuevo Tratado Permanente, firmado en mayo de 1934, que derogaba la Enmienda Platt a la vez que preservaba algunas de sus cláusulas, como la correspondiente a la base naval de Guantánamo. Tres meses después un renovado Tratado de Reciprocidad Comercial ratificaba las ventajas arancelarias del azúcar y otorgaba preferencias a una treintena de productos cubanos, a cambio de rebajas de entre 20 a 60% a 400 artículos norteamericanos. Este acuerdo, además, engarzaba con una medida cuya trascendencia económica era bastante mayor: el sistema de cuotas adoptado para el abastecimiento del mercado azucarero estadounidense. Aunque la cuota concedida a Cuba representaba una proporción del consumo bastante menor que la tradicional, su asignación puso fin al paulatino desplazamiento del dulce cubano y, sobre todo, permitía obtener precios más altos que los del mercado mundial, ganancia adicional que se aseguraba con la preferencia obtenida gracias a la reciprocidad comercial. El efecto de estas medidas se hizo palpable a partir de 1935, cuando el valor de las exportaciones resultó superior en casi 50% a lo exportado

en el crítico año de 1933; la cifra —128 millones de dólares— era apenas la mitad de lo habitual en los años previos a la crisis, pero aportaba una relativa estabilidad.

Con estas reformas la dependencia vino a descansar principalmente en lo económico y, por supuesto, en los intereses creados en torno a ella por la parte cubana; el papel de las élites criollas en el sostenimiento de la relación neocolonial se acrecentaba, aunque también se haría notar la decisiva responsabilidad que correspondía a las fuerzas armadas en el mantenimiento del orden. El gobierno de Washington procuró mejorar el avituallamiento y la preparación de los cuerpos represivos comandados por Batista, pero a la vez insistió ante las autoridades cubanas en la necesidad de que los beneficios económicos derivados del régimen de cuotas drenasen hacia los sectores populares, única manera en que ese provecho surtiría un verdadero efecto estabilizador. Dicho criterio contribuyó a que se consolidase el intervencionismo estatal inaugurado por el gobierno de Machado, y también dio continuidad al acento social que las disposiciones reguladoras adquirieron bajo la administración provisional de Grau. Punto de partida de la regulación, la industria azucarera fue objeto de importantes decisiones orientadas a perfeccionar y ampliar dichas normativas, encargándose a una entidad paraestatal —con participación de empresarios norteamericanos y cubanos, así como de colonos— la formulación de la política azucarera y la organización del sector. Al mismo tiempo, en la esfera laboral se establecieron salarios mínimos, algunos derechos complementarios como el descanso por maternidad y mecanismos de arbitraje para evitar los conflictos. Con evidentes ambiciones políticas, el coronel Batista aprovechó para ampliar su presencia en la actividad estatal mediante la creación de servicios de salud y educación directamente adscritos al ejército, acciones que condujeron a un enfrentamiento con el presidente Miguel Mariano Gómez —elegido en 1936, en unos comicios de escasa representatividad—, el cual terminó con la deposición del primer magis-

trado. Aunque este fue sustituido por el vicepresidente, Federico Laredo Bru, la autoridad de Batista era indiscutida y el coronel decidió formular un plan económico y social destinado a ganarle una base social. En el ambicioso programa destacaba la Ley de Coordinación Azucarera, que protegía al pequeño colono y hacía corresponder la distribución de los ingresos proporcionados por el azúcar con el precio alcanzado por este; esa medida, que daba remate a la regulación de la primera industria, fue prácticamente la única de las propuestas del plan que habría de llevarse a efecto. La persistencia del malestar popular y el escaso rédito político que dejaron al jefe del ejército las medidas de inspiración corporativista, lo inclinaron a reconsiderar su actitud, cambio al cual contribuyó sin duda el interés norteamericano por culminar la estabilización de la situación cubana mediante el reforzamiento de la institucionalidad.

A principios de 1938 Batista hizo a un lado su programa dando prioridad a la realización de una asamblea constituyente cuya convocatoria constituía la demanda fundamental de la oposición. Las organizaciones derrotadas en la huelga de 1935 habían conseguido recomponer sus filas, aunque no superar sus diferencias, particularmente las que enfrentaban a los comunistas con los partidarios del ex presidente Grau agrupados en el PRC(a). La apertura democrática, que posibilitó la legalización de los partidos opositores, permitió también la reconstitución de los sindicatos, proceso conducido por dirigentes comunistas que culminaría con la creación en 1939 de una nueva central obrera: la Confederación de Trabajadores de Cuba (CTC). Alentado por esos avances y ante la imposibilidad de llegar a un arreglo con Grau, el Partido Comunista inició un acercamiento a Batista, aventurado movimiento que habría de distanciarle de otros grupos de izquierda. Para la elección de los delegados a la Asamblea Constituyente se integraron finalmente dos grandes coaliciones, la Socialista Democrática que agrupaba al Partido Liberal, la Unión Nacionalista y otras organizaciones tradicionales aliadas

a Batista, a la cual se sumó la ahora denominada Unión Revolucionaria Comunista, y el bloque opositor encabezado por el PRC(a), del cual participaban el ABC, los seguidores del general Menocal y otros partidos menores.

Colofón del proceso revolucionario de los años treinta, la Constitución promulgada en julio de 1940 trataba de conciliar los intereses y aspiraciones de las fuerzas sociales hasta entonces contendientes e institucionalizar su coexistencia. El amplio reconocimiento de los derechos democráticos de los ciudadanos, la proclamación de la función social de la propiedad privada, el extenso capítulo dedicado a consagrar los derechos de los trabajadores —jornada de ocho horas, salario mínimo regulado, sindicalización, vacaciones pagadas, etc.—, hacían de la Constitución un texto socialmente avanzado, característica esta en la cual sin duda influyeron tanto la coyuntura mundial de lucha antifascista, como las circunstancia de que la Asamblea se celebrase en vísperas de elecciones generales y sus sesiones se transmitiesen por radio a todo el país. Artículos como el que proscribía el latifundio o el que proclamaba la intención de crear una banca central, así como las formulaciones respecto al funcionamiento del Estado —con su deseo de poner coto a la expansión del Poder Ejecutivo— daban a la ley fundamental una evidente proyección programática que debería concretarse mediante una legislación complementaria. El delicado equilibrio político y social plasmado en la Constitución exigía una constante y compleja conciliación de intereses, cuya viabilidad dependería del dinámico comportamiento de la economía nacional.

VENTURAS Y DESDICHAS DE LA DEMOCRACIA

Una vez proclamada la nueva Constitución se celebraron las elecciones generales. En estas se impuso Fulgencio Batista, que con el respaldo de la Coalición Socialista Democrática pudo colmar

su aspiración de convertirse en presidente de la Republica. Su gobierno (1940-1944) quedaría enmarcado en las circunstancias de la segunda Guerra Mundial, que había estallado un año antes, y en la cual Cuba se unió al bando “aliado” una vez que Estados Unidos entró en esa contienda.

Aunque de inicio la guerra ocasionó una contracción económica, la devastación de zonas azucareras de Europa y Asia, así como la virtual interrupción del transporte marítimo favorecieron al azúcar cubano cuya producción se incrementó consistentemente acercándose a los niveles previos a la Gran Depresión. También se recuperó el precio del dulce, pero no tanto como cabía esperar, pues como contribución a la causa aliada Cuba acordó la venta íntegra de sus zafras a Estados Unidos a precios fijados de antemano. La gran conflagración internacional rescató a la economía cubana de su prolongada crisis, si bien ello no se tradujo en una prosperidad inmediata dados los trastornos y carencias creados por el propio conflicto. La realización de todas las exportaciones por el puerto de La Habana mediante convoyes resguardados de los submarinos alemanes, por ejemplo, ocasionó la parálisis de los demás puertos de la isla, mientras la limitación de las importaciones generaba inflación y, no obstante los intentos gubernamentales de regular los precios, florecía el mercado negro. La carestía propició también el desarrollo de producciones sustitutivas, tanto agrícolas como industriales, aunque en condiciones y a escalas limitadas, pues la dificultad para adquirir el necesario equipamiento determinó que esa tendencia se sustentase principalmente en la antigua maquinaria disponible.

Los negativos efectos de las circunstancias bélicas sobre el nivel de vida fueron contrarrestados en mayor o menor medida aplicando la extensa regulación laboral vigente. La presencia de los comunistas en la coalición gubernamental y el liderazgo que ejercían en la Confederación de Trabajadores posibilitaron soluciones relativamente armoniosas mediante sucesivos aumentos

de salarios —tanto generales, como sectoriales— y otras mejoras en las condiciones laborales, unido al compromiso asumido por los sindicatos de evitar huelgas que afectasen el "esfuerzo de guerra". Por una u otra vía los ingresos de la población se acrecentaron, aunque también lo hicieron los impuestos, incluyendo ahora las contribuciones directas de carácter progresivo que comenzaban a modernizar el régimen fiscal. El presupuesto público así engrosado facilitaba el sostenimiento de una burocracia que crecía a la par que proliferaban los organismos estatales, así como la realización de obras que ampliaban la oferta de empleo en compensación de actividades deprimidas por la guerra. Sin embargo, las evidencias de corrupción en la gestión del Estado, ahora entrelazadas además con el agio y la especulación, rodearon la administración de Batista de una desfavorable atmósfera, enrarecida además por actos de violencia con los que se ajustaban incluso antiguas cuentas pendientes de la dictadura de Machado. La crítica pública así como ciertos controles legislativos, posibilidades abiertas por el ejercicio de la democracia, daban cauce a la inconformidad popular y dejaban entrever el desgaste político del gobierno. Este se hizo patente con la abrumadora derrota del aspirante oficial a la presidencia en las elecciones generales de 1944, ganadas por el candidato del PRC(a), Ramón Grau San Martín.

La explosión de entusiasmo que acompañó a la victoria "auténtica", era expresión de las enormes expectativas despertadas por la llegada al poder de una figura que encarnaba la frustrada revolución de 1933. En mayor medida aún que Batista, la administración de Grau (1944-1948) se benefició de la coyuntura bélica, pues la conflagración, ya próxima a su fin, dio paso al auge económico originado por la reconstrucción de posguerra. En el terreno político la derrota del nazifascismo propiciaba una atmósfera democrática de la cual el nuevo gobierno cubano supo sacar partido, particularmente al renegociar con Washington los términos de las ventas globales de las zafras. En tal empeño re-

sultó decisiva la participación sindical, facilitada gracias al entendimiento alcanzado entre el gobierno y los comunistas, ya que hallándose en minoría en el Congreso, Grau había aceptado el apoyo legislativo de ese partido, ahora denominado Socialista Popular. Después de mejorar algo el precio de la zafra de 1945, el gobierno hizo suya la propuesta del líder del sindicato azucarero, Jesús Menéndez, de que el precio del dulce para las dos zafras siguientes se ajustase a la evolución del índice de precios al consumidor en Estados Unidos. Incluida esa cláusula en el contrato, ello ocasionó una consistente elevación de los ingresos obtenidos por Cuba, una parte de los cuales fue al bolsillo de colonos y trabajadores. La creciente normalización de la situación económica mundial permitió superar algunas carestías, así como el reemplazo de equipos y maquinarias desgastados.

En 1947, con una zafra récord cercana a los seis millones de toneladas, el valor de las exportaciones ascendió hasta 746 millones de dólares; después de años de penuria el país disfrutaba nuevamente de prosperidad. El presidente Grau aseguraba que habría "dulces para todos" y, efectivamente, decretó aumentos salariales, a la vez que impulsaba las obras públicas y duplicaba la nómina de las dependencias gubernamentales, que al finalizar su administración ya contarían con unos 120 000 empleados. Como era habitual, los gobernantes reservaron para sí una buena tajada, solo que con los "auténticos" la corrupción alcanzó niveles espectaculares. Dando muestra de una codicia irrefrenable, los altos y medianos funcionarios del "grausato", sacaban dinero de cualquier operación o programa oficial, ya se tratase de las concesiones de obras, la renta de lotería o el desayuno escolar. En menos de tres años el ministro de Educación levantó una fortuna calculada en 50 millones de pesos y el propio presidente Grau, al término de su mandato, enfrentaría cargos por un desfalco superior a los 140 millones de pesos. Parte de esos fondos se dedicaban a satisfacer múltiples compromisos, en parti-

cular con los llamados "grupos de acción", constituidos por luchadores contra Machado y Batista que habían derivado hacia el gansterismo, los cuales se movían en el entorno del Partido Auténtico y con frecuencia le prestaban servicios. Además de satisfacer sus apetencias mediante sinecuras, el gobierno otorgó a esos grupos plazas en la policía y otros cuerpos de seguridad, con lo cual se daba amparo a sus actividades y también se propiciaban sangrientos enfrentamientos que continuamente sacudían a la opinión pública. Asentados en muchos casos en la Universidad —donde se les llamaba "bonchistas"—, estos grupos fueron también empleados por los auténticos para controlar los sindicatos. El PRC(a) contaba con una rama obrera, nutrida pero siempre minoritaria respecto a los comunistas dentro de las organizaciones proletarias. Deseoso de anexar el aparato sindical a la maquinaria política del autenticismo, Grau aprovechó el inicio de la "guerra fría" para desatar una feroz campaña anticomunista y, mediante elecciones amañadas, intimidaciones y asesinatos de líderes obreros —Jesús Menéndez, entre ellos— adueñarse de la CTC.

En las elecciones parciales de 1946, el PRC(a) había conseguido la mayoría parlamentaria, pero su descrédito era notorio, sobre todo tras la escisión de un significativo grupo de sus dirigentes que, encabezados por el senador Eduardo Chibás, comenzaron a denunciar los escándalos de la gestión gubernamental. Pese a todo, los auténticos supieron hacer uso de su ventaja como partido de gobierno y se impusieron en las elecciones generales de 1948, aunque afianzando sus compromisos con la política tradicional. El nuevo presidente, Carlos Prío Socarrás (1948-1952), era un antiguo dirigente estudiantil ya corroído por las corruptelas. Anunciando "nuevos rumbos" en su política, Prío decidió distanciarse de su predecesor, integró algunos técnicos a su gabinete y promovió la actividad del Congreso. De entrada, los presupuestos del Estado comenzaron a aprobarse por el Legislativo —requisito del cual habían prescindido las

administraciones precedentes— y se crearon varios organismos previstos por la Constitución, como el Tribunal de Cuentas y el de Garantías Constitucionales y Sociales, así como el Banco Nacional; también se fundaron nuevas universidades públicas —en las provincias de Las Villas y Oriente— y se autorizó la creación de privadas. Ciertas decisiones, como la fundación del Banco de Fomento Agrícola e Industrial, pretendían enfrentar problemas económicos, algunos de vieja data y otros surgidos a medida que se disipaba la coyuntura de posguerra.

En 1948 Estados Unidos reimplantó el régimen de cuotas azucareras, en el cual la asignación cubana no fue ampliada como se esperaba, para desencanto de los productores criollos. El precio del dulce, por otra parte, tendía a disminuir y con ello los ingresos reportados por la zafra. La afluencia de importaciones, a precios a menudo inferiores a los de la producción nacional, ya presionaba sobre muchos de los renglones fomentados durante la guerra, cuya baja productividad no les permitía competir. El gobierno de Prío intentó adoptar entonces medidas de protección arancelaria, aprovechando las gestiones encaminadas a crear una organización mundial de comercio dentro del sistema de las Naciones Unidas, una de cuyas conferencias constitutivas se celebró en La Habana. Sin embargo, la oposición de los abastecedores norteamericanos —especialmente de la rama textil— se hizo patente y el gobierno cubano se vio obligado a negociar y moderar sus pretensiones. La situación social daba visibles muestras de deterioro, pues muchos empresarios pretendían afianzar su competitividad rebajando salarios, medidas que eran resistidas por los trabajadores ante la carestía del costo de la vida. El gobierno, que no podía socavar el terreno al liderazgo "amarillo" que había aupado en los sindicatos, decretó numerosas intervenciones de empresas para enfrentar los constantes conflictos laborales, lo cual, lejos de solucionar la situación, tornaba más comprometida la gestión estatal. Al borde de tener que realizar recortes presupuestarios, Prío intentó concertar un

empréstito con el Banco Mundial, iniciativa ampliamente criticada, pues además de considerarse innecesaria, alimentaba las sospechas de un mayor margen para la corrupción. Solo el estallido de la guerra de Corea, al reforzar la demanda —y el precio— del azúcar vendría a proporcionar un respiro en tan delicada situación.

La segunda administración auténtica, aunque más activa y coherente que la de Grau, padecía de muy parecidos vicios. El gobierno había adoptado medidas formales para poner coto al gansterismo, pero este seguía activo y, con la benevolencia de ciertos círculos oficiales, continuaba dejando una sangrienta estela de asesinatos. Por otra parte, los escándalos de corrupción se repetían, incluso con la participación de personajes allegados al presidente, a la vez que diversas violaciones de la legalidad gozaban de notoria impunidad. Estos actos suscitaban la crítica pertinaz de periodistas y políticos opositores, en particular de Eduardo Chibás, convertido en un verdadero flagelo del gobierno auténtico, cuyas críticas irían minando la ya escasa credibilidad de este. Con sus constantes campañas —para las cuales hacía un muy efectivo uso de la radiodifusión—, Chibás puso en marcha un poderoso movimiento cívico cuyo eje era el Partido del Pueblo Cubano (ortodoxo) que él fundara. Aunque en 1951, al verse atrapado en una celada política Chibás se suicidó, la "ortodoxia" continuó en ascenso y, no obstante su disímil composición, se perfilaba como probable ganadora de las elecciones presidenciales de 1952. Solo que estas nunca llegarían a realizarse, pues pocos meses antes Fulgencio Batista dio un golpe de Estado. Regresado a la política nacional en 1948, cuando fue elegido senador, Batista había creado un pequeño partido que lo postuló a la Presidencia de la República. Sus nulas posibilidades lo impulsaron a encabezar un complot militar que, alegando los yerros y lacras del gobierno de Prío, dio un golpe de Estado el 10 de marzo de 1952. La escasa resistencia del presidente —que prefirió partir al exilio—, el hecho de que la mayor parte de los parti-

dos tradicionales se plegaran al golpe, así como la indiferencia demostrada por vastos sectores de la población, ponían de manifiesto que tras más de una década de experiencia democrática la crisis de la República, lejos de superarse, se había profundizado.

EL OCASO DE LA SOCIEDAD REPUBLICANA

La tiranía implantada por Batista en 1952, última etapa del llamado periodo republicano, resulta un compendio de los problemas acumulados por la sociedad cubana. Al producirse el golpe militar, el país se hallaba enfrascado en una gran zafra, cuyo monto, pese a los claros síntomas de saturación del mercado, el dictador no se atrevió a limitar. El resultado fue una producción de más de siete millones de toneladas que contribuyó al desplome de las cotizaciones. Como en ocasiones anteriores, la situación condujo a la concertación de un nuevo convenio azucarero internacional, atenido al cual Cuba se vio obligada a restringir nuevamente sus zafras, cuyo volumen descendería hasta un mínimo de 4.5 millones de toneladas en 1955. Como el dulce continuaba siendo el motor de la economía nacional, la coyuntura presentó un sesgo depresivo que la dictadura intentó contrarrestar movilizando los recursos monetarios acumulados durante la posguerra para financiar obras públicas y otras actividades económicas, mediante una red de instituciones bancarias paraestatales. Tal política, que extendía la gestión económica del Estado desde la regulación hasta el fomento, consiguió amortiguar los efectos recesivos de la contracción de las exportaciones, pero originó una amenazadora tendencia al agotamiento de las reservas internacionales del país y amplió todavía más los márgenes de la corrupción.

El fin del breve ciclo expansivo propiciado por la guerra mundial puso de manifiesto las limitaciones que imponía al crecimiento de la economía cubana su insuperable dependencia,

tanto del azúcar como de Estados Unidos. El valor total de las exportaciones, del cual el azúcar aún representaba 80%, se había incrementado a lo largo de las seis décadas transcurridas desde el cese del dominio colonial, pero en términos per cápita, descendió desde un promedio de 150 dólares en la década de 1920 hasta apenas unos 100 dólares en los años cincuenta. Como no sucedía igual con las importaciones —ascendieron 20% en el mismo lapso— el saldo favorable de la balanza comercial tendió a reducirse de manera alarmante. Respecto a Estados Unidos dicho fenómeno era peor, pues acotada la participación del dulce cubano en ese mercado —la cuota de Cuba fue reducida nuevamente en 1956— la balanza comercial con dicho país se tornó negativa a partir de 1948, de modo que la isla debía hacer uso de sus ingresos en otros mercados para poder pagar las importaciones procedentes de la potencia hegemónica. La situación resultaba más comprometida en el plano financiero, ya que el déficit en las partidas de comercio y servicios no encontraba compensación en los flujos de capital, pues desde la Gran Depresión los norteamericanos se habían ido retirando del sector azucarero —en los años cincuenta solo operaban 36 centrales que aportaban poco más de un tercio de la zafra— y sus inversiones en la minería y otras esferas eran insuficientes para contrarrestar dicha tendencia

Aunque algunos renglones productivos orientados hacia el mercado interno experimentaron notables avances, no alcanzaban a generar una sustitución significativa de importaciones. Producciones importantes para el consumo, como las de huevos o patatas, que crecieron de manera muy consistente, eran más bien una excepción que la regla, pues en materia agrícola lo característico eran las fluctuaciones, bien ilustradas por rubros como el maíz, el cacahuate o las legumbres. De hecho, con la excepción del café, algunas frutas y vegetales, la agricultura apenas había aportado nuevos productos a la exportación. Varios factores explican ese comportamiento. En primer término la

polarización de la propiedad agraria: en 1946 más de 60% de las tierras parceladas estaban concentradas en fundos mayores de 450 hectáreas, y particularmente en unos 3 600 grandes latifundios que mantenían improductivos la mitad de sus terrenos, mientras que dos tercios de las fincas explotaban extensiones inferiores a las 27 hectáreas predominando entre estas los minifundios de bajísima productividad. A ello debían añadirse las dificultades para la comercialización —que facilitaba su control por intermediarios— y las limitaciones del crédito, persistentes a pesar de la creación de un banco paraestatal —el ya mencionado Banco de Fomento Agrícola e Industrial— encargado de facilitarlo. El progreso era más evidente en la producción industrial, pues el número de fábricas —excluyendo las de azúcar— había aumentado desde unas 700 en los años de la Depresión, hasta 1840 a mediados de la década de 1950, multiplicándose por cuatro —hasta algo más de 100 000— el número de sus trabajadores. El valor producido por este sector se duplicó respecto a los años treinta, resultando muy notables los crecimientos en cerveza, cigarrillos, leche condensada, calzado y otros artículos de consumo, no obstante lo cual su impacto sobre las importaciones se reflejaba más en los cambios de su composición —materias primas *vs*. artículos terminados— que en una disminución de sus valores. Además de las limitaciones que imponía una estructura económica basada en el azúcar, la sustitución de importaciones enfrentaba obstáculos externos derivados de la peculiar relación con Estados Unidos, como bien lo ilustran los textiles y el arroz, dos renglones especialmente dinámicos, cuyo crecimiento se vio truncado por las amenazas de los proveedores norteamericanos de promover represalias contra el azúcar, de continuar Cuba disminuyendo sus importaciones. Otra actividad alternativa, el turismo, cuyo fomento figuraba como máxima prioridad en los planes impulsados por Batista, dio lugar a un apreciable crecimiento de la red hotelera pero sin producir parejos efectos en la balanza de pagos, pues

también crecía el número de turistas cubanos, particularmente hacia Estados Unidos, de modo que el beneficio mayor reportado por el turismo fue incentivar las construcciones, sin duda el sector más dinámico de la economía cubana en la década de 1950.

Empantanada la producción de azúcar y limitado el desarrollo de renglones alternativos, la economía registra un lento crecimiento, en particular si se comparan las tres primeras décadas del siglo con las tres siguientes. El ingreso medio, estimado en 307 dólares per cápita en 1956, habría crecido a una tasa anual de 1% desde el inicio de la República, moderado ritmo que, especialmente en el periodo posdepresión, terminó por desplazar a Cuba hasta una novena posición entre las naciones latinoamericanas. No es menos cierto que ese ingreso se distribuía mejor, pues gracias a los sucesivos aumentos salariales aplicados entre 1937 y 1958, el 60% de dicho ingreso consistía en retribuciones al trabajo; remuneración que era, desde luego, muy diferente según los sectores, ramas y naturaleza de los empleos. La desigualdad era también muy notable en los casos de las mujeres y el sector negro de la población. Ambos grupos habían logrado importantes avances legales, al prohibir la Constitución toda forma de discriminación e igualar —en beneficio de las mujeres— los derechos de las uniones consensuales y eliminar el concepto de ilegitimidad para la descendencia, pero el progreso se hacía menos evidente en el plano socioeconómico. Así, por ejemplo, las mujeres solo representaban 14% de la fuerza de trabajo del país y la gran mayoría de las que se hallaban empleadas percibía ingresos inferiores a los 75 pesos mensuales. Los negros y mestizos —que en 1953 constituían un tercio de la población— habían incrementado su presencia en ramas como el transporte y el comercio, así como en los servicios profesionales, pero 46.6% de ese sector según el censo de 1943 percibía ingresos inferiores a 30 pesos mensuales, mientras que la proporción de negros propietarios —4.9%— resultaba muy inferior a la de los blancos.

La peor consecuencia del bajo ritmo de crecimiento económico era, sin embargo, la escasa creación de empleo. Después del aumento de plazas en los centrales como resultado de la implantación de la jornada de ocho horas en 1933, no se produjeron incrementos significativos en la fuerza de trabajo del sector azucarero. El crecimiento de trabajadores en esferas más dinámicas como la construcción, los servicios o las industrias "menores" era apreciable, pero distaba de representar una oferta suficiente para las hornadas de individuos que anualmente accedían al mercado laboral; ello a pesar de que la inmigración había desparecido casi por completo para dar lugar a una ascendente emigración, principalmente hacia Estados Unidos. Con un registro cercano a los seis millones de habitantes, el censo de 1953 indicaba que el crecimiento demográfico se había tornado algo más lento, no obstante lo cual, una encuesta realizada tres años después reveló que unos 650 000 cubanos —30% de la fuerza de trabajo del país— laboraban menos de 29 horas por semana o se hallaban totalmente desempleados. Las situaciones más graves las presentaban el sector agropecuario, cuyas tasas de desempleo oscilaban entre un tercio y la mitad de la fuerza de trabajo según la época del año, y los jóvenes, pues 41% de los individuos entre 14 y 24 años estaban buscando trabajo. El desempleo, ya de carácter estructural, afectaba muy seriamente no solo la vida social sino el propio funcionamiento de la economía. Como la pérdida del puesto de trabajo podía resultar irremediable, buena parte de las demandas sindicales se enfocaron hacia la regulación de los procedimientos de despido, hasta el punto de que en ciertas ramas los trabajadores llegaron a hacerse prácticamente inamovibles. Por las mismas razones se rechazaban innovaciones que —como el embarque de azúcar a granel o el torcido mecánico de tabacos— podían ocasionar la supresión de plazas, todo lo cual conspiraba contra el incremento de la productividad. En las condiciones prevalecientes, la rigidez del mercado laboral era, sin embargo, muy difícil de superar, como

lo demostraron los vanos intentos de la dictadura batistiana por aplicar las recomendaciones del Informe Truslow, realizado por la misión del Banco Mundial en 1950.

La cubana era, por tanto, una sociedad de visibles contrastes; visibilidad que ha de tenerse muy en cuenta, porque tanto por razones de movilidad —social y territorial—, como por la amplitud de los medios de comunicación y la generalización de las relaciones mercantiles, dichas diferencias eran directamente apreciables por buena parte de los ciudadanos. En comparación con la mayoría de los países latinoamericanos, el nivel de vida de los cubanos era bastante alto. La isla clasificaba en tercer lugar —solo superada por Argentina y Uruguay— en el promedio de calorías consumidas diariamente por habitante, en una cuarta posición de acuerdo con el porcentaje de analfabetismo y también poseía una tasa de mortalidad relativamente baja. En otros indicadores menos amplios los resultados eran aún más sobresalientes: un teléfono por cada 38 habitantes, un ejemplar de periódico por cada 8, un radio por cada 6.5 o un automóvil por cada 40, por no mencionar los telerreceptores cuyo per cápita en 1955 superaba al de Francia. Que la modernidad se había hecho presente y era disfrutable nadie podría negarlo, aunque distaba de hallarse al alcance de todos, ya que tras esos promedios y porcentajes se ocultaba una compleja realidad social.

Los principales beneficiarios de la vida moderna eran la gente pudiente: grandes comerciantes, terratenientes, industriales, profesionales de altos ingresos y, por supuesto, los hacendados azucareros, cuya posición se había fortalecido con la compra de los centrales vendidos por las compañías norteamericanas. Pero también amplias capas de la clase media, trabajadores de diversas ramas de la industria y los servicios, una parte de los empleados de comercio y la burocracia estatal tenían acceso a algunas de las ventajas de la modernidad, solo que en una medida muy variable. Las capas medias, por ejemplo, desde los años cuaren-

ta experimentaron una importante transformación, con la desaparición de decenas de miles de pequeños comerciantes, artesanos, etc., que fueron sustituidos principalmente por empleados asalariados —incluido el servicio doméstico— y profesionales. En esa tendencia parecen haber predominado los empleos de baja calificación, con la consiguiente repercusión en materia de ingresos, que en las capas más bajas resultaban incluso inferiores a los de los obreros calificados.

Entre los obreros eran también muy notables las diferencias; ramas como las de bebidas y licores, la cigarrera, la telefonía o la electricidad, dada su elevada rentabilidad permitían el pago de salarios que podían rivalizar con el ingreso de algunos grupos profesionales, situación muy distinta a la que se apreciaba entre los obreros de la construcción y varias ramas de la industria ligera, así como de la propia industria azucarera. Claro está que las más profundas diferencias se presentaban entre los trabajadores urbanos en su conjunto y los rurales que, en número superior a 500 000, constituían el más nutrido contingente del proletariado, pero que en sus tres cuartas partes permanecía empleado menos de seis meses al año y en la práctica no podían disfrutar de varios derechos de los que gozaban sus colegas en las ciudades, a pesar de hallarse sindicalizados.

Las diferencias de carácter espacial resultaban aún más marcadas que las de origen clasista, tanto entre la población urbana y rural como entre los residentes en la capital y las demás ciudades del país. Los ingresos eran más bajos en el campo, no solo entre los trabajadores, sino también entre los campesinos minifundistas —en su gran mayoría aparceros o arrendatarios— y entre los pequeños colonos. Del presupuesto de esas familias 70% se destinaba a la alimentación y una encuesta realizada en 1957 por la Agrupación Católica Universitaria conmovería a la opinión pública al saberse que en un país en el cual se sacrificaban unas 800 000 reses para el consumo, solo 4% de los trabajadores rurales comía carne con cierta regularidad. Los rascacie-

los construidos a lo largo del malecón habanero, o las lujosas urbanizaciones al estilo del Biltmore o el Country Club, en la capital, o Vista Alegre, en Santiago de Cuba, contrastaban con la triste situación de la vivienda rural, de la cual 74% se hallaba en un estado malo o ruinoso y solo 9% disponía de electricidad. La Habana, donde a mediados de los años cincuenta se concentraban 20% de los cubanos, acaparaba en 1958 más de 80% de las construcciones, recibía 60% de los ingresos salariales, disfrutaba de la mitad de los servicios comerciales, albergaba a 65% de los profesionales y contaba con 62% de las camas hospitalarias del país, donde solo un hospital se clasificaba como "rural". Pero en la propia urbe donde se erigían hoteles fastuosos como el Riviera o el Hilton, casi al alcance de los ecos musicales del cabaret Tropicana, 20 000 individuos, en su mayoría indigentes, se aglomeraban en las míseras casuchas del barrio de Las Yaguas, mientras otros deambulaban por las mismas calles en las que circulaban más Cadillacs que en cualquiera otra ciudad del mundo. El desempleo y el limitado acceso a la educación, entre otros factores, condenaba a la marginalidad a un considerable sector de la población, a la vez que otra parte era convocada desde los escaparates comerciales y los anuncios de la prensa a consumir la ropa de moda y los más modernos utensilios domésticos. Por exclusión o por atracción, cierto número de cubanos se veía impulsado al ejercicio de actividades degradantes. Tal era el caso del juego, vieja lacra de la sociedad insular floreciente en estos años, del cual vivían —según datos del Consejo Nacional de Economía— 26 710 personas en 1958, más que todos los trabajadores de la industria textil y las confecciones. Lo singular del juego era la manera en que permeaba todos los estratos de la sociedad; desde las peleas de gallos hasta los aristocráticos casinos, en las formas más disímiles, ese vicio se hallaba al alcance de todos.

Fragmentada en su diversidad, seducida por los atractivos de una modernidad escurridiza, la sociedad cubana proyectaba

en esos años una engañosa imagen de su naturaleza, cuya difusión corría a cargo de los publicistas del turismo. La guaracha, la mulata rumbera, el ron y un ambiente de juerga interminable oscurecían la percepción de una realidad en la cual también se pugnaba por afirmar genuinos valores de la identidad nacional.

Los procesos culturales se desenvolvían en contradictorias circunstancias. La democratización y la reforma del Estado propendieron, sin duda, al fortalecimiento del cuadro institucional y crearon más amplios espacios de intercambio. Del real alcance de lo primero ofrece buen testimonio la educación, mejor dotada en el presupuesto público pero también víctima propicia de la corrupción, la cual se moderniza y amplía —sobre todo en la enseñanza media—, pero cuya cobertura en los años cuarenta y cincuenta continuaba siendo muy insuficiente, pues en primaria apenas abarcaba a 45% de la población en edad escolar. Las limitaciones en materia de locales y medios de enseñanza favorecían el paralelo florecimiento de la enseñanza privada, cuyas características y proyecciones suscitaban enconadas polémicas, particularmente en el caso de los colegios religiosos. En las universidades los cambios de la organización docente y la introducción del concurso-oposición para el profesorado elevaron la calidad de la enseñanza, a la vez que se desplegaba un notable esfuerzo de extensión cultural, mas las limitaciones financieras restringían la actividad científica, que contaba con personalidades sobresalientes pero carecía casi por completo de instituciones que sustentasen la investigación. Aunque igualmente escasa de recursos, la Dirección de Cultura del Ministerio de Educación —encabezada durante algunos años por intelectuales de renombre, como José María Chacón y Calvo y Raúl Roa— patrocinó eficaces iniciativas para la difusión de las artes y la lectura, actividad esta última a la cual también contribuyó la Biblioteca Nacional, que por fin dispuso de un edificio apropiado.

La aparición de importantes revistas —*Orígenes*, *La Gaceta del Caribe*, *Ciclón*— daba fe de la vitalidad de la creación artística

y literaria y permitía contrastar las tendencias que animaban a los grupos intelectuales, pero esas iniciativas —al igual que la edición de algunos libros— tenían que financiarse por los propios autores o gracias a la contribución de algún mecenas, lo cual las condenaba a subsistir en la incertidumbre. Otras vertientes de la actividad cultural descansaban igualmente en sociedades e instituciones privadas al estilo de la Hispano-Cubana de Cultura —animada por Fernando Ortiz—, el Lyceum o Pro-Arte Musical, las cuales representaban un apoyo vital para el desarrollo de las artes y el pensamiento, pero tenían un limitado alcance social. En los años posteriores a la "revolución del treinta" cristalizan y se diversifican varios de los movimientos intelectuales que asomaran en vísperas de esta. La vanguardia pictórica se consolidó con figuras como Eduardo Abela, Carlos Enríquez, Víctor Manuel, René Portocarrero, Amelia Peláez o Wifredo Lam, mientras que los esfuerzos que en la creación musical desplegaran Amadeo Roldán y Alejandro García Caturla encontraron continuidad en el grupo Renovación Musical, algunos de cuyos miembros se inclinaban por el cultivo de las grandes formas que muy bien ejemplifican el *Concierto para piano y orquesta de viento* de José Ardévol o la *Guajira para piano* de Harold Gratmages. La literatura vivía un momento canónico con narradores como Enrique Labrador Ruiz, Alejo Carpentier, Lino Novás Calvo, Félix Pita y Onelio Jorge Cardoso, y poetas del calibre de Nicolás Guillén, Eugenio Florit, José Lezama Lima, Virgilio Piñera, Emilio Ballagas y Gastón Baquero. Después de una prolongada crisis el teatro resurge con la fundación de la Academia de Artes Dramáticas, el Teatro Universitario y el Teatro Popular, y no solo el universal, pues algunas obras de dramaturgos cubanos como Carlos Felipe o Virgilio Piñera conseguían subir a escena en las pequeñas salas que se tornaron predominantes en el ambiente teatral. La democratización de los años cuarenta creó una atmósfera propicia a la formulación y el contraste de ideas, las cuales respondían a disímiles corrientes de pensamiento —libe-

ral, católica, marxista, existencialista—, tanto en el terreno de la filosofía, en el cual sobresalían Jorge Mañach, Medardo Vitier y Humberto Piñera, como en la antropología —con Lydia Cabrera y, sobre todo, Fernando Ortiz— o en la historiografía, cuya renovación, iniciada por Ramiro Guerra, Emilio Roig de Leuchsenring y el propio Ortiz, continuarían autores como Herminio Portell Vila, José Luciano Franco y Raúl Cepero Bonilla.

La búsqueda de la expresión propia, esencial, que en los años treinta se inclinaba hacia la exploración de lo popular, se mantuvo como una de las constantes del movimiento intelectual, fácilmente perceptible en la floreciente década de 1940. Pero en la atmósfera de entonces, viciada por la frustración de la revolución del treinta con sus secuelas de corrupción y criminalidad desbocadas, la indagación de los valores nacionales se orientó hacia el recogimiento y el intimismo. Lo cubano se presentaba ahora en términos más complejos y, también, más universales, movimiento que de algún modo ensanchó la brecha entre la "alta cultura" y la cultura popular, bajo los efectos de una creciente masificación.

Impulsada por el rápido avance técnico de los medios de comunicación, la "cultura de masas" adquirió muy pronto un acentuado perfil comercial. Su exponente más característico era la radio, inaugurada oficialmente en octubre 1922, la cual tuvo una pronta expansión, pues en 1956 operaban más de 150 emisoras y se calculaba que casi 70% de las viviendas poseían radiorreceptores. La música popular fue el primer género en sentir el poder del nuevo medio; para las orquestas la radio representó una eficaz propaganda y también contribuyó a la difusión de ritmos extranjeros — tango, fox-trot, jazz— bajo cuya influencia la música cubana se hizo más cosmopolita. Ello incentivó la renovación del bolero, cuyos compositores —Orlando de la Rosa, Osvaldo Farrés, César Portillo de la Luz, entre otros— alcanzarían en los años cuarenta similar relevancia a la que desde tiempo atrás disfrutaban autores del talento de un Ernesto Lecuona.

Junto al fonógrafo, la radio propició la difusión internacional del mambo y el cha-cha-cha y proyectó, entre otras figuras, las de Dámaso Pérez Prado y Benny Moré. Su poder en tanto vehículo de cultura se haría patente en programas como *La universidad del aire*, mientras que los noticiarios radiales revolucionaban el mundo de la información y la "salida al aire" revelaba una singular influencia política, posibilidad que tan bien explotó Eduardo Chibás. El extraordinario impacto del medio propició su temprana comercialización; los mayores empresarios radiofónicos se organizaron en "cadenas" para cubrir toda la isla, mientras los grandes anunciantes monopolizaban actores y bloques de programación. Las principales víctimas del sistema resultaron ser los programas de episodios y las novelas radiales, comercializados hasta el absurdo, situación que no sería óbice para la aparición de curiosos fenómenos culturales, como el folletín radial *El derecho de nacer*, de Félix B. Caignet, que por más de un año mantuvo en vilo a millones de radioescuchas.

Un fenómeno similar lo experimentó la prensa, cuyas páginas se parcelaron meticulosamente para venderlas pulgada a pulgada. Aun aquellos órganos que —como la revista *Bohemia*— se preciaban de una mayor honestidad y apertura de criterio, no serían ajenos a las prácticas comerciales y a la manipulación de los estados de opinión mediante habilidosos recursos comunicativos. Claro que el punto culminante de la comercialización de los medios lo constituyó la televisión, que en menos de una década —fue inaugurada en 1950— llegaría a contar con siete canales, uno de ellos en color. Todo ese potencial fue utilizado para fomentar una cultura de consumo; al mismo tiempo que los anuncios estimulaban los sentidos del potencial cliente, estos veían acrecentarse sus posibilidades con las ventas a crédito, formidable recurso para expandir el consumo entre las capas medias. De tal manera, los hábitos y patrones propios del *American way of live* se fueron asimilando por la élite y otros sectores de la población; de su impacto en el lenguaje cotidiano es testi-

monio la prensa de la época en la que, junto a los anuncios de *groceries* y *beauty parlors*, se ofrecían las crónicas de los *baby showers, canasta parties* y *fashion shows* con que ciertos círculos nutrían su vacua existencia.

En esa sociedad desigual y disgregada, cuyos diversos intereses no alcanzaban a verse satisfechos por una economía de lento crecimiento, no ha de extrañar que el golpe de Estado de Batista y el consecuente descrédito de la institucionalidad republicana fuesen apreciados por las mentes más esclarecidas como la culminación de una grave crisis de valores.

DICTADURA E INSURRECCIÓN

La propia reacción frente al golpe militar constituyó una evidencia de ello. Bajo el pretexto de hallar una "solución constitucional", los partidos tradicionales —Liberal, Demócrata, etc.— terminaron plegándose a la dictadura, actitud seguida también por la dirigencia de la CTC que, no obstante su militancia mayoritariamente auténtica, prefirió concertar una alianza con Batista para asegurar su permanencia al frente de los sindicatos. El PRC(a) había perdido su ya limitada capacidad de convocatoria, mientras que el Partido Socialista Popular —comunista— apelaba con muy escaso eco a la antigua consigna de la "lucha de masas", y la ortodoxia, verdadera víctima del golpe, mostraba una incoherencia desconcertante. El principal foco de resistencia fue una vez más la Universidad, donde la Federación Estudiantil Universitaria (FEU) —que había solicitado armas a Prío para enfrentar la sedición militar— organizó diversas manifestaciones de repudio a la dictadura y dio cobertura a trajines conspirativos. Con el transcurso de los días fue ganando fuerza la idea de que el régimen de facto solo podría ser depuesto por la violencia. Se perfiló así una "línea insurreccional" de la cual participaban grupos de muy variada índole y

proyecciones, desde la Triple A, organización creada por el ex ministro de Educación de Prío Socarrás con varios compañeros de la lucha contra Machado, hasta jóvenes radicalizados que de manera clandestina se adiestraban militarmente en las instalaciones universitarias. El ocasional descubrimiento de alijos de armas, una abortada conspiración encaminada a desencadenar un contragolpe militar y otras expresiones de rebeldía, aunque constituían indicios de la beligerancia opositora no conseguían conmover la conciencia ciudadana De ahí el impacto que tuvo la noticia de que en Santiago de Cuba, el 26 de julio de 1953, se había intentado tomar el cuartel Moncada, segunda fortaleza militar del país.

La acción fue llevada a cabo por un desconocido movimiento, integrado en su mayoría por miembros de la Juventud Ortodoxa bajo la dirección de Fidel Castro, un joven abogado que se había destacado como dirigente estudiantil y después formó parte de la candidatura ortodoxa al Legislativo en las frustradas elecciones de 1952. Concebido como detonante de una amplia insurrección popular, el frustrado ataque concluyó con la captura de la mayoría de los asaltantes, muchos de los cuales fueron torturados y asesinados, un destino del cual el propio Castro escapó casi de milagro. Reducido a prisión junto a sus compañeros sobrevivientes, el líder insurreccional fue sometido a juicio —y condenado a 15 años de cárcel—, ocasión en que pronunció un alegato de autodefensa exponiendo las razones y propósitos de su movimiento. Más allá de la condena a la dictadura, Fidel Castro aprovechó para denunciar los vicios y deficiencias del sistema imperante y pronunciarse a favor de la nacionalización de los servicios públicos, por la superación de la dependencia económica y el desempleo, por el acceso de los cubanos a la tierra y otras medidas, lo cual otorgó a este discurso —publicado posteriormente bajo el título *La historia me absolverá*— el carácter de una propuesta programática. A pesar de su fracaso, las repercusiones del asalto al cuartel Moncada ha-

rían de esa acción la partida de bautismo de una nueva generación revolucionaria.

Afianzado en el poder, Batista decidió legitimarse, a cuyo efecto convocó a elecciones generales en 1954. La jugada distó de ser un éxito, pues al retraimiento de importantes partidos como el Auténtico y el Ortodoxo se sumó la retirada del candidato opositor a la presidencia —Ramón Grau San Martín—, de manera que Batista resultó elegido sin contendientes en unos comicios carentes de credibilidad. De cualquier manera, al intentar dar a su régimen visos de legalidad, el dictador se vio obligado a amnistiar a los presos políticos —entre ellos los asaltantes al Moncada— y respetar ciertos derechos como la libertad de expresión, circunstancia que mantuvo viva entre la oposición moderada las esperanzas de encontrar una salida "institucional" a la situación. El esfuerzo más convincente en esa dirección, el "Dialogo Cívico" —desarrollado en marzo de 1956— terminó, sin embargo, en un rotundo fracaso al hacerse patente que la verdadera intención del régimen era perpetuarse en el poder. En contraste con las medias tintas de la "clase política", otros sectores populares daban crecientes muestras de belicosidad. Con la elección a la presidencia de la FEU de José Antonio Echeverría, las manifestaciones del estudiantado se acrecentaron en abierto desafío a las fuerzas represivas, a la vez que se fundaba el Directorio Revolucionario, paso decisivo de los universitarios en la vertiente insurreccional. A finales de 1955, una potente huelga azucarera hacía tambalearse a la dirigencia de la CTC —encabezada por Eusebio Mujal— que en connivencia con Batista regenteaba los sindicatos. El partido Auténtico, que durante una breve estancia del ex presidente Prío en la isla pareció inclinarse a transigir con Batista, dio un sorprendente giro hacia la insurrección organizando el asalto armado al principal cuartel de la ciudad de Matanzas, operación que terminó en una verdadera masacre. Excarcelado en mayo de 1955, Fidel Castro fundó el Movimiento 26 de Julio y, tras demostrar con diversas acciones la imposibi-

lidad de una oposición pacífica a la tiranía, optó por exiliarse prometiendo que regresaría para desencadenar la insurrección.

Radicado en México, Castro se dio a la preparación de un contingente expedicionario contando con el apoyo económico del exilio cubano en Estados Unidos —incluyendo un sustancioso aporte de Prío— y mediante un acuerdo concertado con Echeverría a nombre del Directorio, las dos organizaciones revolucionarias decidieron conciliar sus acciones por encima de las diferencias tácticas —el Directorio era partidario de un golpe contundente a la cabeza del régimen— para asegurar el éxito de la insurrección. En Cuba, el 26 de Julio, ya ramificado por toda la isla, organizaba un levantamiento de apoyo al desembarco de los expedicionarios en la provincia de Oriente, donde contaba con la eficaz dirección del joven maestro Frank País. Frustrada esa coordinación por imprevistos climáticos, los expedicionarios del *Granma* —nombre de la embarcación que los transportó desde México— arribaron a comienzos de diciembre de 1956 a un punto algo alejado de su lugar de destino; en marcha hacia la Sierra Maestra fueron sorprendidos por el ejército y dispersados tras una desastrosa acción que les causó numerosas bajas. Un pequeño grupo de sobrevivientes reagrupados en las montañas bajo el mando de Fidel Castro, con el respaldo de campesinos y apoyados desde las ciudades por el Movimiento 26 de Julio, iniciarían la guerra tomando un pequeño cuartel en la localidad serrana de La Plata.

Con el reducido contingente rebelde apartado en la Sierra Maestra, la lucha insurreccional tuvo su principal escenario en las ciudades del país. Después de haber realizado atentados y otras acciones contra personeros de la dictadura, el 13 de marzo de 1957 el Directorio Revolucionario llevó a cabo un asalto al Palacio Presidencial para eliminar a Batista, malogrado ataque que dejó como saldo una treintena muertos, entre ellos el propio Echeverría. Gracias a la tenaz labor organizativa de Frank País, el 26 de Julio había fortalecido su dirección y creado ramas es-

pecializadas —acción, finanzas, movimiento obrero, etc.—, desplegando una coordinada serie de sabotajes, atentados y actos insurreccionales en La Habana, Santiago y otras ciudades. En el mortal enfrentamiento con los cuerpos represivos de la dictadura caían algunos de sus combatientes y los que eran capturados a menudo aparecían muertos con inequívocas señales de tortura; a esta terrible dialéctica no escaparía el propio País, cuyo asesinato en una calle santiaguera desató una espontánea y generalizada repulsa popular. En un nuevo capítulo de la escalada insurreccional, fuerzas coordinadas del 26 de Julio y la Marina de Guerra tomaban la ciudad de Cienfuegos el 5 de septiembre de 1957, pero abortadas las acciones previstas en otras partes de la isla, la sublevación era ahogada en sangre después de varias horas de resistencia.

El movimiento clandestino mantenía las ciudades en efervescencia a costa de un terrible desgaste, lo cual contrastaba con el paulatino fortalecimiento de la guerrilla en la Sierra Maestra. Fidel Castro, cuya presencia en las montañas fue confirmada por una entrevista de enorme impacto publicada en la prensa norteamericana, había ido engrosando el núcleo rebelde al sumársele campesinos en reacción a los desmanes de las tropas del ejército que operaban en la zona, así como gracias a un importante refuerzo de hombres y armas enviado desde Santiago de Cuba, fuerzas con las cuales pudo tomar el cuartel de El Uvero, importante punto logístico para las operaciones militares de la tiranía. La acción, concebida para distraer la presión sobre los expedicionarios del *Corinthia* —un contingente armado por el Partido Auténtico, que finalmente sería aniquilado después de desembarcar por la costa nororiental—, constituyó un vuelco en el desarrollo de las hostilidades, pues fue seguida por ataques a otras posiciones —Estrada Palma, Bueycito, Pino del Agua— y a tropas en movimiento que obligaron al ejército a retirarse de ciertas áreas de la serranía. Ello no solo representó la consolidación de la guerrilla en el plano militar, sino también el reforza-

miento de la autoridad política de Castro, circunstancia que se pondría de relieve con la subida a la Sierra de dos importantes personalidades políticas: Raúl Chibás, hermano del fallecido líder ortodoxo, y el reconocido economista Felipe Pazos. Con ellos el comandante rebelde suscribió el "Manifiesto de la Sierra Maestra", que convocaba a la unidad de la oposición revolucionaria y esbozaba ciertas bases programáticas para el gobierno que sucedería a la dictadura. Las repercusiones del documento animaron las gestiones unitarias, las cuales desembocaron en la firma del "Pacto de Miami" por los partidos Auténtico y Ortodoxo, el Directorio Revolucionario y algunas otras organizaciones. Aunque entre los firmantes aparecía un representante del 26 de Julio en el exilio, el acuerdo sería repudiado por Fidel Castro, al considerar que este se apartaba de las bases estipuladas en el manifiesto anterior, ya que, por ejemplo, no incluía un rechazo explícito a la posibilidad de una junta militar o a una intervención extranjera en el conflicto político cubano. El hecho de que ese gesto del jefe rebelde bastase para dar al traste con el intento unificador era una clara evidencia de su ascendente liderazgo.

A principios de 1958 el Movimiento 26 de Julio ampliaba la actividad revolucionaria mediante actos de sabotaje contra objetivos de la producción y los servicios en toda la isla, con la clara intención de restar a Batista el apoyo de la élite económica, al tiempo que mediante la creación del Movimiento de Resistencia Cívica abría las puertas a quienes sin participar directamente en las acciones bélicas estuviesen dispuestos a apoyarlas. Algunos resonantes golpes en las ciudades y la aparición de nuevas partidas guerrilleras —particularmente en el centro de la isla, en la serranía del Escambray, donde comenzó a operar una tropa del Directorio Revolucionario— iban caldeando el ambiente. De acuerdo con la estrategia prevaleciente en el movimiento clandestino urbano —el "llano"—, las acciones insurreccionales en ascenso debían confluir en una huelga general que —como sucediera en 1933— daría el golpe de gracia a la tiranía. En previ-

sión de ese momento decisivo, Castro decidió abrir dos nuevos frentes guerrilleros, uno en las cercanías de Santiago de Cuba y otro en la zona noreste de la provincia oriental. Convocada para el 9 de abril de 1958, la huelga estuvo pobremente preparada y terminó en un fracaso, sobre todo por la carencia de medios para enfrentar la represión batistiana, que causó un serio descalabro al movimiento clandestino. Reunida en la Sierra Maestra, la dirección nacional del 26 de Julio hizo un crítico balance de la experiencia y adoptó una nueva estrategia que descansaba en el desarrollo de la guerra revolucionaria para alcanzar la victoria, a cuyo efecto se decidió concentrar toda la autoridad militar y política en la comandancia del Ejército Rebelde, encabezada por Fidel Castro.

Derrotada la huelga, Batista creyó llegado el momento de dar un giro a la situación; se movió entonces en dos direcciones, preparando, de una parte, una poderosa ofensiva contra el baluarte guerrillero en la Sierra Maestra, a la vez que convocaba a elecciones generales. Esa maniobra política estaba destinada a distraer a la oposición moderada, así como a las instituciones cívicas y a la propia Iglesia católica que clamaban por una salida pacífica a la crisis nacional, aunque su principal objetivo era tranquilizar a Estados Unidos, cuyas preocupaciones por el rumbo de los acontecimientos se habían hecho patentes.

Desde el propio golpe de Estado, Washington venía prestando un apoyo irrestricto a Batista, en buena medida por considerarlo la opción más conveniente para conducir a la isla en las circunstancias de la guerra fría, respaldo que en la persona de su embajador en La Habana, Arthur Gardner, llegó hasta la más escandalosa connivencia. Sin embargo, ante el deterioro de la situación cubana, el gobierno de Eisenhower decidió tomar una prudente distancia y a mediados de 1957 cambió su representante en Cuba, tras lo cual comenzó a escalar sus presiones sobre el dictador hasta llegar a la suspensión del suministro de armas, medida muy parcialmente cumplida pues no tardaría en cono-

cerse que la aviación batistiana se reabastecía de balas y bombas en la propia base naval de Guantánamo.

Las expectativas abiertas por Batista muy pronto se vieron desvirtuadas. Aunque la Sierra Maestra fue cercada por una fuerza superior a los 10 000 hombres y se lanzaron poderosas columnas para aplastar al bastión rebelde, Fidel Castro supo mover sus fuerzas —muy inferiores en número y armamento— de manera tal que pudiesen enfrentar por separado y con cierta ventaja a los batallones de la tiranía, uno de los cuales fue aniquilado en la batalla del Jigüe. Después de sufrir cientos de bajas, en poco más de dos meses el ejército emprendió la retirada dejando tras de sí un valioso armamento y a la Sierra convertida en "territorio libre". El Ejército Rebelde no solo estuvo entonces en condiciones de incrementar el número de sus columnas, sino que afianzado en territorios indisputados creó órganos de administración, dictó una ley para entregar tierras a los campesinos, estableció un sistema de recaudación de impuestos y desplegó otras funciones estatales que en el segundo frente oriental —comandado por Raúl Castro— alcanzarían su más acabada expresión. Evidencia de la creciente identificación de la guerrilla con los intereses de los campesinos y demás sectores populares que le apoyaban, esa política —y las emisiones ya sistemáticas de Radio Rebelde— afianzarían el papel de la Sierra como fuente de la ideología revolucionaria. De tanta o mayor trascendencia política, la derrota de la ofensiva batistiana contribuyó a la definitiva unidad de la oposición insurreccional, plasmada a principios de agosto de 1958 en el Pacto de Caracas. Aunque el Partido Socialista Popular había cambiado de posición, su prolongada renuencia a la lucha armada lo marginó de esa concertación, no obstante lo cual decidió enviar un delegado a la comandancia rebelde —tal como lo establecía el pacto para las organizaciones firmantes— y orientó a sus militantes a apoyar la insurrección, a la cual ya algunos de ellos se habían sumado. La maniobra electoral de la tiranía resultó ser tan poco exitosa

como sus operaciones militares. En las elecciones de noviembre de 1958, tal como se esperaba, se dio por vencedor al candidato oficial, un ministro de Batista; aferrado al poder el dictador cancelaba toda posibilidad de una salida política al conflicto.

Solo que su posición se debilitaba por días. Dos columnas guerrilleras enviadas desde la Sierra Maestra, una bajo el mando de Camilo Cienfuegos y la otra comandada por Ernesto Che Guevara, penetraban en la central provincia de Las Villas con el propósito de dar coherencia a la acción insurreccional —quebrantada tras una escisión sufrida por el contingente guerrillero del Directorio Revolucionario— y desatar la ofensiva. En Oriente las columnas rebeldes descendían de las montañas para tomar una tras otra las poblaciones. A finales de diciembre, mientras Fidel Castro cerraba el cerco sobre Santiago de Cuba, fuerzas combinadas a las órdenes de Che Guevara se lanzaban a la toma de la ciudad de Santa Clara después de ocupar varios pueblos sobre la carretera central, con lo cual la isla quedó cortada en dos. Incapaz de revertir las acciones, el dictador decidió darse a la fuga en la madrugada del 1 de enero de 1959, amparado en un movimiento militar que a última hora pretendió escamotear el triunfo a las armas rebeldes. Sin cejar en el avance sobre las ciudades, Castro convocó a una huelga general, llamamiento acatado en toda la isla que habría de asegurar la victoria de la revolución.

9
LA REVOLUCIÓN

Giro capital en la historia de Cuba, el derrocamiento de la dictadura de Fulgencio Batista el 1 de enero de 1959 dio inicio a un proceso que medio siglo después continúa despertando pasiones y lecturas antagónicas. La Revolución cubana involucró a todo un pueblo en la búsqueda de la independencia nacional y la justicia social y, en medio de muy complejas circunstancias, hubo de determinar lo que debía superarse y lo que pretendía alcanzar. Con la revolución el país se vio inmerso en los grandes conflictos de la contemporaneidad, en algunos de los cuales llegaría incluso a desempeñar un sorprendente protagonismo; es así que, paradójicamente, un movimiento histórico que tenía entre sus pilares la reivindicación de una absoluta independencia, exige para su comprensión una consideración del contexto más cuidadosa que cualquier periodo anterior de la historia.

EL GOBIERNO PROVISIONAL: ACCIONES Y DEFINICIONES

El triunfo de la revolución produjo un verdadero estallido de júbilo popular, cuya apoteósica culminación sería la entrada de Fidel Castro y las tropas del Ejército Rebelde en La Habana el 8 de enero de 1959. Cinco días antes, en Santiago de Cuba se había constituido un gobierno provisional revolucionario encabezado por Manuel Urrutia Lleó, magistrado propuesto por el Movimiento 26 de Julio para ocupar la Presidencia de la República en reco-

nocimiento a su digna actitud frente a la dictadura. En el gabinete compartían ministerios personalidades de un moderado reformismo, como el líder ortodoxo Roberto Agramonte —ministro de Estado— o el propio primer ministro, José Miró Cardona, con dirigentes del 26 de Julio como Armando Hart y Manuel Ray o los comandantes Faustino Pérez y Luis Orlando Rodríguez. Sin embargo, los principales jefes del Ejército Rebelde no ocuparon funciones de gobierno, cual fue el caso del propio Fidel Castro que permaneció como comandante en jefe de las fuerzas armadas.

Las primeras medidas del gobierno revolucionario se encaminaron al desmontaje del régimen depuesto: tanto el Congreso de la República como los partidos políticos en él representados fueron disueltos y se destituyeron también alcaldes y gobernadores, siendo inhabilitados para ejercer cargos públicos los colaboradores de la dictadura. Quedaron igualmente extinguidos el antiguo ejército y los órganos represivos batistianos, a la vez que se creaban tribunales revolucionarios para juzgar a torturadores y criminales de guerra. Las directivas sindicales se depuraron y se decretó la reposición de todos los trabajadores que habían sido cesados por motivos políticos. Un nuevo ministerio, el de Recuperación de Bienes Malversados, se ocuparía de confiscar las propiedades de quienes se habían apropiado de fondos públicos como parte de las corruptelas de la dictadura. El Consejo de Ministros, que asumió funciones ejecutivas y legislativas, mediante una ley fundamental restableció la Constitución de 1940 haciendo algunas modificaciones a su texto, entre estas la ampliación de las facultades del primer ministro.

A poco más de un mes de hallarse en funciones, el equipo gubernamental experimentó su primera crisis con la renuncia de Miró Cardona debido a diferencias con el presidente Urrutia. Para sustituirlo como primer ministro se designó a Fidel Castro, quien aun apartado de las tareas de gobierno, dado su enorme carisma y su personal estilo de liderazgo, era reconocido como el máximo dirigente de la revolución. Con su oratoria directa y

persuasiva, una frecuente presencia en los medios —principalmente mediante extensas intervenciones televisivas—, dialogando durante jornadas interminables con los participantes de una asamblea sindical o los humildes pobladores de cualquier remota localidad del país, Castro había establecido una conexión inmediata con las masas, cuyas quejas, peticiones y demandas atendía, al tiempo que ejercía una suerte de magisterio incesante respecto a los fines y el propio carácter de la revolución. En el marco de una fluida coyuntura social, con el antiguo sistema político en crisis y sus instituciones desarticuladas, la personalidad de Fidel Castro sería decisiva para la consolidación y el desarrollo del proceso revolucionario.

Las expectativas que despertara la designación del comandante Castro al frente del equipo ministerial no tardaron en verse confirmadas por el ritmo que adquirieron las gestiones de gobierno: en menos de un año algo más de 1 500 leyes, decretos y resoluciones comenzaron a transformar la realidad nacional. Algunas de estas medidas se proponían la redistribución del ingreso, cual fueron los casos de las rebajas de alquileres y tarifas eléctricas, así como los aumentos de salarios decretados en diferentes ramas de la economía. Para evitar que el incremento del poder adquisitivo redundase en un aumento de importaciones se lanzó una campaña en pro del consumo de productos nacionales, a la vez que se llevó a cabo una reforma tributaria que elevaba los gravámenes a los artículos suntuarios. Entre las medidas de beneficio social figuraban la apertura de las playas privadas, la extensión del seguro social a todos los trabajadores, la sustitución de la Lotería Nacional por un instituto que emplearía sus fondos para el fomento de la vivienda popular y la creación de 10 000 nuevas aulas, especialmente en las áreas rurales, con el propósito de universalizar la cobertura educativa. La decisión de mayor trascendencia en ese contexto fue sin duda la Ley de Reforma Agraria, promulgada el 17 de mayo de 1959, por cuanto implicaba una profunda transformación estructural.

Haciendo efectiva la proscripción constitucional del latifundio, la ley estableció un máximo de 402 hectáreas a las propiedades agrarias de cualquier persona, aunque admitía una extensión excepcional de ese límite hasta las 1 300 hectáreas en ciertos cultivos de alto rendimiento. Bajo el principio de que la tierra era de quien la trabajaba, la reforma agraria adjudicó la propiedad de sus fincas a los arrendatarios, aparceros y a quienes ocupaban tierras en precario. En el caso de las grandes propiedades, se preveía su traspaso al Estado para ser explotadas de manera indivisa mediante cooperativas de trabajadores. La ejecución de estas disposiciones estaría a cargo del Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA), organismo presidido por Castro, que dadas sus dimensiones y facultades resultaría una suerte de motor de la revolución. Aunque algunas medidas anteriores habían suscitado inconformidades y críticas más o menos aisladas, la reforma agraria trazó una línea divisoria en el desarrollo del proceso revolucionario ya que afectaba los más poderosos intereses del país. En primer término a las compañías norteamericanas que ante la pérdida de sus grandes explotaciones agropecuarias cuestionaron de inmediato la legalidad de la medida. Como manifestación de su rechazo, todas ellas se abstuvieron a dar paso alguno que pudiese interpretarse como una aceptación de la ley y, siguiendo una sugerencia de su embajada, se negaron a admitir la indemnización establecida por las propiedades nacionalizadas que se pagaría de acuerdo con el amillaramiento de estas, mediante una emisión de bonos del Estado amortizables en 20 años. Una reacción parecida tuvieron las asociaciones de grandes propietarios rurales —hacendados azucareros, ganaderos, arroceros, etc.—, si bien de inicio, y dado el enorme respaldo de la opinión pública a la ley agraria, optaron por atemperar su conducta en espera de la aplicación de lo legislado.

Los beneficios derivados de las decisiones tomadas por el gobierno le granjeaban un abrumador apoyo popular, pero a medida que se profundizaban los cambios crecían los reparos y

comenzaron a advertirse fisuras. La prensa y otros grandes medios de comunicación pasaron de los elogios a formular críticas cada vez más acerbas, tendencia que suscitó enfrentamientos de periodistas y tipógrafos con la directiva editorial, originando conflictos que conducirían a la intervención de algunos de esos órganos por el Estado. En el propio gobierno ya se habían producido sustituciones de ministros y la agudeza de las contradicciones se haría pública al producirse la renuncia de Fidel Castro por graves diferencias con el presidente Urrutia. Carente de una base de popularidad propia, el magistrado optó finalmente por abandonar su cargo, en el cual fue sustituido por uno de sus ministros, Osvaldo Dorticós; Castro reasumiría su posición durante el acto conmemorativo del 26 de julio, un gigantesco acto de masas en apoyo a la reforma agraria que inundó La Habana de campesinos.

En un ambiente de ánimos exacerbados se producían las renuncias o el reemplazo de varios ministros de tendencia liberal, sustituidos por figuras de una proyección más radical —las de Raúl Roa y Pedro Miret, por ejemplo, designados para las carteras de Estado y Agricultura, respectivamente—, a la vez que se registraban las primeras defecciones, entre las más sonadas la del jefe de la fuerza aérea, quien huyó a Estados Unidos. Un hito indiscutible en ese proceso de decantación tendría lugar en octubre, al conocerse la renuncia del comandante Hubert Matos. Figura de cierta relevancia entre los mandos del Ejército Rebelde, Matos ostentaba la jefatura militar de Camagüey, una provincia caracterizada por sus grandes propiedades agrarias. Proveniente de una familia de arroceros, el comandante había puesto ciertos obstáculos a la aplicación de la reforma agraria y finalmente decidió hacer pública su renuncia mediante una carta a Fidel Castro, en la cual denunciaba que la revolución se encaminaba hacia el comunismo. Ante el peligro de una sedición, Castro envió a Camagüey al comandante Camilo Cienfuegos —jefe del ejército, quien desaparecería poco después en un trá-

gico accidente aéreo— y lo siguió casi de inmediato, procediendo a arrestar a Matos, quien más tarde sería juzgado y condenado a 20 años de prisión.

La salida de los últimos ministros moderados del gabinete, el triunfo de la candidatura revolucionaria en las elecciones de la Federación Estudiantil Universitaria —cuya presidencia fue disputada por un candidato católico—, la designación del comandante Ernesto Che Guevara para la presidencia del Banco Nacional y la presencia en la dirección del INRA de algunas personalidades cercanas al Partido Socialista Popular, ponían en evidencia la radicalización de la revolución. Dicho posicionamiento también se manifestaba en el plano internacional, primero por el acercamiento de Cuba a países como Egipto, India e Indonesia, máximos exponentes del movimiento de neutralidad entre los países descolonizados, y más tarde al presentarse en La Habana, en febrero de 1960, una Exposición de Logros de la Ciencia y Técnica de la Unión Soviética, inaugurada por el viceprimer ministro de ese Estado, Anastas Mikoyan, con quien se suscribió un acuerdo comercial.

LOS DESAFÍOS DE LA SOBREVIVENCIA

La evolución de los acontecimientos en Cuba no mantuvo indiferente al gobierno de Estados Unidos. Durante la crisis del régimen batistiano, Washington había tratado de evitar que Castro y sus seguidores llegasen al poder. Colocado ante los hechos consumados, el Departamento de Estado mantuvo una actitud expectante; la presencia de figuras moderadas en el gobierno de La Habana le hizo apostar por el reforzamiento de dicha tendencia y nombró como embajador en Cuba a un diplomático experto, de talante conciliador. Sin embargo, las decisiones políticas cubanas eran objeto de un severo escrutinio y en modo alguno se ocultaba el disgusto que estas pudieran ocasionar,

como ocurrió al expulsarse la misión militar asesora que Estados Unidos mantenía en la isla o ante los juicios celebrados a los criminales de guerra batistianos. Esos procesos, asumidos como un compromiso por la dirigencia revolucionaria para evitar que se repitiesen venganzas como las que sucedieron a la caída de Machado, por su naturaleza sumaria y por las frecuentes condenas a muerte dictadas contra los acusados dieron pie a una muy sonada campaña de prensa, destinada a todas luces a desdibujar los tintes románticos con los que la opinión pública estadounidense apreciaba la revolución en la isla vecina. Disipar esa mala imagen fue uno de los objetivos de la visita de Castro a Estados Unidos en abril de 1959, ocasión en que se hicieron evidentes las prevenciones de las autoridades norteamericanas respecto al líder revolucionario, cuyas salidas les resultaban incomprensibles y su nacionalismo irritante.

Luego de la promulgación de la reforma agraria las relaciones acusaron un franco deterioro. Ante las pérdidas que esa medida entrañaba para las compañías estadounidenses, el Departamento de Estado se apresuró en exigir una "pronta, adecuada y efectiva indemnización", al tiempo que algunos funcionarios advertían sobre la posibilidad de una rebaja de la cuota azucarera cubana. Con la salida de los elementos moderados del gobierno provisional y la creciente visibilidad de figuras radicales e incluso comunistas en posiciones de responsabilidad, Washington perdió toda esperanza de manipular el proceso cubano, al cual consideraba cada vez más una amenaza para sus intereses; en noviembre la administración Eisenhower tomó la decisión de trabajar activamente con los elementos opositores en la isla para contener y derribar al gobierno, contemplando incluso la eliminación física de Fidel Castro.

En un primer momento los oponentes a la revolución habían sido solo los personeros del régimen de Batista, muchos de ellos refugiados en Estados Unidos donde fundaron la organización La Rosa Blanca. Carentes de un mínimo respaldo, dichos

elementos habían realizado muy limitadas acciones, de las cuales solo destacó el traslado de un alijo de armas, fácilmente capturado en el aeropuerto de Trinidad, que les había proporcionado el déspota dominicano Rafael Leónidas Trujillo. No obstante, hacia finales del año 1959 el panorama opositor se había tornado algo más abigarrado: terratenientes y otros grupos afectados por las medidas gubernamentales, personajes de antiguos partidos —auténticos, ortodoxos, etc.— que no habían encontrado espacio para sus aspiraciones, participantes de la lucha contra la dictadura inconformes con el rumbo tomado por el proceso, activistas católicos movilizados ante los peligros del comunismo, fueron nutriendo las filas de una oposición sumamente heterogénea. La diversidad de criterios y perfiles se ponía de manifiesto en sus acciones: mientras un ex jefe de la fuerza aérea, operando desde Estados Unidos, sobrevolaba la isla lanzando tanto volantes como explosivos, avezados conspiradores se conjuraban para derribar al gobierno con procedimientos similares a los que emplearan contra Batista. El sector más nutrido era sin duda el formado por católicos militantes que con el estímulo de la alta jerarquía eclesiástica se habían lanzado a la política activa; primero trataron de erigirse en una alternativa creando un Movimiento Demócrata Cristiano —de exigua capacidad de convocatoria—, pero ya a principios de 1960 se pronunciaban abiertamente contra la revolución; semejante derrotero seguirían los dirigentes de la Agrupación Católica Universitaria tras fracasar en su intento de ganar la FEU. Cuando en marzo de 1960 el presidente Eisenhower ordenó a la Agencia Central de Inteligencia (CIA) adiestrar estos grupos para acciones armadas, ya muchos de ellos habían entrado en contacto con los agentes de la inteligencia estadounidense.

El movimiento revolucionario, por su parte, no permaneció con los brazos cruzados. El apoyo popular debía vertebrarse y se organizó con notable celeridad. Después de experimentar serios conflictos internos, en la Confederación de Trabajadores de Cuba

y sus sindicatos había prevalecido la dirigencia revolucionaria más radical, incluyendo viejos cuadros del sindicalismo comunista. Las diversas organizaciones femeninas se unificaban en agosto de 1960 en la Federación de Mujeres Cubanas, proceso seguido poco después en el sector juvenil para dar lugar a la Asociación de Jóvenes Rebeldes. En esos mismos meses fue creada una organización de carácter vecinal, los Comités de Defensa de la Revolución, con la finalidad de establecer mecanismos locales de movilización y redes de vigilancia ante la creciente oleada de sabotajes y actividades terroristas. Semejantes avances organizativos contrastan con el desinterés por dar una forma partidista —aunque sí coordinadora— a las organizaciones que como el Movimiento 26 de Julio y el Directorio Revolucionario habían gestado la revolución, evidencia de que el proceso político se apartaba del cauce electoral, como lo daría a conocer públicamente Fidel Castro el 1 de mayo de 1960 en medio del clamoroso respaldo de cientos de miles de personas congregadas para la celebrar el Día de los Trabajadores. La lógica de la decisión era muy clara: con la revolución amenazada, todo lo que conspirase contra su unidad la conduciría al fracaso, según lo demostraba la experiencia de 1933. Particular relevancia tuvo la formación de las Milicias Nacionales Revolucionarias, creadas a partir de sindicatos y centros estudiantiles para el masivo adiestramiento militar del pueblo. Esa iniciativa era parte de una estrategia defensiva que contemplaba también la reorganización de las fuerzas armadas —ahora agrupadas en un ministerio confiado a Raúl Castro— y la adquisición de armamento, gestión que el gobierno norteamericano intentó obstaculizar por todos los medios incluyendo el sabotaje, un recurso con el cual se haría estallar en la rada habanera, en marzo de 1960, al carguero francés *La Coubre* —que transportaba un cargamento de armas belgas— causando decenas de muertes.

Las relaciones cubano-norteamericanas seguían un curso de colisión inevitable. En el contexto de la guerra fría para Washing-

ton resultaba inadmisible un gobierno latinoamericano en el que convergiesen tendencias nacionalistas y socialistas, mucho menos si en esta última había figuras de reconocida —o sospechada— militancia comunista. La dirigencia cubana, que conocía de primera mano cómo había sido derrocado por la CIA el gobierno guatemalteco de Jacobo Árbenz cinco años antes, estaba convencida de que la administración estadounidense jamás transigiría con las transformaciones estructurales que programaba, algunas de las cuales —la reforma agraria, por ejemplo— ya se hallaban en curso. Sin arreglo posible, ambas partes se prepararon para el choque definitivo.

Dentro de la amplia gama de acciones concebidas por Washington, se consideró la conveniencia de aplicar medidas económicas que creasen malestar e inconformidad en la población. Así, mientras se frustraban las gestiones del gobierno cubano para obtener créditos de la banca europea, la administración Eisenhower instruyó a las compañías petroleras norteamericanas para que se negasen a refinar el petróleo soviético adquirido por Cuba en virtud de un reciente convenio comercial. La reacción no se hizo esperar: haciendo uso de la Ley de Minas de 1939 La Habana nacionalizó las refinerías, ante lo cual Washington respondió suprimiendo la cuota azucarera, además de apropiarse del preferencial arancelario de que gozaba el dulce cubano. En julio de 1960 el gobierno de la isla anunciaba la nacionalización de todas las propiedades norteamericanas. Esta dinámica de golpes y contragolpes permitiría profundizar la revolución con disposiciones cada vez más radicales, como la nacionalización de industrias, bancos y otras grandes empresas propiedad de cubanos, dictada en octubre de 1960, que dejó al Estado en pleno control de la economía.

Para alcanzar sus objetivos, Estados Unidos necesitaba aislar a Cuba en la arena internacional. Con tal finalidad ejerció su influencia sobre algunos gobiernos de Europa occidental, pero sobre todo buscó la condena de la isla por parte de los países

miembros de la Organización de Estados Americanos (OEA). Alegando salvaguardar la democracia en el continente, la OEA adoptó resoluciones contra la tiranía trujillista en República Dominicana, aunque el verdadero objetivo de esa operación era la Revolución cubana, como se haría evidente en la VII Reunión de Cancilleres de la organización celebrada en Costa Rica, donde se aprobó una fuerte resolución de condena al comunismo, en realidad una advertencia de que, de seguir Cuba su curso revolucionario, quedaría excluida del sistema interamericano. Acosada en el plano diplomático, sancionada en el terreno comercial, impedida de adquirir las armas que requería para su defensa, en la implacable lógica de la guerra fría la dirigencia cubana optó por el acercamiento al bloque socialista, el cual representaba mercados para su azúcar, ofrecía los créditos que otros le negaban y podía suministrarle el armamento indispensable para subsistir.

La suerte de la revolución se decidiría finalmente con las armas, una vertiente de la estrategia estadounidense en la cual los opositores cubanos desempeñaban un papel fundamental. Estos constituían, sin embargo, un conglomerado tan variopinto como inexperto, que la Agencia Central de Inteligencia se encargaría de conducir. Lo característico era la proliferación de organizaciones, por más que algunas de ellas, como el Movimiento de Recuperación Revolucionaria —creado en Costa Rica a mediados de 1960—, consiguieran nuclear cierta membresía y afirmar mejor su identidad. Convocadas por la CIA, las más importantes de esas organizaciones constituyeron en México el Frente Revolucionario Democrático, entidad encargada de dar una representatividad a la contrarrevolución y coordinar sus acciones; unidad de muy frágil consistencia puesto que —como reconocería uno de sus fundadores— el Frente no resultó capaz de formular un proyecto que fuese más allá de revertir la legislación que la revolución había venido implantando. Esta incapacidad para comprender las causas de lo que ocurría en Cuba —y que

algunos achacaban a una diabólica maniobra de Castro—, constituiría un impedimento esencial para que el movimiento contrarrevolucionario lograse conectar con la sociedad cubana. El otro era la alianza con Estados Unidos, conducta que en lo inmediato —y en el largo plazo— descalificaba a una oposición que para prevalecer en la política nacional no encontraba otro recurso que el de subordinarse en la práctica a la secular potencia dominante. Tales circunstancias permiten comprender por qué el pueblo, bajo la conducción de Fidel Castro, identificaría la defensa de la patria con la defensa de la revolución.

La actividad de las organizaciones contrarrevolucionarias en la isla tendió a reproducir las prácticas de la lucha contra Batista, proceso en el cual algunos de sus integrantes habían participado. El incendio de cañaverales, la obstrucción de las comunicaciones y la realización de otros sabotajes a objetivos económicos, la colocación de bombas en espacios públicos para atemorizar a la población, la realización de atentados contra dirigentes, se combinaron con la aparición de partidas de alzados en algunas áreas rurales, las cuales alcanzaron mayor relevancia y efectividad en la región montañosa central del Escambray. Sin embargo, con la concentración de numerosos batallones de milicianos en la zona, en marzo de 1961 ese foco había quedado prácticamente extinguido, mientras que la mayor parte del armamento que desde Estados Unidos se le había suministrado se hallaba en manos revolucionarias. Estas, por otra parte, habían comenzado a recibir material de guerra de los países socialistas, incluyendo artillería y blindados en cuyo manejo se instruían fuerzas de las milicias y el Ejército Rebelde. Dicho armamento resultaría decisivo, pues ni las guerrillas ni las acciones urbanas constituían el recurso principal de la CIA, que repitiendo la experiencia guatemalteca de 1954 había apostado por lanzar sobre la isla un fuerte contingente expedicionario, para cuya formación y adiestramiento comenzó a concentrar exiliados cubanos —precisamente en Guatemala— desde mediados de 1960. Ese pro-

yecto, iniciado por la administración de Eisenhower, sería asumido y ejecutado por su sucesor, John F. Kennedy.

Las acciones comenzaron con el bombardeo de los principales aeropuertos militares de la isla. Consciente de que se trataba del preludio de una invasión, el 16 de abril de 1961, en el entierro de las víctimas del ataque, Castro proclamaba el carácter socialista de la revolución; quienes marchaban al combate no solo lo harían en defensa de la patria y la revolución, sino también del socialismo. Al día siguiente se iniciaba el desembarco de la expedición en Playa Girón y otros puntos de la bahía de Cochinos, una zona relativamente aislada por extensos cenagales, donde se consideraba que una brigada invasora de 1 500 hombres bien armados podría consolidar con facilidad una cabeza de playa. A ella serían transportadas las personalidades del Consejo Revolucionario Cubano —entidad que había sustituido al Frente Revolucionario Democrático—, que constituidos en gobierno solicitarían el reconocimiento y apoyo de Estados Unidos y demás naciones del continente. La realidad resultó bien distante de lo planeado. La pequeña aviación revolucionaria, que había logrado salvar un puñado de aviones, con arrojo y pericia echó por tierra la superioridad aérea que la CIA creyó asegurar al contingente invasor dotándolo de una docena de bombarderos ligeros. En el escenario terrestre el comandante Castro se puso al mando de importantes fuerzas del Ejército Rebelde y las milicias que a un alto costo en vidas avanzaron por los dos accesos hacia la cabeza de playa, la cual sucumbió en apenas 72 horas. Al borde de la derrota, el mando invasor reclamó el apoyo de las fuerzas navales norteamericanas que se mantenían mar afuera, pero ello no fue autorizado por el presidente Kennedy, que de hacerlo hubiese develado justamente lo que con la expedición se pretendía ocultar, la flagrante intervención armada de Estados Unidos para liquidar a la Revolución cubana.

Las consecuencias de estas acciones fueron trascendentales. No solo se había derrotado la invasión, sino que con la deten-

ción de decenas de miles de sus colaboradores potenciales quedó virtualmente eliminada toda oposición en la isla. La política norteamericana de coerción económica, cerco diplomático y agresión militar, lejos de aplastar la revolución la fortalecía y acrecentaba sus vínculos con el campo socialista. Washington, sin embargo, no alteró su estrategia; amparado en la Ley de Comercio con el Enemigo las relaciones comerciales con la isla fueron objeto de un total embargo, conducta que se trató de hacer seguir por otros países, al tiempo que se prohibía a los ciudadanos norteamericanos viajar a la isla. A principios de 1962 se ponía en marcha la Operación Mangosta, la cual incluía un recrudecimiento de las acciones de los grupos de exiliados mediante ataques a puntos costeros e infiltraciones en Cuba, donde además se habían reavivado las partidas de alzados dando lugar a cruentos enfrentamientos característicos de ciertas revueltas campesinas. Para la exitosa culminación de este proyecto se reconocía la necesidad de una intervención directa de Estados Unidos, y las grandes maniobras de desembarco realizadas en Puerto Rico en abril de 1962 parecían anunciarla.

En tales circunstancias el gobierno cubano llegó a un acuerdo con la Unión Soviética para instalar en la isla misiles con ojivas nucleares; el movimiento fortalecería considerablemente la posición soviética en el equilibrio estratégico global y para Cuba representaba la certeza de que una agresión estadounidense escalaría de inmediato a un enfrentamiento entre las dos grandes potencias. La instalación requería una operación de enormes proporciones, ya que no solo implicaba el traslado del equipamiento balístico a través del Atlántico, sino también del nutrido contingente de tropas de aire y tierra encargadas de protegerlo. A mediados de octubre, al advertirse la instalación de las bases de cohetes en territorio cubano, el presidente Kennedy decretó una movilización general de sus fuerzas para un eventual ataque, a la vez que ordenaba a la Marina el estricto bloqueo de la isla. Con el mundo al borde del holocausto nuclear, las dos grandes poten-

cias llegaron a una avenencia. El arreglo entrañaba concesiones mutuas y entre estas la inspección del desmontaje de las instalaciones soviéticas en Cuba, cuestión que Fidel Castro rechazó, a la vez que planteaba la necesidad de que en el acuerdo se hiciesen explícitas determinadas garantías para Cuba. Aunque la Unión Soviética prefirió obviar dicha demanda, la solución de la "crisis de octubre" —o "de los misiles"— supuso la renuncia tácita por parte de Estados Unidos a una intervención militar en Cuba.

Ello no implicó, por supuesto, el abandono de la ya tradicional agresividad. Ampliando la coerción económica, Washington impuso sanciones a los buques que atracasen en puertos cubanos y congeló las cuentas bancarias que el gobierno de la isla poseía en bancos estadounidenses. Si bien el fracaso de la Operación Mangosta y la progresiva liquidación de las partidas de alzados determinaron que se cancelasen las expectativas de una insurrección, las acciones violentas no se abandonaron, sino que continuaron ahora en forma de incursiones desde el territorio norteamericano donde más de 200 000 cubanos se habían exiliado desde 1959, principalmente en la ciudad de Miami. El hostigamiento persistiría, pero las posibilidades de una agresión mayor parecían disiparse; la Revolución cubana se había mostrado capaz de resistir.

MODELANDO UN ORDEN NUEVO

En las complejas condiciones de los primeros años sesenta, no solo se había decidido la sobrevivencia de la revolución sino también se establecieron ciertas bases de lo que sería el nuevo orden nacional. Proclamado al calor de un mortal combate, el socialismo en modo alguno resultaba ser una opción coyuntural, como se encargaría de reiterarlo Fidel Castro el 1 de mayo de 1961 y, más adelante, en diciembre del mismo año, al declararse personalmente marxista-leninista. Pero ese socialismo care-

cía de características predeterminadas y habría de irse definiendo sobre la marcha. En primer término tenía que perfilarse un sistema político, al cual los imperativos del enfrentamiento con el "coloso" norteamericano ya habían aportado un rasgo esencial: la férrea unidad del pueblo en torno a Fidel Castro. La convicción de que el poder centralizado y la exclusión de la diversidad política resultaban vitales para la supervivencia de la patria caló profundamente en el imaginario popular.

La singular relación establecida entre líder y masas que tenía como principal escenario las concentraciones multitudinarias, se había revelado como un eficaz recurso de movilización, pero resultaba del todo insuficiente para sustentar un sistema político y asegurar la gobernabilidad. La organización se hacía imprescindible y —como se ha visto— se dieron pasos importantes para la unificación de diversos sectores de la población, quizá los más sobresalientes en el movimiento juvenil, que agrupado inicialmente en la Asociación de Jóvenes Rebeldes, en abril de 1962 adoptaría el nombre de Unión de Jóvenes Comunistas (UJC). Entre las organizaciones revolucionarias —Movimiento 26 de Julio, Directorio Revolucionario y Partido Socialista Popular— se había establecido una instancia de coordinación formal a finales de 1960, la cual apuntaba hacia una creciente integración, proceso que se vio facilitado por la disposición del secretario general del PSP, Blas Roca, de entregar la dirección de ese partido a Fidel Castro. A mediados de 1961 surgía Organizaciones Revolucionarias Integradas, en cuya dirección nacional figuraban representantes de las tres agrupaciones en trance de fusión. La experiencia organizativa de los cuadros del PSP y el definitivo curso socialista del proceso, determinaron que el aparato de dirección del nuevo organismo en los niveles intermedio y de base estuviese compuesto mayoritariamente de viejos militantes comunistas, circunstancia que dio margen para que Aníbal Escalante —dirigente del PSP designado secretario organizador— aplicase una política sectaria que relegaba o excluía a los

miembros de otras organizaciones. La crítica a dicha tendencia dio paso a una amplia reestructuración de la cual emergería —en mayo de 1963— el Partido Unido de la Revolución Socialista. Finalmente, en octubre de 1965, durante el acto de presentación de su comité central, dicha organización adoptó el nombre de Partido Comunista de Cuba.

Cuba se adscribía así al modelo de partido único vigente en la Unión Soviética y otros países socialistas, donde esas entidades actuaban como fuerzas dirigentes del Estado y del conjunto de la sociedad. El caso cubano presentaría, no obstante, ciertas peculiaridades, no solo porque en la isla —como Castro advirtiera— el partido era resultado y no autor de la revolución, sino porque su militancia se formaría a partir de la proposición de sus miembros por los colectivos laborales, desechándose la tradicional práctica de la afiliación, así como por su menor control sobre la gestión estatal, al menos en el nivel superior. Las estructuras de gobierno fueron adoptando también un formato socialista, con un papel creciente de la planificación central, por más que la inexperiencia y la fluidez coyuntural impidiesen todavía la formulación de planes a mediano plazo. El extenso y acelerado proceso de nacionalizaciones, con la asignación de la mayoría de esas propiedades al INRA, había convertido a dicho organismo en un Estado dentro del Estado, por lo cual se decidió ceñirlo a las tareas relacionadas con la agricultura transfiriendo sus restantes áreas a nuevas entidades, en particular al Ministerio de Industria, confiado al comandante Ernesto Che Guevara. El aparato estatal continuaba, no obstante, fuertemente centralizado, encabezado por un Consejo de Ministros que se mantenía ejerciendo las funciones legislativa y ejecutiva. La creación de Juntas de Coordinación para el desempeño de funciones de gobierno en el ámbito territorial —provincias, municipios y las nuevas "regionales"— no se había visto acompañada de la necesaria autonomía de gestión, sino que más bien contribuía al casi exponencial crecimiento de la administración pública, con la consiguiente tendencia a la burocratización.

La asimilación y aplicación de las experiencias —y fórmulas organizativas— de otros estados socialistas no careció de sentido crítico, así como de una cada vez más definida aspiración a la creación de un "modelo" cubano. En la agricultura y otros sectores de la economía, por ejemplo, se implantó el "cálculo económico", sistema de gestión aplicado en la Europa socialista regido por principios de rentabilidad y ganancia, que reconocía una mayor autonomía a las empresas y se apoyaba en los incentivos materiales al trabajo, dejando un margen apreciable a los mecanismos de mercado en el funcionamiento de la economía. Che Guevara, que no escondía sus percepciones negativas acerca de ciertas realidades económicas de la experiencia socialista, no consideraba apropiados esos métodos y propugnaba —y aplicó en el área industrial— un sistema presupuestario de financiamiento, bastante más centralizado, que descansaba en la asignación de recursos, el control de costos y el estímulo moral de los trabajadores, pues no creía posible "realizar el socialismo con la ayuda de las armas melladas del capitalismo". Durante algunos años se mantuvo el debate y ambos sistemas estuvieron vigentes, pero a partir de 1965 —después de haberse producido la salida del Che a la lucha guerrillera— la balanza pareció inclinarse hacia la generalización del sistema presupuestario. La centralización que este entrañaba se consideraba más apropiada para alcanzar las elevadas metas productivas que —como se verá— entonces se fijaron, aunque en realidad tampoco sería el sistema del Che el empleado, puesto que algunos de sus principios básicos como el control de costos y del propio presupuesto se abandonaron, sino una singular —y confusa— mezcla de recursos pragmáticos y propuestas utópicas.

Otra esfera que ofrecía muestras de originalidad era la cultura. Dado el infausto expediente soviético en ese ámbito, no ha de sorprender que en los medios intelectuales la opción socialista despertase inquietudes acerca de la política cultural. A principios de la década de 1960, después de que buena parte de la

intelectualidad liberal se había exiliado, podían advertirse tres núcleos con un perfil relativamente definido entre los intelectuales de la isla: uno era el agrupado en torno a *Lunes de Revolución* —suplemento cultural del periódico del 26 de Julio— de tendencia esencialmente nacionalista, aunque algunos de sus integrantes tenían cierta formación marxista; los que se agrupaban en torno a la comisión cultural del PSP, de manifiesta ortodoxia comunista, y un tercer conjunto, menos propenso a involucrarse en el debate político, dentro del cual destacaban las figuras que tres lustros atrás habían alentado la revista *Orígenes*. La prohibición de un documental sobre la vida nocturna habanera considerado inconveniente por las autoridades cinematográficas, dio pie a que algunos integrantes de *Lunes* desatasen una polémica en la cual se inmiscuyeron intelectuales comunistas, que lanzaron sobre aquellas veladas acusaciones de conducta antisocialista. El tono del debate y, sobre todo, sus implicaciones, condujeron a una reunión de lo más granado de la intelectualidad insular con la dirigencia revolucionaria, en la cual Fidel Castro expuso la fórmula "dentro de la revolución, todo, contra la revolución, nada" como fundamento de la política cultural. La propuesta implicaba, evidentemente, una valoración política de la cultura, pero al mismo tiempo rechazaba toda adscripción a credos estéticos sosteniendo la libertad de creación. Polémicas posteriores —sobre la moral en el cine, la novelística de la revolución o la propia enseñanza del marxismo— procurarían mayores precisiones, pero, en particular, la crítica demoledora de Che Guevara al realismo socialista en su texto *El socialismo y el hombre en Cuba,* favoreció la libertad creativa que alcanzaría su punto culminante en vísperas de mayo de 1968, cuando un congreso cultural congregó en La Habana a las personalidades internacionales más descollantes de la izquierda intelectual, fascinadas por el "experimento cubano".

Aunque las opciones económicas y culturales de la Revolución cubana la alejaban del modelo soviético, fueron sus posi-

ciones en política internacional las que resultaron ser más conflictivas. Aun antes de la victoria, los revolucionarios de la isla habían establecido fuertes lazos con sus homólogos latinoamericanos, compromisos que determinaron, por ejemplo, su apoyo a la fracasada expedición contra la tiranía de Trujillo en junio de 1959. Sin embargo, al calor del enfrentamiento con Estados Unidos esos nexos adquirieron una nueva dimensión. Pocos días después de ser excluida Cuba de la OEA, en enero de 1962, una enorme multitud suscribía en La Habana una declaración proclamando que el deber de todo revolucionario era hacer la revolución. Mientras los estados latinoamericanos iban rompiendo relaciones con la "isla comunista" —conducta de la cual solo México se apartó—, desde Cuba se hacía llegar apoyo a los partidos y grupos de izquierda alentándolos a la insurrección. Semejante conducta difícilmente podía conjugarse con la política de coexistencia pacífica auspiciada por la Unión Soviética, ni con la posición de los partidos comunistas latinoamericanos, en su mayoría partidarios de la lucha electoral. Con su posición independiente, Cuba emergía como una fuerza política en el Tercer Mundo, condición que se hizo patente con la celebración en La Habana de la primera Conferencia Tricontinental (1966), en la cual Castro arremetería contra algunos partidos comunistas calificándolos de oportunistas, lo que —unido a posteriores críticas a la Unión Soviética por su pasividad frente a los ataques norteamericanos a Vietnam— ocasionaría cierto deterioro de los nexos con el campo socialista, incluida la discordante República Popular China, con la cual las contradicciones afloraron por otras causas. Desde 1963 armas y combatientes cubanos habían comenzado a llegar también a varios países de África en apoyo a su lucha anticolonial, incluyendo un destacamento dirigido personalmente por Che Guevara que en 1965 se incorporó a los combates en el Congo. Sin embargo, los éxitos guerrilleros de la Sierra Maestra no se repitieron, en particular en Latinoamérica donde la lucha armada se desenvolvía jalonada por los reveses y

la caída de destacados combatientes, incluso el propio comandante Guevara, muerto en su intento de desatar la guerra revolucionaria en Bolivia en 1967.

Mientras tanto en la mayor de las Antillas se desarrollaba la lucha contra el burocratismo y los valores pequeñoburgueses, en medio de llamados a la conciencia y la movilización de cientos de miles de trabajadores para alcanzar la meta de producir una zafra de 10 millones de toneladas de azúcar, pues como todo proyecto social, para hacerse viable el socialismo cubano también requería el éxito económico.

LA CONSTRUCCIÓN ECONÓMICA

Para la economía cubana la revolución representó una auténtica conmoción. En apenas dos años la estructura de la propiedad experimentó un vuelco radical con la creación de un área estatal, hasta entonces inexistente, la cual abarcaba además la inmensa mayoría de la industria, toda la banca y el comercio exterior, el comercio mayorista y los grandes almacenes, así como el grueso de la agricultura. En este último sector, dos disposiciones posteriores acrecentaron todavía más la propiedad del Estado: en agosto de 1962, la conversión en "granjas del pueblo" de las cooperativas a las que inicialmente se habían entregado las grandes plantaciones de caña —lo que representó la transferencia de 1.3 millones de hectáreas— y, al año siguiente, la aprobación de una segunda Ley de Reforma Agraria que limitó la propiedad territorial a un máximo de 67 hectáreas, tras lo cual el Estado quedó en posesión de las tres cuartas partes de las tierras del país. No menos radicales fueron los cambios en el comercio exterior, pues con la cancelación de la cuota azucarera por Estados Unidos las ventas del dulce se reorientaron hacia los países socialistas, que en virtud del bloqueo norteamericano se convirtieron también en los principales proveedores

del mercado cubano. Las represalias económicas dictadas por Washington tuvieron especial impacto en la esfera tecnológica, ya que casi todo el equipamiento de la isla, no solo en la industria y la agricultura, sino en el transporte, efectos de oficina, utensilios domésticos, etc., era de procedencia norteamericana, de manera que se tornó imposible su reposición, pues las ordenanzas estadounidenses impidieron incluso adquirir repuestos en terceras naciones. Mantener el país en funcionamiento exigió, por tanto, la asimilación acelerada de la tecnología proporcionada por el bloque socialista —que no solía ser precisamente avanzada— y puso a prueba la inventiva criolla, que más allá de todo cálculo consiguió mantener en operación automóviles y otros medios de transporte, así como una parte de la maquinaria industrial. A esto debe sumarse la pérdida de personal técnico —sobre todo de nivel profesional— que afectado en su estilo de vida o inconforme con el rumbo del país optó por marcharse, emigración que las autoridades estadounidenses propiciaron, especialmente en áreas muy sensibles como la de la salud en la cual Cuba llegaría a perder la mitad de sus médicos.

Pese a cambios y trastornos la economía cubana tuvo un comportamiento razonablemente bueno desde 1959 hasta 1961, pues para los dos primeros años se estimaron tasas de crecimiento cercanas a 10%, mientras que en 1961 se realizaba —con un monto de 6.8 millones de toneladas— la segunda mayor zafra de la historia. Alentada por esos resultados, ese año se diseñó una política económica plena de optimismo, cuyo principal objetivo era la radical reducción de importaciones. Se decidió promover la diversificación agrícola no solo en los rubros de alimentación, sino también en ciertas materias primas como el algodón, y sobre todo se acometió un acelerado programa de industrialización. A favor de la industrialización —cuyo principal adalid era Che Guevara— convergían los criterios de la Comisión Económica para América Latina (CEPAL) y la tradicional prioridad que otorgaba a esta el desarrollo socialista, así como los generosos

créditos recibidos que permitirían la adquisición e instalación de decenas de fábricas completas.

La puesta en práctica de esas concepciones arrojó, sin embargo, resultados bien distantes de las expectativas. Aunque la industria azucarera no había quedado marginada, tampoco se preveía su crecimiento, de modo que se procedió a racionalizar la planta industrial con el cierre de un grupo de pequeños centrales de escasa eficiencia y, sobre todo, se dispuso el desmontaje de 130 000 hectáreas de cañaverales que se destinarían a diversificar la agricultura. Llevadas a la práctica en un ambiente de bajísima estima hacia el azúcar —casi un símbolo de la explotación—, esas acciones se desarrollaron de manera caótica y ocasionaron una brusca caída de la producción del dulce, que en 1963 descendía hasta 3.8 millones de toneladas. El programa de industrialización, en circunstancias signadas por la escasez de cuadros y de recursos, puso el énfasis en el desarrollo de las nuevas industrias —con descuido de las ya establecidas—, pero la entrada en producción de esos proyectos se vio afectada por la ausencia de experiencia y calificación, así como por deficiencias organizativas y la adopción de tecnologías de baja productividad. La diversificación agrícola, que se llevaba a cabo en amplia escala y sin una apropiada selección de cultivos y variedades, quedó muy lejos de obtener las producciones programadas y acentuó el desabastecimiento. El descenso de las exportaciones sin una significativa reducción en lo importado tuvo muy negativo impacto, no solo en el balance financiero externo sino en las propias condiciones de vida del país. Las escaseces desataron la especulación y para frenarla se decidió, en marzo de 1962, un riguroso racionamiento de los productos de consumo, decretado a título provisional pero que el comportamiento de la economía haría permanente. En tales circunstancias el gobierno se planteó una profunda revisión de la estrategia seguida.

En el verano de 1963, al término de un prolongado viaje a la Unión Soviética, Fidel Castro anunciaba que ese país había

decidido elevar el precio que pagaba por el azúcar cubano, con lo cual se abrían posibilidades de incrementar su producción para impulsar el desarrollo económico del país. Un nuevo convenio comercial con la URSS, mediante el cual aquel Estado se comprometía a adquirir 24 millones de toneladas métricas de azúcar entre 1965 y 1970 a un precio de seis centavos por libra, resultó determinante en la formulación de la nueva estrategia. Esta buscaba apoyarse en la tradicional ventaja comparativa de Cuba como productora de azúcar, para con los recursos financieros generados por esa industria e intensificando sus eslabonamientos con otras ramas de la economía impulsar un desarrollo multilateral. El eje del plan de desarrollo acelerado sería el sector azucarero, pues se pretendía elevar la zafra hasta los 10 millones de toneladas en 1970, pero se contemplaban también crecimientos apreciables en la producción de carne vacuna, café y otros renglones. En lo relativo al azúcar, para alcanzar la meta trazada se confeccionó un "plan perspectivo" que contemplaba inversiones por 1 000 millones de pesos a concretar en cinco años, de los cuales 450 millones corresponderían al área industrial —incluyendo transporte y almacenaje—, en la cual se preveía la ejecución de más de 2 000 proyectos de ampliación fabril. El programa demandaba vencer una serie de obstáculos que iban desde la efectiva disponibilidad de la tierra necesaria para el incremento de la producción cañera, hasta la dotación de fuerza de trabajo, pues las posibilidades de empleo abiertas por la revolución habían reducido casi a la mitad el número de macheteros "profesionales".

La ejecución del plan se inició con buenos auspicios al superarse el monto de seis millones de toneladas fijado para la zafra de 1965; pero una cosa era aprovechar con eficiencia las capacidades existentes y otra alcanzar en breve plazo una producción que exigía casi duplicarlas. En los años sucesivos la progresión productiva se caracterizó por marcados altibajos; las inversiones industriales previstas para 1966 y 1967 solo se eje-

cutaron en 68%, mientras los esfuerzos para la mecanización de la cosecha, aunque parcialmente exitosos, no proporcionaban los ahorros esperados en fuerza de trabajo, de manera que los incrementos productivos exigían un similar aumento de trabajadores en los campos. La situación era comprometida ya que, como expresara el propio Fidel Castro, la zafra de los 10 millones más que una meta económica se había convertido en una cuestión de honor. La dirigencia del país hizo descansar entonces el esfuerzo productivo en la "conciencia", convencida de que la austeridad y una elevada disposición al sacrificio traerían aparejada, junto al desarrollo económico, la formación de un "hombre nuevo". Con intensidad y duración crecientes los trabajadores urbanos, estudiantes, mujeres, militares y otros sectores de la sociedad fueron convocados a contribuir mediante su esfuerzo personal, no solo a cada una de las zafras programadas, sino a la obtención de los crecimientos productivos comprometidos en el café y otros renglones. Bajo la consigna de "la construcción paralela del socialismo y el comunismo" se desencadenó una "ofensiva revolucionaria" que hizo gratuitos numerosos servicios, eliminó los límites de la jornada laboral, abolió los impuestos, suprimió controles y procedimientos económicos calificados de burocráticos y nacionalizó todo el sector artesanal y el pequeño comercio —unos 58 000 establecimientos que incluían restaurantes, talleres de reparación, bares, etc.—, transfiriendo al Estado la responsabilidad de brindar los más diversos servicios requeridos por la población. Y cuando la voluntad no resultó suficiente, se apeló a la militarización. Toda una cadena de "frentes", "puestos de mando" y otras instancias ejecutivas fue diseñada para asegurar la más exacta coordinación de las operaciones, sin que quedasen al margen ciertos recursos coercitivos, como la movilización de miles de jóvenes de conductas "desviadas" en "unidades militares de ayuda a la producción" con un severo régimen, o el requisito de trabajar cierto tiempo en la agricultura para los hombres adultos que deseaban emigrar a Estados Unidos.

La zafra de 1970, a pesar de haberse prolongado, no alcanzó la meta fijada, principalmente por limitaciones industriales. La producción obtenida —8.5 millones de toneladas— fue de todas formas la mayor de la historia y Cuba pudo exportar siete millones de toneladas, buena parte de ellas al alto precio contratado con la URSS. El problema eran las consecuencias indirectas, el negativo impacto que la concentración de recursos en la zafra y en el programa azucarero había tenido sobre el conjunto de la economía. Tanto más, debido a la generalizada aplicación de fórmulas voluntaristas de gestión y organización del trabajo que acarrearon anarquía administrativa, la proliferación de indisciplinas laborales y un marcado descenso de la productividad. Resultado inevitable de todo ello era la acentuación de las penurias materiales de la población, hasta un extremo que hacía peligrar los indiscutibles avances sociales de la revolución.

TRANSFORMACIONES EN LA SOCIEDAD

Más que en la economía, era en la política social donde la Revolución cubana daba muestras de mayor originalidad y exhibía sus mejores logros. El control estatal del aparato productivo sirvió de base a una concepción integral del desarrollo cuyo objetivo primordial era satisfacer las necesidades básicas del pueblo. Antes de conmemorar la revolución su segundo aniversario, los incrementos salariales, la oferta de empleos, la distribución de tierras y otras medidas, habían transferido 15% del ingreso nacional de manos de los propietarios a la remuneración del trabajo, a pesar de que no se había producido aún la vasta nacionalización de empresas. Después de esta, y transcurrida una década, el salario representaría algo más de 70% en la estructura de ingresos de la población. La apertura de nuevas fuentes de trabajo, la extensión de la escolarización, así como el crecimiento de las fuerzas armadas dieron lugar a un acusado

descenso de la tasa de desempleo que, desde un 12.5% estimado en 1958, descendería a 9% en 1962 y finalmente se situaría en apenas 1.8% en 1970; paralelamente el desempleo estacional desapareció casi por completo. Después de los incrementos decretados a principios de la revolución, el salario tendió a estabilizarse y, tras la introducción de un nuevo sistema salarial en 1963, solo acusó un leve crecimiento de 3.5%. Otras decisiones con importante repercusión en materia de ingreso fueron las relativas a la seguridad social: primero la agrupación de todas las cajas de retiro en un Banco del Seguro Social en 1959 y, al año siguiente, la implantación del seguro obligatorio para todos los trabajadores, lo cual representó, obviamente, una ampliación considerable de dicha partida en el presupuesto público. Con posterioridad se incrementarían los subsidios por enfermedad, así como se otorgarían pensiones a personas discapacitadas carentes de abrigo familiar. Las medidas en pro de la igualdad determinaron un considerable incremento de la proporción del ingreso correspondiente a las capas más desprotegidas de la sociedad, favorecido también por otras acciones específicas. La discriminación racial fue combatida desde los primeros momentos de la revolución, aunque posteriormente se confiaría en exceso su superación a la garantía de una igualdad de oportunidades; en cuanto a la desigualdad de género —cuestión sobre la cual hubo una más clara percepción de sus factores culturales— fue enfrentada de inicio mediante la apertura de mayores espacios laborales y con el estudio, lo cual redundó en un notable aumento de la proporción de mujeres trabajadoras.

Las circunstancias apuntadas incidieron en el movimiento de la población, pues la natalidad, que había mantenido una tendencia declinante desde principios de siglo, repuntó hasta una tasa de 3.53% en el quinquenio 1960-1965 y aunque descendió en el siguiente todavía se sostenía sobre 3%. Ese factor resultó decisivo para que la población aumentase hasta 8.5 millones de habitantes al realizarse el censo de 1970, a pesar de que los que

habían abandonado el país ya superaban los 400 000. En cambio, otra tendencia secular, el aumento de la población urbana, no solo se sostuvo sino que se acentuó, de modo que algo más de 60% de los habitantes se clasificó como tal en 1970; solo que dicho fenómeno ya no se concentraba en La Habana, cuyo crecimiento más bien se desaceleró, sino en las ciudades de tamaño medio y las capitales de provincia. En materia de vivienda se impulsaron las construcciones destinadas a sectores populares; en las ciudades con el propósito de erradicar los barrios marginales y en áreas rurales mediante un programa de viviendas campesinas, al tiempo que una Ley de Reforma Urbana posibilitaba que las residencias alquiladas pasasen en propiedad a sus moradores después del pago de cierto número de mensualidades.

Desde el punto de vista de los servicios sociales el énfasis se puso en la salud y la educación. Los indicadores cubanos de salud figuraban entre los mejores de América Latina pero los promedios escondían notables diferencias, particularmente entre la ciudad y el campo. A pesar del serio déficit experimentado en el personal de salud —lo cual determinó un programa prioritario para su formación—, el establecimiento de un servicio médico obligatorio para los recién graduados permitió extender la cobertura en las áreas rurales, las cuales hacia 1970 ya contaban con casi 50 instalaciones hospitalarias y un centenar de dispensarios. Las campañas de vacunación contra la poliomielitis y otras epidemias, así como las acciones tendientes al control de enfermedades infecciosas del tipo de la tuberculosis o la gastroenteritis, contribuyeron a una apreciable extensión de la esperanza de vida. Al mejoramiento de la calidad de vida ayudó también la difusión de las prácticas deportivas, a partir de un programa iniciado en 1961 bajo la consigna “el deporte es salud”, en coincidencia con la desaparición del profesionalismo en esa esfera. Poco después se comenzarían a crear escuelas especializadas para la preparación de atletas, cuyo resultado se haría

visible en el gradual ascenso de los resultados de los deportistas cubanos en competencias internacionales.

En el campo educativo el primer objetivo fue eliminar el analfabetismo, una condición que afectaba a 23.6% de la población mayor de seis años. De inicio se procedió al ensanchamiento de la red escolar, sobre todo en áreas rurales, lo cual incluyó la conversión de varios cuarteles e instalaciones militares en escuelas, medida que sería seguida por la preparación de más de un millar de maestros voluntarios para llevar la enseñanza a las montañas y otros territorios alejados y, finalmente, con el lanzamiento de una campaña encaminada a liquidar el analfabetismo en poco menos de un año. Para llevarla a cabo unas 250 000 personas se enrolaron como alfabetizadores, de ellos cerca de 100 000 eran estudiantes de enseñanza media y superior que partieron hacia las zonas rurales para convivir con sus alumnos; el programa devenía así en un medio de concientizar a los jóvenes de las ciudades acerca de las difíciles condiciones de vida del campesinado y, a la vez, ponía a este en contacto con la modernidad mediante esa suerte de mensajeros culturales. Cumplido su propósito, la campaña de alfabetización fue seguida por otros programas destinados a que la población adulta alcanzase un nivel primario de enseñanza.

En junio de 1961 fueron nacionalizados todos los colegios privados, de manera que correspondería por entero al Estado garantizar la plena cobertura escolar. En apenas una década el número de escuelas así como el personal docente se incrementaron notablemente y, por consiguiente, el presupuesto destinado a sostener todo el sistema se multiplicó, pasando de 79.4 millones de pesos en 1958, hasta 351.1 millones en 1970. Esos gastos comprendían también un extenso programa de becas, iniciado en las universidades en 1960 pero que al cabo de una década abarcaba bastante más de 100 000 estudiantes en todos los niveles de educación. Los contenidos de la enseñanza se enriquecieron y modernizaron. A partir de la Reforma Universitaria

de 1962 cambió la estructura de la educación superior creándose un buen número de nuevas carreras universitarias —biología, economía, ingenierías mecánica e industrial, historia y psicología, entre otras—, a la vez que se renovaban los currículos de las ya existentes, una transformación que se manifestaría también en la enseñanza media al diferenciarse en dos niveles. Esta última decisión dio paso a una considerable diversificación de la enseñanza técnica y profesional, incluyendo la creación de especialidades hasta entonces inexistentes, como la de instructores de arte, destinada a implementar la enseñanza artística en todo el sistema educativo e impulsar un vigoroso movimiento de aficionados. La revolución educacional traía aparejado un considerable ensanchamiento del horizonte cultural.

En la esfera de la cultura lo primero que destaca es la modificación de las condiciones de la actividad creativa, hasta entonces confiada a las limitadas posibilidades del mecenazgo o al apoyo, casi siempre ocasional, de algunas instituciones públicas. Con la revolución el financiamiento estatal, ya fuese a partir del Consejo Nacional de Cultura o de otras formas institucionales, posibilitó la creación del Ballet Nacional de Cuba, dando una nueva dimensión al tenaz esfuerzo desplegado hasta entonces por Alicia y Fernando Alonso, así como de la Orquesta Sinfónica Nacional, el Conjunto de Danza Nacional, el Teatro Lírico y otras agrupaciones teatrales. Apenas tres meses después del triunfo revolucionario se fundaba el Instituto Cubano de Arte e Industria Cinematográficos (ICAIC), lo cual posibilitó regularizar la actividad fílmica con la producción de documentales y largometrajes de ficción, así como de un noticiario que difundiría informaciones e ideas con peculiar perfil estético. Los canales televisivos y las estaciones de radio quedaron agrupados en el Instituto de Radiodifusión que despojó la programación de finalidades mercantiles y acentuó su papel cultural, aunque experimentó a la vez los efectos del deterioro técnico en áreas cuyos costos resultaban difíciles de afrontar, así como la pérdida de

artistas que optaron por emigrar, fenómeno que también afectó a ciertos conjuntos e intérpretes de música popular. Esta última acrecentó su audiencia, en parte porque llegó a prohibirse la emisión de música norteamericana, decisión por demás absurda, que por un tiempo privó a la creación musical cubana de una de sus fuentes nutricias tradicionales. No obstante, los aires renovadores se dejarían sentir en el más genuino movimiento musical de la revolución, la "nueva trova", que florece a finales de la década de 1960 con compositores e intérpretes del calibre de Silvio Rodríguez y Pablo Milanés.

El apoyo estatal a la producción —y a la enseñanza— artística tuvo desde un principio un importante efecto democratizador, no solo porque las manifestaciones de la "alta cultura" fueron puestas al alcance de las mayorías, sino porque algunas expresiones del arte popular depuraron su factura —valgan como ejemplo las coreografías del Conjunto Folklórico Nacional, fundado en 1962— desdibujándose las fronteras, un tanto ficticias, en la creación. Las nuevas condiciones materiales también influyeron en la actividad literaria, particularmente a partir del trabajo editorial que se despliega con la creación de la Imprenta Nacional de Cuba en 1962, el cual decuplicó en menos de una década la producción anual de libros superando los 10 millones de ejemplares, al tiempo que abarataba considerablemente los precios. Las publicaciones periódicas, por su parte, perdieron el carácter mercantil y se diversificaron, con la proliferación de revistas más o menos especializadas —tanto culturales como de otra índole—, las cuales en alguna medida vinieron a ocupar el espacio dejado por la disminución del número de diarios —no así de su tirada—, consecuencia hasta cierto punto de la existencia de una sola línea editorial.

Al masificarse la lectura y el desarrollarse el sistema de publicaciones, se hizo posible que algunos libros de autores cubanos experimentasen el fenómeno de las grandes tiradas. Ello benefició sobre todo a la narrativa, en la cual predominaron du-

rante cierto tiempo las obras inspiradas en la reciente gesta revolucionaria, al estilo de *Bertillón 166*, de José Soler Puig, *Así en la paz como en la guerra*, de Guillermo Cabrera Infante, o *La situación*, de Lisandro Otero, aunque en otros casos, como *El Siglo de las Luces*, de Alejo Carpentier, la reflexión sobre el impacto humano de las revoluciones se proyectaba en un plano histórico. El curso del acontecer nacional iría dando pie a expresiones literarias tan diversas como *Memorias del subdesarrollo*, de Edmundo Desnoes —después llevada al cine—, o *Los años duros*, de Jesús Díaz, e incluso vería la luz una obra de tan compleja naturaleza y depurada factura como *Paradiso*, de José Lezama Lima. En la poesía seguía brillando Nicolás Guillen —ahora presidente de la Unión de Escritores y Artistas de Cuba, creada en 1961—, aunque también se escuchaban las voces de Roberto Fernández Retamar, Rolando Escardó, Fayad Jamís, Heberto Padilla, Pablo Armando Fernández y toda una hornada de nuevos poetas.

A finales de los años sesenta la vida cultural, como el conjunto de la sociedad, experimentó los estremecimientos del enorme esfuerzo productivo que representó la zafra de los 10 millones. Mientras algún cantor aseguraba amar con la misma vehemencia con que el machete hacía la zafra y una famosísima agrupación de música popular tomaba su nombre de una de las consignas al uso, periodistas, escritores y otros intelectuales, dispersos por las distintas zonas azucareras del país, recogían los testimonios e incidencias del épico esfuerzo, cuya secuela literaria —la novela *Sacchario*, de Miguel Cossío, es un ejemplo— se haría sentir por varios años.

La formidable y prolongada movilización en torno a la campaña azucarera y otras metas productivas, así como las condiciones en que esta hubo de realizarse alteraron profundamente la vida social. La participación popular en esas tareas se recabó sobre la base de la “conciencia”, apelando al entusiasmo y el espíritu de sacrificio de los trabajadores, a la vez que se gene-

ralizaba la austeridad, con el cierre de numerosos espacios de diversión y la postergación de las vacaciones y fiestas públicas. Todo ese movimiento, encaminado también a la formación del "hombre nuevo", entrañaba una considerable presión moral, particularmente sobre la generación más joven, y en buena medida hacía descansar su éxito en la voluntad colectiva. Sin embargo, muchas de las medidas prácticas que lo acompañaron propiciaron un igualitarismo extremo y atentaron contra la disciplina laboral, fomentando el ausentismo —en 1970 este registraba 20% y en algunas zonas del país llegó hasta 50%—, a la vez que se reducía la oferta de bienes y servicios provocando un exceso de liquidez de muy desfavorable repercusión sobre la disposición al trabajo. El 26 de julio de 1970, al término de la "gran zafra" y con la economía al borde del colapso, Fidel Castro hizo un profundo balance crítico de la situación y de hecho anunció un cambio de política.

Las condiciones para ello habían venido madurando desde un tiempo antes, particularmente en el plano internacional. Si la caída de Che Guevara en Bolivia había representado un golpe demoledor para las esperanzas de una revolución en Latinoamérica, la independencia de varias colonias británicas en el Caribe, así como diversos movimientos políticos en Chile, Perú, Argentina y Panamá comenzaban a abrir para Cuba el espacio del cual se le había querido privar dentro de la comunidad de naciones americanas. Por otra parte, el creciente y costoso compromiso de Estados Unidos en la guerra de Vietnam alejaba las posibilidades de una agresión directa a la isla, por más que el ambiente de hostilidad se mantuviese. La vital relación con la URSS y el campo socialista también experimentaba un sesgo favorable, pues con la deposición de Nikita Jruschov y, sobre todo, tras la intervención soviética en Checoslovaquia en 1968 —que La Habana terminó por apoyar—, en Moscú se había consolidado un núcleo dirigente cuyos intereses políticos eran propicios al mejoramiento de las relaciones con Cuba.

10
LA EXPERIENCIA SOCIALISTA

A partir de 1970 el proceso revolucionario cubano modera sus arrestos experimentales y toma el cauce establecido por el modelo soviético. Las manifestaciones más sobresalientes del cambio se expresaron en lo institucional, mediante la adopción de un sistema político que, tanto en sus soluciones organizativas como en sus estructuras estatales, se acercaba a lo que por entonces se calificaba como "socialismo real". Los vínculos con el bloque socialista devinieron orgánicos y el intercambio se intensificó, propiciando un apreciable desarrollo socioeconómico que ponía en duda la efectividad del persistente cerco norteamericano. El florecimiento de la economía y la voluntad política acrecentaron el papel internacional de Cuba, particularmente en África. Todo ese desenvolvimiento no era, sin embargo, expresión de una tendencia autosostenida, pues descansaba en el excepcional carácter de las relaciones entre la isla antillana y la Unión Soviética. Cuando ese Estado desapareció en 1991 Cuba sufrió una profunda crisis, cuya superación ha exigido una sucesión de cambios de mayor o menor envergadura que en buena medida todavía se hallan en curso.

LA INSTITUCIONALIZACIÓN

Una de las debilidades fundamentales del gran esfuerzo desplegado en la primera década de revolución había sido su soporte institucional. Con buena dosis de improvisación, muchos de

los instrumentos organizativos empleados se diseñaron al efecto, al margen de —y en ocasiones suplantando— las instituciones existentes. “Planes especiales”, “grupos”, “puestos de mando” y otras estructuras integradas resultaron incapaces de superar deficiencias de las que en buena medida eran factores, impidiendo la consecución de las metas trazadas. Dicho fenómeno afectó incluso a organizaciones sociales de tanta importancia como los sindicatos, que bajo las urgencias de la movilización se vieron sustituidos por fórmulas como el “movimiento de trabajadores de avanzada”. Pero la movilización, más o menos circunstancial, no podía reemplazar la sistemática participación del pueblo en la construcción de una nueva sociedad. Desde mediados de 1970, el propio Fidel Castro ya reconocía en sus discursos la necesidad de separar el partido de las tareas administrativas del Estado, de limitar la expansión de la autoridad estatal a costa de las organizaciones de masas, así como la urgencia de rescatar a estas del letargo en que habían caído. La institucionalización, además de viabilizar la participación popular en las tareas de gobierno, debía facilitar también el reordenamiento de la economía.

El primer paso fue devolver al movimiento sindical su carácter y funciones. En la tradición leninista el sindicato era la más importante entre las “poleas de trasmisión” del partido, de ahí la prioridad con que este asumió la conducción del proceso de reconstrucción sindical. Su punto de partida fue la realización de elecciones directas y secretas en las bases y su colofón la celebración del XIII Congreso de la Central de Trabajadores de Cuba, del cual resultó la renovación de más de 70% de la dirigencia obrera. Desarrollado bajo la clásica propuesta “de cada cual según su capacidad, a cada cual según su trabajo”, el XIII Congreso desechó las tendencias igualitaristas pronunciándose a favor de la introducción de normas de producción, incentivos materiales y otros recursos que incrementasen la productividad. Como tarea principal los sindicatos debían asegurar la

participación de los colectivos laborales en la confección de los planes de producción, así como la concertación con las administraciones de convenios colectivos que estipulasen las condiciones de trabajo. Un proceso similar se llevó a cabo en otras organizaciones de masas como la Federación Estudiantil Universitaria, que recuperó su entidad en 1971 —después de haber sido prácticamente absorbida por la UJC—, casi al mismo tiempo que el estudiantado de nivel medio se dotaba de una representación propia. En 1974 la Federación de Mujeres Cubanas realizó su segundo congreso, en el cual se constataron las serias desigualdades que aún afectaban a la condición femenina, particularmente por la baja representación de la mujer en las esferas de dirección, decidiéndose revitalizar las pautas funcionales de esa organización con el propósito de hacer más efectiva su incidencia social.

El aparato estatal sufrió una pareja reestructuración. En unos casos debido a la desagregación de funciones, como ocurrió con el Ministerio de Industria Básica —separado en tres ministerios en 1974—, en otros por la creación de nuevos organismos —el Ministerio de Marina y Puertos, por ejemplo— o mediante el establecimiento de nuevas instancias de gobierno, como el comité ejecutivo del Consejo de Ministros —creado en 1972 para la coordinación de actividades entre ministerios e instituciones—, la administración central del Estado se reordenó en busca de mayor eficacia. Con igual finalidad se desarrolló cierta tendencia hacia la descentralización, cuya expresión de mayor impacto fue sin duda la encaminada a dotar de representatividad a los órganos locales de gobierno, experiencia ensayada en Matanzas, en 1974, en la que las autoridades de los municipios y la provincia fueron por primera vez objeto de elección popular.

Todas esas acciones convergieron en la celebración, en 1975, del primer congreso del Partido Comunista. El fortalecimiento de dicha organización había constituido una prioridad en los

años precedentes, durante los cuales también se incrementó de manera notable su membresía hasta superar los 200 000 militantes. Los documentos rectores —plataforma programática, tesis, etc.—, discutidos primero en las bases, fueron finalmente aprobados en el cónclave partidista, durante el cual también se eligieron sus órganos dirigentes: el buró político, el secretariado y el comité central, instancia esta última cuya composición resultó algo más representativa de la ya compleja sociedad cubana. En su condición de primer secretario, Fidel Castro presentó un informe al congreso en el cual hizo un balance crítico de los errores cometidos durante la etapa anterior y expuso los fundamentos de la política a seguir. En líneas generales esta se plasmaba en las directivas de lo que sería el primer "plan quinquenal" de la economía cubana, pero también incluía otras definiciones en materia ideológica y organizativa, tanto para el trabajo interno como para la conducción del Estado y la economía nacional. Por su organización, propósitos y métodos de trabajo adoptados, el Partido Comunista de Cuba se ajustaba ahora al patrón típico de dichas instituciones en los países de la Europa socialista.

El remate de la institucionalización fue la aprobación por referéndum, y la inmediata promulgación, de una nueva Constitución en 1976. Esta concentraba los poderes en una Asamblea Nacional, órgano legislativo cuyas facultades ejecutivas serían ejercidas por un Consejo de Estado —elegido en su seno— y por el Consejo de Ministros. La ley fundamental también establecía una nueva división político-administrativa del país, que en lo sucesivo estaría integrado por 14 provincias y 169 municipios, división que permitiría extender la experiencia matancera para la elección de los órganos de gobierno del "poder popular". Las elecciones generales se celebrarían cada cinco años y a medio término habrían de renovarse las instancias municipales; el Partido Comunista no presentaba candidatos —una diferencia respecto al modelo soviético—, los

cuales serían nominados por la población en la base y por las organizaciones de masas en las restantes instancias, sin que mediara campaña electoral alguna. Una vez elegidos los delegados de base y constituidas las asambleas municipales, estas eligirían a su vez a los delegados de las asambleas provinciales y a la Asamblea Nacional. Como conclusión de dicho proceso, ese órgano supremo, reunido por primera vez el 2 de diciembre de 1976, eligió a Fidel Castro como presidente de los consejos de Estado y de Ministros. Aunque el partido no participó formalmente del proceso electoral, algo más de la mitad de los delegados elegidos militaban en sus filas, proporción que se incrementaba en los niveles superiores de gobierno —80% de los miembros del Consejo de Estado y 65% de los ministros eran miembros del comité central— y que indiscutiblemente no propiciaba la diferenciación de las funciones políticas y administrativas.

Un componente esencial de las transformaciones lo representaba el Sistema de Dirección y Planificación de la Economía aprobado por el congreso del partido, conjunto de principios, estructuras y procedimientos para la planificación, gestión y control de las actividades económicas regido por la Junta Central de Planificación. Fundamentado "en las leyes económicas objetivas que actuaban en la etapa de la construcción del socialismo", el sistema restituía al presupuesto su rol decisivo e incorporaba buena parte de la experiencia económica soviética; marcando una notable diferencia con lo practicado a finales de los años sesenta, reconocía el papel de la ley del valor e introducía criterios de rentabilidad, incentivos materiales y una relativa descentralización, mediante métodos de control financiero y una mayor autonomía empresarial. Esta última, sin embargo, incorporaba las fórmulas de autogestión aplicadas en los países del Este europeo, en consideración a la escasez de recursos y el menor desarrollo de las fuerzas productivas en la economía cubana.

DESARROLLO PLANIFICADO Y PROCESOS SOCIOCULTURALES

En el plano económico las nuevas medidas adoptadas se vieron favorecidas por una excepcional coyuntura, ya que de 1973 a 1975 los precios del azúcar alcanzaron su más elevada cota —hasta 65 centavos por libra— en el siglo XX. En 1972 Cuba se había incorporado al Consejo de Ayuda Mutua Económica (CAME o Comecon), esquema de integración económica del bloque socialista, lo cual representaba una garantía en materia de mercados, créditos y suministros. Esta se vio reforzada a finales del propio año por la firma de un nuevo convenio con la URSS que aplazó hasta 1985 el reembolso de los créditos recibidos y ofreció otros —sin intereses— hasta 1975, además de establecer precios preferenciales para el intercambio comercial y proveer una asistencia técnica que dotó de asesores soviéticos a los más variados sectores de la economía y la administración. Aunque durante el trienio de altos precios azucareros Cuba colocó una elevada proporción de sus exportaciones en el mercado mundial, las privilegiadas condiciones pactadas con la Unión Soviética propiciaron una progresiva concentración del intercambio con ese país, que ya en la década de los ochenta absorbía más de 60% de todo el comercio exterior de la isla.

Hasta cierto punto la intensificación de los vínculos con el campo socialista vino a dar continuidad a la estrategia adoptada a mediados de la década anterior, ya que se ratificó el papel central del azúcar, cuya producción debería registrar un sostenido crecimiento. Solo que dicha determinación se inscribía ahora dentro de un amplio programa general de industrialización y habría de ejecutarse siguiendo una planificación sistemática. La industria azucarera debía elevar su capacidad de procesamiento y extender la mecanización de la cosecha; para lo primero se programaron ampliaciones en más de 40 ingenios, así como el montaje de seis nuevos centrales que irían entrando en produc-

ción durante la década siguiente, mientras que para la mecanización agrícola se dispuso de una fábrica de cosechadoras cañeras destinada al ensamblaje de un equipo de diseño cubano-soviético. En la década de 1980 dos tercios de la caña molida se cosechaban por medios mecánicos, en zafras que fluctuaban en torno a los ocho millones de toneladas; una docena de instalaciones fabriles eslabonadas con la industria del dulce proveían a esta de equipos, partes y piezas.

En el decenio 1975-1985 las inversiones en el sector estatal ascendieron a más de 30 000 millones de pesos, lo cual posibilitó obtener significativos incrementos en la producción de cítricos y algunos otros renglones agrícolas, así como ensanchar considerablemente la pesca, la minería de níquel y la planta industrial, esta última principalmente en las ramas textil, mecánica y alimentaria. Tan notable crecimiento se sustentaba en buena medida en las especiales relaciones con la Unión Soviética; los elevados precios pagados por el azúcar —que en los años ochenta serían hasta cinco o seis veces superiores a los del mercado mundial— así como el módico importe de muchos insumos —en particular el petróleo, cuya reexportación llegó a representar una importante fuente de ingresos—, permitieron a la economía cubana continuar su desarrollo cuando el resto de Latinoamérica sufría los devastadores efectos de la "crisis de la deuda". Con tasas de crecimiento de 3.5% entre 1976 y 1980 y de 6.7% en el quinquenio siguiente, Cuba pudo reducir parcialmente los saldos negativos de su balanza comercial, disminuir la liquidez monetaria, controlar el déficit fiscal y mantener una oferta de empleo en correspondencia con el crecimiento demográfico.

Todo ello repercutió en un mejoramiento del nivel de vida de la población, cuyo consumo social se elevó a razón de 7% anual durante el decenio analizado, mientras que el de carácter personal lo hacía a 2.8%. Este último se benefició de ciertas aperturas al mercado, cuya más alta expresión fue, en 1980, la creación de mercados donde los campesinos podían vender sus productos a

precios libremente fijados. Con un consumo per cápita algo superior a las 2 700 calorías, las Naciones Unidas —la FAO— ubicaron entonces a los cubanos en una de las mejores posiciones del continente, a la vez que se dejaban notar avances en otros aspectos de sus condiciones de vida, como la electrificación —que ya alcanzaba al 85% de los hogares del país— y la dotación de utensilios domésticos. Entre 1976 y 1985 se crearon un millón de nuevos empleos, mientras una cifra similar de ciudadanos recibían pensiones de la seguridad social, partida cuyos gastos ascendieron hasta 1 115 millones de pesos en 1985. Cinco años antes una reforma general de salarios —más la introducción de un sistema de primas y premios— había representado un aumento de más de 700 millones de pesos en el fondo salarial del país.

La notable expansión de los servicios sociales permitía contrarrestar la relativa desigualdad derivada de la diferenciación en los ingresos. Los servicios de salud —gratuitos desde la década anterior— a mediados de los años ochenta absorbían ya unos 1 000 millones de pesos, con lo cual se sostenía una red hospitalaria considerablemente acrecentada —sobre todo fuera de la capital—, pues con cerca de 300 instalaciones ya era seis veces mayor que la existente en 1958, a la cual se sumaban casi 400 policlínicos, base de un amplio sistema de atención primaria. El número de médicos disponibles —20 500 en 1984— llevó la razón de médico por habitantes hasta 490, lo cual se reflejaba en importantes indicadores de salud como el de la mortalidad infantil, cuya tasa en 1984 —1.5%— era casi la mitad de la registrada 10 años antes. En el terreno educativo las cifras resultaban por igual elocuentes. La matrícula total en 1983 —3.3 millones de estudiantes— era cuatro veces mayor que en 1959, resultado de un apreciable crecimiento en la enseñanza primaria, pero sobre todo en la secundaria que aumentó hasta más de un millón de alumnos a mediados de los ochenta. Ello era en gran parte consecuencia de la extensión de la enseñanza obligatoria hasta la secundaria básica —9º grado—, decisión que creó una situa-

ción explosiva a mediados de la década de 1970, cuando arribaron a ese nivel los integrantes del *boom* de nacimientos de los primeros años sesenta. Para enfrentarla se diseñó un plan emergente de formación de profesores y, sobre todo, se construyeron cientos de nuevas escuelas enclavadas en los campos, pues la mayoría de los alumnos de secundaria —más adelante su totalidad— serían becarios. Para compensar en algo el enorme costo de dicho programa, quedó establecido que los estudiantes dedicasen media jornada al trabajo en las empresas agrícolas donde se hallaban sus escuelas, solución de muy relativa eficacia económica, pero que mantenía vigente con nuevos procederes el ideal de formar un "hombre nuevo". Al crearse el Ministerio de Educación Superior en 1976, los grandes centros universitarios se desagregaron por ramas —medicina, tecnologías, arte, etc.— lo que unido a la creación de nuevas universidades en casi todas las provincias dio lugar a la formación de una red de más de 40 altos centros docentes. El desarrollo social tenía, no obstante, un punto débil: la vivienda. Después de haberse construido un promedio de 17 000 viviendas anuales a principios de la revolución, dicha cifra cayó apenas a 7 000 durante el resto de la década de 1960, de manera que al producirse el cambio de política en los años setenta se arrastraba un importante déficit habitacional. Como además se padecía un sensible decrecimiento de trabajadores en el sector de la construcción, se apeló al recurso de confiar el grueso de la construcción de viviendas a los colectivos laborales, los cuales prescindían por cierto tiempo de algunos trabajadores que se dedicaban a la actividad constructiva integrados en "microbrigadas".

El crecimiento de la población se ralentiza a partir de la década de 1970, pues tras haber registrado una tasa de 3% anual en los años sesenta se redujo a 1.1%, tendencia atribuible, entre otros factores, a la incorporación de la mujer al trabajo y a la escasez de viviendas. No obstante, el censo de 1981 arrojó un monto poblacional de casi 10 millones de habitantes y ello a pesar

del sostenido flujo de cubanos hacia el exterior, que con el reciente éxodo de Mariel —unas 125 000 personas abandonaron la isla por ese puerto en 1980— ya se acercaba al millón de individuos. Con cerca de dos millones de habitantes, La Habana continuaba siendo la ciudad más poblada del país, pero su proporción dentro de la población total era ahora inferior a 20% —19.8% en 1981—, a diferencia de lo que sucedía con las cabeceras de provincias y municipios que en conjunto albergaban a 38.7% de los habitantes de la isla, evidencia mayor del continuo crecimiento de la población urbana.

En materia de ascenso social el sector femenino era sin duda el protagonista más destacado. Las mujeres que en la década de 1950 constituían apenas un 13% de la fuerza de trabajo ocupada, en los años ochenta habían incrementado dicha proporción a más de 30% y eran mayoría en ramas tan importantes como la salud y la educación. Ese progreso se hacía aún más sólido en perspectiva, pues las mujeres también tenían una proporción mayoritaria en la matrícula del nivel secundario y casi emparejaban su participación con los hombres en las universidades. La creciente incidencia social de la mujer presentaba, no obstante, situaciones conflictivas, pues la tradición la mantenía a cargo de las labores hogareñas y ese "segundo empleo" pesaba sobre ellas de manera desproporcionada. La promulgación del Código de Familia en 1975 proclamando la más estricta igualdad de géneros, tanto en la esfera pública como en la privada, no pasó de ser un formal intento de modificar dicha situación, pues las leyes poco podían hacer frente a la mentalidad machista. Algo parecido sucedía con la desigualdad racial, que atacada desde el ángulo legal y estructural había conseguido cerrar la brecha entre blancos y negros en materia de esperanza de vida, nivel de ingresos o instrucción general, pero otras diferencias aún resultaban notables, como la menor presencia relativa de negros y mulatos en las aulas universitarias y su sobrerrepresentación entre la población penal. Otra forma quizá más sutil de desigualdad se

asociaba a las creencias religiosas. Aunque el enfrentamiento inicial entre la revolución y la Iglesia católica había sido hasta cierto punto superado, eran perceptibles sus secuelas, tanto más porque la Constitución de 1976 declaró ateo al Estado cubano, situación que iba también en perjuicio de las denominaciones protestantes e incluso de las creencias de matriz africana, cuyos practicantes podían verse relegados en el acceso a ciertos empleos y carreras universitarias; una situación discriminatoria que por otras causas también afectaba a los homosexuales.

El progreso cultural era igualmente ostensible. La publicación de unos 10 000 títulos durante el decenio 1976-1985 con un promedio de 50 millones de ejemplares por año, la duplicación del número de bibliotecas públicas, la creación de una red de más de 200 museos, el funcionamiento de casas de cultura en todos los municipios, en las cuales encontraban espacio y apoyo múltiples grupos de aficionados, la conformación de un sistema nacional de enseñanza artística coronado por un instituto de nivel universitario, así como la existencia de premios literarios de consolidado prestigio —el de Casa de las Américas, por ejemplo— o iniciativas de la magnitud del Festival del Nuevo Cine Latinoamericano, hablan con toda elocuencia de los avances en las esferas artística y literaria. Sin embargo, estos no alcanzan a ocultar los errores en que incurrió la política cultural, principalmente en la primera mitad de la década de 1970. El ajuste a los moldes del "socialismo real" durante esos años tuvo serias implicaciones ideológicas y culturales, tanto por el dogmatismo y la estrechez de miras prevaleciente como por los procedimientos que se entronizaron en algunas de las principales instituciones culturales del país. La tendencia a proscribir manifestaciones literarias o artísticas que se apreciaban como desafectas o simplemente ajenas a la revolución, tuvo nefastas consecuencias, bien ejemplificadas por la sonada acusación y posterior retractación pública del poeta Heberto Padilla, que suscitó la condena de

amplios círculos de la intelectualidad occidental a lo que percibían como brotes estalinistas en el seno de la Revolución cubana. La reacción de las autoridades frente a dichas críticas —cuya más acabada expresión fue el I Congreso de Educación y Cultura celebrado en 1971— derivó en una generalizada actitud de sospecha ante diversas manifestaciones culturales del mundo occidental, incluyendo las ciencias sociales, así como en la prohibición de ciertas publicaciones y la exclusión de renombradas figuras de la propia intelectualidad cubana, cual fue el caso del dramaturgo Virgilio Piñera. Esas deformaciones, que también se hicieron sentir en los medios universitarios, solo comenzarían a ser superadas en 1976, tras el nombramiento de Armando Hart al frente del recién creado Ministerio de Cultura.

Pese al inevitable efecto depresivo de semejante tendencia sobre la actividad creadora, esta consiguió preservar una vitalidad de la cual dieron muestra sobresalientes realizaciones, no solo de autores ya establecidos como Alejo Carpentier —*Concierto barroco*, 1974, *La consagración de la primavera*, 1978— o José Soler Puig —*El pan dormido*, 1975— sino de toda una nueva generación de talentosos narradores —Reynaldo González, Antonio Benítez Rojo, Miguel Barnet, Reinaldo Arenas, Mirta Yáñez, Senel Paz— y poetas de la sensibilidad de Nancy Morejón, Lina de Feria, Raúl Rivero, Luis Rogelio Nogueras o Raúl Hernández Novás. En la plástica, pintores consagrados como René Portocarrero, Mariano Rodríguez, Raúl Martínez o Servando Cabrera, encontraron continuidad en una "generación del 70" —Nelson Domínguez, Zayda del Río, Flora Fong y Ernesto García Peña, entre otros— cuyos pinceles testimoniaban temprana maestría. Marginados de las grandes disqueras por el bloqueo estadounidense, agrupaciones musicales como Van Van o Irakere aprovecharon, sin embargo, el auge de la salsa para colocar nuevamente a la música cubana en los primeros planos internacionales, al tiempo que ejercían un renovador influjo sobre el jazz latino. El cine, que a mediados de los setenta parecía reple-

garse a los temas históricos —*La última cena*, de Tomás Gutiérrez Alea, o *El otro Francisco*, de Sergio Giral—, retornó a la vibrante contemporaneidad con *Retrato de Teresa* (1979), de Pastor Vega, y exploraría la comicidad a veces absurda de lo cotidiano en *Se permuta* (1984), de Juan Carlos Tabío. Obras de otra naturaleza como *El ingenio* —brillante estudio histórico de Manuel Moreno Fraginals— o *Calibán*, el polémico ensayo de Roberto Fernández Retamar, atestiguan también que el talento creativo era capaz de prevalecer frente a los embates de una política obtusa.

Durante los años que comentamos en la cultura cubana se aprecian dos nuevos fenómenos. El primero fue el desarrollo de una producción literaria y artística de perfil nacional fuera de la isla, algo que en realidad no resulta tan novedoso si se tiene en cuenta que figuras como José María Heredia o José Martí crearon casi toda su obra en el extranjero. Solo que con la revolución el proceso migratorio alcanza una envergadura tal que genera una suerte de dimensión externa en la cultura nacional. Quizá dicho fenómeno responda más a la continuidad de la migración que a su cuantía, pues ha sido ese flujo casi ininterrumpido el que de algún modo mantuvo conectada una creación artística realizada dentro y fuera de la isla, a la cual los imperativos políticos disociaban. Es así que figuras como el poeta Gastón Baquero, el novelista Severo Sarduy o el músico Ernesto Lecuona, que abandonan Cuba casi a raíz del triunfo revolucionario, no tardaron en verse seguidas por otras, entre estas varios de los miembros del grupo de *Lunes de Revolución* —encabezados por su editor, Guillermo Cabrera Infante—, y más adelante por nuevos poetas y narradores de valía —Reinaldo Arenas, Antonio Benítez Rojo, Jesús Díaz—, algunos de los cuales habían iniciado su obra en plena sintonía con la revolución. La lista se engrosa, por supuesto, al incluir personalidades de otros ámbitos de la creación, ya fuesen cantantes, como Celia Cruz, o músicos —Paquito D'Rivera—, y todavía más al sumar escritores y artistas que partieron de la isla siendo niños o que nacieron en otro país, como Ana Mendieta, Cristina García o Gustavo Pérez

Firmat, quienes en temas y formas mantenían una conexión con la isla por más que sus obras incorporasen códigos de las culturas en que se formaron. En las décadas de 1970 y 1980, la situación apuntada revestía especial complejidad, puesto que las circunstancias políticas ya no solo enfrentaban, sino que imponían un mutuo desconocimiento entre los creadores de dentro y fuera del país.

La otra novedad se presenta en una esfera en ocasiones ignorada como parte de la cultura: la actividad científica. La historia cubana no estaba falta de aportes relevantes en ese terreno; baste mencionar la revolucionaria tesis de Carlos J. Finlay sobre el vector de la fiebre amarilla o las contribuciones, menos conocidas, del botánico Juan Tomás Roig o del zoólogo Carlos de la Torre. Se trataba de figuras eminentes pero más o menos aisladas, ya que solo a partir de la revolución la investigación científica adquirió un basamento institucional y dispuso de financiamientos regulares para su desarrollo. Hacia 1985 el sector de la ciencia contaba con 40 000 trabajadores, unos 15 000 de ellos profesionales universitarios. En una primera etapa las nuevas instituciones de investigación se orientaron hacia las tecnologías y las ciencias agropecuarias, incluyendo centros dedicados a la investigación de plagas y epidemias que en algunos casos fueron introducidas en la isla por los servicios especiales norteamericanos. Ya en los años ochenta, sin embargo, iría ganando espacio la investigación biomédica, tanto en el diseño de equipos para la atención y el análisis de laboratorio, como en el desarrollo de medicamentos mediante los más modernos procedimientos de la biotecnología.

POLÍTICA EXTERIOR; INTERNACIONALISMO

En las relaciones exteriores de Cuba el diferendo con Estados Unidos permaneció incesante, aunque la hostilidad de Washington mostró ciertos altibajos que también matizaron la conducta del gobierno cubano. Así, cuando la guerra de Vietnam se acer-

caba a su desenlace y la economía norteña acusaba los efectos de la crisis petrolera, se firmó un acuerdo contra el secuestro de naves (1973), al cual seguiría un tiempo después el levantamiento por parte de la administración Ford de las restricciones que impedían a subsidiarias estadounidenses en terceros países comerciar con Cuba. Interrumpida al acercarse la campaña electoral, la distensión fue retomada por el nuevo presidente James Carter que autorizó el vuelo de aeronaves comerciales cubanas a Estados Unidos, eliminó los impedimentos para viajar a la isla a los ciudadanos estadounidenses y, sin que significase un restablecimiento de relaciones, acordó con el gobierno cubano en 1977 la apertura de Secciones de Intereses en ambas capitales. La tendencia a la normalización se empantanó al imponer la parte norteamericana ciertas condiciones —relativas a la presencia de tropas cubanas en África, la alianza con la URSS, etc.— al ulterior mejoramiento de las relaciones y, finalmente, torcería su rumbo tras la llegada al poder de Ronald Reagan. Aduciendo evidencias de una expansión cubana en Latinoamérica —la revolución sandinista en Nicaragua, el movimiento revolucionario en la pequeña Granada, la guerra en El Salvador—, esa administración republicana retomó la línea más agresiva y conjugó medidas como la reimposición de las restricciones de viaje o la inauguración de una estación de radio dirigida a Cuba, con amenazas de bombardeos y otras acciones militares, ante lo cual el gobierno de la isla optó por renovar su doctrina de defensa y convocar a cientos de miles de ciudadanos a las milicias territoriales. Aun cuando se llegara a algún acuerdo parcial —en materia migratoria, por ejemplo—, las relaciones cubano-norteamericanas en los ochenta siguieron signadas por la confrontación.

Las circunstancias apuntadas se reflejaron en otras relaciones, no estrictamente exteriores, pero que se han desenvuelto en ese contexto: las sostenidas con los cubanos radicados en el extranjero, especialmente en Estados Unidos. Marcado en su ori-

gen por la hostilidad y un visceral antagonismo político, ese exilio, asentado principalmente en Miami, comenzó a presentar nuevos matices en la medida en que el derrocamiento de la Revolución cubana perdió prioridad en la política norteamericana y las acciones opositoras en la isla quedaron reducidas a ocasionales sabotajes. Entre los exiliados continuaban operando grupos sumamente agresivos, capaces incluso de hacer estallar en pleno vuelo un avión comercial cubano causando la muerte de 73 personas entre tripulantes y pasajeros —como ocurrió en 1976—, pero sus acciones estaban cada vez más limitadas al escenario exterior y el gobierno de Washington se había desvinculado oficialmente de ellas, sobre todo después de las escandalosas revelaciones de una comisión senatorial estadounidense sobre los reiterados intentos de la CIA para asesinar a Fidel Castro. Fue entonces que cobró fuerza una tendencia en el seno de la emigración a promover el diálogo con el gobierno revolucionario y encauzar las relaciones hacia una normalización. La iniciativa tuvo distintas manifestaciones, pero en particular se concretó en la visita a La Habana, en 1978, de un centenar de cubanos de diversa representatividad, quienes fueron recibidos por las más altas instancias del Estado llegándose a acuerdos de tanta trascendencia como la liberación de 3 600 presos políticos, una mayor flexibilidad en las regulaciones migratorias y la autorización de visitas de emigrados a la isla, con lo cual se favorecía la recomposición de vínculos familiares que habían quedado profundamente quebrantados.

Ese curso evolutivo experimentó un sesgo adverso a finales del gobierno de Carter, al deteriorarse las relaciones entre Washington y La Habana. En abril de 1980, la invasión de la embajada de Perú en la capital cubana por miles de personas que exigían facilidades para abandonar el país, originó un auténtico *show* mediático ante el cual el gobierno cubano anunció la apertura del puerto de Mariel, para que quienes lo deseasen vinieran con sus embarcaciones a buscar familiares y cualquier otro emi-

grante potencial. Transcurridas unas pocas semanas ya habían partido de la isla más de 100 000 personas —incluyendo cientos de delincuentes autorizados a salir de las prisiones si se comprometían a abandonar el país—, mientras multitudes enardecidas manifestaban su repudio a los que partían generándose algunas escenas francamente bochornosas. La crisis del Mariel contribuyó a diversificar el paisaje social de Miami y provocó una parálisis en la normalización de las relaciones con la comunidad emigrada. Por otra parte, su negativo impacto en las relaciones cubano-estadounidenses sirvió de asidero a la agresiva política diseñada por Reagan. El presidente y su equipo neoconservador anudaron entonces un nuevo tipo de relaciones con el exilio de Miami, favoreciendo la hegemonía de los poderosos intereses agrupados en la Fundación Nacional Cubano-Americana, organización que sin desvincularse por completo de los grupos más belicosos —incluso algunos terroristas—, ejercería su influencia empleando el cabildeo y otros recursos habituales en la vida política norteamericana.

Más allá de los avatares de su complicada relación con Estados Unidos, el gobierno cubano experimentó en estos años un considerable fortalecimiento de su posición internacional. El paulatino restablecimiento de los lazos con los países latinoamericanos cobró mayor impulso a partir de 1975, cuando la Organización de Estados Americanos derogó el acuerdo que impedía a sus miembros relacionarse con Cuba, de modo que antes de finalizar la década de 1980 la isla mantenía vínculos diplomáticos con la mayoría de las repúblicas del hemisferio. También se ampliaron los nexos con otras partes del mundo, en particular con naciones de Asia y África; el prestigio ganado por las acciones de solidaridad en ese último continente —que enseguida examinaremos— reportó a la mayor de las Antillas un creciente liderazgo en el Tercer Mundo, cuya más clara manifestación fue la celebración en La Habana de la VI Cumbre de los Países No Alineados en 1979, organización cuya presiden-

cia *pro tempore* Cuba asumió. Un capítulo especial en el ámbito internacional lo constituyen las relaciones sostenidas con la Unión Soviética y el bloque socialista, cuya trascendencia económica ya se ha apuntado. En el plano político dicha alianza se concretó en la coordinación de numerosas iniciativas, especialmente en los organismos internacionales, así como en el apoyo mutuo, una conducta que llegó a su punto culminante en 1980, cuando Cuba respaldó la entrada de tropas soviéticas en Afganistán, decisión de muy negativas consecuencias para el liderazgo que la isla antillana acababa de asumir en el Movimiento de Países No Alineados.

Aunque voceros norteamericanos arreciaron entonces sus esfuerzos por presentar al gobierno de La Habana como un títere de la Unión Soviética, había sobradas evidencias de que más allá de la concertación y el apoyo mutuo, la política cubana seguía sus propios derroteros, particularmente respecto a los países descolonizados y los movimientos de liberación. Inspirada en el "internacionalismo proletario", esa vertiente de la política exterior cubana puede haber respondido a diversas motivaciones y presentado distintos matices, pero se ha mantenido como una constante a lo largo del tiempo. En su apoyo a la lucha contra el colonialismo y sus secuelas, así como a los movimientos revolucionarios, lejos de actuar a la zaga de la Unión Soviética, el gobierno de Cuba frecuentemente tomó la iniciativa. De hecho las primeras evidencias de esa conducta fueron bien tempranas, incluso antes de que la revolución se declarase socialista, y rebasaron muy pronto el espacio latinoamericano, como lo demuestra la ayuda militar brindada a Argelia durante su conflicto fronterizo con Marruecos en 1963, así como el apoyo al movimiento de liberación de las colonias portuguesas en África. Dicho auxilio, por otra parte, no fue solo militar, pues casi desde su inicio se organizaron misiones de colaboración civil, principalmente en materia de salud.

La más notable de esas acciones "internacionalistas", tanto por su envergadura como por su extensión temporal, tuvo lugar

en Angola tras proclamarse la independencia de ese Estado africano en 1975. Al retirarse los portugueses, el Movimiento Popular de Liberación de Angola (MPLA) que asumió el poder —y a cuyos combatientes Cuba había entrenado— debió enfrentar los ataques de grupos rivales y la simultánea invasión del ejército de Sudáfrica, ante lo cual gobierno cubano envió un contingente de 36 000 hombres que coadyuvó a detener la embestida, aunque la guerra en tierras angolanas habría de prolongarse por casi 15 años. Durante ese tiempo más de 300 000 cubanos combatieron o trabajaron en Angola, una presencia que —en el plano militar— culminaría en la batalla de Cuito Cuanavale, cuando una fallida operación del ejército angolano bajo asesoramiento soviético —también actuante en el país— provocó una nueva invasión sudafricana, para cuya derrota fue necesaria la masiva intervención de las fuerzas cubanas. Esa decisiva campaña abrió paso a las negociaciones en 1988, que tuvieron como resultado inmediato la retirada de la misión militar cubana de Angola y el reconocimiento de la independencia de la vecina Namibia —base de las agresiones del ejército sudafricano que la ocupaba—, pero que a un plazo algo mayor determinarían la crisis definitiva del régimen del *apartheid* en el continente negro. En distintos momentos durante los años analizados, tropas cubanas actuaron en otros países africanos —Guinea-Bissau, Congo, Mozambique, etc.—, aunque por lo general en funciones de entrenamiento, salvo en el caso de Etiopía, cuando a raíz de la invasión de ese país por la vecina Somalia, Cuba envió 16 000 hombres para detener la agresión.

También muy notable fue la colaboración cubana en Nicaragua después del triunfo de la Revolución sandinista en 1979, que tuvo una vertiente militar en la preparación del ejército de ese país para enfrentar a la “contra”, pero que también se hizo sentir en otros dominios, particularmente en la asistencia médica y educativa, misión esta última que con la participación de cientos de maestros cubanos organizó y desarrolló la campaña de alfabe-

tización en el país centroamericano. Desde 1963, cuando 56 médicos y enfermeros cubanos viajaron a Argelia, más de 20 000 —probablemente unos 50 000 contando hasta el presente— trabajadores cubanos de la salud actuaron como cooperantes en otros países, una actividad que por su carácter sistemático fue contemplada en los planes de formación de médicos en la isla.

Si alguna demostración resulta contundente respecto a la autonomía de la política exterior cubana —aun en los años de más estrecha dependencia económica de la URSS— ella la proporciona el internacionalismo. Algunos analistas han querido ver en este un recurso para robustecer a la revolución en un contexto adverso y, ciertamente, dicha conducta ha ganado a Cuba valiosos amigos. Pero constituye también una evidencia de un peculiar sentido de entender el papel del revolucionario por parte del liderazgo cubano, criterio que ha contribuido a preservar para el proceso cubano una fisonomía propia.

RECTIFICACIÓN

En febrero de 1986, al intervenir en el III Congreso del Partido Comunista, Fidel Castro se manifestó en términos muy críticos sobre varios de los asuntos tratados y, en particular, respecto a la conducción económica; el hecho de que solicitase —y se acordase— diferir la clausura del cónclave para finales de año permitía avizorar una profunda revisión de la política seguida desde 1976. En realidad las circunstancias en que esta hubo de formularse se habían modificado, y en ningún caso para bien. Con la presidencia de Reagan la agresividad norteamericana hacia Cuba se acrecentó y dada la reciente reelección del político republicano no era previsible cambio alguno en dicha tendencia. En caída libre desde principios de la década, el precio del azúcar llegaba en 1985 hasta su nivel más bajo desde la Gran Depresión y, en consecuencia, los ingresos del país en moneda

convertible se contrajeron a menos de la mitad. Encabezando una campaña internacional sobre la gravosa deuda externa de los países en desarrollo, Fidel Castro había proclamado que esta era impagable, apreciación que podía ser más o menos exacta en otros casos, pero que en el cubano resultaba ser una dramática realidad, como lo demostraría la suspensión del servicio de los 6 000 millones de dólares que se adeudaban a la banca occidental, decisión tomada en 1986 que cerró para la isla toda posibilidad de obtener nuevos créditos. Ante el deterioro de los términos de intercambio y la ausencia de financiamiento, el comercio exterior cubano tendió a concentrarse todavía más en la URRS y otros países socialistas, pero las perspectivas en esa dirección tampoco resultaban halagüeñas, pues con el ascenso de Mijail Gorbachov a la dirección soviética y la adopción de la *perestroika*, todo apuntaba a otorgar un mayor papel a los mecanismos de mercado, con la consiguiente reducción de los subsidios y los precios preferentes.

La drástica caída de los indicadores económicos en 1985 había disparado las alarmas y ciertamente algunos problemas en la dirección de la economía resultaban evidentes. El Sistema de Dirección y Planificación adoptado en 1976, si bien nunca había sido aplicado de manera plena, mostraba en su materialización preocupantes distorsiones. La anárquica fijación de las normas de trabajo había generado un desproporcionado incremento en el fondo de salarios que no se correspondía con aumentos en la producción, afectada esta por el relajamiento de la disciplina y un palpable descenso de la productividad. El proceso de inversión, plagado de retrasos, no alcanzaba a propulsar la dinámica económica, mientras las empresas en activo, que no formulaban adecuadamente sus presupuestos ni se atenían a ellos, inflaban en cambio sus precios y así mostraban un ficticio cumplimiento de los planes. Algunas de estas anomalías eran de vieja data, pero al enjuiciarlas, Fidel Castro ponía el énfasis en lo que a su juicio resultaba más grave: el hecho de que dichas fallas indicaban

una deformación de la propia naturaleza del socialismo, al confiarse la construcción de este a “leyes ciegas” y descuidar el papel del hombre y los resortes morales. En diciembre de 1986, el tercer congreso partidista se clausuraba con una convocatoria a la “rectificación de errores y tendencias negativas”, que en la práctica implicaba un regreso a la búsqueda del modelo cubano de socialismo.

Con la nueva política Cuba tomó un rumbo opuesto al seguido por la Unión Soviética a partir de la *perestroika*. En su esencia, se trataba de reducir el papel del mercado en el funcionamiento de la economía, lo cual se concretó en un conjunto de medidas entre las que figuraban la clausura de los mercados libres campesinos, una severa limitación del trabajo por cuenta propia, la prohibición de la compraventa de viviendas y una centralización de las decisiones en la dirigencia política que de hecho restringía el papel de la planificación. Nuevamente se descansaría en la conciencia y la movilización para alcanzar los objetivos económicos, apelando a argumentos éticos y a los fundamentos nacionales de la revolución. La fórmula organizativa característica de la etapa fueron los “contingentes”, organizados sobre todo en el sector de la construcción para llevar a cabo grandes obras de infraestructura —sobre todo vinculadas al desarrollo turístico—, en los cuales se proporcionaba a los obreros excepcionales condiciones, al tiempo que estos se comprometían a trabajar intensas jornadas. También para la construcción se reanimaron las “microbrigadas”; la construcción de viviendas se había acercado a las 30 000 por año a principios de los años ochenta, pero el déficit habitacional distaba de haberse superado y en algunos sitios habían resurgido barriadas marginales. De igual manera, las microbrigadas fueron empleadas en la construcción y el mantenimiento de escuelas e instalaciones de salud, servicios sociales que ampliaron su espacio en el presupuesto estatal al tiempo que se aplicaban medidas para reducir el fondo de salarios y forta-

lecer la disciplina laboral. En la agricultura el énfasis se puso en un "programa alimentario" destinado a reducir la importación de alimentos, para lo cual se dotó a algunas empresas agrícolas de mejor equipamiento. En todas estas labores se recurrió de nuevo al trabajo voluntario, con mayor o menor participación de personal movilizado por los sindicatos y las organizaciones estudiantiles.

Las apelaciones a la "conciencia revolucionaria" y los llamados a la austeridad, contrastaron en esta etapa con algunos sonados casos de corrupción en los cuales se vieron involucrados altos funcionarios gubernamentales. El de mayor trascendencia tuvo lugar a mediados de 1989, cuando fueron arrestados varios altos oficiales de las Fuerzas Armadas Revolucionarias y el Ministerio del Interior acusados de conexiones con el narcotráfico, cuyo enjuiciamiento concluyó con el fusilamiento de cuatro de ellos, incluido el general Arnaldo Ochoa. La rápida actuación y la severidad de las penas no solo respondía a la gravedad de los hechos, sino a la posibilidad de que los vínculos con el tráfico de estupefacientes diesen a Estados Unidos un pretexto para la agresión, como meses después sucedería en Panamá.

Los resultados de la "rectificación" no son fáciles de evaluar, pues dicho proceso se vio interrumpido al cabo de cuatro años por las circunstancias que se derivaron de la desaparición de la Unión Soviética. En el plano económico los indicadores de crecimiento fueron muy discretos —entre 1 y 2%— e incluso en 1987 se registró un significativo decrecimiento del producto social, mientras que otras variables muestran el resurgimiento del déficit fiscal y una acentuación del saldo negativo en la balanza comercial. Es difícil establecer hasta qué punto la "rectificación" constituyó una respuesta a la política que condujo a la desintegración de la URSS, pero fue a partir de las condiciones creadas durante esa breve etapa que la Revolución cubana hubo de enfrentar la más difícil coyuntura de su existencia.

EL PERIODO ESPECIAL

La desaparición de la Unión Soviética y el bloque socialista europeo hundieron a Cuba en la más severa crisis económica de su historia. El comercio exterior de la isla, que en 1989 ascendía a unos 14 000 millones de pesos, perdió de improviso el principal destino de sus exportaciones —63% del azúcar, 73% del níquel, 80% de los cítricos— y la mayor fuente de combustibles, alimentos y materias primas, debido a lo cual en apenas tres años se redujo hasta 4 094 millones, al mismo tiempo que desaparecían los créditos y otros recursos para la inversión. La severa contracción económica, que en 1992 representaba 24% del producto interno bruto, llevó a la decisión de implantar un "periodo especial", plan de contingencia originalmente previsto para enfrentar una invasión norteamericana, cuyo propósito era resistir y asegurar una distribución equitativa de los recursos disponibles. Nuevas medidas de racionamiento afectaron a un centenar de productos, a la vez que se reducía drásticamente el suministro de combustibles y comenzaban a producirse frecuentes cortes de energía eléctrica. Cerca de la mitad de la industria quedó paralizada o disminuyó su actividad, mientras que el transporte público casi desaparecía, situación cuyo impacto trató de amortiguarse con la venta masiva de bicicletas. Unos 500 000 trabajadores estatales quedaron "interruptos" —sin empleo y subsidiados— en espera de mejores días.

Junto al visible deterioro de las condiciones sociales, la crisis presentaba un serio cariz político, que la quiebra del paradigma socialista soviético —considerado inamovible— proyectaba también hacia el ámbito ideológico. Apelando a los valores nacionalistas, Fidel Castro llamó entonces a defender el socialismo con la intransigencia con que Antonio Maceo rechazara la rendición ante España en 1878, tras lo cual el país se inundó de vallas y carteles proclamando que Cuba sería un "eterno Baraguá". La reafirmación ideológica, que convocaba una vez más al

sacrificio y descansaba en la conciencia como recurso de movilización, no desconocía, sin embargo, la necesidad de introducir cambios en el sistema político. El "llamamiento" al IV Congreso del Partido Comunista —a celebrarse en 1991— sirvió de base a un amplio debate popular en cuyos resultados habrían de sustentarse varias de las decisiones tomadas en esa reunión. Las hubo, por supuesto, de carácter interno, como las orientadas a restringir la burocracia partidista transfiriendo ciertas funciones al Estado, pero otras proponían cambios en la conducción económica y, sobre todo, implicaban una apreciable renovación de la institucionalidad política. Consideradas posteriormente por la Asamblea Nacional, esas medidas eran sin duda las de mayor trascendencia, pues incluían la elección mediante voto directo de los diputados a la Asamblea Nacional, la creación de los "consejos de administración" en provincias y municipios para una más clara diferenciación de las funciones administrativas y normativas, así como otras disposiciones que darían lugar, en 1992, a una reforma constitucional la cual, entre otros cambios, proclamó laico —y no ateo, como hasta entonces— al Estado cubano, con lo cual se ponía coto a cualquier discriminación por razones religiosas.

En el terreno económico la reafirmación de la austeridad y las apelaciones al heroísmo y otros resortes morales se mostraban insuficientes, ya no para revertir, sino siquiera para detener el creciente quebranto de las condiciones del país. En 1993 el volumen de la zafra azucarera fue solo la mitad de lo obtenido cuatro años antes y el azúcar, que continuaba siendo la principal fuente de ingresos, debía venderse además según las cotizaciones del mercado mundial, muy inferiores a los desaparecidos precios preferentes de la era soviética. Entre 1989 y 1993 el déficit presupuestario se incrementó hasta 5 000 millones de pesos y la liquidez monetaria ascendió de 4 000 millones hasta más de 11 000 millones de pesos, mientras que la ausencia de mercancías disparaba los precios en el cada vez más extenso

mercado negro. A mediados de 1993 la ausencia de pienso importado hizo desaparecer los huevos del consumo de la población, agravando los efectos de la ya severa contracción en la producción agrícola ocasionada por la carestía de combustibles y fertilizantes. El consumo diario de calorías por habitante se redujo hasta 1863, mientras que el de proteínas descendía de 75 a 46 gramos, con lo cual comenzaron a aparecer patologías como la polineuritis, que constituían una preocupante evidencia de desnutrición. La vida social se desenvolvía en un interminable círculo de escaseces, al tiempo que la gente veía desgastarse su vestuario y utensilios domésticos sin posibilidades de reposición. Las consecuencias de todo ello no tardaron en hacerse ver, primero en un auge de la criminalidad —hurto de ganado y robos a mano armada, por ejemplo—, pero sobre todo en un notable aumento de la emigración ilegal hacia Estados Unidos, facilitada por una ley norteamericana que otorgaba a todo cubano la condición de refugiado y permitía la inmediata legalización de su estatus. Originadas en distintos puntos costeros, estas salidas a veces incluían el secuestro de embarcaciones ocasionando actos de violencia y pérdidas de vidas, situación que en el verano de 1994 llegó a un punto de máxima tensión cuando el rumor de que se autorizaría un salida masiva —como la de Mariel en 1980—, provocó disturbios en la zona comercial capitalina, sofocados con rapidez, pero que influyeron en la decisión de levantar los controles sobre las salidas ilegales. En muy pocos días, a bordo de embarcaciones en muchos casos improvisadas, miles de cubanos se lanzaron al mar para llegar a la Florida, generándose una crítica situación que forzó a Washington a ordenar su intercepción y remisión —en número superior a los 20 000— a la base naval de Guantánamo. La “crisis de los balseros” condujo —como se verá— a la firma de un acuerdo migratorio entre Cuba y Estados Unidos, pero también dio un impulso definitivo a la revisión de la política económica en la isla.

Entre los cambios introducidos —algunos desde 1993— se encontraba la legalización de la tenencia y circulación del dólar estadounidense, así como la autorización del envío de remesas y la mayor flexibilidad para las visitas familiares desde el extranjero, decisiones que llevaron aparejada una considerable ampliación de las cadenas de tiendas que vendían en moneda convertible, incluyendo un peso cubano (CUC) creado a ese efecto. La reapertura de los mercados libres agropecuarios también contribuiría a paliar los efectos de la crisis sobre las economías familiares, al igual que la ampliación del trabajo por cuenta propia, que incluía ahora la posibilidad de ofrecer alojamiento turístico por particulares. Pero las reformas de mayor calado apuntaban a la reanimación económica; estas fueron la transferencia de 70% de las tierras estatales a Unidades Básicas de Producción Cooperativa, cuyas características podrían resultar de mayor estímulo para los trabajadores, la promulgación de una nueva ley de inversiones extranjeras, que ampliaba las ventajas de la establecida en 1982, y algunas otras medidas como el recorte de subsidios, el aumento de las tarifas de servicios públicos y la creación de ciertos impuestos, que se proponían reducir el déficit presupuestario y la liquidez monetaria.

El éxito de esas disposiciones no tardaría en hacerse evidente, permitiendo a la economía superar sus momentos más críticos. Entre 1994 y 1998 el PIB creció a un ritmo de 2.2% anual, el excedente monetario fue reabsorbido paulatinamente —revalorizándose el peso— y el déficit presupuestario se redujo hasta fijarse en 3% anual a finales de la década de los noventa. Más reveladores eran, sin duda, los resultados de ciertas ramas, especialmente el turismo, en el cual la recepción de visitantes se elevó desde unos 350 000 en 1990, hasta 1.4 millones en 1998 reportándose ese año ingresos por más de 1 800 millones de dólares. La expansión del sector turístico constituía un apreciable atractivo para la inversión extranjera, pero esta también se encauzó hacia otras ramas como la minería, la producción citrí-

cola, embotelladoras de aguas y refrescos, textiles, productos farmacéuticos y la prospección petrolera, renglón este cuyo crecimiento permitiría al país satisfacer con combustible propio 80% de las necesidades de la generación eléctrica. La recuperación económica distaba aún de alcanzar los indicadores de la década de 1980, pero resultó suficiente para reanimar la vida social y cultural; se impulsó la restauración de La Habana Vieja, antiguos espacios de recreación reabrieron sus puertas y se instalaron otros nuevos —principalmente para el turismo—, a la vez que se promovían los espectáculos públicos, las funciones teatrales, conciertos y otras actividades culturales, favorecidos por una intensificación de los contactos de Cuba con países latinoamericanos, europeos y los propios Estados Unidos —incluyendo a la emigración cubana—, una tendencia de la cual se benefició también el sector académico pues facilitaba la actualización de conocimientos. Esa apertura alcanzaría un momento culminante con la visita a la isla del papa Juan Pablo II, en enero de 1998.

Concebidos como necesarios para "salvar las conquistas del socialismo", los cambios apuntados sin duda repercutieron favorablemente sobre los servicios sociales, aliviando su acusado deterioro. En la salud pública, la reducción de la tasa de mortalidad infantil desde 1.1% en 1989 hasta 0.64% en 1999 resultaba una clara evidencia de mejoría, como también lo era que la proporción de médicos por habitantes bajase hasta 175, por más que los hospitales no dispusiesen de todos los medios necesarios para asegurar la calidad de sus servicios. Los índices educativos también se recuperaron, a la vez que se registraba un considerable avance en el posgrado, acrecentándose la obtención de maestrías y doctorados, a todo lo cual se sumaron singulares éxitos de los deportistas cubanos en competencias internacionales, especialmente en las olimpiadas de Barcelona y Atlanta. Claro está que el mayor espacio económico concedido al mercado y algunas otras de las medidas tomadas ensancharon las diferencias

sociales, haciéndose visibles manifestaciones como la prostitución y la corrupción, y conductas ominosas —la discriminación racial— que se creían superados. También se acentuaron las desigualdades territoriales que habían venido atenuándose, lo cual se reflejó en un perceptible aumento de la migración interna hacia la capital que trató de limitarse mediante recursos legales. El predominio de la propiedad estatal y el hecho de que Cuba dedicase 20% de su PIB para servicios sociales —área en la cual seguía a la cabeza de América Latina—, indicaban que los cambios que venía experimentando no se orientaban hacia el capitalismo, pero sin duda originaban nuevas vulnerabilidades, como habrían de demostrarlo las acciones del Departamento del Tesoro de Estados Unidos destinadas a impedir que la isla efectuase transacciones en dólares.

Tras el derrumbe del socialismo europeo muchos creyeron que Cuba no tardaría en caer, pero el gobierno de Washington en modo alguno se conformó con mantenerse a la expectativa y decidió estrechar el cerco económico a la isla. En 1992 el Congreso reforzó el bloqueo con la aprobación de la Ley Torricelli que prohibía a las subsidiarias norteamericanas en terceros países cualquier comercio con la isla antillana y autorizaba al presidente a retener o suprimir la asistencia económica y los beneficios comerciales a los estados que proporcionasen ayuda a Cuba. Titulada "Democracia para Cuba", la ley establecía un "segundo canal" para propiciar los contactos extraoficiales y el apoyo financiero a grupos que dentro de la isla propugnasen un "cambio democrático", alentando así a la nueva oposición surgida algunos años antes, constituida por pequeños grupos y organizaciones que hacían de la resistencia civil y la denuncia de lo que consideraban violaciones a los derechos humanos el centro de su actividad. Aunque formalmente menos agresivo, el presidente demócrata Bill Clinton tampoco se apartó de esa línea de conducta y promulgó en 1996 la Ley Helms-Burton que reforzaba las prohibiciones vigentes y las ampliaba, al incluir sanciones a compa-

ñías e instituciones que invirtiesen en Cuba o realizasen transacciones que involucrasen propiedades nacionalizadas en ese país, flagrante condición de extraterritorialidad que provocó la aprobación de contramedidas por parte de la Unión Europea, México y Canadá. La nueva ley transfería, además, muchas de las facultades presidenciales relativas a la aplicación del embargo al Poder Legislativo e impedía que las relaciones con la República vecina pudieran normalizarse hasta tanto el Congreso no certificase que el gobierno existente en La Habana cumplía los requisitos establecidos por la propia legislación. En otros terrenos, sin embargo, la administración Clinton dio pasos hacia un entendimiento, como el logrado en materia migratoria tras la crisis de 1994, según el cual Estados Unidos admitiría unos 20 000 inmigrantes legales por año, pero devolvería a la isla los emigrantes ilegales interceptados en el mar, mientras que el gobierno de La Habana se comprometía a evitar las salidas con los medios a su alcance. También se autorizaron los vuelos *charter* desde aeropuertos norteamericanos hacia Cuba, así como la exportación de alimentos y medicamentos, siempre que se pagasen al contado. El curso de las relaciones se vería enrarecido a finales de los noventa por el caso de Elián González, un niño de cinco años, único sobreviviente de un naufragio de emigrantes ilegales —en el cual murió su madre—, cuya custodia fue entregada a familiares en Miami frente al derecho que asistía a su padre, quien lo reclamaba desde Cuba. El conflicto, que exacerbó las pasiones en el exilio y dio lugar a grandes manifestaciones en La Habana, fue resuelto finalmente por la justicia estadounidense que determinó el regreso del niño junto a su padre.

Al desaparecer el bloque socialista el aislamiento de Cuba se hizo patente y la necesidad de superarlo devino condición de sobrevivencia. La apertura al capital extranjero, así como la intensificación de los nexos culturales y académicos contribuyeron a afianzar los vínculos con Canadá, Japón y varios países de Europa occidental —especialmente España—, dinámica rela-

ción que ganaría el respaldo de estos y de otros muchos estados a las resoluciones de condena al bloqueo norteamericano que el gobierno de Cuba presentaba periódicamente en Naciones Unidas. Por constituir su ámbito inmediato, los lazos con Latinoamérica y el Caribe eran vitales para la mayor de las Antillas y en esa dirección dos acontecimientos resultaron decisivos: la participación cubana en las Cumbres Iberoamericanas que comenzaron a celebrarse anualmente a partir de 1992 —la de 1999 se realizó en La Habana— y el establecimiento de un mecanismo de concertación con la Comunidad del Caribe (Caricom), que abría incluso perspectivas de un ingreso de Cuba a la Convención de Lomé. Para el afianzamiento de las relaciones internacionales, particularmente con África, revistió enorme importancia la continuidad de la colaboración cubana en materia de salud, educación y deporte, la cual tendió a incrementarse a pesar de la crisis, sobre todo en el número de médicos y personal de salud, cuyos servicios gratuitos al finalizar el siglo se extendían a 13 países, incluyendo varios latinoamericanos. En 1998 el triunfo electoral de Hugo Chávez que dio inicio en Venezuela a la "revolución bolivariana", fortaleció en medida muy notable la posición internacional de Cuba, pues con esa nación sudamericana se anudó una estrecha cooperación política y económica que aseguraba además el vital suministro energético. Ese acontecimiento, así como la emergencia de China en calidad de potencia mundial, constituyeron importantes puntos a favor para el gobierno cubano en una coyuntura en la cual el ascenso a la presidencia de los Estados Unidos de George W. Bush permitía avizorar crecientes tensiones.

El nuevo presidente, hermano del gobernador de Florida, mantenía estrechos vínculos con los exiliados cubanos en ese estado, quienes se preciaban de haber desempeñado un papel decisivo en la controvertida victoria del candidato republicano. Llegado al poder, Bush no solo hizo pública su hostilidad hacia el gobierno de la isla, sino que comenzó a tomar medidas en

consonancia, como la ampliación de las transmisiones radiales y televisivas hacia el país vecino, la restricción de los viajes, la ayuda a familias de presos políticos y otras acciones que, tras el atentado del 11 de septiembre de 2001 y la posterior invasión a Irak, tomaron un sesgo muy peligroso. Una vez más la conducta norteamericana actuaría como un factor en la reconsideración de la política cubana. La expresión más inmediata del cambio sería el fin de la tolerancia hacia ciertas actividades de la disidencia, 75 de cuyos miembros fueron encarcelados en marzo de 2003 y condenados a severas penas por "colaborar con una potencia extranjera contra su patria". Lanzada por Fidel Castro bajo el enunciado de la "batalla de ideas", la nueva política tenía sus raíces en las movilizaciones en reclamo por el regreso de Elián González; en ella se hacía notar el protagonismo desempeñado por un grupo de dirigentes juveniles de rauda promoción. El acento en la labor ideológica era sin duda la nota descollante del nuevo programa, pero este incluía numerosas acciones encaminadas a revitalizar los servicios sociales, particularmente en el campo educativo —formación de profesores, extensión de la enseñanza universitaria, adiestramiento de trabajadores sociales, etc.—, así como algunas propuestas económicas que promovían un uso más racional de la energía. Otras medidas tomadas bajo la misma circunstancia, como la recentralización del comercio exterior, la creación de una cuenta única en el Banco Central donde debían depositarse los ingresos en moneda convertible, la obligación por parte de las empresas de solicitar al Banco los recursos monetarios para transacciones internacionales, etc., parecían marchar a contrapelo de la orientación seguida por la economía en la década anterior. Si a ellas se sumaban ciertas restricciones impuestas al ejercicio del trabajo por cuenta propia, el cierre de numerosos restaurantes privados —"paladares"— y un mayor control sobre los mercados libres, era evidente la intención de revertir acciones emprendidas a mediados de los años noventa, cuyos efectos sociales las hacían

ver como concesiones al capitalismo. Ante la alternativa de continuar la liberalización de la economía, enfrentando el riesgo político que representaban las crecientes diferencias sociales en un contexto internacional incierto, la dirigencia cubana optó por limitar dicho proceso, centralizar los recursos y emplearlos de manera preferente en aquellas áreas que, según creía, habrían de contribuir a una mayor cohesión social.

Semejante giro se hizo factible en buena medida por las especiales relaciones establecidas con Venezuela, a la cual se brindaban masivos servicios profesionales —principalmente en el área de salud— que llegarían a convertirse en la principal partida de ingresos internacionales del país, una posibilidad que podría ampliarse todavía más a partir de 2004 con el establecimiento de la Alianza Bolivariana (Alba), esquema de integración de un grupo de países latinoamericanos en el cual Cuba participaba. La apuesta por una "economía de servicios" —que incluía también al creciente turismo, así como la colaboración externa en educación, deportes y otros renglones— estuvo acompañada por un perceptible descuido del sector productivo —sobre todo la rama agropecuaria—, cuyo retroceso se haría más evidente en la industria azucarera, pues la persistencia de muy bajas cotizaciones en el mercado internacional determinó el cierre y desmantelamiento de más de la mitad de los centrales del país, así como que se dedicasen a otros usos la mayor parte de las tierras cañeras, tras lo cual la producción de la antigua "primera industria" caería por debajo de los dos millones de toneladas. Al mediar la primera década del siglo XXI, un notable —pero transitorio— crecimiento del PIB y algunos otros resultados positivos, no alcanzaban a ocultar ciertos síntomas perturbadores como el aumento de la inflación y de la liquidez monetaria, la expansión del déficit presupuestario y un saldo negativo récord en la balanza comercial, afectada por una crecida importación de alimentos, indicios inequívocos de que la economía podía estarse encaminando a una nueva contracción

TIEMPO DE CAMBIOS

En el verano de 2006 la sociedad cubana se conmovió con el anuncio de que, debido a una repentina enfermedad, Fidel Castro cedía temporalmente sus cargos al primer vicepresidente, su hermano el general Raúl Castro. El carácter de la dolencia nunca se haría público, pero esta resultó lo bastante grave como para que el veterano líder cubano renunciase dos años después a todos sus cargos y limitase su presencia a eventuales escritos publicados por la prensa y el presumible asesoramiento de algunas decisiones gubernamentales. Un acontecimiento sobre cuya probabilidad tanto se había especulado, ocurría sin sobresaltos ni incidentes, como una simple transferencia de poderes. Se trataba, sin embargo, de un hecho cargado de significación, pues la salida del comandante en jefe ponía de manifiesto que el ciclo vital de la dirigencia histórica se acercaba a su fin y, con ello, el inicio de una trascendental etapa de cambios.

La llegada al poder de Raúl Castro abrió numerosas expectativas, que el propio general alentó con sus críticas a las deficiencias del aparato estatal y sus advertencias sobre los necesarios cambios para superarlas, asuntos sobre los cuales en el año 2007 convocaría a un nuevo debate nacional. Aunque las medidas más inmediatas tendieron al fortalecimiento de la disciplina laboral, el levantamiento de trabas burocráticas y la renovación del equipo de gobierno, el general-presidente no dejó de advertir la necesidad de "cambios estructurales y de concepto", apuntando hacia una más vasta transformación de la realidad socioeconómica. Algunas de las decisiones tomadas enseguida —la autorización para que los cubanos pudiesen alojarse en instalaciones del turismo internacional o contratar teléfonos celulares, por ejemplo— pusieron fin a irritantes discriminaciones pero no tenían verdadera trascendencia económica, como sí la tuvieron otras tomadas algo más adelante, en particular, el decreto-ley que establecía la cesión en usufructo de las tierras es-

tatales baldías a los particulares que lo solicitasen, provisión a tenor de la cual, antes de concluir la primera década del siglo ya se habían transferido más de un millón de hectáreas a pequeños campesinos.

El ritmo al cual han venido implementándose los cambios suscita más de una controversia. El hecho de que la isla se viese afectada por sucesivos y devastadores huracanes en los años 2007 y 2008 —los daños registrados superaron los 10 000 millones de pesos—, así como los efectos de la crisis mundial a partir de 2009 han constituido sin duda factores de desaceleración, pero no es menos cierto que las decisiones suelen tomarse con extremada cautela, una conducta que Raúl Castro ha hecho explícita fundamentándola en las especiales circunstancias que vive el país, sobre todo de cara al prolongado diferendo con Estados Unidos. Desde el primer momento en que asumiera sus funciones, el nuevo presidente cubano manifestó su disposición a normalizar las relaciones con la gran potencia vecina, posibilidad a la cual el arribo de Barack Obama a la Casa Blanca en 2009 pareció prometer mejores augurios. De hecho, el presidente demócrata a comienzos de su mandato abolió restricciones establecidas por la administración Bush a las relaciones de la comunidad cubano-americana con la isla y facilitó los contactos "pueblo a pueblo" en el plano cultural. Dicho curso político, sin embargo, no tardó en detenerse y más bien se reiteraron las acciones punitivas como la inclusión de Cuba entre los estados terroristas o la persecución de las transacciones bancarias con la isla.

Cualesquiera que sean las circunstancias que condicionan el proceso de reformas , lo cierto es que sobre la sociedad cubana continúan pesando graves problemas que afectan tanto la dinámica económica como la vida social, cuyas soluciones demandan resueltas decisiones políticas. El reciente anuncio de que un millón y medio de trabajadores estatales deberán pasar en un plazo relativamente breve al sector privado, permite percatarse de la envergadura de los cambios pendientes, sintetizadas de

algún modo por los lineamientos socioeconómicos aprobados en el VI Congreso del Partido Comunista, documento que sin llegar a definir una estrategia o trazar una política económica compendia las tareas más urgentes para reactivar el desarrollo del país. La naturaleza y el alcance de las transformaciones iniciadas constituyen todavía incógnitas que solo el tiempo y los propios cubanos podrán despejar.

NOTA BIBLIOGRÁFICA

La apretada síntesis plasmada en estas páginas tiene como fundamento una extensa bibliografía que los límites fijados a la obra impiden detallar. Esta breve nota bibliográfica recoge solo una fracción de esa literatura, principalmente otras síntesis históricas totales o parciales de aparición más o menos reciente, así como algunas obras clave, de especial utilidad para adentrarse en ciertas épocas y temáticas. Se trata, en suma, de una selección de títulos que tanto por sus textos como por sus propias referencias bibliográficas, permitirán al lector profundizar en etapas o asuntos que resulten de su particular interés.

En la historiografía cubana no abundan las síntesis generales. En dos obras de un corte parecido a esta, José Cantón Navarro, *Cuba, el desafío del yugo y la estrella* (La Habana, Editorial SI-MAR, 1996), y Francisca López Civeira, Oscar Loyola y Arnaldo Silva, *Cuba y su historia* (La Habana, Editorial Gente Nueva, 1998), puede encontrarse información más detallada sobre ciertos asuntos, pero la síntesis de mayor alcance es: Instituto de Historia de Cuba, *Historia de Cuba* (La Habana, Editora Política, 1994-1998), proyectada en cinco tomos, de los cuales solo se han publicado los tres primeros que llegan a 1940. Otras obras concebidas como síntesis generales, al transcurrir el tiempo han devenido parciales pero conservan utilidad. Tales son los casos de: Dirección Política de las FAR [Jorge Ibarra y otros]: *Historia de Cuba* (La Habana, Ciencias Sociales, 1981), Carlos Márquez Sterling, *Historia de Cuba, desde Colón hasta Castro* (Nueva York, Las Americas Publishing, 1963) y Emeterio Santovenia y Raúl

Shelton, *Cuba y su historia* (Miami, Rema Press, 2a. ed., 1966), así como la de Fernando Portuondo, *Historia de Cuba* (La Habana, Editorial Minerva, 5a. ed., 1953), en su momento el mejor texto de historia nacional para la enseñanza secundaria escrito en la isla.

Hay cierto número de síntesis generales debidas a autores no cubanos. La de Hugh Thomas, *Cuba, la lucha por la libertad* (Barcelona, Grijalbo, 3 vols., 1973) se consideró durante cierto tiempo un clásico, pero a estas alturas tiene un alcance muy parcial. Entre las más recientes resultan especialmente útiles las de Richard Gott, *Cuba, una nueva historia* (Madrid, Akal, 2007); Consuelo Naranjo (coord.), *Historia de Cuba* (Madrid, Consejo Superior de Investigaciones Científicas–Editorial Doce Calles, 2009) y, sobre todo, Louis A. Pérez, Jr., *Cuba. Between Reform and Revolution* (Nueva York, Oxford University Press, 2a. ed., 2011), por su amplia y precisa guía bibliográfica.

Para el periodo colonial, las síntesis más completas son: Eduardo Torres-Cuevas y Oscar Loyola, *Historia de Cuba, 1492-1898: formación y liberación de la nación* (La Habana, Pueblo y Educación, 2001) y Manuel Moreno Fraginals, *Cuba/España, España/Cuba. Historia común* (Barcelona, Editorial Crítica, 1995), esta última plena de ideas sugerentes, pero carente de bibliografía. El texto clásico de Ramiro Guerra, *Manual de historia de Cuba* (La Habana, Instituto Cubano del Libro, 1971) conserva su vigencia para el estudio de los primeros siglos coloniales, mientras que Rolando Rodríguez, *Cuba, la forja de una nación* (La Habana, Editorial de Ciencias Sociales, 2 vols., 1998) ofrece abundante información para todo el siglo XIX. Aunque dista de ser una síntesis, no puede dejarse de mencionar a Leví Marrero, *Cuba, economía y sociedad* (Madrid, Editorial Playor, 15 vols., 1972-1992). Obras más particulares como Manuel Moreno Fraginals, *El ingenio, complejo económico social cubano del azúcar* (La Habana, Editorial de Ciencias Sociales, 1978), indagan importantes aspectos de la historia económica y social de la época, mientras que un

título de próxima aparición: Enrique Alonso y otros, *Las comunidades aborígenes en la historia de Cuba* (versión digital, Instituto Cubano de Antropología, Ministerio de Ciencia, Tecnología y Medio Ambiente) ofrece un actualizado panorama del conocimiento sobre las sociedades indígenas.

El llamado periodo republicano tiene su más amplia síntesis en Herminio Portell Vilá, *Nueva historia de la República de Cuba (1898-1979)* (Miami, La Moderna Poesía, 1986), aunque volcada principalmente hacia el acontecer político. Mejor balanceada pero más elemental, Julio Le Riverend, *La república, dependencia y revolución* (La Habana, Editorial de Ciencias Sociales, 3a. ed., 1973), conserva utilidad. Para ciertos aspectos y procesos de esa época histórica son recomendables: Jorge Ibarra, *Cuba 1898-1921. Partidos políticos y clases sociales* (La Habana, Editorial de Ciencias Sociales, 1992); Lionel Soto, *La revolución de 1933* (La Habana, Editorial de Ciencias Sociales, 3 vols., 1977); Samuel Farber, *Revolution and Reaction in Cuba, 1933-1960* (Middletown, Wesleyan University Press, 1976); Charles Ameringer, *The Cuban Democratic Experience: The Autentico Years* (Gainesville, University Press of Florida, 2000), y Jorge I. Domíguez, *Cuba: Order and Revolution* (Cambridge, Harvard University Press, 1978). Dos números monográficos de revistas aparecidos en ocasión del centenario completan y actualizan la imagen de este tema; se trata de los números 22/23 (2000) y 24/25 (2001) de la revista *Temas* (La Habana) y el número 24 (2002) de *Encuentro de la Cultura Cubana* (Madrid).

La Revolución cubana ha sido objeto de diversos acercamientos generales, pero no son muchos los estudios propiamente históricos. Dos textos breves, Sergio Guerra Vilaboy y Alejo Maldonado, *Historia de la Revolución cubana, síntesis y comentario* (Quito, Ediciones La Tierra, 2005) y Arnaldo Silva León, *Breve historia de la Revolución cubana* (La Habana, Editorial de Ciencias Sociales, 2003) proporcionan un conocimiento general, el primero de ellos con apropiada orientación bibliográfica. De pers-

pectiva igualmente histórica, Antoni Kapcia, *Cuba in Revolution: A History since the Fifties* (Londres, Reaktion Books, 2008) y Aviva Chomsky, *A History of the Cuban Revolution* (Chichester, Wiley-Blackwell, 2011) ofrecen abarcadoras visiones de conjunto. Marifeli Pérez-Stable, *La Revolución cubana: orígenes, desarrollo y legado* (Madrid, Editorial Colibrí, 1998), de un perfil más sociológico, desarrolla interesantes reflexiones. Sobre la lucha contra la dictadura de Batista, Andrés Castillo Bernal, *Cuando esta guerra se acabe. De las montañas al llano* (La Habana, Editorial de Ciencias Sociales, 2000) brinda un amplio cuadro del desarrollo de la guerra revolucionaria, que puede completarse respecto a la insurrección urbana con Julia E. Sweig, *Inside the Cuban Revolution: Fidel Castro and the Urban Underground* (Cambridge, Harvard University Press, 2002). El testimonio personal de Fidel Castro es indispensable y se recoge de manera bastante extensa en *Cien horas con Fidel, conversaciones con Ignacio Ramonet* (La Habana, Oficina de Publicaciones del Consejo de Estado, 2006).

Casi por excepción se encuentran síntesis parciales sobre áreas específicas de la historia cubana, a pesar de lo cual siempre es útil apuntar algunas de las existentes. En el campo de la historia económica los más amplios estudios siguen siendo Julio Le Riverend, *Historia económica de Cuba* (La Habana, Pueblo y Educación, 2a. ed., 1985) y José Álvarez Díaz, *Un estudio sobre Cuba* (Coral Gables, Miami University Press, 1963), aunque este último resulta más bien un compendio informativo. El panorama puede ensancharse con Antonio Santamaría y Alejandro García, *Economía y colonia. La economía cubana y la relación con España, 1765-1902* (Madrid, Consejo Superior de Investigaciones Científicas, 2004); Oscar Zanetti, *La República, notas sobre economía y sociedad* (La Habana, Editorial de Ciencias Sociales, 2006), Carmelo Mesa Lago, *Breve historia económica de la Cuba socialista: políticas, resultados y perspectivas* (Madrid, Alianza Editorial, 1994) y José Luis Rodríguez, *Estrategia del desarrollo económico en Cuba* (La Habana, Editorial de Ciencias Sociales, 1990). Entre las mo-

nografías que abordan sectores económicos durante periodos más o menos amplios, pueden verse Julio Le Riverend, *Problemas de la formación agraria de Cuba, siglos XVI y XVII* (La Habana, Editorial de Ciencias Sociales, 1992); la historia de los ferrocarriles de Oscar Zanetti y Alejandro García, *Caminos para el azúcar* (La Habana, Editorial de Ciencias Sociales, 1987) y de Carlos Tablada y Galia Castelló, *Historia de la banca en Cuba.* t. I: *La colonia* (La Habana, Editorial de Ciencias Sociales, 2007). El estudio de Reinaldo Funes Monzote, *De los bosques a los cañaverales. Una historia ambiental de Cuba, 1492-1926* (La Habana, Editorial de Ciencias Sociales, 2008) constituye un interesante acercamiento a esa novedosa esfera de interés historiográfico.

Las visiones de conjunto sobre la problemática social son también escasas. Franklin W. Knight, *Slave Society in Cuba during the Nineteenth Century* (Madison, University of Wisconsin Press, 1970) traza las características sociales de los siglos XVIII y XIX, mientras Jorge Ibarra, *Cuba 1898-1958. Estructura y procesos sociales* (La Habana, Editorial de Ciencias Sociales, 1995) lo hace para el periodo republicano. Cierto número de monografías proporcionan un útil acercamiento a temas más particulares. Sobre la población, sus características y su composición étnica resultan recomendables: Centro de Estudios Demográficos, *La población de Cuba* (La Habana, Editorial de Ciencias Sociales, 1976) y Raimundo Navia y Graciela Chailloux (eds.), *De dónde son los cubanos* (La Habana, Editorial de Ciencias Sociales, 2007), aunque el acento de estos no es precisamente histórico. Carlos Venegas, *Cuba y sus pueblos* (La Habana, Centro de Investigación y Desarrollo de la Cultura Cubana, 2002) es una excelente introducción a las fuentes sobre la población colonial. El decisivo tema de la inmigración cuenta con estudios de casi todas sus corrientes, de los cuales constituyen buenos ejemplos: Jordi Maluquer de Motes, *Nación e inmigración. Los españoles en Cuba (siglos XIX y XX)* (Colombres, Júcar, 1992) y Juan Pérez de la Riva, *Los culíes chinos en Cuba* (La Habana, Editorial de Ciencias Sociales, 2000).

Sobre las clases y otros agrupamientos sociales pueden encontrarse indagaciones útiles, aunque desigualmente repartidas. Carlos del Toro, *La alta burguesía cubana, 1920-1958* (La Habana, Editorial de Ciencias Sociales, 2003) y Guillermo Jiménez, *Los propietarios de Cuba* (La Habana, Editorial de Ciencias Sociales, 2006) han abordado desde ángulos complementarios el caso de la burguesía republicana. Las obras del Instituto de Historia del Movimiento Comunista y la Revolución Socialista de Cuba, *Historia del movimiento obrero cubano* (La Habana, Editora Política, 1985) y Mario Riera, *Historial obrero cubano, 1574-1965* (Miami, Rema Press, 1965), sintetizan aspectos de la historia obrera, para lo cual también reviste utilidad Olga Cabrera, *Los que viven por sus manos* (La Habana, Editorial de Ciencias Sociales, 1985). La importancia del tema racial se aprecia en obras como las de Tomás Fernández Robaina, *El negro en Cuba, 1902-1958* (La Habana, Editorial de Ciencias Sociales, 1990) y Alejandro de la Fuente, *Una nación para todos: raza, desigualdad y política en Cuba, 1900-2000* (Madrid, Editorial Colibrí, 2001), aunque se trata de un asunto enriquecido por recientes monografías. Son igualmente abundantes —y dispersos— los estudios sobre la mujer; en particular respecto al feminismo y los movimientos femeninos brindan una imagen relativamente amplia, Lynn Stoner, *From the House to the Street: The Cuban's Women Movement for Legal Reform, 1898-1940* (Durham, Duke University Press, 1991) y Julio C. González Pagés, *En busca de un espacio. Historias de mujeres en Cuba* (La Habana, Editorial de Ciencias Sociales, 2003). Sobre la religión, tanto en el plano institucional como en el de las creencias, hay una respetable bibliografía pero bastante fragmentada en el plano histórico. Entre los estudios generales cabe mencionar el de Ismael Testé, *Historia eclesiástica de Cuba* (Burgos, Imprenta El Monte Carmelo, 4 vols., 1970) para la Iglesia católica, y Marcos A. Ramos, *Panorama del protestantismo en Cuba* (San José, Costa Rica, Editorial Caribe, 1986), síntesis histórica de las diversas denominaciones de esa corriente religiosa.

Las relaciones exteriores y particularmente con Estados Unidos han sido analizadas en línea con su importancia. El estudio histórico "clásico" es de Herminio Portell Vilá, *Historia de Cuba en sus relaciones con los Estados Unidos y España* (La Habana, Jesús Montero, editor, 4 vols., 1938-1941), pero otros posteriores se han extendido para abarcar la etapa revolucionaria. Entre estos deben apuntarse Louis A. Pérez, Jr., *Cuba and the United States: Ties of Singular Intimacy* (Athens, The University of Georgia Press, 1990); Lars Schoultz, *That Infernal Little Cuban Republic. The United States and Cuban Revolution* (Chapel Hill, University of North Carolina Press, 2009) y Francisco López Segrera y otros, *De Eisenhower a Reagan, la política de Estados Unidos contra la Revolución cubana* (La Habana, Editorial de Ciencias Sociales, 1987). Con más amplio espectro, Juan J. Soto Valdespino recoge en *Proyección internacional de la Revolución Cubana* (La Habana, Editorial de Ciencias Sociales, 1975) abundantes documentos sobre la política internacional en los primeros años de revolución, que se complementa para años más recientes con Michael Erisman y John Kirk (eds.), *Redifining Cuban Foreign Policy: The Impact of the Special Period* (Gainesville, University Press of Florida, 2006). Piero Gleijeses, *Misiones en conflicto* (La Habana, Editorial de Ciencias Sociales, 2009) ofrece un amplio y bien documentado panorama de la política cubana en África.

En el vasto campo de la historia cultural, salvo algún acercamiento general de corte ensayístico, como el de Francisco López Segrera, *Cuba. Cultura y sociedad* (La Habana, Editorial Letras Cubanas, 1987), solo se encuentran síntesis "ramales". Entre estas destacan: Instituto de Literatura y Lingüística, *Historia de la literatura cubana* (La Habana, Editorial Letras Cubanas, 2 vols. 2003), para el movimiento literario, y Rine Leal, *Breve historia del teatro cubano* (La Habana, Editorial Letras Cubanas, 1980), en lo relativo a la dramaturgia. El clásico estudio de Alejo Carpentier, *La música en Cuba* (La Habana, Imprenta Nacional, 1961), actualizado con Zoila Lapique, *Cuba colonial. Música, compositores e*

intérpretes (La Habana, Ediciones Boloña, 2007) y Radamés Giro (ed.), *Panorama de la música popular cubana* (La Habana, Editorial Letras Cubanas, 1995), conforman una imagen bastante completa de la evolución de la producción musical. En la arquitectura, el texto de Joaquín Weiss, *La arquitectura colonial cubana* (La Habana, Editorial Letras Cubanas, 2 vols., 1979) conserva su vigencia, al igual que el estudio de Guy Pérez Cisneros, *Características de la evolución de la pintura cubana* (La Habana, Dirección General de Cultura, 1959); ambos pueden actualizarse con obras como Rachel Carley, *Cuba, 400 Years of Architectural Heritage* (Nueva York, Whitney Library of Design, 1997) y J.L. Scarpacci, Roberto Segre y Mario Coyula, *Havana, Two Faces of the Antillean Metropolis* (Chapel Hill, University of North Carolina Press, 2002), así como Nathalie Bondil (ed.), *Cuba: Art and History, from 1868 to Today* (Montreal, Montreal Museum of Fine Arts, 2008). Algo similar ocurre en el campo del pensamiento, con Medardo Vitier, *Las ideas y la filosofía en Cuba* (La Habana, Instituto Cubano del Libro, 1970) y la más reciente aproximación de Eduardo Torres Cuevas, *Historia del pensamiento cubano* (La Habana, Editorial de Ciencias Sociales, 2 vols., 2004). La obra de Pedro M. Pruna y otros, *Historia de la ciencia y la tecnología en Cuba* (La Habana, Editorial Científico-Técnica, 2006) ofrece un apropiado panorama del desenvolvimiento de la actividad científica.

Historia mínima de Cuba
se terminó de imprimir en enero de 2013
en los talleres de Offset Rebosán, S.A. de C.V.,
Av. Acueducto 115, Col. Huipulco, 14370 México, D.F.
Portada de Pablo Reyna.
Tipografía y formación: Socorro Gutiérrez,
en Redacta, S.A. de C.V.
Cuidó la edición Eugenia Huerta.